

Informe de Calidad de Vida de
Antioquia
2024





COMITÉ DE SOCIOS

Juliana Velásquez Rodríguez
Presidenta Ejecutiva Proantioquia

Daniel Uribe Parra
Director Ejecutivo Fundación Corona

Nicolás Ordoñez
Responsable de Regiones Comfama

Mauricio Pérez
Responsable Estrategia y Proyectos Comfama

Manuela Díaz Mesa
Jefe del Departamento de Empresas y personas de Comfenalco

Santiago Cardona
Vicepresidente Colombia Mineros

Carolina Jaramillo
Responsable de Sostenibilidad Unibán

Jorge Alberto Calle D'Alleman
Director de Extensión Multicampus Universidad Pontificia Bolivariana

Jorge Andrés Calle Rios
Jefe de relacionamiento Corporativo Grupo Bios

María Camila Villegas
Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo Argos

Juan Carlos Muñoz
Director del Área de Políticas y Desarrollo Universidad EAFIT

Santiago Henao Castro
Profesional de Asuntos Públicos Gramalote Colombia

Jesús Saúl Pineda Hoyos
Director del Centro de Pensamiento Universidad EIA

Dalia Adiela Muñoz Madrid
Jefe de Ventas Regional Antioquia Prisa Media

UNIDAD COORDINADORA

Textos y edición:

Mónica Ospina Londoño, *directora*
Ona Duarte Venslauskas, *analista*
Yeison Londoño Quiceno, *analista*
Sara Sofía Arcila Múnera, *analista*
Miguel Angel Peláez, *analista*
Susana Mojica, *analista*
Felipe Carmona, *analista*
Wilmar Castro, *Investigador y analista*
Anny Múnera Paniagua, *responsable de comunicaciones*

Diseño y diagramación:

Mariana Gómez Álvarez, *comunicadora audiovisual y gráfica*

Leidy Juliana Viera Brun, *diagramadora*

ISBN en proceso



Contenido

• Demografía	7
• Pobreza	26
• Seguridad alimentaria	38
• Salud	49
• Desarrollo económico y empleo	67
• Educación	91
• Seguridad y convivencia ciudadana	111
• Ambiente y Entorno	187



Introducción

Antioquia Cómo Vamos nace en el 2023 con el fin de hacer un seguimiento continuo a la calidad de vida del departamento, implementando por primera vez en Colombia, el modelo Cómo Vamos a nivel departamental. Este propósito ya supone grandes retos, medir la calidad de vida de un departamento de cerca de siete millones de habitantes, organizado en provincias, subregiones, zonas y municipios, con diferencias geográficas, productivas y sociales, implica un análisis profundo que examine brechas, que contemple problemas estructurales y coyunturales, que entienda las implicaciones de las dinámicas de carácter nacional, departamental y municipal que afectan la calidad de vida de sus habitantes.

Durante estos tres años, Antioquia Cómo Vamos ha trabajado en consolidarse como una plataforma de seguimiento técnico e independiente que permita comprender el departamento en su profundidad. Inicialmente este seguimiento se había basado en análisis de indicadores objetivos, sin embargo, durante el último año, entendiendo la importancia de la voz ciudadana, hemos construido un análisis más completo que considera datos subjetivos y permite construir diagnósticos más robustos para la toma de decisiones y el direccionamiento de programas estratégicos en el territorio.

La construcción de la línea base 2022 y del primer informe de seguimiento a la calidad de vida 2023, permitió identificar esos principales retos sociales que enfrenta el departamento. El análisis de empleo y educación reiteró lo necesidad que hay en Antioquia de fortalecer su capital humano, especialmente si se espera que la actual inversión en grandes proyectos de infraestructura y conectividad logre impactar positivamente la calidad de vida de sus habitantes. Del análisis de condiciones de vulnerabilidad una de las principales alertas que se identificó, fue el incremento de los hogares afectados por inseguridad alimentaria, con tasas muy altas en subregiones específicas como Urabá y Bajo Cauca. En términos de seguridad el reto más complejo que enfrenta el territorio tiene que ver con la expansión de estructuras armadas ilegales en los municipios de Antioquia y sus implicaciones en desplazamientos, confinamiento, desaparición forzada, reclutamiento y las demás afectaciones que trae la presencia de estos grupos en la calidad de vida. Finalmente, el seguimiento a la migración en tránsito se consolida como un tema coyuntural especial, dada las implicaciones en atención social que tiene este hecho en municipios como Necoclí y Turbo.

Con estos antecedentes, el presente informe cumple con dos propósitos principales:



hacer un seguimiento en la calidad de vida del departamento, profundizando en los retos identificados en análisis previos, e incorporar la voz de la ciudadanía en el análisis de calidad de vida a partir de indicadores subjetivos de percepción y satisfacción.

Para tales propósitos, el presente informe se divide en capítulos asociados a cada sector de análisis de calidad de vida. El capítulo de demografía se centra en analizar el cambio demográfico observado en el departamento y sus implicaciones en la composición de los hogares y en la dependencia económica. También se incluye un apartado de seguimiento a la migración en tránsito. Por su parte el capítulo de pobreza destaca la reducción en los indicadores de pobreza monetaria que se ha venido dando año tras año y el crecimiento en el ingreso promedio, pero llama la atención en el hecho de que esas mejoras en pobreza no se vean reflejadas en una reducción de la desigualdad, además, resalta el incremento en la cantidad de hogares afectados por barreras de acceso a salud en el análisis de pobreza multidimensional.

El capítulo de Salud analiza la evolución de indicadores de acceso a al derecho de la salud, presentando un diagnóstico de capacidad instalada y el aumento que se percibe en el gasto de los hogares en servicios de salud, también se incluyen los apartados de salud mental y enfermedades tropicales. Por su parte el capítulo de Seguridad Alimenta-

ria analiza el contexto bajo el cual persiste el alto porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria y complementa el análisis con la gestión de los programas implementados por la Gobernación de Antioquia para atender este problema.

El capítulo de Desarrollo Económico y Empleo inicia con un diagnóstico concreto del potencial productivo del departamento, destacando su crecimiento, sus fortalezas productivas y la contribución de Antioquia a la economía nacional. En el análisis de indicadores de mercado laboral se destaca el aumento en la ocupación y en el tejido empresarial, además, se profundiza en el análisis de informalidad laboral entendiéndolo como un problema estructural del departamento y en el análisis de participación laboral, destacando principalmente su potencial de crecimiento.

Por su parte, el capítulo de educación, además de hacer un seguimiento al comportamiento de indicadores de cobertura y trayectorias educativas, incluye un análisis que busca entender cuáles son esas condiciones que hacen que Antioquia no se destaque en su calidad educativa y que por el contrario presente resultados más bajos de los esperados. Por medio de este análisis comparativo con departamentos similares, se abordan consideraciones como la ruralidad, el nivel socioeconómico, las brechas entre el sector oficial y no oficial, y el nivel educativo de los docentes.



El capítulo de Seguridad tiene una especial extensión y profundidad pues aborda varios temas y objetivos de análisis. Inicialmente se hace un análisis de la percepción de seguridad en las diferentes zonas del territorio y su relación con los hechos victimizantes, después hay dos secciones que analizan la violencia sexual y de género y la violencia interpersonal, en estas se cruzan diferentes fuentes de información y se explora la relación de la denuncia con la confianza y gestión de los organismos de justicia. Finalmente, se aborda el análisis de las estructuras criminales que operan en el departamento, las rentas ilícitas y las afectaciones trae la presencia de estos grupos sobre la sociedad civil y su calidad de vida.

Por último, se incluye un capítulo dedicado a un sector de análisis que no se había abordado en ninguno de los anteriores informes. Por primera vez en la historia del programa

se analiza el sector de Ambiente y Entorno, incluyendo análisis asociados a la gestión de riesgos y desastres, residuos sólidos y cambio climático, enfatizando en los desafíos actuales que enfrenta el departamento en cada uno de estos ejes ambientales.

Considerando el contenido acá presentado, se espera que este informe sea de gran utilidad para los actores que tienen injerencia en el desarrollo económico y social del departamento. También, que sea fuente de consulta para todo aquel que quiera comprender el estado y evolución de la calidad de vida de Antioquia, dando cuenta de las principales fortalezas y retos que deben ser atendidos. Finalmente, se pretende motivar también futuras investigaciones que permitan ahondar en las causas e implicaciones de los hechos acá presentados.



1. Demografía

La última actualización de las proyecciones poblacionales del DANE, publicada el 8 de agosto del 2025, trae un mensaje claro: Antioquia está envejeciendo más rápido de lo que creíamos. Este envejecimiento está asociado al cambio demográfico, que en las últimas décadas ha estado marcado por una caída acelerada en la tasa de natalidad y de fecundidad del departamento.

Entender las implicaciones de este cambio demográfico en la estructura poblacional y en la composición de los hogares es esencial, pues para lograr la efectividad y eficiencia de políticas de vivienda, de salud, de movilidad, de educación, de cuidado, de pobreza y demás, es necesario partir de un diagnóstico demográfico claro.

Este capítulo pretende explorar algunas de las principales consecuencias de este cambio demográfico en Antioquia, abordando asuntos como: la desaceleración en el crecimiento poblacional, el envejecimiento de la población, el crecimiento de la dependencia económica, el cambio en el tamaño y en la composición de los hogares y sus condiciones de vulnerabilidad. También se incluyen algunas consideraciones relacionadas con la migración venezolana y su contribución al bono demográfico del departamento.

Así mismo, la evolución de la migración irregular que transita por Antioquia ha sido uno de los aspectos priorizados por Antioquia Cómo Vamos para el 2025, principalmente por las implicaciones en la prestación de servicios de atención social que ha traído la llegada de esta población a municipios pequeños como Necoclí y Turbo. Por lo tanto, al final del capítulo se incluye un apartado que hace seguimiento a la evolución del flujo migratorio irregular que ha llegado Antioquia durante el 2024 y 2025.



El objetivo final de este análisis es ofrecer insumos que permitan un mayor entendimiento de la estructura demográfica actual y futura de Antioquia, de manera que la evidencia aquí presentada sea útil para la formulación de políticas y programas sociales de carácter público y privado. Además, se espera que este análisis incentive futuras investigaciones que permitan profundizar en los aspectos tratados, ya que es prioritario y urgente entender las implicaciones que el cambio demográfico traerá para el modelo de gestión actual, y las modificaciones estructurales que deben hacerse de cara a la sostenibilidad social y económica de Antioquia.

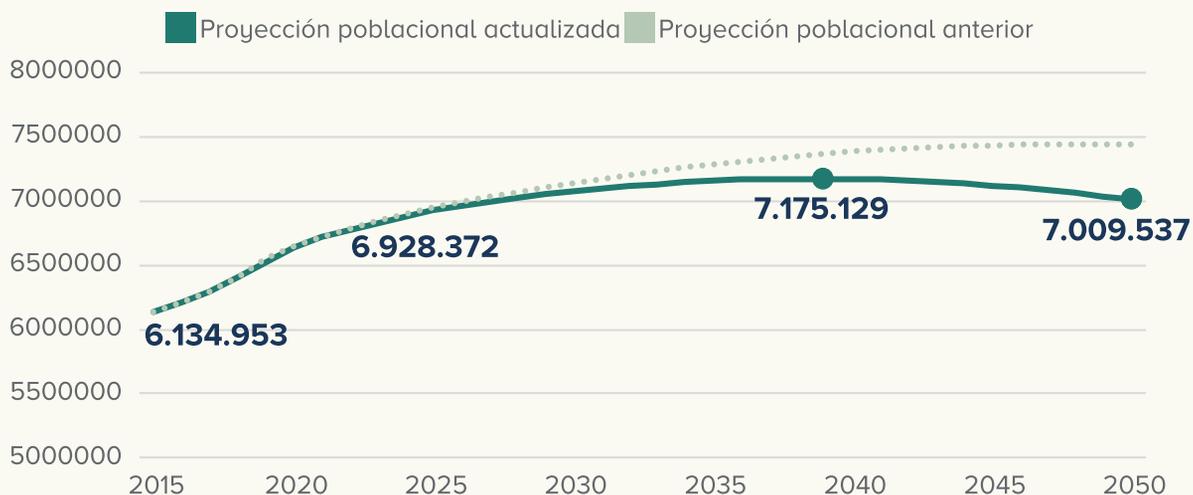
La principal fuente de información de este capítulo es el DANE. Específicamente se usan los datos de proyecciones poblacionales, las estadísticas vitales, la Encuesta de Calidad de Vida Nacional y la Gran Encuesta Integrada de Hogares. También se usan datos del Banco Mundial, de la Encuesta de Calidad de Vida Departamental de la Gobernación de Antioquia, de la Seccional de Salud de Antioquia y de Migración Colombia.

Desaceleración del crecimiento poblacional

La más reciente actualización de proyecciones poblacionales del DANE, estima que en Antioquia hay 6.928.372 personas para el 2025, lo que representa un crecimiento poblacional del 13% en los últimos 10 años. Sin embargo, se espera que en los próximos 10 años la población crezca únicamente un 3%.

Incluso, las proyecciones indican que la población de Antioquia alcanzará su punto máximo en el 2039 con una proyección 7.175.129 habitantes, a partir de ahí la población comenzará a decrecer y el 2040 será entonces el primer año de crecimiento poblacional negativo. Este escenario presenta una caída poblacional más acelerada que la que se proyectaba anteriormente, pues en las proyecciones anteriores se estimaba que el decrecimiento de la población estaría iniciando 9 años después en el 2049. La comparación entre el escenario proyectado anteriormente con el actualizado se puede evidenciar en el Gráfico 1.

Gráfico 1.
Antioquia: proyecciones poblacionales 2015-2050



Fuente: elaboración propia a partir de las proyecciones poblacionales del DANE con base en el CNPV 2018 (post covid) y las actualizaciones de proyecciones poblacionales del 2025.

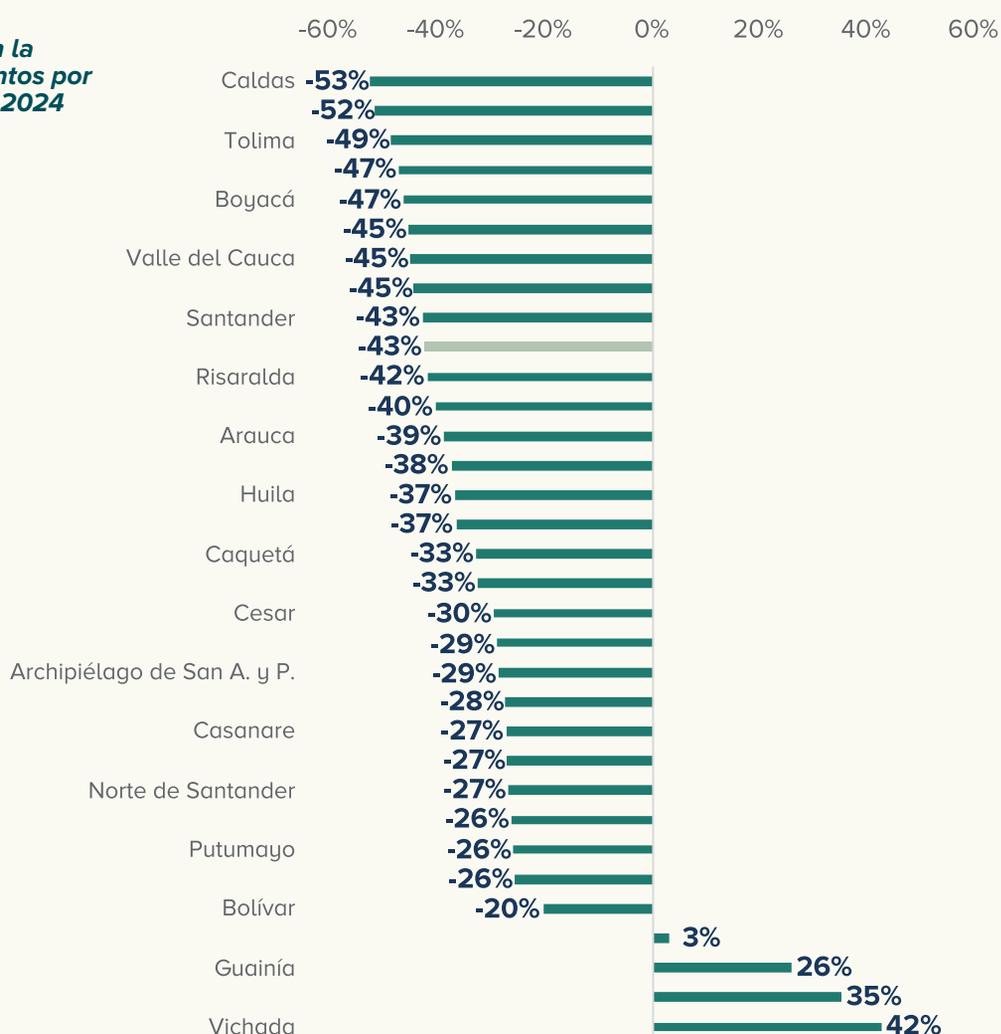


El cambio en las proyecciones responde a una caída constante en los nacimientos, que año a año se han ido reduciendo a una tasa más acelerada de lo inicialmente estimado. Entre el 2008 y el 2024, por ejemplo, los nacimientos en Antioquia cayeron en un 43%, pasando de 90.973 nacimientos registrados en el 2008 a 52.138 nacimientos registrados en el 2024.

Esta reducción en los nacimientos no es un fenómeno aislado de Antioquia, tal como se puede observar en el Gráfico 2, la mayoría de los departamentos del país han expe-

rimentado una caída. Los nacimientos en Caldas y Bogotá D.C se redujeron a más de la mitad en el mismo periodo de tiempo. En contraste hay otros departamentos que han continuado con un aumento en los nacimientos como es el caso de Chocó (+3%), Guainía (+26%), La Guajira (+35%) y Vichada (42%). Los departamentos que siguen presentando un aumento en la cantidad de nacimientos son también los que tienen con mayores retos sociales y económicos, de acuerdo con lo que se puede evidenciar en los indicadores de pobreza¹.

Gráfico 2.
Colombia: cambio en la cantidad de nacimientos por departamento 2008-2024



Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de nacimientos por municipio de residencia de la madre publicadas por el DANE

¹ El índice de pobreza multidimensional de Vichada es de 70,2% ubicándose como el departamento con mayor pobreza en Colombia. El índice de Guainía es del 49%, ubicándose en el segundo puesto con mayor pobreza. La Guajira tiene un índice del 39,3% ocupando el tercer lugar con mayor nivel de pobreza y Chocó tiene un índice de 33,9% ocupando el quinto lugar después de Vaupés (37,4%).

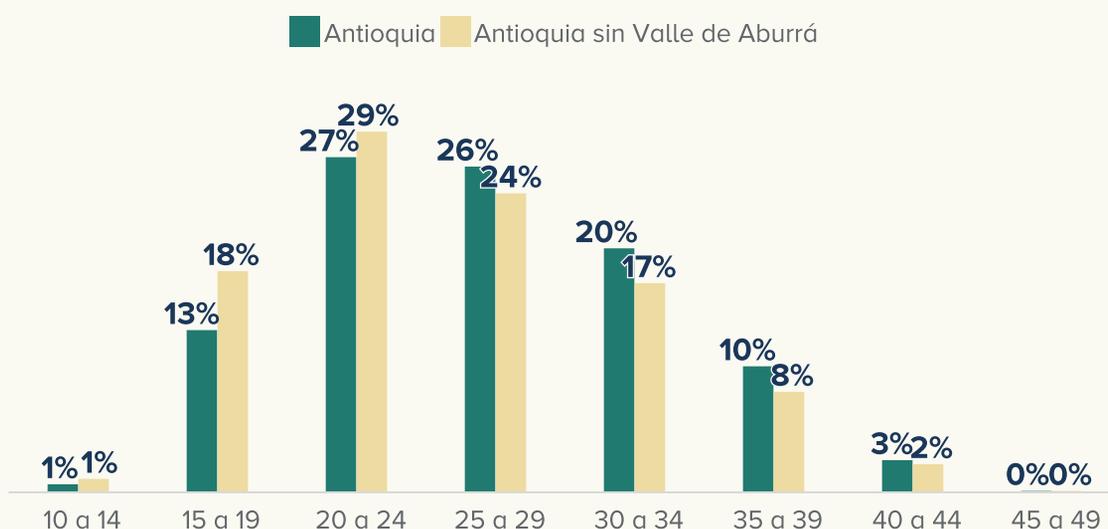


Kalmanovitz, (2017) explica que la tasa de natalidad en el país presenta una caída acelerada a partir de los años 60, soportada en el mayor acceso a métodos anticonceptivos donde el trabajo de Profamilia y otras instituciones privadas fue determinante. A su vez, el mayor interés en el uso de métodos de planificación familiar estuvo relacionado con el proceso acelerado de la urbanización que se dio en esos años, además de, mayores oportunidades de educación y empleo para las mujeres, y el crecimiento en el costo de crianza.

Otro de los cambios que se puede observar asociado con la decisión de tener hijos

como proyecto de vida, es la edad en la que las mujeres tienen hijos. En el 2005 la edad promedio en la que las mujeres tenían su primer hijo era a los 22,6 años, mientras que en 2024 esta edad aumentó a los 24,8 años. Como se puede observar en el Gráfico 3, el 59% de los nacimientos del 2024 fueron de mujeres mayores a los 25 años y el 41% de mujeres menores a esta edad. Sin embargo, si se mira esta distribución para el conjunto de municipios de Antioquia por fuera del Valle de Aburrá se evidencia la prevalencia de una maternidad más joven, pues el porcentaje de nacimientos en mujeres menores de 25 años aumenta a un 48%.

Gráfico 3.
Antioquia: distribución de los nacimientos de acuerdo con el rango de edad de la madre, 2024



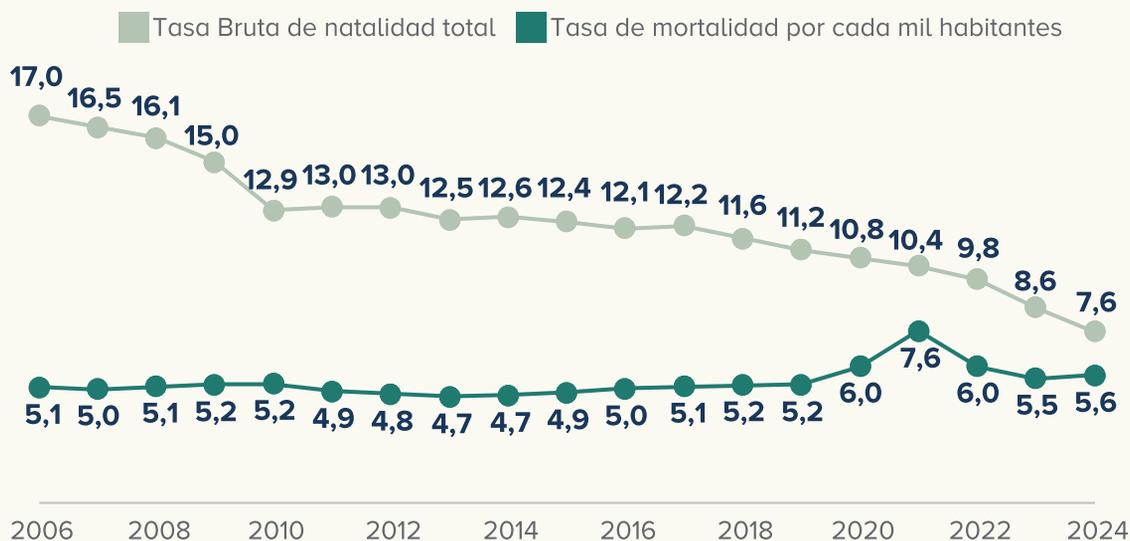
Fuente: elaboración propia a partir de la información de nacimientos publicada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia



Envejecimiento y dependencia económica

Tal como se observa en el Gráfico 4, la caída en la tasa de natalidad del departamento ha estado acompañada por una tasa de mortalidad relativamente constante, lo que ha llevado tanto a la reducción en la tasa de crecimiento poblacional como al envejecimiento de la población.

Gráfico 4.
Antioquia: tasa de natalidad vs tasa de mortalidad, 2006-2024



Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

Una manera sencilla de evidenciar el envejecimiento de la población es comparar la proporción de niños y de adultos mayores dentro de la población, y su evolución a través de los años. Al examinar el cambio proyectado del peso poblacional de estos grupos etarios desde 1985 hasta el 2050 se observa que la relación se invertirá total-

mente (ver Gráfico 5). En 1985, el 27% de la población era menor de 12 años y solo el 7% tenía más de 60 años. En 2025, ambos grupos pesan lo mismo: 16% cada uno. En 2050 la relación se invertirá: los adultos mayores representarán un 28% del total de la población y los niños menores de 12 años representarán un 9%.



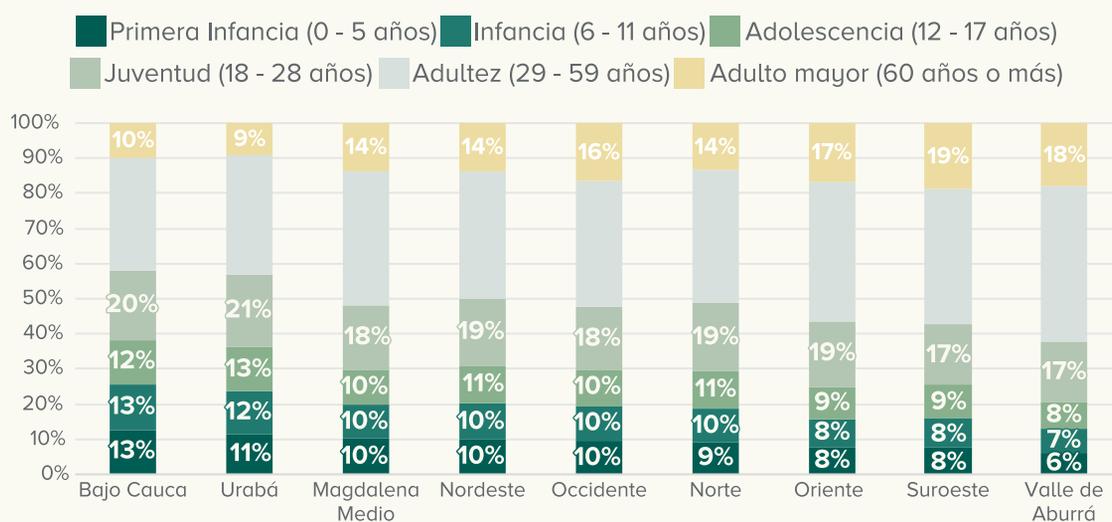
Gráfico 5.
Antioquia: proporción de menores de 12 años y mayores de 60 años en relación con la población total, 1985-2050



Fuente: elaboración propia a partir de las proyecciones poblacionales del DANE actualizadas en 2025.

Al examinar la distribución por grupos etarios en cada una de las subregiones, se observan diferencias. Como se puede observar en el Gráfico 6, Bajo Cauca y Urabá son las subregiones con mayor proporción de población joven, pues más de la mitad de la población tiene menos de 29 años, en contraste, la población adulta mayor solo alcanza al 10%. Por otro lado, Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá son las subregiones más envejecidas, pues la proporción de jóvenes no alcanza al 45% y la proporción de adultos mayores supera el 16%.

Gráfico 6.
Antioquia: distribución poblacional por rangos etarios por subregión, 2025



Fuente: elaboración propia a partir de las proyecciones poblacionales del DANE actualizadas en 2025.



A pesar de las diferencias en la distribución poblacional por grupos etarios entre las subregiones, los datos de nacimientos subregionales indican que la tasa de natalidad está disminuyendo en todas las subregiones sin excepción. Curiosamente la caída en la tasa de natalidad en el último año se dio en mayor medida en Bajo Cauca, Urabá, Magdalena Medio y Nordeste, que son también las subregiones con mayor proporción de población joven dentro de su población, mayor tasa de natalidad y mayor porcentaje de población necesidades básicas insatisfechas en sus hogares (Ver Gráfico 7 y Gráfico 8).

Gráfico 7.
Antioquia: tasa de natalidad por subregión 2023-2024

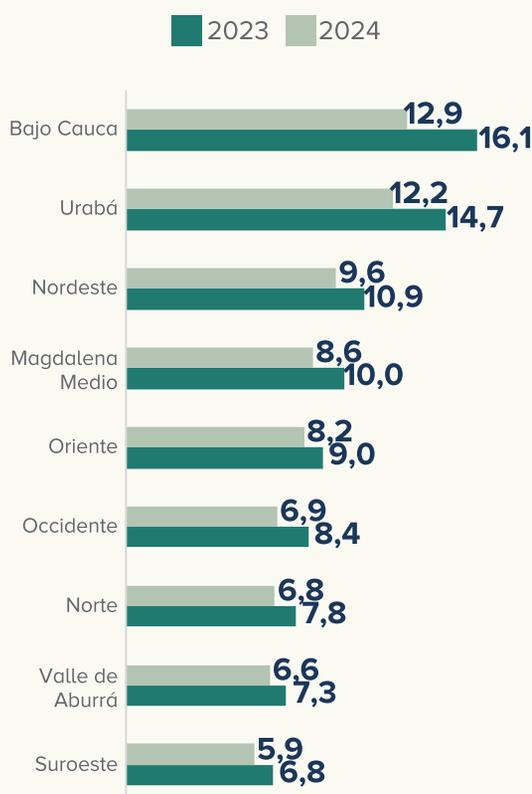
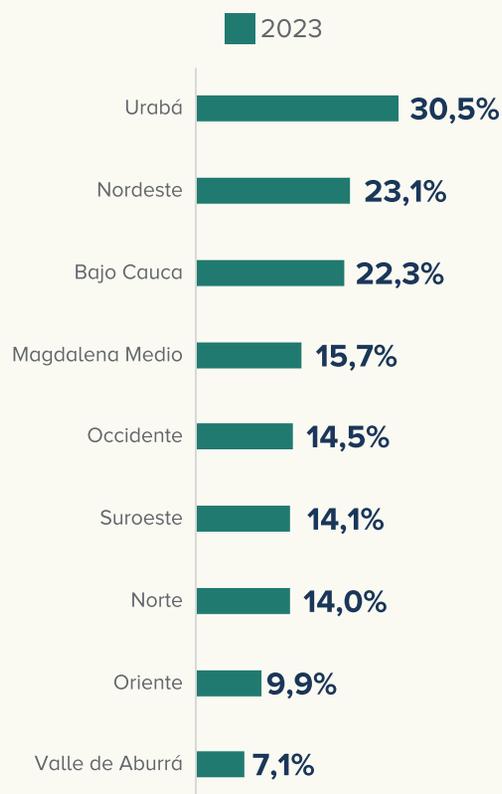


Gráfico 8.
Antioquia: porcentaje de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas por subregión, 2023



Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y Encuesta de Calidad de Vida departamental 2023 de la Gobernación de Antioquia

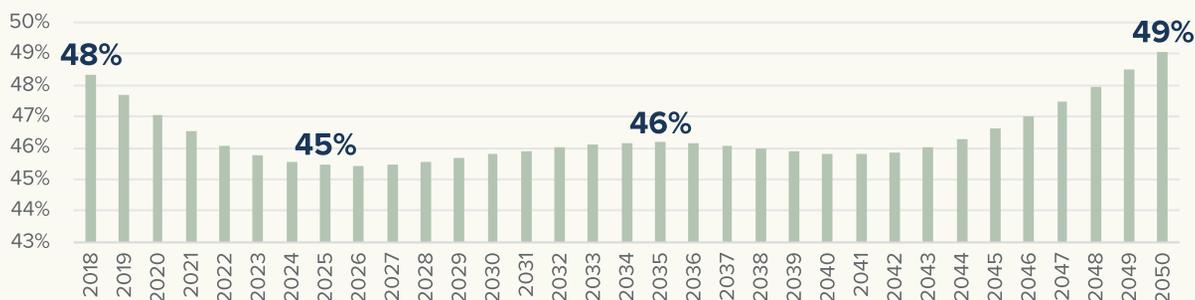


El cambio en la distribución poblacional por grupos etarios tiene un efecto en la carga económica que soporta una sociedad, esto se puede analizar a través del índice de dependencia económica, que relaciona la población “dependiente” con la población “activa”. En este índice demográfico estas poblaciones se determinan por su edad, se considera que las personas económicamente dependientes son aquellas menores de 14 años y mayores de 65 años, en contraste, las personas económicamente activas son quienes tienen entre 15 años y 64 años. El índice permite obtener un estimado de cuantas personas dependientes hay por

cada persona activa. Un indicador bajo refleja una baja carga económica sobre la sociedad, mientras que un indicador más alto refleja una carga alta.

El Gráfico 9 presenta la evolución de este índice desde el 2018 hasta el 2050 de acuerdo con las proyecciones poblacionales actualizadas del DANE. Como se puede observar, en el 2025, Antioquia presenta uno de los índices más bajos de la serie con un 45% de dependencia, mientras que los picos de alta dependencia se presentan en el 2018 y en el 2050, con indicadores de 48% y 49% respectivamente.

Gráfico 9.
Antioquia: índice de dependencia económica 2018-2050



Fuente: elaboración propia a partir de las proyecciones poblacionales del DANE actualizadas en 2025.

La diferencia es que la dependencia económica del 2018 estaba explicada por un alto porcentaje de población joven (menor de 15 años), mientras que en el 2050 la dependencia esta explicada por el alto porcentaje de población mayor de los 65 años. Entender las implicaciones de esta diferencia en la estructura demográfica es clave en la orientación de políticas sociales y económicas, pues lograr que el mercado laboral del departamento incluya a los adultos mayores económica y socialmente es fundamental para enfrentar esa mayor carga económica que la estructura poblacional le generará al departamento.

En el informe “Colombia Envejece: las oportunidades de una sociedad longeva”, se enfatiza en la importancia de fortalecer la educación a lo largo de la vida, a partir de la capacitación y el reentrenamiento en habilidades de autogestión, trabajo con personas, solución de problemas y uso y desarrollo de tecnologías. Así mismo, recomienda aprovechar la digitalización y la inteligencia artificial para cerrar brechas en el aprendizaje e incluir productivamente a la población mayor (Fundación Saldarriaga Concha & Inclusión SAS, 2025).



Al respecto, otro cambio importante que se ha evidenciado en los últimos años es el aumento en la participación laboral de los adultos mayores en Antioquia, que entre el 2021 y el 2024 pasó del 25% al 30%. Este aumento puede responder tanto al deseo de mantenerse activos laboralmente como a la necesidad de generar ingresos ante la falta de una pensión.

Ante este panorama demográfico, la inmigración se presenta como una oportunidad para Antioquia. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2023, aproximadamente un millón de personas que viven en Antioquia, no nacieron en el departamento. Esto refleja el carácter que tiene Antioquia como un territorio receptor de personas que llegan al departamento en busca de oportunidades para construir su futuro.

Recientemente, uno de los fenómenos más representativos de inmigración en el departamento ha sido la llegada de venezolanos con vocación de permanencia. Antioquia se ha caracterizado por ser uno de los principales territorios de acogida, de acuerdo con la información reportada por migración Colombia, en el departamento hay 389.776 venezolanos con vocación de permanencia, lo que es equivalente al 6% de la población

total del departamento y al 14% del total de venezolanos que se han instalado en Colombia. Una característica importante de la migración venezolana es el hecho de que el 57% de estos son jóvenes menores de 29 años, lo cual contrasta con el peso de los jóvenes en la población general del departamento que solo llega al 42%.

En este sentido la migración venezolana contribuye al bono demográfico del departamento, al contrarrestar en cierta medida el envejecimiento que se está presentando en la estructura demográfica de Antioquia. Sin embargo, para poder aprovechar esta oportunidad es fundamental que la academia, el sector público y privado orienten acciones para lograr la integración socioeconómica de esta población², ya que, de acuerdo con las estimaciones del DANE, mientras que en el 2023 el 26% de los habitantes de Antioquia eran pobres, el 48% de los venezolanos estaba en condición de pobreza monetaria. La brecha también se presenta en la pobreza multidimensional, mientras que en el 2024 el 10,9% de los habitantes de Antioquia estaban en condición de pobreza multidimensional, el 20,5% de los venezolanos que habitan en el departamento se encontraba en esta condición. Mejorar la calidad de vida de los migrantes venezolanos que habitan en el departamento es necesario de

² En el Informe de integración socioeconómica de la población migrante (Antioquia Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos, 2024) se puede encontrar un diagnóstico con los principales retos que enfrenta la población venezolana en el departamento y recomendaciones dirigidas a diferentes tipos de actores para lograr una integración efectiva.



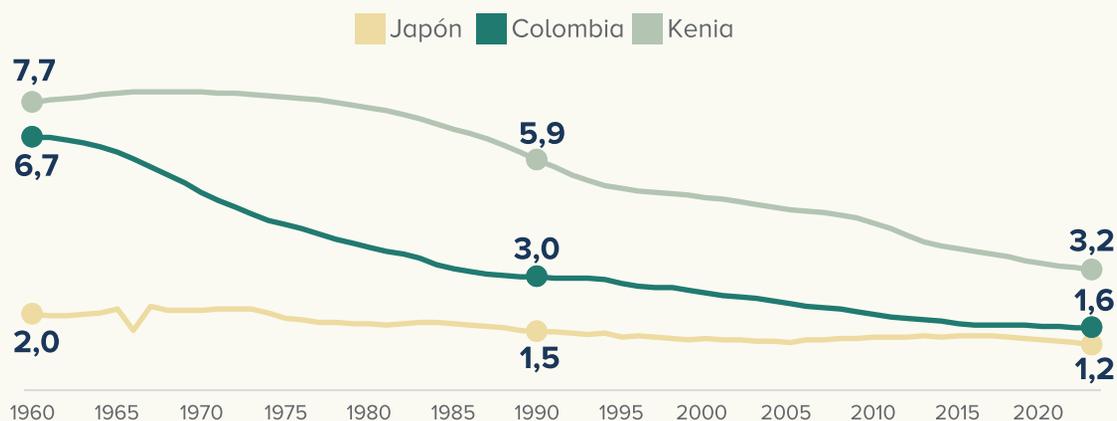
cara a tener un futuro sostenible.

Cambio en la composición de los hogares

Para entender el efecto en la reducción de la tasa de natalidad en la composición de los hogares, es importante analizar la evolución de la tasa de fecundidad, que es un indicador que estima cuantos hijos en promedio tendría una mujer dadas las tasas de natalidad de un año establecido.

Según los datos reportados por el Banco Mundial (ver el Gráfico 10), en el 1960 se estimaba que una mujer tendría aproximadamente 6,7 hijos en Colombia, esta cifra es similar a la de otros países en vía de desarrollo como Kenia, que para ese mismo año presentaba una tasa de 7,7 hijos por mujer.

Gráfico 10.
Tasa de fecundidad Colombia, Kenia y Japón, 1960-2023



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial

Sin embargo, si se compara la evolución de la tasa de ambos países en los años siguientes se observan comportamientos muy diferentes, las tasas de ambos países presentan una caída, pero la de Colombia es mucho más acelerada, a tal punto que en 1990 la tasa indica que una mujer tendría en promedio 3 hijos, mientras que en Kenia serían 5,9 hijos en ese mismo año. En 2023, en Colombia se estima que una mujer tendría en promedio 1,6 hijos, siendo esta tasa mucho más similar a la de Japón (1,2) que a

la de Kenia (3,2). Entender las implicaciones de este hecho es muy relevante de cara a la implementación de políticas públicas a nivel nacional, pues la caída en la natalidad de Colombia ha llevado a que la situación actual sea muy similar a países con un nivel de desarrollo superior, Japón por ejemplo es un país que lleva 60 años enfrentando tasas muy bajas de natalidad y de fecundidad y ha implementado una gran variedad de políticas y estrategias orientadas a enfrentar estos hechos³.

³ El análisis de la comparación de las tasas de fecundidad de Colombia, Kenia y Japón fue replicado a partir de lo encontrado en No 7 del boletín Observador del GES (Universidad de Antioquia - Facultad de Economía, 2020)



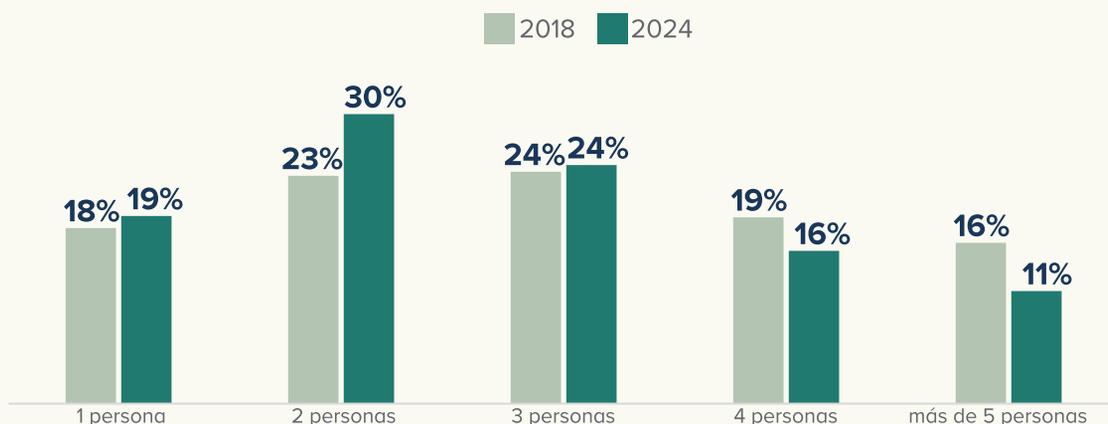
Específicamente en Antioquia la tasa de fecundidad en 2006 era de 2,2 hijos por mujer y pasó a 1 hijo por mujer en 2024. Esto impacta directamente la composición del hogar, se podría esperar por ejemplo que disminuya la cantidad de personas por hogar, pero también, se hace relevante analizar otros indicadores como la cantidad de hogares con presencia de personas dependientes (niños y adultos mayores)

Al comparar los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional 2018 y 2024, se estima que en Antioquia los hogares presentan el doble del crecimiento que la población, mientras que en estos años se estima que la población creció en un 11%, los

hogares crecieron un 22%. Mientras que en el 2018 había 3,1 personas por hogar, en el 2024 se estima que hay 2,8 personas por hogar. Esto se debe a que aumentó la proporción de hogares pequeños compuestos por una o dos personas, el cambio se dio principalmente por el aumento de la proporción de hogares de dos personas que pasó de representar un 23% del total de hogares a el 30%. Como consecuencia de esto, se tiene que en el 2024 casi la mitad de los hogares de Antioquia son pequeños, una cuarta parte está compuesto por 3 personas y la otra cuarta parte tiene 4 o más personas (ver Gráfico 11).

Gráfico 11.

Antioquia: distribución de hogares según el número de personas que los componen, 2018-2024

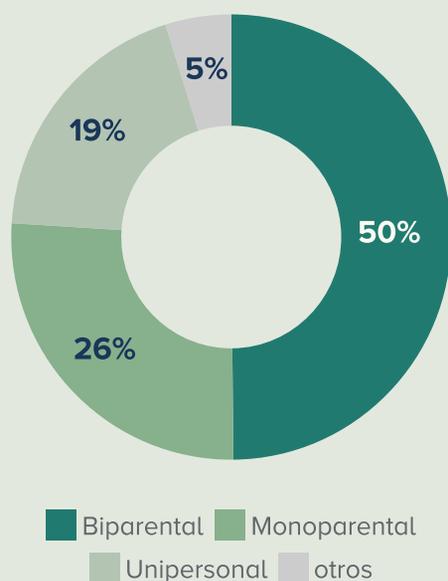


Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional del DANE

Otra manera de analizar la composición de los hogares es a partir de la tipología del hogar. De acuerdo con lo presentado en el Gráfico 12, la mitad de los hogares en Antioquia son biparentales, es decir que están compuestos por madre y padre con o sin hijos.



Gráfico 12.
Antioquia: distribución de hogares según el tipo de hogar, 2024

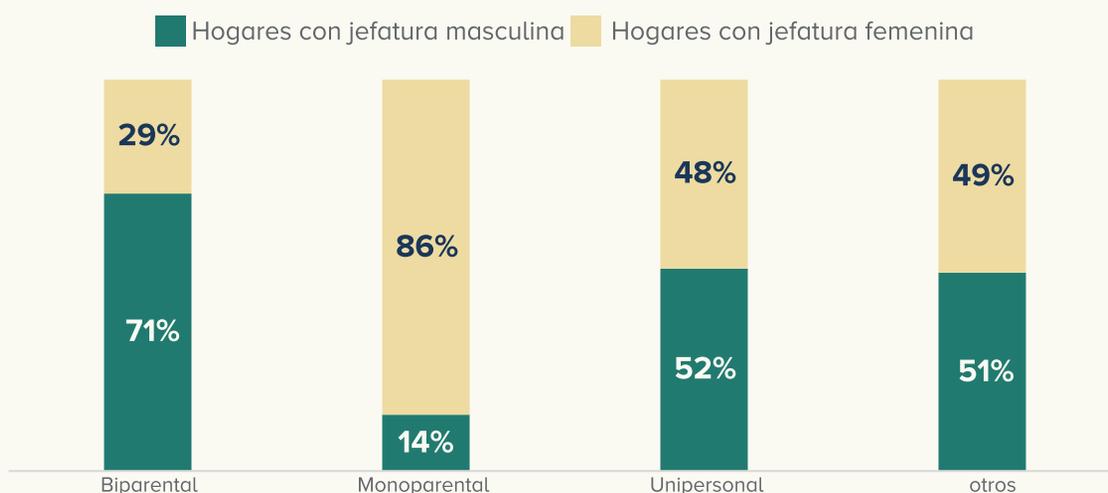


Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional del DANE

Otro dato importante a partir de estas tipologías es el porcentaje de hogares monoparentales, que se refiere a esos hogares conformados por un padre o una madre con hijos. Para Antioquia se estima que el 26% de los hogares son monoparentales (670.00 hogares aproximadamente). Esto lo ubica como uno de los departamentos del país con mayor participación de este tipo de hogares, solo superado por La Guajira (30%), Valle del Cauca (27%) y Nariño (29%). Esto es relevante dado que un solo padre debe asumir la carga económica y de cuidado de sus hijos.

Al profundizar en la distribución por sexo del jefe de hogar en cada una de estas tipologías, se observa que el 86% de los hogares monoparentales tienen jefatura de hogar femenina (ver Gráfico 13).

Gráfico 13.
Antioquia: distribución por sexo del jefe de hogar dada el tipo de hogar, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional del DANE



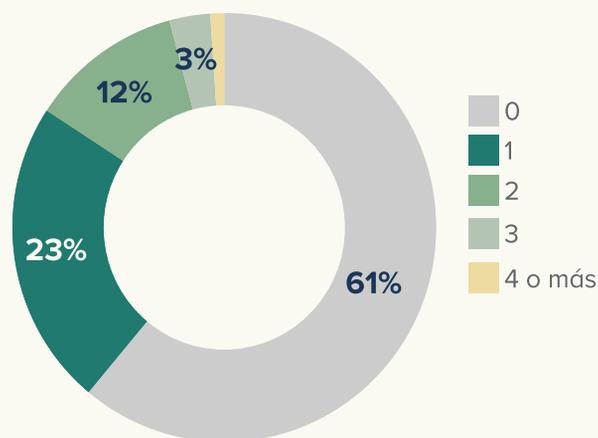
Esto es importante porque los hogares con jefatura de hogar femenina tienen mayor incidencia de pobreza que los de jefatura de hogar masculina. Mientras que en el 2023 el 24% los hogares con jefatura de hogar masculina de Antioquia estaban en condición de pobreza por ingresos, el 30% de los hogares con jefatura de hogar femenina están en esta condición. En pobreza multidimensional (pobreza medida más allá de los ingresos) también existe esta brecha, pues el 9% de los hogares con jefatura masculina tienen pobreza multidimensional y este porcentaje alcanza el 13% para los hogares liderados por mujeres.

Lo anterior está relacionado por las brechas de género en el acceso al mercado laboral. Solo el 55% de las mujeres en edad de trabajar del departamento participa en el mercado laboral, siendo esta es la manera más efectiva de tener ingresos económicos y acceder a protección social, mientras que en contraste el 77% de los hombres participa en el mercado laboral. Además, las mujeres también enfrentan mayores tasas de desempleo (6,4% hombres, 9,6% mujeres).

La lectura conjunta de estos indicadores permite inferir que aquellos hogares monoparentales con jefatura de hogar femenina pueden enfrentar mayores barreras para generar ingresos y por lo tanto pueden estar en una condición más vulnerable que los hogares de otro tipo. De ahí la importancia de las políticas y programas sociales enfocados en apoyar a las madres cabeza de hogar, como lo es la iniciativa que está implementando la Gobernación de Antioquia en la consolidación del sistema departamental del cuidado⁴.

Finalmente, otra manera de seguir profundizando en este aspecto es analizar la presencia de personas dependientes en los hogares, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2023, solo 4 de cada 10 hogares del departamento tenían al menos un menor de edad, esto es aproximadamente 957 mil hogares (ver Gráfico 14). De estos el 45% estaba a cargo de un jefe de hogar soltero o viudo.

Gráfico 14.
Antioquia: distribución de hogares de acuerdo con la cantidad de menores de 18 años dentro del hogar, 2023



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Departamental de la Gobernación de Antioquia.

⁴ Para profundizar sobre este tema consultar el informe ¿Por qué apostarle a la Autonomía Económica de las Mujeres de Antioquia? (Antioquia Cómo Vamos, 2024)



De manera más específica, se estima que el 15% de los hogares de Antioquia (aproximadamente 369.500 hogares) tiene al menos un menor de 5 años en su composición. En contraste, cerca de la mitad de los hogares del departamento (48% - 1.2 millones) tiene al menos a un adulto mayor de 60 años; lo que significa que, en Antioquia, hay aproximadamente 3 veces más hogares con adultos mayores que con primera infancia. Finalmente, solo el 3% (71.800) de los hogares tiene al menos un representante de ambos grupos etarios, (al menos a un menor de 5 años y al menos un adulto mayor de 60 años).

Estos datos nos permiten concluir que entender la composición de los hogares en el departamento es relevante, pues su estructura puede estar relacionada con factores

de mayor o menor vulnerabilidad. Al respecto, la última publicación de pobreza monetaria del DANE para Antioquia, estima que en 2024 la incidencia de pobreza monetaria en hogares que no tienen niños menores de 12 años dentro del hogar es del 14%, sin embargo, en los hogares que tienen tres o más niños menores de 12 años, la incidencia de pobreza es del 70%.

Seguir ahondando en este tipo de brechas puede servir para profundizar en las estrategias de focalización de programas y políticas sociales de manera que sean más efectivas y eficientes contribuyendo a apoyar integralmente a aquellos hogares que enfrentan altas cargas económicas dada su estructura demográfica.

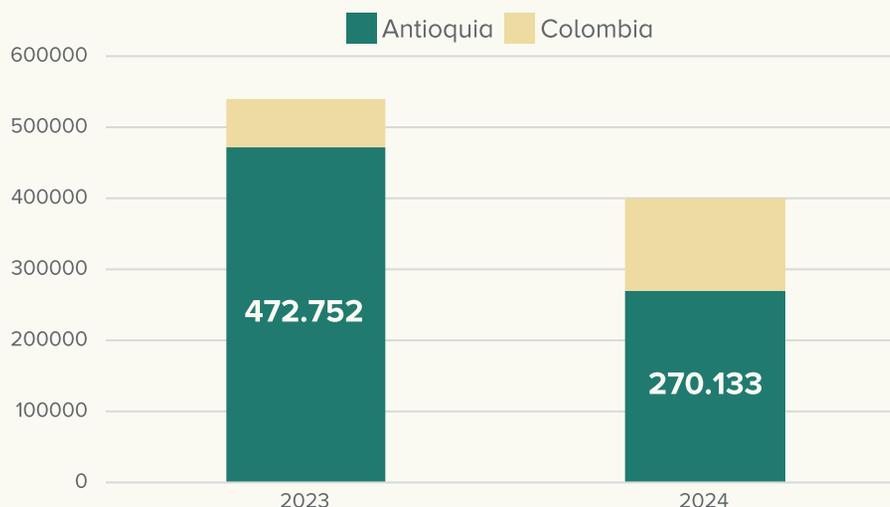
Apartado Migración en tránsito

Desde Antioquia Cómo Vamos hemos hecho especial seguimiento a los migrantes que transitan por el departamento como parte de su ruta en sentido sur-norte. De acuerdo con los datos de Migración Colombia, el flujo migratorio llegó a su pico más alto en el 2023, donde 539.959 migrantes atravesaron el país. Aproximadamente el 88% (472.752 migrantes) de los migrantes llegaron a Antioquia, principalmente a Necoclí o Turbo, siendo estos puntos clave de salida en su tránsito a Panamá. En el 2024, el gobierno de Panamá endureció el control migratorio y realizó cierres en la ruta del Darién, estas medidas se vieron reflejadas en una disminución del 43% del flujo migratorio que atravesó Antioquia, en este año se registró un total de 270.133 migrantes en tránsito por el departamento, que representó el 67% del total de migrantes que se registró en el país⁵.

⁵ Para ampliar esta información consultar los Informes de Calidad de Vida de 2023 y 2022 de Antioquia Cómo Vamos.



Gráfico 15.
Colombia: migrantes irregulares registrados, 2023-2024



Fuente: elaboración propia a partir de los datos reportados por Migración Colombia

Desde el último trimestre de 2024 se empezaron a reportar movimientos migratorios en sentido norte – sur, debido principalmente a un cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos y de otros países del norte, que han dificultado el acceso de migrantes a sus países de destino y que además ha ocasionado el retorno de migrantes que ya se encontraban en países del norte. La cantidad de migrantes en la ruta del norte al sur se ha intensificado en el 2025.

Estos migrantes han utilizado dos rutas principales que incluyen diferentes municipios de Colombia. La ruta principal es la del Caribe, que sale de Puerto Colón en Panamá entra a Colombia por la Miel, pasa por Sappurro y Capurganá, entrando a Antioquia por Turbo y Necoclí. A junio de 2025 se había reportado un total de 11.882 migrantes retornados por esta ruta. La otra ruta es por el Pacífico, que sale de San Vicente en Panamá pasa por Jaque también en Panamá y entra a Colombia por Juradó, siguiendo a Bahía Solano y Buenaventura. A junio de

2025 había un reporte de 179 migrantes por esta ruta.

Estos migrantes llegan a los municipios colombianos con necesidades básicas de alimentación y suplementación nutricional, de agua potable y artículos de higiene, de atención primaria en salud y alojamiento temporal en Necoclí, Turbo, Juradó y Bahía Solano, y de transporte humanitario hacia Cali y Medellín principalmente (GIFMM-R4V, 2025).

De acuerdo con el último reporte de Migración Colombia con corte a agosto 15, el total de migrantes que llegaron al país desde el norte hacia el sur alcanzó los 15.250 migrantes reportados, con un promedio de 55 personas diarias. El 56,2% son hombres adultos, el 25,4% son mujeres adultas y el 18,4% son niños, niñas y adolescentes. En su gran mayoría los migrantes retornados son venezolanos (15.006), seguidos de los peruanos (87) y ecuatorianos (80) (Migración Colombia, 2025).



El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) ha identificado diferentes riesgos para esta población durante el tránsito por Panamá y Colombia: la presencia de grupos armados ilegales principalmente en la ruta del pacífico; la necesidad de habitar temporalmente en el espacio público como parques y calles; el riesgo de separación familiar, trata de personas y violencias de género, especialmente cuando no se puede comprobar el parentesco entre adultos y niños; los riesgos de afectaciones de salud física y mental dada las condiciones precarias de movilidad marítima, la desnutrición, deshidratación y quemaduras, entre otras. La situación se vuelve crítica dada la poca presencia estatal y de cooperación especialmente en Capurganá y en la ruta del pacífico. En este último aspecto se destaca que Turbo y Necoclí han consolidado una mayor articulación interinstitucional y existe una presencia más estable de actores humanitarios y puntos de atención definidos para la población en movimientos mixtos (GIFMM-R4V, 2025).

Aunque en el flujo migratorio en Turbo y Necoclí ha prevalecido aquellos migrantes de la ruta norte – sur, el flujo migratorio en sentido sur – norte no ha desaparecido. A agosto de 2025, Migración Colombia reportó 2.982 migrantes en sentido sur-norte en el Urabá antioqueño, 79% llegaron a Necoclí y 21% llegaron a Turbo. Aproximadamente el 61% eran hombres adultos y el 25% mujeres adultas, un 8% eran niños y un 6% niñas. Las principales nacionalidades de estos migrantes también son la venezolana (46%), la ecuatoriana (7%) y la peruana (6%).



Conclusiones:

- **La población de Antioquia sigue creciendo, pero el ritmo se ha ido desacelerando:** Se estima que la población de Antioquia crecerá solo un 3% en los próximos 10 años y que en el 2040 empiece a decrecer. Esto se debe a la acelerada caída que se ha presentado año tras año en la cantidad de nacimientos, que los últimos 16 años se redujo en un 43%.

solo padre o madre con hijos. Lo que significa que un cuarto de los hogares de Antioquia es monoparental, solo La Guajira, el Valle del Cauca y Nariño tiene una participación mayor de hogares monoparentales. Además, la gran mayoría de este tipo de hogares (86%) tienen una madre soltera cabeza de hogar que debe responder por las cargas económicas y de cuidado de sus hijos.
- **Cada vez habrá más adultos mayores en Antioquia:** actualmente se estima que niños niñas y adolescentes tienen igual peso poblacional que los adultos mayores (16%), sin embargo, esta relación cambiará con el tiempo, en el 2050 se espera que el 27% de la población sea mayor a los 60 años, mientras que solo el 9% sea menor a los 12 años. Si no logramos que los adultos mayores se mantengan activos económicamente inevitablemente aumentará la carga de dependencia económica del departamento.
- **La migración se presenta como una contribución al bono demográfico de Antioquia:** el 57% de los migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Antioquia tienen menos de 29 años, lo cual contrasta con la tendencia al envejecimiento poblacional que se está dando en el departamento.
- **Los hogares de Antioquia son cada vez más pequeños:** en los últimos seis años ha aumentado la proporción de hogares compuestos por dos personas (+ 7 p.p.), como resultado se estima que en 2024 cerca de la mitad de los hogares de Antioquia están compuestos por 1 o 2 personas.
- **Antioquia es uno de los departamentos con mayor proporción de hogares monoparentales:** En Antioquia hay aproximadamente 670.000 hogares compuestos por un
- **En Antioquia hay 3 veces más hogares con adultos mayores que con primera infancia:** El 48% de los hogares tienen al menos un adulto mayor dentro del hogar y el 15% tienen al menos un menor de 5 años. Además, el 61% de los hogares de Antioquia no incluye a ningún menor de edad en su composición.
- **Hay una mayor incidencia de pobreza en los hogares con jefatura de hogar femenina y en los hogares que tienen más de tres hijos:** la brecha de pobreza multidimensional por sexo del jefe de hogar es de 4 p.p. mientras que la brecha en pobreza monetaria es de 6 p.p. en ambos casos es mayor en los hogares con jefatura de hogar femenina. Por otro lado, la brecha de pobreza monetaria entre hogares sin hijos y con más de tres hijos es de 56 p.p.
- **En 2025, la cantidad de migrantes irregulares que atraviesan Antioquia desde países del norte a países del sur es aproximadamente cinco veces mayor a la cantidad de migrantes que atraviesan el departamento desde países del sur a países del norte:** en 2025 se han registrado más de 15.000 migrantes que atraviesan el país en las rutas del norte hacia el sur, mientras que los migrantes del sur al norte registrados en Necoclí y Turbo no alcanzan los 3.000.



Recomendaciones:

Dado los cambios que se están presentando en la estructura demográfica de Antioquia, es fundamental que cualquier política social o económica que se quiera implementar considere el nuevo panorama demográfico al que nos enfrentamos. Solo así será una política efectiva y sostenible.

Es importante implementar programas de emprendimiento, empleo y educación que estén orientados a mantener activos económicamente a los adultos mayores, la inclusión de esta población es clave para enfrentar un aumento en la dependencia económica de los hogares.

El diseño e implementación de programas orientados a reducir las cargas económicas y de cuidado es coherente con las realidades demográficas que enfrentamos en el departamento. Focalizar la atención en hogares monoparentales con jefatura de hogar femenina, es una buena estrategia para reducir las brechas sociales y económicas asociadas a la composición del hogar.

Finalmente, se debe avanzar en investigación orientada a la propuesta de un cambio en el modelo de gestión social, que considere las consecuencias e implicaciones de una población cada vez más envejecida y que garantice la sostenibilidad económica y social del departamento.



Referencias

Antioquia Cómo Vamos. (2024). ¿Por qué apostarle a la autonomía económica de las mujeres de Antioquia?

Antioquia Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos. (2024). Recomendaciones de Política: Integración socioeconómica de la población migrante venezolana en Medellín.

Fundación Saldarriaga Concha, & Inclusión SAS. (2025). Colombia envejece: Las oportunidades de una sociedad longeva.

GIFMM-R4V. (2025). Reporte de Movimientos Mixtos Norte-Sur.

Kalmanovitz, S. (2017). Breve Historia Económica de Colombia.

Migración Colombia. (2025). Migrantes en Tránsito Irregular.

Universidad de Antioquia - Facultad de Economía. (2020). Evolución de la pirámide demográfica en Colombia. Observador Del GES, 7. <https://www.populationpyramid.net/colombia>



2.

Pobreza

En el 2024 los indicadores de pobreza de Antioquia presentan resultados mixtos. Por un lado, la pobreza por ingresos continúa con su tendencia decreciente, sin embargo, la pobreza entendida más allá de los ingresos (medida a partir del indicador de pobreza multidimensional) presenta un ligero incremento. Aunque este aumento no resulta estadísticamente significativo, es importante ahondar en las condiciones de vulnerabilidad que estén frenando la reducción de la pobreza multidimensional y entender que factores están afectando la calidad de vida de los hogares más vulnerables de Antioquia.

El presente capítulo tiene el objetivo principal de registrar el seguimiento a los indicadores objetivos de pobreza del departamento y contrastarlos con indicadores de percepción, esto para generar las alertas pertinentes desde el punto de vista objetivo y subjetivo. Se espera que este capítulo ofrezca un análisis relevante para los tomadores de decisiones y actores estratégicos que estén desarrollando programas sociales orientados a reducir la pobreza en Antioquia.

Dado que la última Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia se realizó en el 2023 y la próxima se realizará en el 2025, este capítulo no incluye un análisis de pobreza municipal o subregional, sino que, se concentra en el análisis de indicadores a nivel departamental. Si el lector está interesado en complementar el análisis acá presentado y profundizar en las brechas territoriales de pobreza en Antioquia, lo invitamos a consultar el Informe de Calidad de Vida 2023 de Antioquia Cómo Vamos en donde se hizo un análisis detallado de las diferentes manifestaciones de pobreza por subregión.

En este sentido la principal fuente de información que se usa en este análisis es el DANE, que estima los indicadores de pobreza departamentales a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional y la Gran Encuesta Integrada de Hogares, además se incluye algunos indicadores de percepción construidos a partir de la Encuesta Multidimensional realizada por Comfama en el 2023.

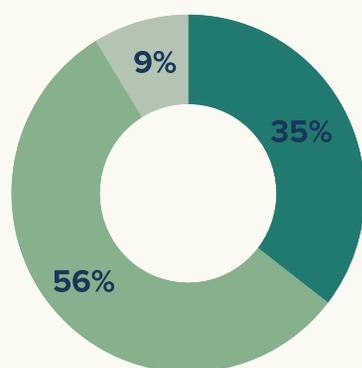


Pobreza por ingresos

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida Nacional 2024, uno de cada tres jefes de hogar en Antioquia se considera pobre (32,7%) y el 35% considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos (ver Gráfico 1). Esto contrasta con la más reciente publicación de pobreza monetaria del DANE, que indica que para el 2024 una de cada cuatro personas en el departamento estaba en condición de pobreza monetaria (24,7%), presentando así un panorama más favorable.

La lectura conjunta de indicadores subjetivos y objetivos plantea que hay personas que no están en condición de pobreza monetaria pero que se auto perciben como pobres. Tener presente esta disparidad es importante, ya que no solo es necesario considerar la condición económica de las personas, sino también entender las razones asociadas a la vulnerabilidad económica que perciben, pues probablemente su calidad de vida se está viendo afectada por esta autopercepción de pobreza.

Gráfico 1.
Antioquia: percepción del jefe de hogar o cónyuge sobre los ingresos del hogar, 2024



- No alcanza para cubrir los gastos mínimos
- Alcanza para cubrir los gastos mínimos
- Cubren más que los gastos mínimos

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida - DANE

Jefes de hogar que se considera 2024



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida - DANE

Personas en condición de pobreza monetaria 2024



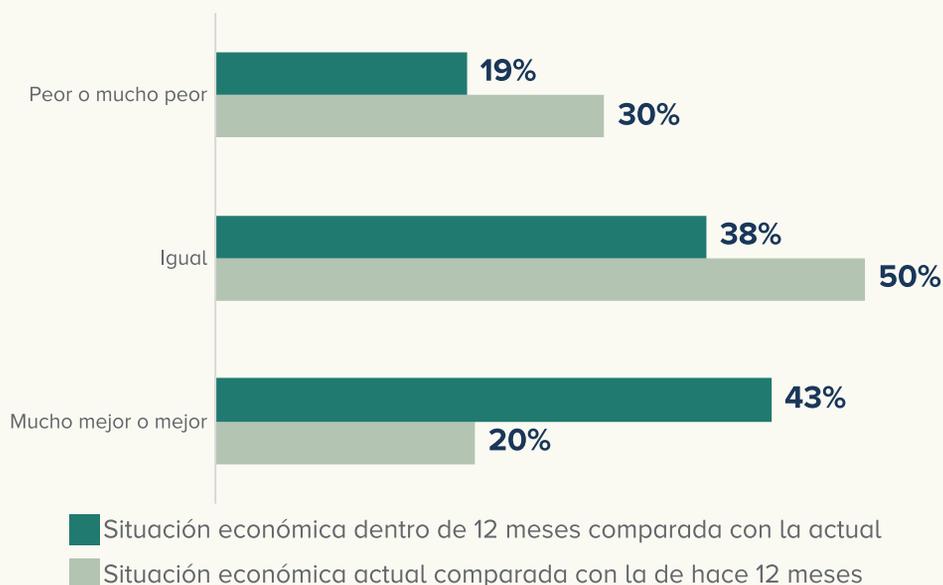
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los indicadores de pobreza del DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares

Otro aspecto interesante para analizar en la percepción de la situación económica de los hogares tiene que ver con la evolución de su situación. Tal como se evidencia en el Gráfico 2, el 80% de los jefes de hogar manifestaron que en comparación con el último año su situación económica está igual (50%) o peor (30%), mientras que únicamente el 20% considera que su situación económica ha mejorado en el último año. Sin embargo, al indagar por la expectativa para el próximo año, se percibe un ligero optimismo, pues si bien el 57% de los jefes de hogar consideran que su situación estará igual (38%) o peor (19%), el 43% considera que su situación mejorará.



Gráfico 2.

Antioquia: percepción de los jefes de hogar sobre su situación económica actual comparada con la de hace 12 meses y con la de los siguientes 12 meses, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional 2024

En contraste, la evolución de los indicadores objetivos presenta un panorama distinto, pues en los últimos años se ha presentado una reducción constante en el porcentaje de personas pobres en Antioquia. Entre el 2021 y el 2024 la incidencia de pobreza monetaria se ha reducido en 8,1 p.p y la pobreza extrema en 1,4 p.p.

Gráfico 3.

Antioquia: incidencia de pobreza monetaria y cantidad de personas pobres, 2021-2024

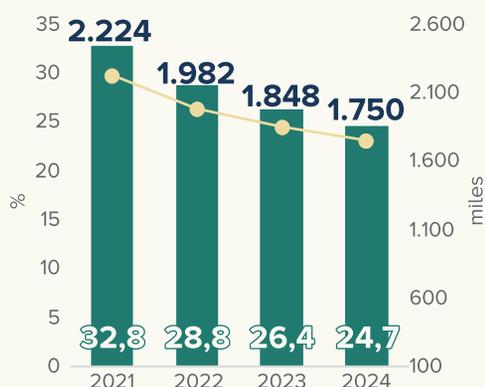
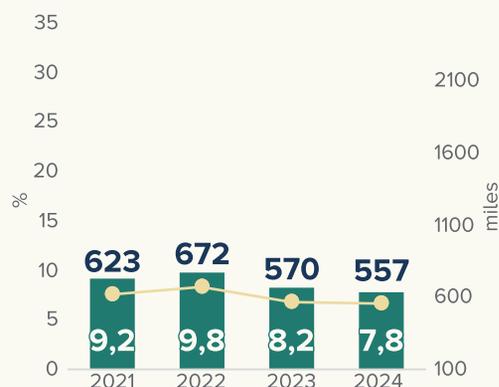


Gráfico 4.

Antioquia: incidencia de pobreza extrema y cantidad de personas en pobreza extrema, 2021-2024



Fuente: elaboración propia a partir de los indicadores de pobreza monetaria del DANE con fuente de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.



A pesar de la disminución constante, la incidencia monetaria en el departamento sigue siendo alta. Tal como se observa en el Gráfico 5 mientras la incidencia de pobreza en Antioquia es del 25%, Bogotá D.C., Caldas y Cundinamarca tienen una incidencia de pobreza del 20% y Meta y Risaralda del 24%. Además, estos territorios han sido más efectivos en la reducción de pobreza en el último año, se destaca especialmente Bogotá D.C. con una reducción de 4,1 p.p., pero Risaralda, Caldas y Meta también redujeron la pobreza en 3,3 p.p., 2,3 p.p. y 2,8 p.p. respectivamente, mientras Antioquia solo la redujo en 1,7 p.p.

En pobreza extrema, Antioquia está en una situación similar a Santander y Meta con una incidencia de 8% y una disminución de menos de un punto porcentual entre el 2023 y el 2024, mientras que Quindío tiene una incidencia del 7%, Risaralda y Caldas del 5% y Bogotá D.C del 4%, todos estos con una reducción de más de un punto porcentual en el último año (ver Gráfico 6).

Gráfico 5.
Colombia: incidencia de pobreza monetaria por departamentos(%), 2023-2024

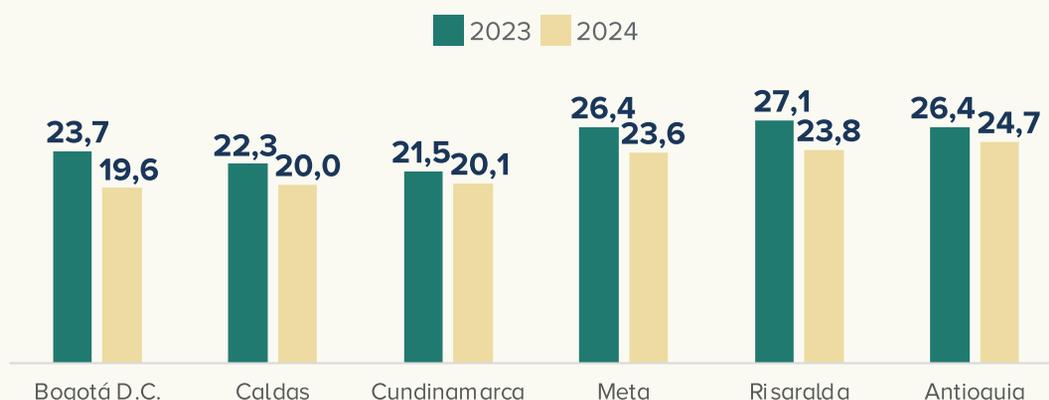
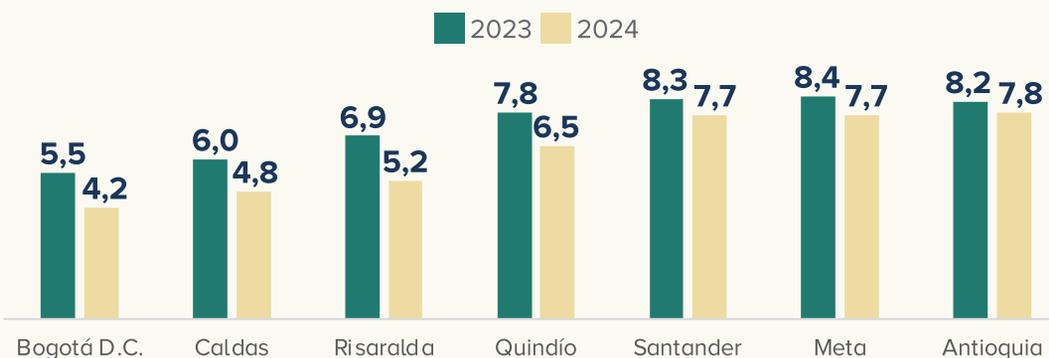


Gráfico 6.
Colombia: incidencia de pobreza extrema por departamentos(%), 2023-2024



Fuente: elaboración propia a partir de los indicadores de pobreza del DANE calculados a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares

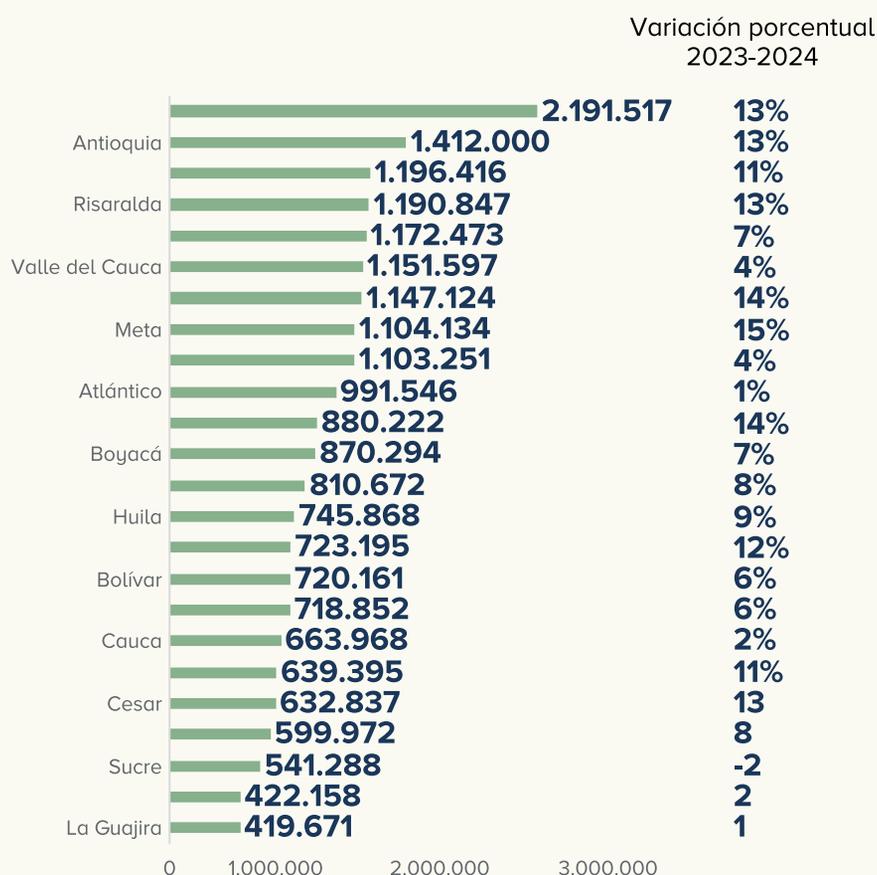


En términos más concretos, se estima que en Antioquia hay aproximadamente 1.7 millones de personas que tienen un ingreso mensual inferior a los \$484.684 (pobreza) y 557 mil personas que tienen un ingreso mensual inferior a los \$218.361 (pobreza extrema).

El ingreso promedio por unidad de gasto en Antioquia es de \$1.4 millones, es decir, que el ingreso de una persona en condición de pobreza monetaria es aproximadamente un tercio del ingreso promedio del departamento. Mientras que entre el 2023 y el 2024, el ingreso promedio en Antioquia creció en un 13%, la línea de pobreza monetaria aumentó en un 6%.

Antioquia tiene el segundo ingreso promedio más alto del país después de Bogotá D.C, además, ambos territorios presentaron un crecimiento porcentual similar en el último año (13%) (ver Gráfico 7).

Gráfico 7.
Colombia: ingreso promedio por unidad de gasto para cada departamento, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de los indicadores de pobreza del DANE calculados a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares



A pesar del aumento en el ingreso promedio y de la disminución en la pobreza monetaria, la medida de desigualdad de ingresos de Antioquia aumentó en el último año, el índice de Gini pasó de 0,529 en 2023 a 0,532 en 2024. Además, los únicos departamentos que presentaron una desigualdad de ingresos mayor que Antioquia fueron Chocó, Córdoba y La Guajira.

Según la Encuesta Multidimensional realizada por Comfama en Antioquia durante el 2023, solo el 53% de las personas estaban satisfechas con su ingreso y un 24% estaba totalmente insatisfecho. De todos los aspectos de la vida por las que se indagó, el ingreso fue la que presentó un menor nivel de satisfacción.

Pobreza multidimensional

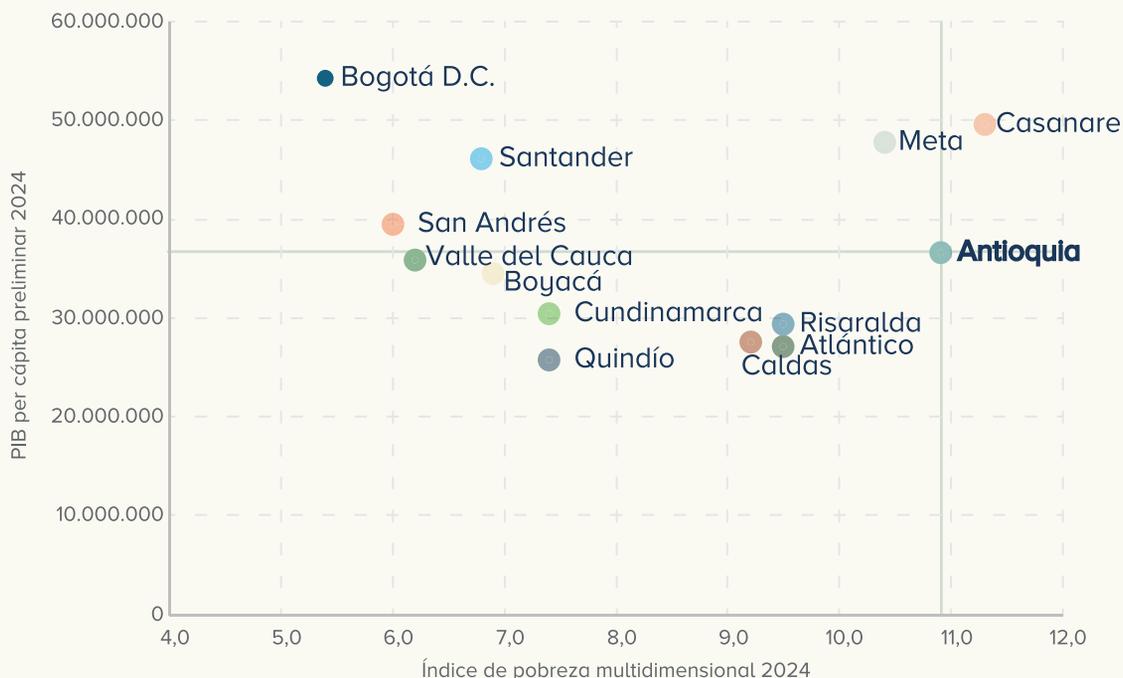
De acuerdo con las estimaciones del DANE en 2024, el 10,9% de las personas de Antioquia estaba en condición de pobreza multidimensional. Este indicador se mide a partir las privaciones que enfrentan las personas en sus condiciones sociales y en las necesidades de sus viviendas, lo que permite identificar cuáles son esas barreras que enfrentar para lograr la movilidad social y superar así su condición de pobreza.

Al comparar con los demás departamentos, Antioquia ocupa el puesto número 12 del menos pobre al más pobre. Algunos territorios como Bogotá D.C (5,4%), San Andrés (6,0%) y Santander (6,8%) tiene un índice de

pobreza multidimensional menor que Antioquia, pero en cierta medida eso tiene sentido porque su PIB per cápita también es mayor, por lo que su capacidad para tener un mayor bienestar social es más alta. Sin embargo, otros departamentos que incluso tienen un menor PIB per cápita que Antioquia también presentan índices de pobreza menores, como es el caso de Valle del Cauca (6,2%), Boyacá (6,9%) y Cundinamarca (7,4%) y Quindío (7,4%), Caldas (9,2%), Risaralda (9,5%) y Atlántico (9,2%) (ver Gráfico 8). Esto da a entender que Antioquia tiene las capacidades económicas para alcanzar un nivel de pobreza inferior.



Gráfico 8.
Departamentos: índice de pobreza multidimensional y PIB per cápita preliminar, 2024

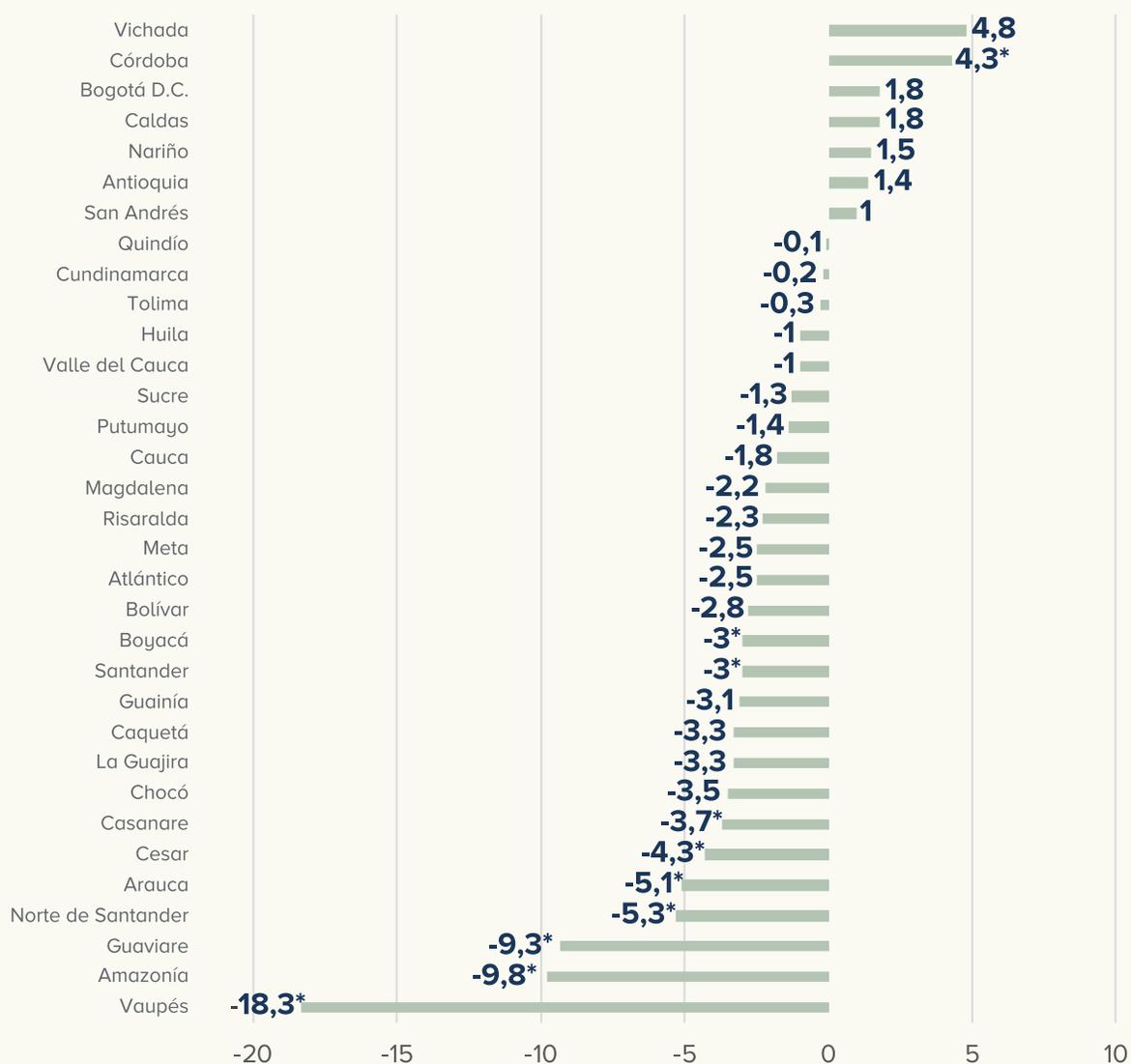


Fuente: elaboración propia a partir de los índices de pobreza multidimensional y las cuentas económicas del DANE.

En los últimos años, el índice de pobreza multidimensional de Antioquia había presentado una tendencia decreciente, sin embargo, entre 2023 y 2024 el índice subió 1,4 p.p. siendo así uno de los 7 departamentos que aumentó su pobreza multidimensional en el último año (ver Gráfico 9).



Gráfico 9.
Colombia: cambio en el índice de pobreza multidimensional por departamento, 2023-2024

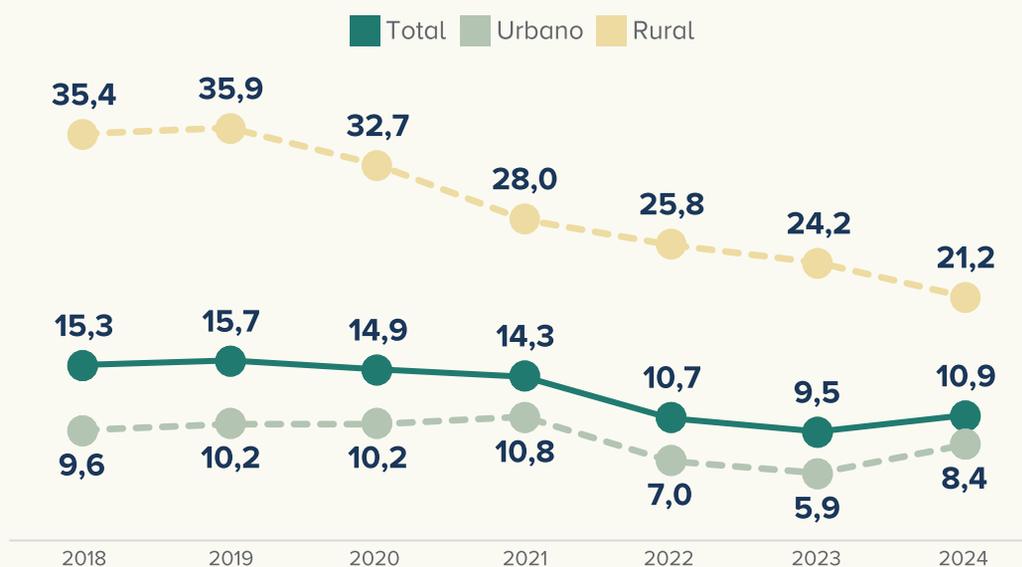


Fuente: elaboración propia a partir de los índices de pobreza multidimensional publicados por el DANE calculados con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional
Nota: cambio estadísticamente significativo



Si bien el aumento del índice de Antioquia no es estadísticamente significativo es importante identificar cuáles son esas alertas que se están generando y principalmente cuáles son las dimensiones y privaciones que están impidiendo la disminución constante de la pobreza en el departamento. En el Gráfico 10 se evidencia que el aumento de la pobreza se está presentando en la zona urbana y que la pobreza en el área rural continúa disminuyendo a un ritmo similar al que se venía dando en los últimos años. Esto es positivo porque significa que la brecha urbana – rural se sigue reduciendo.

Gráfico 10.
Antioquia: Índice de pobreza multidimensional por zona, 2018-2024



Fuente: elaboración propia a partir del índice de pobreza multidimensional publicada por el DANE y calculado a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional.

En cuanto a las dimensiones que componen el índice, se observa en el Gráfico 11 que la dimensión de Salud es la que presenta un mayor incremento en la contribución a la pobreza, pasando de 7% a 10,5% en el último año, y alcanzando incluso su peso más alto en los últimos seis años incluyendo al 2021 (10,1%) que fue un año álgido para el sector de salud dada la pandemia del Covid – 19.

El aumento en la incidencia de las privaciones de salud se evidencia en sus dos indicadores. El porcentaje de hogares en los que al menos un mayor de 5 años no está asegurado en salud aumentó en 0,8 p.p. El porcentaje de hogares en los que al menos

una persona tuvo una necesidad de salud y no acudió al servicio (barreras de acceso a salud) aumentó 2,3 p.p. (ver Gráfico 12). Al respecto es importante anotar que otros departamentos como Atlántico, Boyacá, Cauca, Risaralda y Bogotá D.C. también presentaron aumentos en la incidencia de este último indicador.

Otra dimensión que aumentó su contribución a la pobreza en Antioquia fue Vivienda, pasando de 9,4% a 9,7%. Si bien este aumento parece insignificante, si se evidencia que la mayoría de las privaciones relacionadas con Vivienda aumentaron su incidencia. El porcentaje de hogares afectados por la falta



de servicios públicos aumentó en 1,2 p.p. para cada uno de los servicios (agua mejorada y eliminación de excretas). Los hogares afectados por los materiales de su vivienda también aumentó en 0,4 p.p. tanto para pisos como para paredes. Finalmente, el porcentaje de hogares afectados por hacinamiento también aumentó en 0,2 p.p.

Gráfico 11.
Antioquia: contribución de las dimensiones a la pobreza multidimensional, 2018-2024



Fuente: elaboración propia a partir del índice de pobreza multidimensional publicada por el DANE y calculado a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional.

Gráfico 12.
Antioquia: porcentaje de hogares afectados por privación 2023-2024



Fuente: elaboración propia a partir del índice de pobreza multidimensional publicada por el DANE y calculado a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional.



Finalmente se destaca el hecho de que la dimensión de Trabajo, que es una de las que más contribuye a la pobreza, disminuyó su contribución pasando de 30,6% a 29,5%, esto debido a la disminución en la incidencia de las privaciones de Trabajo informal en -4,4 p.p. y Desempleo de larga duración en -1,8 p.p. También disminuyó la incidencia de privaciones asociadas a la educación, como lo son el Bajo Logro Educativo (1,9 p.p.) y el Rezago Escolar (2.2 p.p.). Lo que implica que Antioquia mejoró los resultados de las cuatro privaciones con mayor incidencia.

Conclusiones

- La percepción de pobreza en Antioquia es mayor que lo que indican los indicadores objetivos. Esto es importante, porque las personas toman decisiones de consumo e inversión basados en cómo perciben su situación financiera. En este tipo de decisiones, por ejemplo, es clave el hecho de si consideran que su ingreso es suficiente para cubrir sus necesidades de consumo.
- Aunque en Antioquia continúa la disminución de la pobreza monetaria y extrema y ha aumentado el ingreso promedio, la desigualdad de ingresos aumentó en el último año. Consolidándose este como uno de los principales retos del departamento, especialmente por que a nivel de país estamos en una posición bastante desfavorable.
- La pobreza multidimensional aumentó en el último año, sin embargo, este aumento no es estadísticamente significativo. Si bien la brecha entre la zona urbana y rural se sigue reduciendo, todavía existe una gran diferencia, el IPM rural aún duplica al IPM urbano.
- Las barreras de acceso a salud y la falta de aseguramiento en salud fueron las privaciones que más aumentaron en el último año, sin embargo, esto no fue exclusivo de Antioquia, pues otros departamentos también sufrieron este incremento.
- Se destaca que hubo una disminución en la incidencia de las privaciones que más afectan al departamento y que están asociadas con la calidad y acceso del empleo y la educación, dos importantes habilitadores del desarrollo y pilares fundamentales del capital humano.



Recomendaciones

- Profundizar el análisis de percepción de pobreza especialmente en términos de evolución, entender por ejemplo en que se basan las expectativas de una mejora en las condiciones económicas cuando se considera que la situación actual es peor que la de hace un año.
- Abordar el problema del aumento en la desigualdad de ingresos, ya que a pesar de que como departamento se logra reducir continuamente la pobreza esto no se refleja en una disminución de la desigualdad y esto obstaculizará la mejora en la calidad de vida de los más vulnerables.
- Continuar fortaleciendo el trabajo formal y las trayectorias educativas como habilitadores del desarrollo, ya que son las principales variables que afectan la pobreza multidimensional.
- Profundizar en las razones por las cuales aumentaron las barreras de acceso a salud y el porcentaje de hogares sin aseguramiento en salud en el departamento, para atender esta situación de manera oportuna e impedir la propagación de su afectación en la población.

Referencias

- DANE. (2019). Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia Pobreza multidimensional en Colombia.
- DANE. (2025a). Pobreza Multidimensional 2024.
- DANE. (2025b). Resultados pobreza monetaria 2024.



3.

Seguridad alimentaria

En el país y en Antioquia la pandemia marcó un punto de quiebre en diversos indicadores sociales, y la seguridad alimentaria no fue la excepción. El alza en los precios de los alimentos (71% entre 2019 y 2024) ha sido un factor determinante, contribuyendo a que hoy más personas enfrenten inseguridad alimentaria que pobreza monetaria¹ (30% vs. 25%). Asimismo, desde 2020 se presentó un aumento en los casos de desnutrición detectados, en las muertes por desnutrición y en la inseguridad alimentaria moderada y severa.

La prevalencia de esta última problemática en los hogares antioqueños es uno de los principales retos identificados por Antioquia Cómo Vamos en su documento 'Retos de Antioquia 2025'. Tanto allí, como en el 'Informe de Calidad de Vida de Antioquia 2023', las principales alertas se refieren a (i) la priorización de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, ya que a 2023 más del 50% de los hogares en estas subregiones se encontraban en inseguridad alimentaria o moderada; y (ii) la necesidad de abordar esta problemática desde múltiples sectores de la sociedad. Dado el aumento sostenido en la inseguridad alimentaria del departamento, las intervenciones públicas tradicionales no son suficientes para la cantidad de hogares que requieren ser atendidos.

A su vez, Antioquia Cómo Vamos tiene vocación de control social a iniciativas gubernamentales relacionadas con esta problemática. A primer año de gobierno, desde la Gobernación Departamental se cuenta con la implementación de Arrullos Antioquia para atender infancias en riesgo sin cobertura de programas especializados, la recolección del impuesto vehicular para la seguridad alimentaria y el cumplimiento del programa 'Seguridad Alimentaria, Nutricional y Alimentación Escolar' comprometido en Plan de Desarrollo.

1. Pobreza monetaria medida por el DANE a 2024



De forma tal que, además de disponer la línea base para el seguimiento a la gestión pública en esta materia, el presente capítulo tiene como finalidad realizar seguimiento a la problemática en el departamento a partir de los resultados, a 2024, de la Food Insecurity Experience Scale (FIES) realizada por el DANE en su Encuesta de Calidad de Vida Nacional, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Aunque esta medición no permite identificar diferencias por subregiones ni aislar Medellín, el análisis de sus componentes permite identificar los principales determinantes.

Adicionalmente, se abordan las tendencias departamentales de bajo peso al nacer, como factor de riesgo en un contexto de inseguridad alimentaria, y desnutrición, en términos de desnutrición aguda y fallecimientos, como consecuencias de la problemática. Un análisis con mayor desagregación subregional y municipal en estos indicadores relativos a la primera infancia se encontrará en el informe ‘Cómo va la Calidad de Vida de la Primera Infancia en Antioquia 2024’.

Medición de la inseguridad alimentaria

Los hogares con inseguridad alimentaria son aquellos que no cuentan con la cantidad ni calidad apropiada de alimentos para el consumo por falta de dinero u otros recursos. Típicamente son hogares que tienen sensación de hambre, deben disminuir la cantidad en plato en las comidas al día, omiten comidas principales, pasan días enteros sin comer, o manifiestan preocupación por el acceso a los alimentos. Según el nivel de privación estos hogares se pueden clasificar en: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve, o seguridad alimentaria.

La medición de la FIES a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Nacional realizada por el DANE en alianza con la FAO se ha realizado anualmente en el país desde 2022. Aunque permite comparabilidad entre departamentos, su nivel de desagregación no permite profundizar en brechas subregionales o municipales. Por otro lado, la Escala Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria (ELCSA) es la medición utilizada por la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia para estimar el porcentaje de hogares según nivel de inseguridad alimentaria, y es el único instrumento de este tipo con una representatividad subregional y municipal para el departamento. Se ejecuta bianualmente, por lo cual, los datos a 2023 son los más recientes a la fecha de escritura del presente informe.

A dicho año, según la ELCSA, se registraba un aumento de 9 puntos porcentuales (p.p) frente a 2021 en el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa (38% vs 29%). Adicionalmente, se registraba un mayor porcentaje de hogares con esta condición en la zona rural (41%) que en la zona urbana (37%), pero las mayores brechas se encontraban entre las subregiones. Si bien en todas se registra un aumento en el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2021 y 2023, las diferencias se profundizan entre subregiones: mientras en Urabá, Bajo Cauca, y Magdalena Medio este indicador es superior al 50%, en Oriente y Suroeste no supera el 31%.

2023 es el único año en el que se han conducido dos mediciones de seguridad alimentaria similares en el departamento por instituciones distintas. Ambas se componen por preguntas sobre experiencias de inseguridad alimentaria en el hogar, la mayor diferencia es que la ELCSA incluye un módulo de preguntas para los hogares con menores de edad, mientras la FIES realiza su cuestionario de 9 preguntas indiscriminadamente.



Al comparar los resultados de los cuestionarios realizados a todos los hogares, tanto en la FIES con fuente DANE y en la ELCSA con fuente Gobernación de Antioquia, se encuentra que, aunque las preguntas varían levemente, los resultados son congruentes (ver Tabla 1). En ambas mediciones las experiencias que más reportan los hogares son preocupación por no tener suficientes alimentos, escasa variedad en su dieta y dificultades para acceder a alimentos saludables y nutritivos. Asimismo, la experiencia menos reportada fue dejar de comer todo un día.

La única diferencia en el orden de experiencias se encuentra en quedarse sin alimentos, mientras en la ELCSA sería la quinta más reportada, en la FIES sería la octava.

Tabla 1.
Antioquia: porcentaje de hogares que responden ‘Sí’ a preguntas sobre experiencias de inseguridad alimentaria según medición, 2023

ELCSA – Gobernación de Antioquia		FIES – DANE	
<i>Por falta de dinero u otros recursos en el último mes...</i>		<i>En los últimos 12 meses...</i>	
Preocupación porque los alimentos se acabarán en el hogar	62%	Preocupación por no tener suficientes alimentos para comer	35%
Al menos un integrante tuvo una alimentación basada en poca variedad de alimentos	51%	El hogar consumió poca variedad de alimentos	32%
El hogar dejó de tener una alimentación saludable	62%	El hogar no pudo comer alimentos saludables y nutritivos	30%
Al menos un integrante comió menos de lo que debía comer	51%	Al menos un integrante del hogar comió menos de lo que pensaba que debía comer	24%
Al menos un integrante dejó de desayunar, almorzar o cenar	28%	Al menos un integrante del hogar tuvo que saltar una comida	15%
Al menos un integrante sintió hambre, pero no comió	26%	Al menos un integrante del hogar tuvo hambre, pero no comió por falta de recursos para conseguir alimentos	9%
El hogar se quedó sin alimentos	34%	El hogar se quedó sin alimentos	8%
Al menos un integrante comió una vez al día o dejó de comer durante todo un día	20%	Al menos un integrante del hogar no comió en un día entero	8%

Fuente: elaboración propia con cálculos propios a partir de la Encuesta de Calidad de Vida Departamental – Gobernación de Antioquia y a partir de Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) – DANE y FAO



Este comparativo permite entrever que, si bien el acceso a una cantidad oportuna de alimentos es importante para un porcentaje amplio de los hogares en el departamento, la calidad de estos es fundamental para una base más amplia y que esto no excluye a quienes necesiten cantidad.

Ahora, a 2024, de acuerdo con la FIES, Colombia disminuyó de 2022 a 2024 2,5 puntos porcentuales en el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa, con 25,5% a 2024. En dicho año, Antioquia por primera vez superó la cifra nacional con 28% de los hogares en esta condición, lo cual significó un aumento de 7 puntos porcentuales frente a 2022, de hecho, 6 de estos puntos porcentuales se atribuyen al cambio entre 2023 y 2024. En este último año, el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa representa, aproximadamente, 704 mil hogares que no tienen acceso a alimentos en cantidad y calidad óptima.

Del mismo modo que advertía la ELCSA, se presenta una mayor inseguridad alimentaria en la ruralidad en comparación a la zona urbana. En 2024, la FIES reporta un 32,5% de hogares con inseguridad alimentaria moderada o severa en los centros poblados o en rural disperso, y un 27% de hogares en esta condición en las cabeceras municipales del departamento.

Al analizar individualmente las experiencias de la FIES entre 2023 y 2024 (ver Tabla 2), se encuentra un patrón similar al advertido en la Tabla 1 con datos a 2023: preocupación por los alimentos, falta de alimentos saludables y poca variedad, son las principales tres experiencias que reportan los hogares en el departamento. Adicionalmente, a 2024 el porcentaje de hogares que las experimenta aumentó entre 4 y 9 p.p.



Tabla 2.
Antioquia: porcentaje de hogares que responden ‘Sí’ a preguntas de la FIES en la Encuesta de Calidad de Vida Nacional, 2023-2024

Pregunta del cuestionario FIES	2023	2024	Variación 2023 vs 2024
Preocupación por no tener suficientes alimentos para comer	35%	41%	+6 p.p.
El hogar no pudo comer alimentos saludables y nutritivos	30%	39%	+9 p.p.
El hogar consumió poca variedad de alimentos	32%	36%	+4 p.p.
Al menos un integrante del hogar comió menos de lo que pensaba que debía comer	24%	25%	+1 p.p.
Al menos un integrante del hogar tuvo que saltar una comida	15%	18%	+3 p.p.
Al menos un integrante del hogar no comió en un día entero	8%	14%	+6 p.p.
Al menos un integrante del hogar tuvo hambre, pero no comió por falta de recursos para conseguir alimentos	9%	13%	+4 p.p.
El hogar se quedó sin alimentos	8%	12%	+4 p.p.

Fuente: elaboración propia con cálculos propios a partir de Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) – DANE y FAO

Asimismo, es llamativo el aumento en el porcentaje de hogares en los que al menos un integrante del hogar no comió durante un día entero, pasó de ser la novena y última experiencia más reportada con 8% a ser la sexta con un 14% de hogares que así lo afirman.

En suma, la inseguridad alimentaria es una problemática que se agudiza cada vez más en el territorio, sin dejar de lado los avances por garantizar cada vez más hogares con una cantidad adecuada de alimentos, se debe aunar esfuerzos multisectoriales por asegurar la calidad y variedad de los mismos.

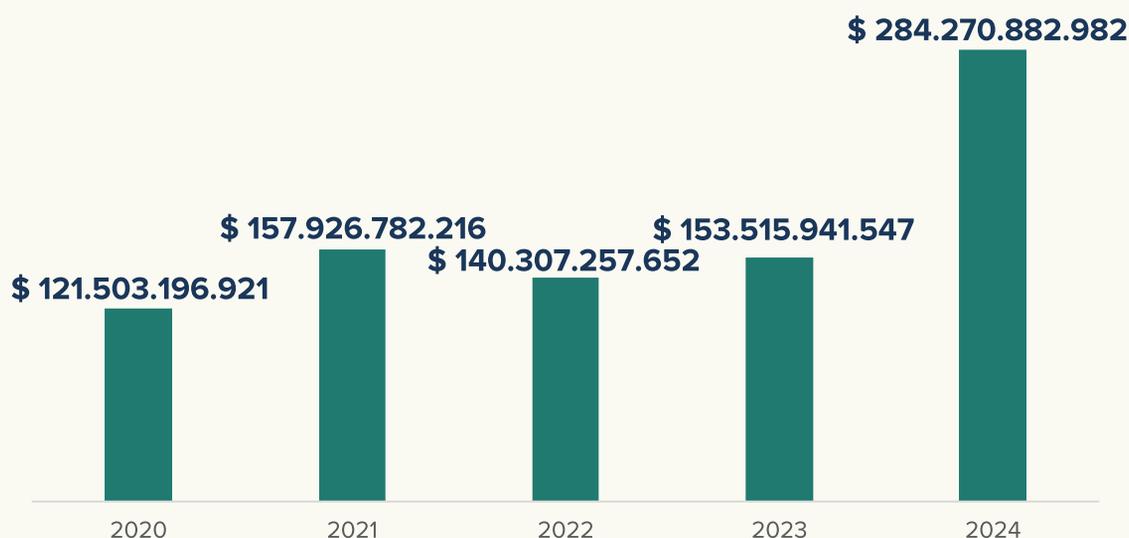


Seguimiento a la gestión pública

Según datos suministrados por la Gobernación de Antioquia, sólo en 2024 se invirtió en inseguridad alimentaria casi el equivalente a la suma de lo destinado en 2022 y 2023 a precios constantes de 2024. De este último año \$72 mil millones son provenientes de la Nación para la implementación del PAE, y los \$212 mil millones restantes son recursos propios a partir del impuesto vehicular.

Gráfico 1.

Antioquia: inversión en seguridad alimentaria por la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Departamento de Antioquia, 2020-2024 con precios constantes de 2024



Fuente: cálculo propio a partir de información suministrada por la Unidad de Programas Sociales – Gobernación de Antioquia

En el Plan de Desarrollo Antioquia Firme se encuentra el programa ‘Seguridad Alimentaria, Nutricional y Alimentación’, con cinco indicadores asociados, dos de ellos relacionados con el cumplimiento del Plan de Alimentación Escolar, y los tres restantes asociados a iniciativas de la gobernación para afrontar la inseguridad alimentaria. De acuerdo con el Plan Indicativo con corte a diciembre de 2024, este programa se encontraba con un 98% de cumplimiento frente a las metas de 2024 y un 22% frente a las metas a 2027 en fin de cuatrienio.

El indicador con menor cumplimiento en ambas metas fue ‘Gestantes, niños y niñas menores de 7 años atendidos con complemen-

tación alimentaria’. A dicha fecha atendieron 6.344 personas de 7.000 proyectadas para todo 2024. Estas atenciones según el Informe de Gestión presentado a Asamblea Departamental se concentraron en Urabá (1.565), Valle de Aburrá (1.387) y Suroeste (685). Al relacionar el cumplimiento de este indicador con la población de 0 a 7 años de cada subregión (ver Gráfico 2), se encuentra que Urabá es la subregión con mayor número de atenciones por cada menor de 7 años en la subregión, con 19,2, seguida de Norte (17,1) y Suroeste (16,7). El puesto de esta última subregión llama la atención, en tanto a 2023 era la segunda subregión con menor porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria o severa después de Oriente.



Gráfico 2.
Subregiones de Antioquia: tasa de gestantes, niños y niñas menores de 7 años atendidos con complementación alimentaria por cada mil personas de 0 a 7 años, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de información en el Informe de Gestión 2024 – Gobernación de Antioquia. Y proyecciones de población del DANE actualizadas a 2025.

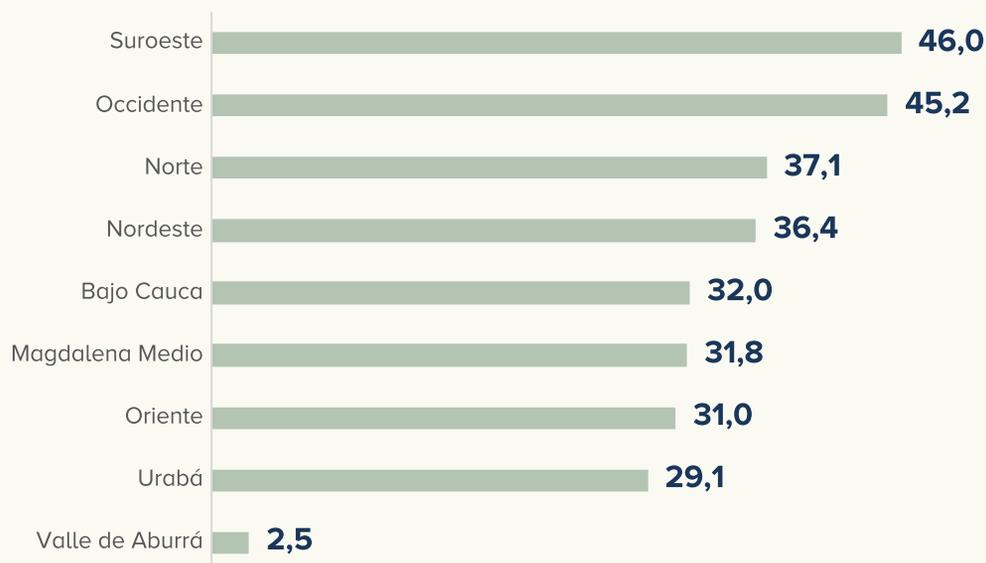
Otro indicador con un patrón similar es ‘Beneficiarios con transferencias para la seguridad alimentaria y nutricional’. Aunque sobrepasó la meta a 2024 con 105.759 transferencias entregadas, durante 2024 estas se concentraron principalmente en subregiones con menor vulnerabilidad a 2023: Oriente (23.097) y Suroeste (17.738). En el caso contrario, Urabá (15.127) ocupa el tercer puesto, Bajo Cauca (8.907) el séptimo y Magdalena Medio (3.485) el noveno.

Sin embargo, al considerar la población de todas las edades de cada subregión (ver Gráfico 3) en la tasa de beneficiarios de transferencias por cada mil habitantes de la subregión, encontramos que, mientras Suroeste tiene 46 beneficiarios por cada mil habitantes, Urabá tiene 29.



Gráfico 3.

Subregiones de Antioquia: tasa de beneficiarios con transferencias para la seguridad alimentaria y nutricional por cada mil habitantes, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de información en el Informe de Gestión 2024 – Gobernación de Antioquia. Y proyecciones de población del DANE actualizadas a 2025.

Según el Informe de Gestión 2024, estos beneficiarios fueron principalmente adultos mayores (85%), Madres gestantes e infantes pertenecientes a Arrullos Antioquia (6%), niños y niñas con vulnerabilidad alimentaria (5%), personas con discapacidad (2%), y personas en emergencia y/o vulnerabilidad alimentaria (2%).

El tercer indicador relacionado con apuestas para afrontar la inseguridad alimentaria es ‘Unidades productivas para el autoconsumo instaladas’. El cual a primer año de gobierno cumplió con su meta de 600 con 761 unidades instaladas en el departamento. De estas, 641 fueron instaladas en Oriente, 50 en Nordeste, 36 en Magdalena Medio, 33 en Occidente, y una en Valle de Aburrá. Las subregiones Urabá, Bajo Cauca y Norte aún no registran unidades para el autoconsumo instaladas.

A primer año de gobierno, según estos indicadores priorizados por la Gobernación en Plan de Desarrollo, es necesario que la mi-

tigación de la inseguridad alimentaria en el departamento debe continuar focalizando la inversión en los hogares con mayor vulnerabilidad. El seguimiento a la distribución equitativa del cumplimiento indicadores es una tarea que Antioquia Cómo Vamos realizará durante todo el cuatrienio.

Desnutrición

La atención a las madres durante la gestación y el posparto es clave para la nutrición futura. En Antioquia a 2024 el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer se mantuvo estable 11,3%. El aumento percibido frente al año anterior fue de 0,1 puntos porcentuales, debido a la disminución en la natalidad. Adicionalmente, entre ambos años aumentó el porcentaje de madres que tuvieron más de 4 controles prenatales (86% vs 88%).

Antioquia Cómo Vamos durante 2024 advirtió el máximo histórico de menores de cinco años con desnutrición aguda registrado en



2023 (2.050). En este contexto, la Gobernación durante junio de 2024 se implementa el Plan de Choque, con el cual procura detectar más oportunamente la desnutrición aguda en niños mediante tamizajes y vigilancia en los municipios. Por lo cual, esta búsqueda activa pudo influir en el aumento de dicho indicador en el departamento durante el último año (2024), dado que pasó a 2.547 casos detectados. De estos, en el 80% el infante se recuperó según la notificación en el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO).

La medición de casos de desnutrición en el tiempo para el departamento de Antioquia es muy limitada dado que no cuenta con un sistema de información que permita identificar el número de tamizajes realizados por distintos actores del sector salud. Por lo cual, no es posible atribuir el aumento a unas mejores labores de detección, o a una mayor exposición de las infancias a condiciones de vulnerabilidad.

Vale la pena resaltar que, según SIVIGILA, el 22% del total de casos fueron reincidentes, registrando a su vez la mayor proporción de menores reincidentes desde 2018, año en el que inician los registros y en el cual la cifra para este indicador era del 5%. Esto implica que una importante proporción de niños a pesar de recuperarse vuelven a tener desnutrición aguda.

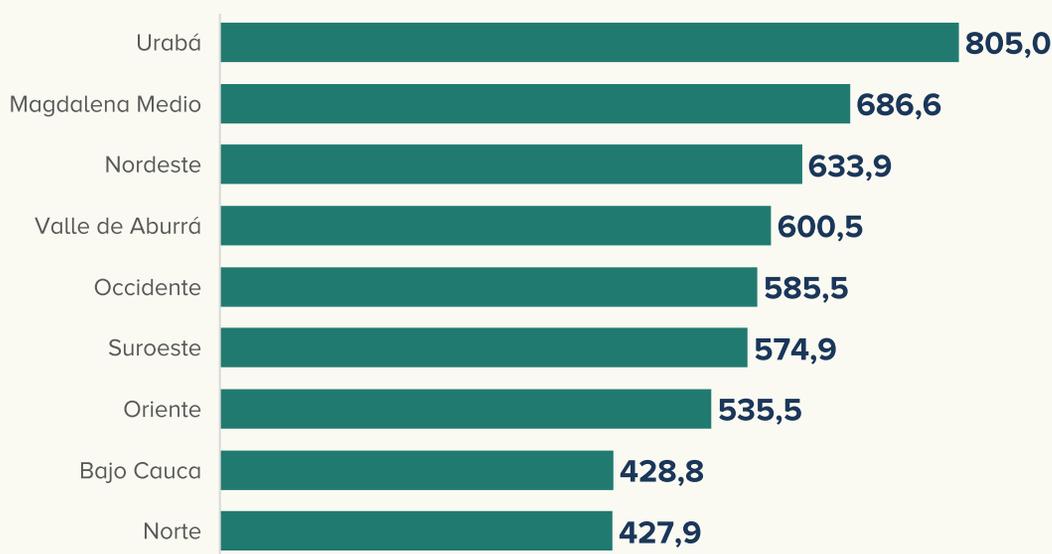
Asimismo, la Gobernación reporta en su Informe de Gestión una disminución en la activación de la ruta de atención para la desnutrición aguda a la semana epidemiológica 52 de 2024 respecto a 2023, pasando de 88% de los casos con ruta activada al 79% en el año más reciente. Esto implica un llamado a todos los agentes del sector de salud, ya que a ellos corresponde la atención y recuperación de los infantes que identifiquen con estas condiciones.

Ahora, en cuanto a las diferencias subregionales, Valle de Aburrá, Urabá, y Oriente lideran el número de casos con 1.287 (320 fuera de Medellín), 418, y 247 casos respectivamente. Mientras Occidente (103), Norte (79) y Magdalena Medio (60) fueron las subregiones con menores casos registrados.

Al relacionar los casos con la población menor de 5 años en cada subregión, el orden de las subregiones varía. Urabá, Magdalena Medio y Nordeste superan el promedio departamental de 601 menores en esta condición por cada cien mil en la edad (ver Gráfico 4). Es decir que, aunque Magdalena Medio es la que menor número de infantes en desnutrición aguda reporta, la problemática es mayor, dado el reducido tamaño de su población menor de cinco años.



Gráfico 4.
Subregiones de Antioquia: tasa de menores de cinco años con desnutrición aguda por cada cien mil, 2024



Fuente: elaboración de Antioquia Como Vamos a partir de Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia – Gobernación de Antioquia

En este contexto, desde la Gobernación se erige Arrullos Antioquia. Este es un programa orientado a la atención de madres gestantes y niñas y niños de 0 a 5 años que no se encuentren en ICBF o en otro programa de atención municipal. Su meta a 2027 es impactar 40 mil personas, con corte a primer año de gobierno, ha atendido a 8,326, de los cuales el 82% son infantes y el 18% restante son madres gestantes y están concentrados principalmente en Urabá (43%), Oriente (22%), y Bajo Cauca (14%). Este programa realiza tamizaje nutricional a sus be-

neficiarios, allí identificó a 710 niños y niñas con riesgo de desnutrición, a 56 con desnutrición, y a 161 gestantes con bajo paso

Por otro lado, aunque inadmisiblemente, una victoria temprana es la disminución de muertes por desnutrición en menores de cinco años en el departamento. Pasaron de 17 en 2023 a 14 en 2024. Urabá concentró en el último año la mitad (7) de las muertes, la otra mitad se distribuyó entre Valle de Aburrá (2), Occidente (2), Suroeste (1), Norte (1) y Bajo Cauca (1).



Conclusiones:

- La incidencia de la inseguridad alimentaria en el departamento es cada vez más amplias en términos de hogares que necesitan ser intervenidos. La sinergia entre el sector público, el sector privado y la academia tiene la potencialidad de realizar un verdadero impacto si se priorizan aquellos con mayor vulnerabilidad.
- Aunque no son las únicas acciones que adelanta la gobernación, los avances en los indicadores de Plan de Desarrollo requieren ser distribuidos a las subregiones con mayor vulnerabilidad en seguridad alimentaria.
- Al igual que en Medellín, es necesario en Antioquia un sistema de información que permita estimar el número de tamizajes realizados en un año a infantes. Sólo de esta forma se puede identificar si el aumento en la desnutrición es por mayores condiciones de vulnerabilidad o un mejoramiento en la detección de los casos.

Referencias

DANE. (2025). Boletín técnico: Inseguridad alimentaria a partir de la escala FIES - 2024.

DANE, & FAO. (2023). Nota estadística: inseguridad alimentaria en Colombia.

Gobernación de Antioquia. (2024). Informe de Gestión 2024 presentado a la Asamblea Departamental. Recuperado de: <https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Transparencia/2025/02/version-final-ig-asamblea-25-02-2024-.pdf>

Gobernación de Antioquia. (2024). Seguimiento a Plan Indicativo con corte a diciembre de 2024. Recuperado de: <https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Transparencia/2025/06/seguimiento-pi-dic-2024.pdf>



4.

Salud

Agradecimientos a expertos: *Grey Ceballos de Valor Público, Luis Hernán Sánchez de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia.*

Actualmente, el sistema de salud en Colombia reporta uno de sus momentos más turbulentos en sostenimiento financiero. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (2025), las EPS adeudan aproximadamente 20,3 billones de pesos a 225 instituciones que reportaron información a diciembre de 2024. La Nueva EPS es la principal deudora con 5 billones entre régimen contributivo y subsidiado, seguida por Sanitas con más de 523 mil millones de pesos. En el ‘Informe de Calidad de Vida de Antioquia 2023’¹, Antioquia Cómo Vamos advertía que a mayo de 2024 más del 83% de la población antioqueña tenía sus atenciones de salud en incertidumbre debido a que se encontraba afiliada a EPS intervenidas o con solicitud de retiro voluntario. A diciembre de dicho año, la cifra ascendió al 92% de la población, dada la inclusión en esta categoría de Coosalud, Famisanar, Asmet Salud, entre otras. Adicionalmente, aumentó el porcentaje de personas que afirman que la salud ha empeorado en su municipio. Mientras que en 2021 el 35% así lo afirmaba, a 2023 la cifra es del 40%, y sólo un 15% asegura que está mejorando.

En este sentido, Antioquia Cómo Vamos lee el panorama y ajusta su horizonte de análisis a las necesidades del contexto actual al abrir, en el presente capítulo, una línea de profundización que realiza seguimiento al acceso al derecho a la salud, la capacidad instalada departamental y el gasto de los hogares en salud. Esta nueva visión enriquece el análisis de asuntos tradicionalmente abordados por el programa, como enfermedades tropicales y salud mental. Asimismo, se utilizan fuentes de información nuevas para el programa, como la Superintendencia de Salud, la Corte Constitucional, el Observatorio del Talento Humano en Salud, y el Registro Especial de Prestadores del Servicio de Salud.

Vale la pena señalar que indicadores relativos a la primera infancia para el departamento se podrán encontrar en el informe Cómo va la calidad de vida de la primera infancia 2024.

Puede consultar el informe en: https://www.antioquiacomovamos.org/wp-content/uploads/2025/08/20240821_ICV-ANTIOQUIA.pdf



Infraestructura en salud

En el presente apartado se analiza la capacidad instalada en el departamento en términos de camas, ambulancias y personal médico, contrastada con referentes propuestos por la Organización Mundial de la Salud. La disponibilidad de este equipamiento a lo largo del territorio es fundamental para garantizar el acceso al derecho a la salud, y es condición necesaria, pero no suficiente, para asegurar la calidad en la prestación del servicio. Asuntos como la asequibilidad y la aceptabilidad de la atención en salud por la comunidad es necesaria para determinar dicha disponibilidad (Organización Mundial de la Salud, 2015).

Previo al análisis de la capacidad instalada, reconocer la distribución geográfica de la afiliación en salud es fundamental. A nivel departamental, a diciembre de 2024, en Antioquia se encontraban 7.151.858 personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, representando una cobertura del 104% frente a la población proyectada por el DANE para dicho año. La cobertura en salud mide la proporción de personas afiliadas respecto al total de habitantes de un territorio, por tanto, cuando este indicador supera el 100% implica que hay más afiliados que población habitante.

En el caso de Antioquia, a nivel subregional y municipal existen distintas unidades geográficas que superan el 100% en afiliación, lo cual es esperable considerando: (i) la alta concentración poblacional en los centros urbanos (el Valle de Aburrá concentra el 61% de los habitantes del departamento); (ii) la presencia de población flotante de departa-

mentos colindantes como Chocó, Córdoba, Risaralda, entre otros, y (iii) el número significativo de migrantes irregulares y en tránsito, con más de 300 mil para 2024².

A nivel subregional las diferencias en cobertura son pronunciadas. Mientras Urabá (115%) y Valle de Aburrá (107%) son las que más cobertura registran, Suroeste (79%) y Magdalena Medio (83%) se encuentran en el otro extremo del espectro, es decir, aproximadamente el 20% de los habitantes de Suroeste y Magdalena Medio suelen afiliarse en municipios fuera de su subregión.

La concentración de afiliación en salud en algunos territorios es aún más clara a nivel municipal, 7 de cada 10 municipios en Antioquia tienen menos del 100% en cobertura. En este sentido, identificar por subregión los municipios con mayor número de afiliados y una cobertura superior al 100% pueden dar luces sobre los principales núcleos de demanda en atención en salud.

En el Mapa 1 se señalan los municipios con mayor número de afiliados de cada subregión y mayor cobertura en afiliación, priorizando el primer criterio³. El municipio núcleo con menos afiliados en Occidente es Santa Fe de Antioquia con 28.946, seguido de Andes (40.758) en Suroeste, Segovia (43.714) en Nordeste, y Puerto Berrío (44.403) en Magdalena Medio. Con más de cien mil personas está Cauca (104.674) en Bajo Cauca, Apartadó (156.943) en Urabá, Rionegro (210.224) en Oriente, y Medellín (3.014.286) en Valle de Aburrá.

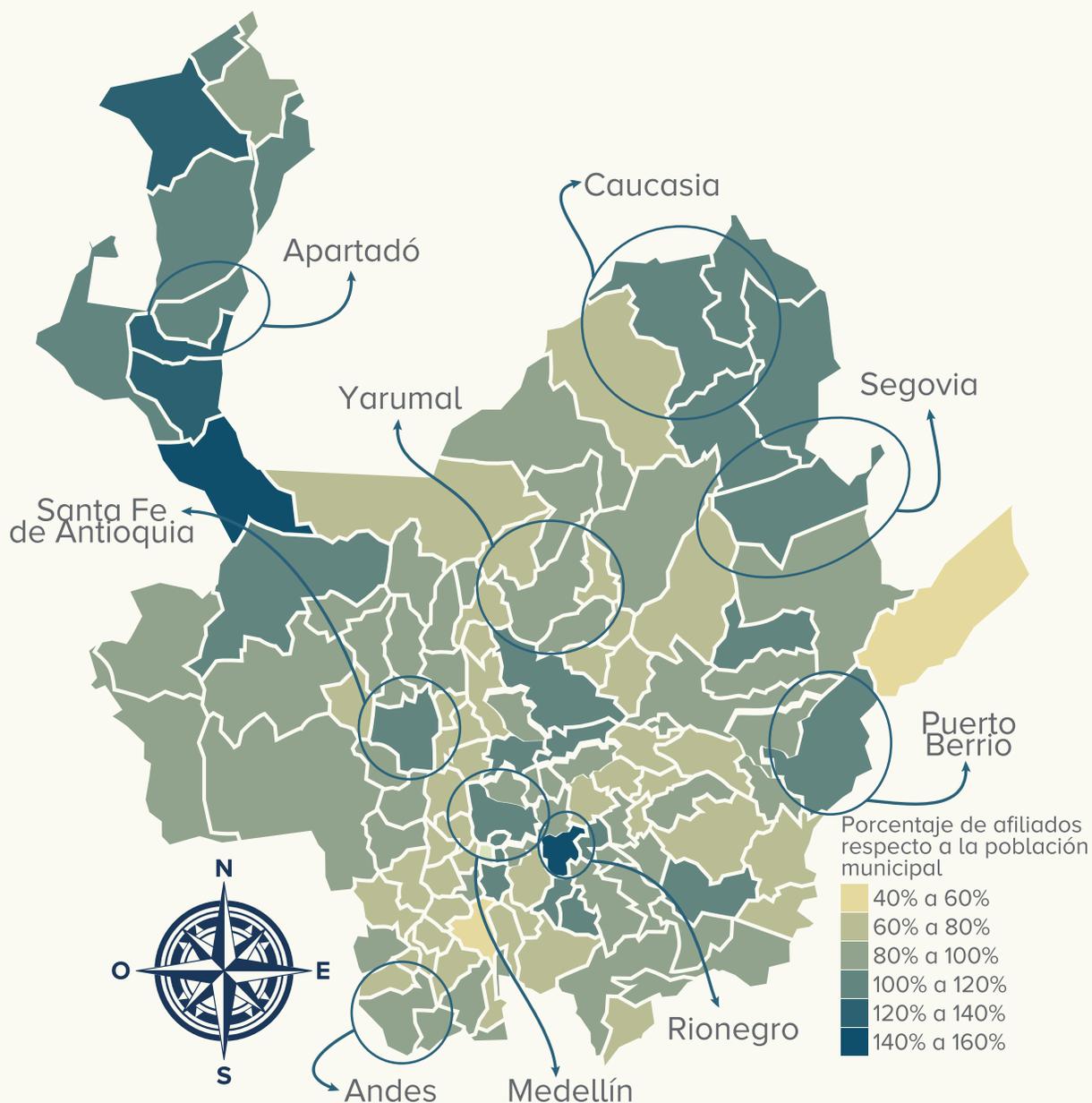
2. Revisar apartado de Migración en el capítulo de Demografía para más información.

3. En las subregiones en las que no se cumple que el municipio con mayor número de afiliados sea la de mayor cobertura son Nordeste, Norte, Suroeste y Urabá.



Mapa 1.

Antioquia: cobertura de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social y Salud respecto al total de la población según municipio, dic-2024



Fuente: cálculo propio a partir de información de la Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia a 2024—Gobernación de Antioquia



De forma tal que, el seguimiento al cumplimiento con los estándares en capacidad instalada de la Organización Mundial de la Salud se deberá realizar especialmente en los municipios cuya demanda sea mayor.

Camas

El número de camas para adultos por cada 10.000 habitantes en Antioquia ha reflejado un incremento sostenido en los últimos años, se pasó de registrar 9,6 durante 2022 y 10,7 en 2023 (Gobernación de Antioquia, 2024), a 14,2 a septiembre de 2025 según las camas registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud (REPS).

No obstante, al aumento en este tipo de camas no es suficiente para alcanzar el referente propuesto por la Organización Mundial de la Salud (2015) para el total de esta infraestructura, pues en Antioquia, a septiembre de 2025, se han alcanzado 18,4 de la meta de 25 camas por cada 10 mil habitantes⁵. Esta cifra también es inferior a la registrada para el país (19,3) durante 2024 (Ministerio de Salud, 2025).

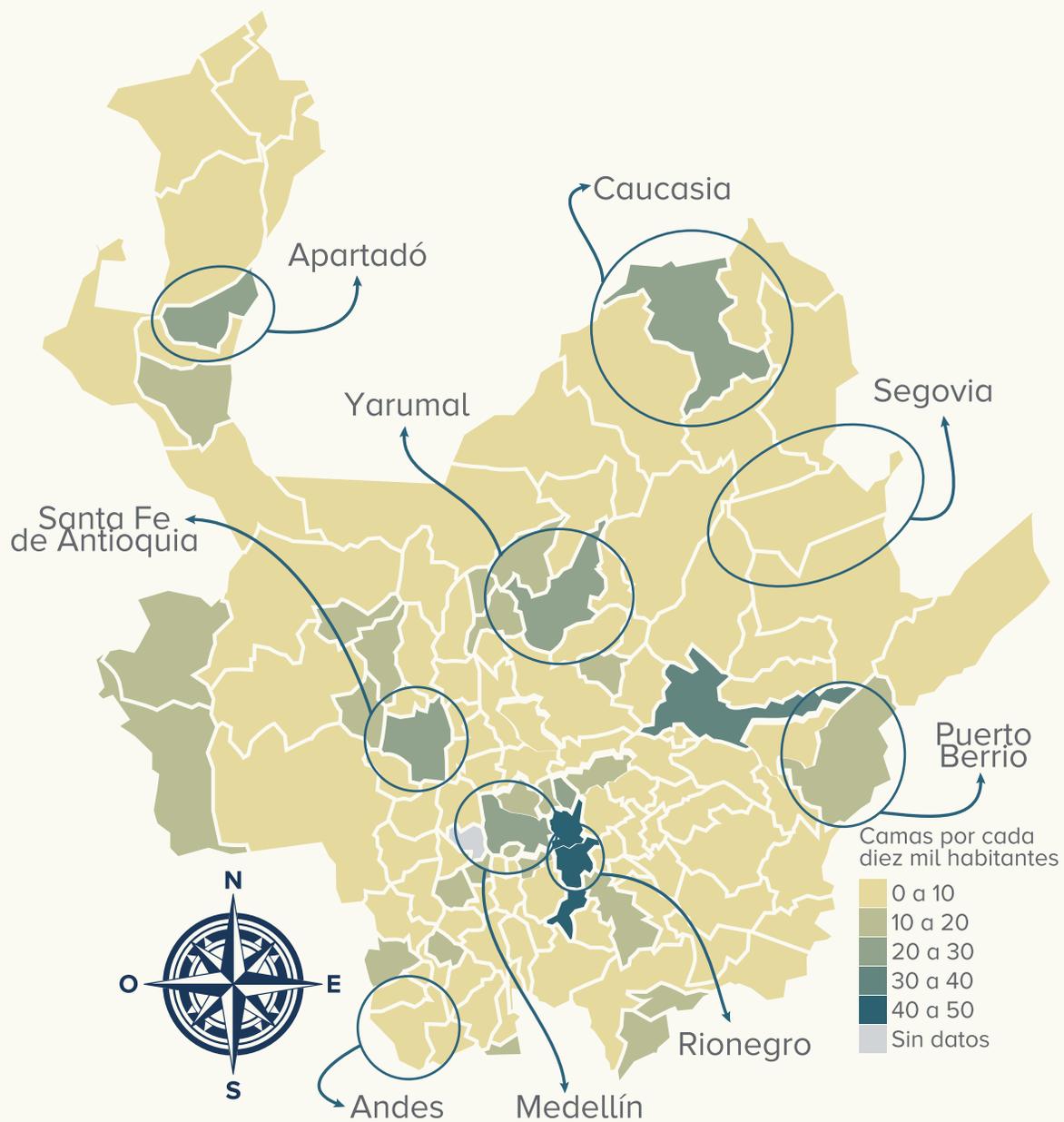
En Antioquia, únicamente 9 municipios alcanzan el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En Oriente lo cumplen Guarne (42,8), Rionegro (41,6) y La Ceja (40,1), Yolombó (36,7) en Nordeste, y en Valle de Aburrá solo lo logra Medellín (29,6); Santa Fe de Antioquia (27,1) en Occidente, Caucasia en Bajo Cauca (26,4), Apartadó (25,6) en Urabá y Yarumal en el Norte (25,3).

La mayoría de estos municipios fueron identificados anteriormente como núcleos de atenciones en salud en su respectiva subregión (ver Mapa 2). Los únicos en esta categoría y no alcanzar el estándar fueron Puerto Berrío, Segovia y Andes. El primero, a diferencia de los otros dos, aunque registró 16,1 camas por cada 10.000 habitantes, fue el municipio con mayor disponibilidad en su subregión. Segovia y Andes fueron superados en el indicador por más de cinco municipios en su respectiva subregión. En el Nordeste, la cifra fue liderada por Yolombó y en el Suroeste por Caramanta con 15,5 camas por cada 10.000 habitantes.

5. Este referente excluye las camas para maternas.



Mapa 2.
Antioquia: tasa de camas por cada diez mil habitantes según municipio, sept-2025



Fuente: cálculo propio a partir de información de Registro Especial de Prestadores del Servicio en Salud – Ministerio de Salud. Con corte al primero de septiembre de 2025.



Ambulancias

Adicionalmente, vale la pena resaltar que los municipios con menos camas por cada 10.000 habitantes son San Pedro de los Milagros (2,2), Santuario (2,0), Giraldo (1,6), y Heliconia, que a septiembre de 2025 no reportó ni una sola cama en REPS.

Ahora, en el caso de las camas maternas, para septiembre de 2025 se reportaron al REPS 264 camas para la atención al parto en el departamento, concentradas principalmente en Medellín (89), Envigado (39), y Santa Fe de Antioquia (12). El referente para este tipo de infraestructura según la Organización Mundial de la Salud (2015) son 10 camas por cada mil mujeres embarazadas, en Antioquia esta cifra es la mitad de dicha meta: 4,9.

En suma, la capacidad instalada en el departamento aún cuenta con retos significativos en aumento de camas, en especial de atención al parto. Adicionalmente, la situación es desigual entre municipios, mientras algunos territorios, en su mayoría núcleos subregionales, superan ampliamente el referente internacional, otros mantienen cifras bajas, lo cual profundiza las brechas territoriales en el acceso a los servicios hospitalarios.

A septiembre de 2025, Antioquia cuenta con 742 ambulancias para la atención de la población. Cada municipio del departamento tiene al menos una y su funcionamiento es esencial para la garantía del derecho a la salud de la población.

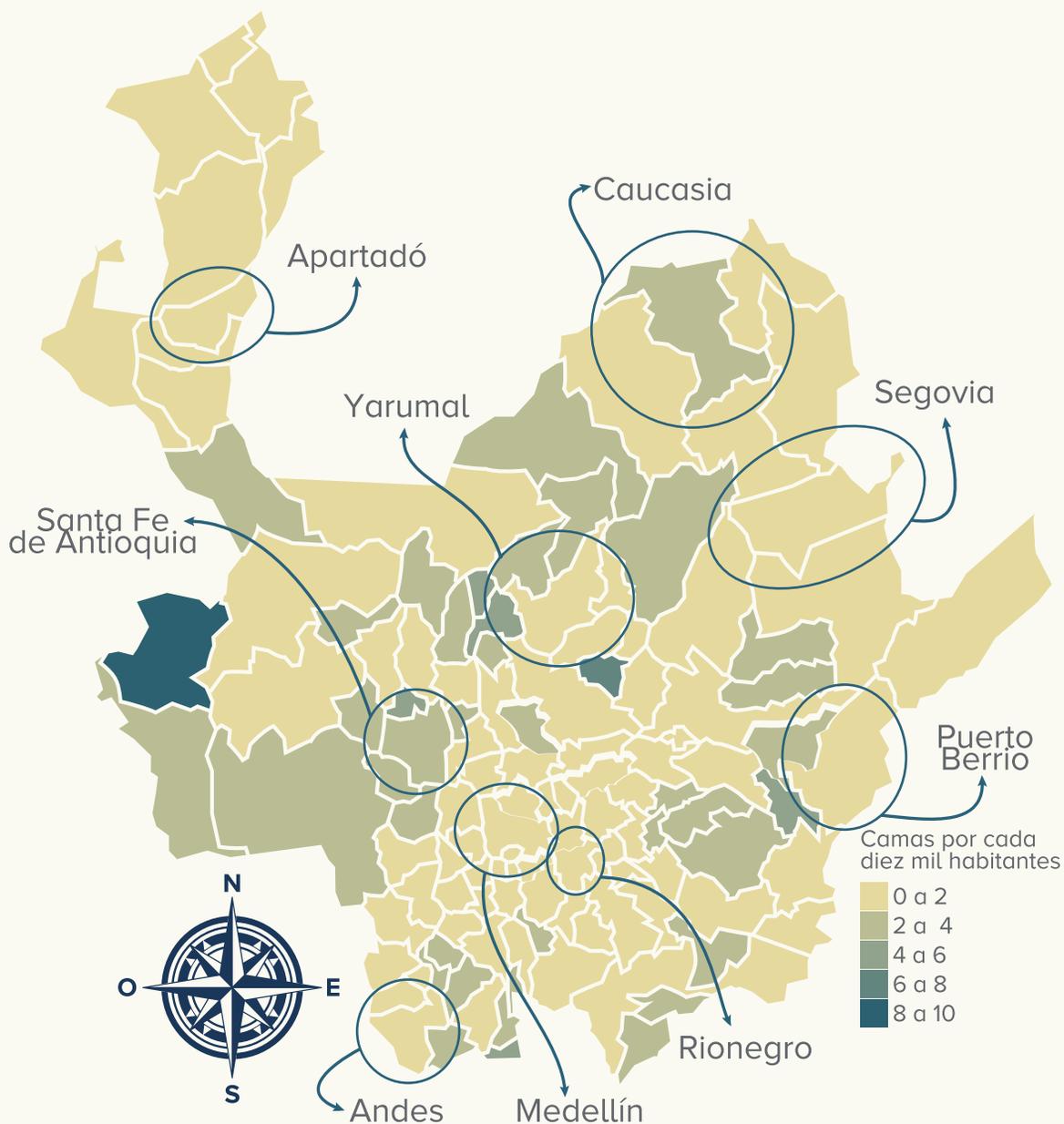
Vale la pena resaltar que la Organización Mundial de la Salud no ha emitido un referente en cuanto al número de ambulancias óptimo en un territorio. No obstante, al equiparar Antioquia con una unidad geográfica con un número de población similar, se encuentra que a pesar de la disparidad en el absoluto (742 vs 933), la tasa por cada 10.000 habitantes es semejante, Antioquia con 1,1 ambulancias y Bogotá con 1,2.

Por otro lado, la distribución de la infraestructura y los recursos móviles de salud presenta contrastes significativos. Mientras solo el 26% de las camas hospitalarias se ubican por fuera del Valle de Aburrá, en el caso de las ambulancias la proporción asciende al 51%. Como muestra el Mapa 3, únicamente dos municipios núcleo (Caucasia y Santa Fe de Antioquia) superan las 2 ambulancias por cada 10.000 habitantes.

Sin embargo, conviene señalar que el número reducido de ambulancias influye en la volatilidad de la medición. El caso de Murindó ilustra este punto: este municipio reporta la tasa más alta del departamento, 8 ambulancias por cada 10.000 habitantes, aunque en términos absolutos solo cuenta con 5 vehículos, lo que lo ubica en el puesto once entre los municipios con mayor disponibilidad.



Mapa 3.
Antioquia: tasa de ambulancias por cada diez mil habitantes según municipio, sept-2025



Fuente: cálculo propio a partir de información de Registro Especial de Prestadores del Servicio en Salud – Ministerio de Salud. Con corte al primero de septiembre de 2025.



Una posible explicación a la mayor presencia relativa de ambulancias fuera del Valle de Aburrá es la necesidad de trasladar pacientes desde municipios con baja capacidad hacia aquellos con mayor infraestructura hospitalaria. Dicha hipótesis merece un análisis más profundo para confirmar si, en efecto, la distribución de ambulancias responde a la lógica de conectividad con los municipios núcleo de atención en salud.

Personal médico

La disponibilidad y las óptimas condiciones de trabajo del personal de la salud son fundamentales para el funcionamiento del sistema. Las condiciones financieras de este ponen en entredicho su estabilidad laboral y el margen de maniobra de los hospitales y clínicas para hacer frente a dicho contexto. De hecho, diversas Instituciones de Salud a nivel nacional afirman una disminución en la disponibilidad de médicos calificados y alta rotación en médicos y enfermeras. Las principales razones del retiro voluntario o involuntario son los salarios poco competitivos, la reducción de personal y los altos niveles de estrés laboral (Delgado, 2025).

Según datos del Observatorio de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, a pesar de aumentar el talento humano en un 4,5% durante 2024 respecto al año anterior, este es el segundo incremento anual más bajo desde 2011. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2016) la meta en personal de salud a 2030 es de 44,5 profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes. Al calcular este indicador con talento humano en medicina y enfermería a nivel universitario, los resultados son favorables para los territorios. En Colombia, según el Observatorio, se registran 42 profesionales por cada 10.000 habitantes en 2024, en Antioquia son 43, y para Bogotá 77,9.

Ahora, en el departamento, al desagregar por profesiones, a nivel universitario la medicina es la más frecuente, seguida por psicología y en tercer lugar enfermería. En esta última, Antioquia con 12,8 profesionales por cada 10.000 habitantes se sitúa detrás del promedio nacional (15,8) y de Bogotá, (28,1). A nivel de especialización, en Antioquia los más frecuentes son medicina interna, especializaciones odontológicas y anestesiología. A pesar de que Antioquia parece cumplir la meta internacional, al desagregar por profesiones, se revela una debilidad estructural en enfermería profesional, la cual es fundamental para el funcionamiento operativo del sistema de salud, particularmente en la atención primaria y hospitalaria.

Acceso al derecho a la salud

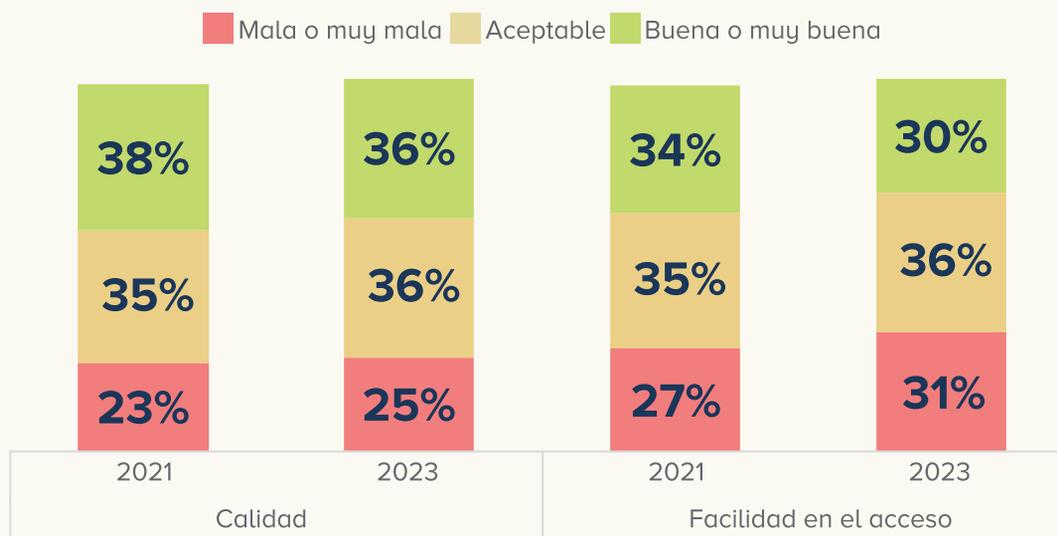
Desde menor percepción en la facilidad en el acceso, hasta el aumento en número de reclamos y tutelas confirman que la satisfacción con el sistema de salud ha disminuido en el departamento. Esta tendencia no es ajena al contexto nacional que atraviesa el sistema de salud.

De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida Departamental realizada por la Gobernación de Antioquia en 2021, el 38% de los habitantes consideraban que la calidad de los servicios de salud era buena o muy buena y un porcentaje similar, 34%, afirmaba que estos eran de fácil acceso. En 2023, esta percepción cambió negativamente: se presentó un aumento en el número de personas que consideraban que la calidad y facilidad en el acceso era mala, y disminuyó la participación de quienes tenían una imagen positiva (ver Gráfico 1). Tanto en 2021 como 2023, según la Encuesta, los principales aspectos que influyen en la percepción sobre la calidad del servicio son la mala atención del personal administrativo y/o asistencial, y los trámites excesivos y/o dispendiosos.



Gráfico 1.

Antioquia: calificación de calidad y facilidad en el acceso en los servicios de salud, 2021 - 2023



Fuente: cálculo propio a partir de Encuesta de Calidad de Vida Departamental – Gobernación de Antioquia

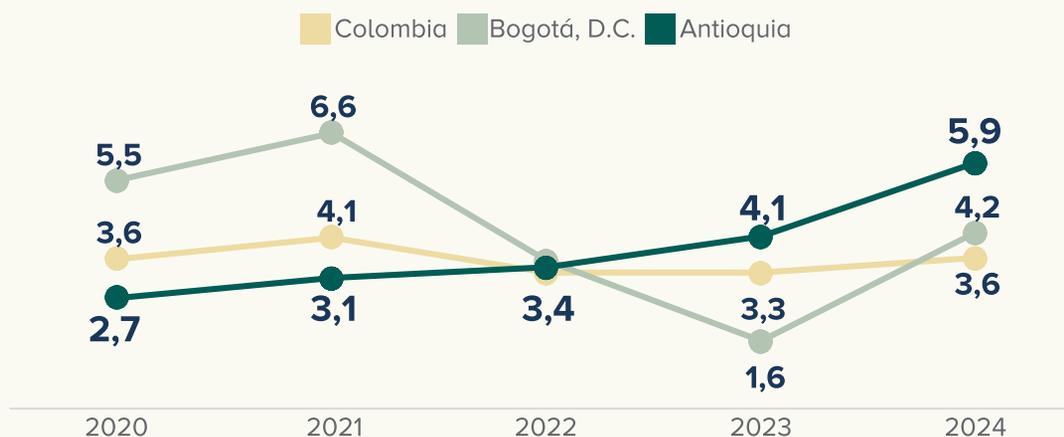
A nivel subregional existen amplias brechas en la percepción de la facilidad en el acceso: mientras en Magdalena Medio y Suroeste más del 45% de la población afirmó que la facilidad en el acceso es mala o muy mala, en Urabá, Oriente y Occidente menos del 30% está de acuerdo con esta afirmación. No obstante, en ninguna subregión se reportó un porcentaje mayoritario de personas que considerase que el sistema de salud era fácilmente accesible para los usuarios.

Las subregiones con mayores porcentajes de aprobación fueron Valle de Aburrá (31%), Norte (31%) y Oriente (30%); aún así, estas no fueron las opiniones mayoritarias dentro de la Encuesta: en el Norte, la respuesta más repetida fue mala o muy mala con un 36%, mientras que para Oriente y Valle de Aburrá fue aceptable con 27% y 36% respectivamente.

Esta percepción negativa se puede encontrar sustentada en el aumento en el tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, aún más al considerar que, cada año desde 2021, Antioquia ha alcanzado su máximo histórico (ver Gráfico 2). Adicionalmente, en los últimos dos años, superó a Bogotá D.C. y al promedio nacional. Esto implica que, adicional al tiempo desde que al paciente se le asigna la cita hasta su encuentro con el profesional de la salud, en promedio los habitantes de Antioquia deben esperar 2 días más que alguien que vive en Bogotá o Valle del Cauca, y 3 días más que alguien que vive en Atlántico o Bolívar.



Gráfico 2.
Colombia, Bogotá D.C. y Antioquia: días promedio de espera para la asignación de cita de medicina general, 2020–2024



Fuente: elaboración propia a partir de Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 – Ministerio de Salud

Esta tendencia no es exclusiva de las citas de medicina general (ver Tabla 1), pues entre las especialidades analizadas por el Ministerio de Salud (2025) en el Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud, Antioquia supera en todas al promedio nacional. La asignación más rápida ocurre en odontología general, con 6 días en promedio de espera; en contraste, una cita para medicina interna requiere más del doble de días.

Tabla 1.
Colombia, Bogotá D.C. y Antioquia: días promedio de espera para la asignación de cita según especialidad, 2024

	Odontología general	Médico general	Pediatría	Ginecología	Cirugía general	Medicina interna
Antioquia	5,0	5,9	7,1	10,7	11,3	14,2
Bogotá D.C.	4,5	4,2	6,3	9,6	12,1	12,5
Colombia	3,2	3,6	6,2	9,4	10,3	11,3

Fuente: elaboración propia a partir de Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 – Ministerio de Salud



De hecho, el principal motivo de los más de 273 mil reclamos a las EPS en Antioquia durante el 2024 frente a la Superintendencia de Salud fue la ‘negación de asignación de citas o consultas’ en un 22% de los reclamos, seguido por ‘falta de oportunidad en las citas o consultas’ (21%). En dicho año, las reclamaciones a Supersalud incrementaron un 24% respecto a 2023, posicionando a Antioquia como el sexto departamento del país con mayor tasa de reclamos por cada 10 mil afiliados (398,3) después de Valle del Cauca (398,8) y antes de Santander (394,7). Las principales EPS con mayor tasa de reclamos por cada 10 mil afiliados en el departamento fueron Sanitas (601,3), Salud Total (548,8) y Nueva EPS (516,9).

Por otro lado, las tutelas de salud durante 2024, aunque menores en número en comparación con los reclamos a la Supersalud (54.799), presentaron un mayor crecimiento frente al 2023 (47%) y frente al crecimiento del país en dicho periodo (34%). Esto posicionó a Antioquia como el séptimo departamento con mayor tasa de tutelas por salud por cada mil habitantes según estadísticas de la Corte Constitucional. Con una tasa de 7,9, supera a Bogotá (3,2 en el puesto 22) y se sitúa detrás del Amazonas (9,4). A diferencia de los reclamos en salud, la principal pretensión reclamada para el 35% de las tutelas es la ‘práctica oportuna de procedimiento médico’, seguido de ‘asignación de citas médicas’ (32%) y la ‘entrega oportuna de medicamentos o insumos’ (29%). En definitiva, el acceso al derecho a la salud se encuentra en entredicho de forma cada vez más frecuente en el departamento y en el país.

Gasto de los hogares en salud

El gasto de los hogares en salud está aumentando. Según cálculos propios realizados con la Encuesta de Calidad de Vida Departamental, entre 2021 y 2023 incrementó un punto porcentual el porcentaje destinado a medicamentos y servicios médicos en los hogares antioqueños, registrando un 5% en 2023. En dicho año se posicionó como el quinto renglón de gasto de los hogares, después de intereses financieros (6%), y antes de esparcimiento y diversiones (3%). Las subregiones que más destinan mensualmente de sus ingresos a salud varían según la destinación del dinero; en términos de gasto en servicios médicos, lideran Valle de Aburrá (5%) y Suroeste (4%), mientras que en medicamentos son Magdalena Medio (4%) y Urabá (3%).

A 2024, de acuerdo con la ANIF (2025), en Colombia el gasto de bolsillo de los hogares en salud aumentó, en particular en el quintil más bajo de ingresos frente al año anterior (63%). A grandes rasgos, el cálculo realizado por la ANIF estima la participación de los hogares en el gasto total del sistema de salud, es decir que, un aumento en el gasto de los hogares implica que estos deben asumir más gastos que el sistema no está garantizando.

De hecho, el país pasó de 15% en 2022 a un 17% en 2024 en gasto de bolsillo en salud. Esta cifra se encuentra cada vez más cerca al límite del 20% propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que es el punto en que los hogares pueden enfrentar un riesgo financiero.



En dicho contexto el sistema de salud debe estar en la capacidad de garantizar respuesta a diversas alertas de salud que ocurren en el departamento

Salud mental

Según el Observatorio de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud, desde 2011, los profesionales en psicología son el segundo talento humano universitario más abundante en el departamento después de medicina y antes de enfermería. Entre 2023 y 2024 su aumento fue del 8%, registrando 18.021 psicólogos. Esto representa 26,1 psicólogos por cada 10.000 habitantes. Adicionalmente, en el departamento se registran 285 psiquiatras, es decir, 0,41 por cada 10 mil habitantes. Esta tasa es superior a la nacional (0,32) e inferior a la de Bogotá D.C (0,75). Este talento humano opera en un contexto marcado por la tendencia continental del aumento en el número de muertes por suicidio (Organización Panamericana de la Salud, 2025). Adicionalmente, algunos factores como la inseguridad alimentaria, la desigualdad, y pasados y presentes de violencia en el departamento pueden afectar la salud de sus habitantes.

Intentos de suicidio

En 2024, Antioquia fue el departamento con más número de intentos de suicidio en el país con 6.011 casos según SIVIGILA, le sigue Bogotá D.C. con 5.978, y Valle del Cauca con 3.163. A pesar de que Medellín representa el 43% de los casos, Antioquia sin Medellín sólo bajaría un puesto en el ranking, posicionándose antes del tercer puesto con 3.200 intentos, lo cual equivale a 9 casos al día en un año.

A pesar de esta posición líder, por primera vez desde 2021 Antioquia frena la tendencia y empiezan a disminuir los intentos de suicidio (ver Gráfico 3) tanto en número como en tasa por cada cien mil habitantes (87,6). El número de intentos de suicidio disminuyó un 5%, sin embargo, sigue siendo más alto al reportando en los años previos a 2023.

Este cambio en la tendencia se explica en la disminución de casos en general de todas las subregiones, menos Suroeste y Norte, en las cuales se dio un aumento de casos; en la primera fue moderado (2 casos) y en la segunda fue significativo (18 casos).



Gráfico 3.
Antioquia: intentos de suicidio, 2019-2024p



Fuente: elaboración propia a partir de información publicada por la Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia – Gobernación de Antioquia

Por otro lado, las intervenciones orientadas a la salud mental requieren intervenciones acordes a los ciclos de vida. Aunque la tendencia general es que los intentos de suicidio los realicen principalmente mujeres (66% de los casos), en la población adulta mayor no se cumple esta regla: los hombres representan el 60% de los intentos en este rango etario.

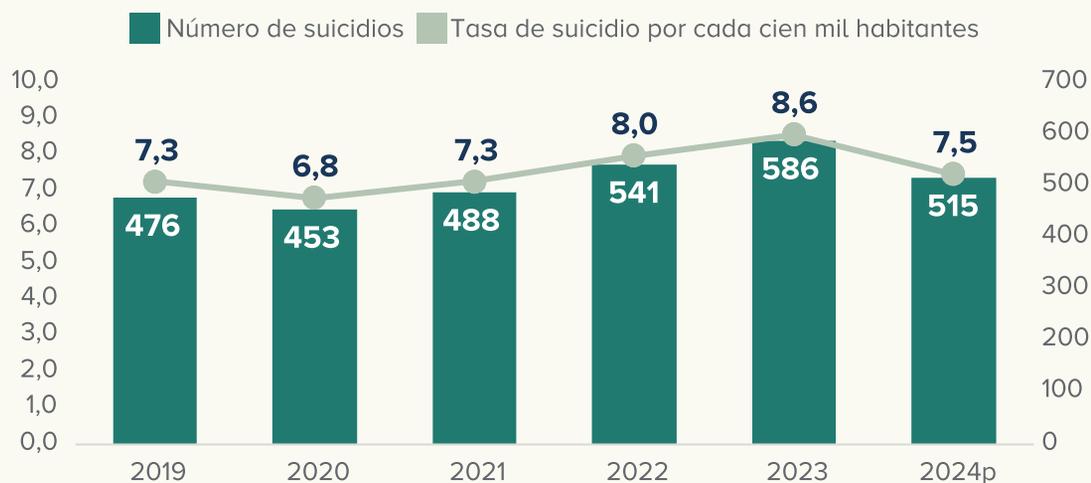
Suicidios

Al igual que el anterior indicador, el suicidio durante 2024 por primera vez reversionó su tendencia creciente iniciada en 2021 (ver Gráfico 4), pasando de 586 muertes por esta causa en 2023 a 515 en el último año, una disminución del 12% en el absoluto. La tasa por cada cien mil habitantes en este periodo pasó de 8,6 a 7,5 en el último año.

No obstante, la disminución no fue tan generalizada como en los intentos de suicidio, Nordeste, Occidente y Suroeste y Valle de Aburrá disminuyeron el número de casos mínimo un 8%. En contraste, subregiones como Norte y Magdalena Medio aumentaron un 100%, la primera pasó de 16 suicidios en 2023 a 33 en 2024, y la segunda pasó de 2 a 4. El caso de Norte es llamativo ya que también fue la subregión en la que más aumentaron muertes e intentos de suicidio



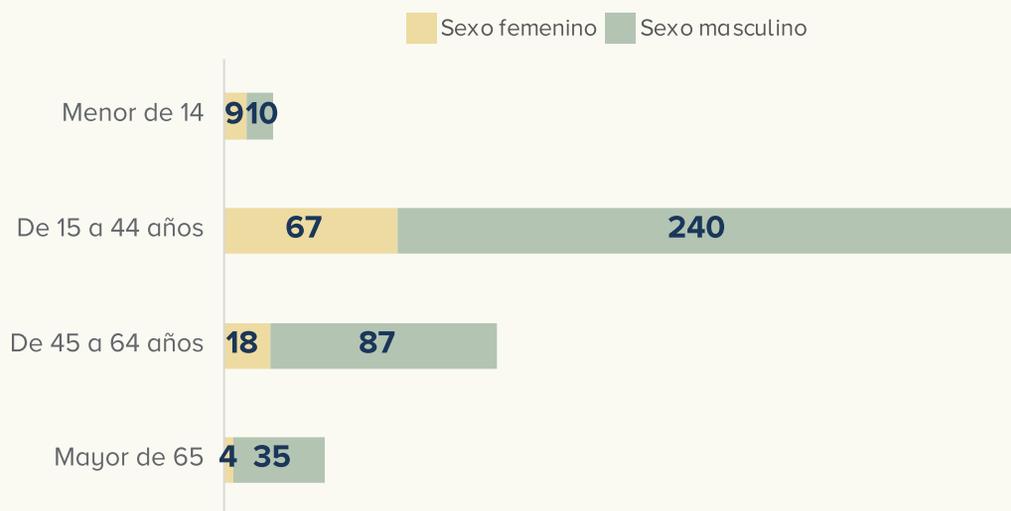
Gráfico 4.
Antioquia: muertes por suicidio, 2019-2024p



Fuente: elaboración propia a partir de información publicada por la Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia – Gobernación de Antioquia

Adicionalmente, los suicidios son principalmente realizados por hombres, en el 79% de los casos así sucede, y no es una tendencia que tienda a cambiar entre grupos etarios. Según datos de mortalidad preliminares del DANE para 2024, a mayor rango etario, menor proporción de mujeres que se suicidan.

Gráfico 5.
Antioquia: muertes por suicidio según rango etario y sexo, 2024p



Fuente: elaboración propia a partir de Estadísticas Vitales– DANE

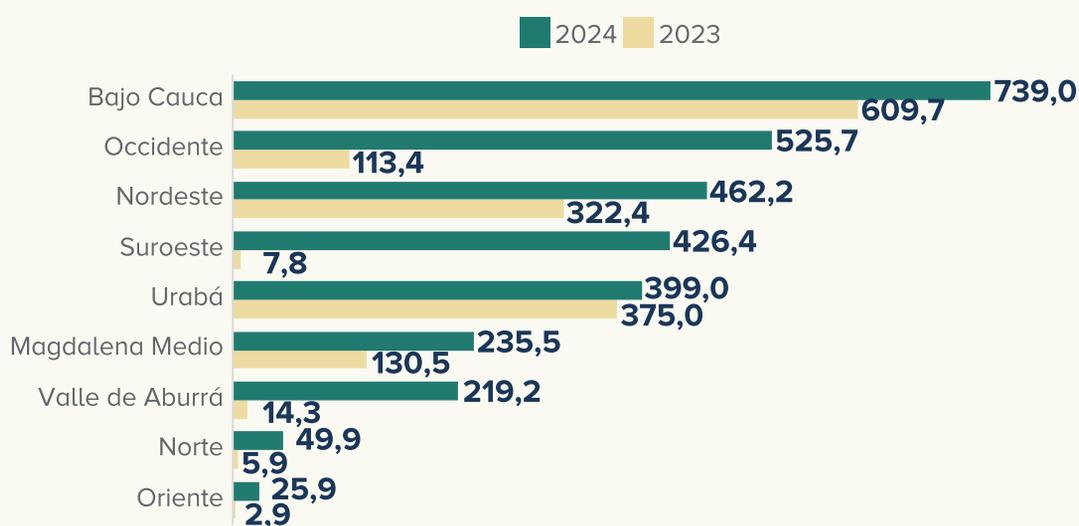


Enfermedades tropicales: Dengue

En el anterior Informe de Calidad de Vida de Antioquia 2023, Antioquia Cómo Vamos alertó sobre la tasa de casos de dengue por cada cien mil habitantes en Bajo Cauca, la cual duplicaba la tasa nacional y representaba siete veces la departamental. A 2024, las alertas se multiplican: Bajo Cauca continúa siendo la principal subregión con casos de dengue, y, en medio de uno de los mayores brotes a nivel nacional según el Instituto Nacional de Salud (2025), Antioquia registra su mayor tasa de casos desde 2020.

Adicionalmente, ninguna subregión disminuyó en casos o tasa (ver Gráfico 6), las que menos aumentaron frente a 2023 fueron Urabá y Bajo Cauca, con 24 y 129 unidades respectivamente. En contraste, Valle de Aburrá y Suroeste registraron en 2024, 15 y 55 veces la cifra de 2023, la primera pasó de 594 casos a 9.161, mientras Suroeste escaló de 30 a 1.654 en un año.

Gráfico 6.
Antioquia: tasa de casos de dengue por cada cien mil habitantes, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de información publicada por la Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia – Gobernación de Antioquia



En cuanto a la letalidad de los contagios, el Instituto Nacional de Salud (2025) asegura que, a pesar de ser el mayor número de casos registrados en el país, la letalidad es la más baja en comparación a epidemias anteriores. En el caso del departamento, la tasa de mortalidad por dengue por cada cien mil habitantes se mantuvo estable pasando de 0,1 en 2023 a 0,2 en el año siguiente. No obstante, en el total de muertes se doblaron las registradas en el año anterior (7 vs 14).

Enfermedades transmisibles: Tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*, esta afecta los pulmones y, si bien un amplio número de personas la pueden contraer, no todas desarrollan síntomas, lo cual facilita su contagio, ya que se transmite a través del aire al hablar, toser o estornudar (Organización Panamericana de la Salud, n.d.). De forma tal que, la detección temprana de casos es fundamental para su abordaje, ya que, a pesar de ser curable, de no ser tratada puede llevar a la muerte en el 50% de los casos (Organización Mundial de la Salud, 2024).

En el país, según datos abiertos de SIVIGILA, 19.699 personas fueron diagnosticadas

con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar durante 2024, esta es la cifra más alta desde que se tiene registros (2007). Antioquia reporta la misma tendencia: desde 2022 se supera el máximo histórico en número y tasa por cada cien mil habitantes. Adicionalmente, el departamento supera la tasa nacional con 58,1 casos vs. 37,4.

Vale la pena señalar, que a pesar de ser 2024 el que actualmente registra el mayor número de casos, su incremento fue moderado (1%) frente al año anterior. De hecho, el aumento más significativo se registró en 2022, año en el cual se pasó de 2.681 casos en 2021, a 3.970, consolidando un alza del 25% en el indicador.

Gráfico 7.
Antioquia: casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, 2016-2024



Fuente: elaboración propia a partir de información publicada en Geovisor por SIVIGILA – Ministerio de Salud



Conclusiones:

Por otro lado, las brechas territoriales son pronunciadas. Valle de Aburrá concentra el 83% de los casos, y según la Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia (2025) esto puede darse debido a la alta densidad poblacional y dinámicas de movilidad. Al mismo tiempo, mientras subregiones como Oriente y Norte tienen una incidencia de 16 casos por cada cien mil habitantes, Magdalena Medio y Valle de Aburrá alcanzan los 101,6 y 93,9 casos en este indicador. En este sentido, las muertes por tuberculosis registran una tendencia similar. El 85% de los 302 fallecimientos por esta causal se concentran en Valle de Aburrá, y pasaron de 201 en 2023 a 256 en el año siguiente. Otras subregiones que incrementaron en número de muertes fueron Occidente (2 a 7), y Bajo Cauca (3 a 6).

El descrito incremento en el territorio se tradujo en la cifra más alta de muertes por tuberculosis general por cada cien mil habitantes (4,4) desde 2005. Según la Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia (2025) es esencial, en el marco de un financiamiento estable, hacer una detección temprana, eliminar el estigma de la enfermedad con apoyo de las organizaciones comunitarias, realizar medidas de control de infecciones, y ejercer un seguimiento especial a persona con comorbilidades como VIH, diabetes y desnutrición.

- En Antioquia se evidencia una creciente insatisfacción en la prestación de los servicios de salud. Los ciudadanos han manifestado su inconformidad con la demora en la asignación de citas y la entrega de medicamento, además de la mala atención del personal asistencial y administrativo. Esto se refleja en el aumento de reclamos y tutelas, las cuales incrementaron, con respecto a 2023 en 24% y 47% respectivamente. La insatisfacción con el sistema de salud, a pesar de ser un fenómeno nacional, en Antioquia se agudiza, haciendo necesario el trabajo multisectorial para dar garantía de este derecho a la ciudadanía.
- Si bien el número de camas por cada 10.000 habitantes ha aumentado en el departamento, aún no se alcanzan los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Las brechas en capacidad instalada profundizan las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios hospitalarios.
- Aunque Antioquia hace parte de la tendencia continental de aumento en los casos de suicidio, cuenta con una alta tasa de profesionales de la salud mental para atender la problemática. Procurar la calidad de vida del talento humano en salud para que el ejercicio de su profesión tenga efectos en los habitantes es un imperativo.
- La marcada concentración territorial en las principales alertas en salud, como salud mental, dengue y tuberculosis, pone en manifiesto la necesidad de realizar intervenciones acordes al contexto y a las capacidades instaladas del territorio.
- El gasto de los hogares en salud sigue creciendo, acercándose cada vez más a límite de gasto asociado a una situación de riesgo financiero propuesto por la OMS.



Referencias:

ANIF (Centro de Estudios Económicos). (2025). Gasto de bolsillo en salud: otra cara de la crisis que atraviesa el sistema.

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. (2025, March). Estudio de cartera No 53 de la ACHC reporta que la deuda con Hospitales y Clínicas superó los 20 billones de pesos. <https://achc.org.co/actualidad/estudio-de-cartera-numero-53-de-la-achc-reporta-deuda-superior-a-los-2/>

Delgado, L. C. (2025). Escasez y rotación de personal sanitario en Colombia: un análisis institucional. *Hospitalaria*, 26(152), 4–36.

Gobernación de Antioquia. (2024). Análisis de Situación de Salud Participativo 2024. <https://dssa.gov.co/images/2024/ASIS%20ANTIOQUIA%202024%20FINAL%2020-12-2024.pdf>

Instituto Nacional de Salud. (2025). Boletín Epidemiológico Semanal 13 de 2025. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_13.pdf

Ministerio de Salud. (2025). Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/informe-goce-efectivo-derecho-salud-2024.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (2015). Service Availability and Readiness Assessment (SARA) An annual monitoring system for service delivery Reference Manual. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/149025/WHO_HIS_HSI_2014.5_eng.pdf?sequence=1

Organización Mundial de la Salud. (2016). Global strategy on human resources for health: workforce 2030. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250368/9789241511131-eng.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (2024). Global Tuberculosis Report 2024. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/379339/9789240101531-eng.pdf?sequence=1>

Organización Panamericana de la Salud. (n.d.). Tuberculosis. <https://www.paho.org/es/Temas/Tuberculosis>.

Organización Panamericana de la Salud. (2025, September 10). OPS lanza iniciativa para frenar el aumento de las tasas de suicidio en las Américas. <https://www.paho.org/es/noticias/10-9-2025-ops-lanza-iniciativa-para-frenar-aumento-tasas-suicidio-americas>

Seccional de Salud y Seguridad Social de Antioquia. (2025). Boletín Epidemiológico de Antioquia semana 4 de 2025. <https://dssa.gov.co/OSSSA/Archivos/Vigilancia/BEA/2025/Boletin%20Periodo%2004-2025.pdf>



5.

Desarrollo económico y empleo

Antioquia es un referente tanto en la dimensión general como en las particularidades de su estructura económica. En los últimos años, el departamento ha registrado avances notables en crecimiento productivo, superando marginalmente el crecimiento económico nacional en 0,4 puntos porcentuales (p.p.), diferencia que, aunque pueda parecer reducida, representa un impacto significativo en términos nominales y territoriales. Este dinamismo se ha reflejado también en un aumento de la ocupación, que alcanzó máximos históricos en 2024, y del tejido empresarial. Sin embargo, persiste la informalidad laboral como un problema estructural presente en el departamento.

El presente capítulo busca profundizar en cómo los fenómenos reflejados en los indicadores clásicos de la economía inciden en la calidad de vida de la población, resaltando la importancia de analizarlos de manera integral para comprender tanto sus ventajas como sus desafíos. El propósito es conectar el crecimiento económico, el tejido empresarial y el liderazgo productivo con sus efectos directos en el mercado laboral, develando particularidades de indicadores clave como la informalidad, la ocupación y la participación.

Asimismo, se incorporan indicadores de percepción como herramienta de análisis complementario, los cuales permiten profundizar en aspectos esenciales para los actores, tales como las expectativas económicas, la satisfacción laboral y las razones de la no participación en el mercado de trabajo.

El capítulo se nutre de diversas fuentes de información: la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), las proyecciones poblacionales actualizadas del DANE, las Cámaras de Comercio de Antioquia¹, la Encuesta Mensual de Expectativas de Empresarios del Banco de la República, el Índice Multidimensional de Comfama, datos de la Mesa de Empleo de Antioquia y los registros de afiliación a las cajas de compensación Comfama y Comfenalco Antioquia.

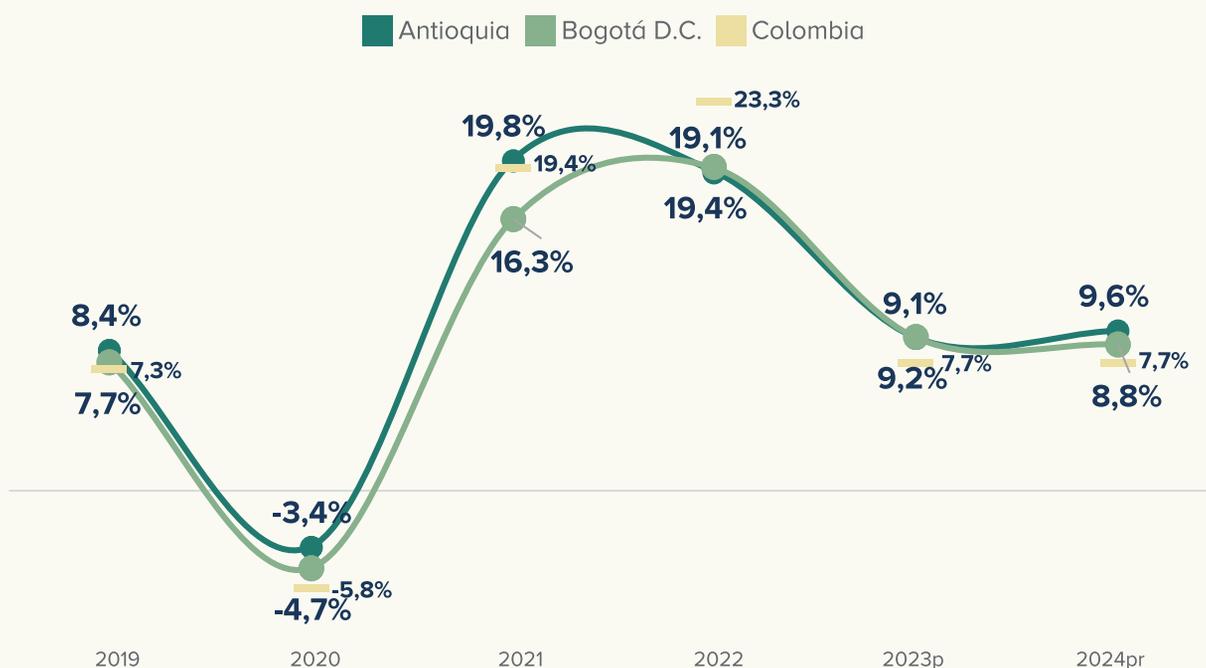
1. Conformadas por: Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Cámara Comercio de Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Cámara de Comercio de Medellín, Cámara de Comercio de Oriente y Cámara de Comercio de Urabá.



Producción en Antioquia

El crecimiento económico, más allá de ser una cifra macroeconómica, refleja transformaciones reales en la estructura productiva y social de un territorio. Cada punto porcentual de incremento en el PIB encierra dinámicas específicas —la expansión de una industria, la apertura de mercados o sucesos en mercados fuera del departamento— que generan ingresos, diversifican las oportunidades económicas y sientan las bases para mejorar las condiciones de vida de la población. Según las Cuentas Nacionales del DANE, a 2024, Antioquia se consolidó como el segundo departamento con mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con una participación del 14,8%, solo superado por Bogotá (25,2%). En términos de crecimiento, Antioquia también se destacó: frente a 2023 registró un incremento del 10%, aproximadamente 1 p.p. superior al de Bogotá y 2 p.p. por encima del promedio nacional.

Gráfico 1.
Antioquia, Bogotá y Colombia: tasa de crecimiento del PIB
(a precios corrientes), 2019-2024pr



Nota: (p) dato provisional (pr) dato preliminar
Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas nacionales del DANE (2025)



El liderazgo de Antioquia no solo se sustenta en el valor agregado que aporta al país o en su crecimiento, sino también en la diversidad de su estructura productiva. El departamento lideró el aporte nacional en distintas ramas de actividad económica: fue el mayor productor de metales preciosos, y lideró en actividades agropecuarias, en la provisión y generación de electricidad, gas y agua, así como en las manufacturas, donde se ubica como el principal contribuyente al valor agregado nacional. En las actividades de servicios —comercio, administración pública, educación, actividades recreativas, entre otras—, Antioquia ocupó el segundo lugar, superado únicamente por Bogotá. En minas y canteras, aunque fue el tercer departamento a nivel nacional con mayor aporte al valor agregado de dicha actividad (solo detrás del Meta y el Cesar), sobresale como el mayor productor de metales preciosos (ver Tabla .1).

Tabla 1.
Antioquia: aporte nacional y departamental al valor agregado de las actividades económicas, 2024pr

Rama de actividad económica	Valor agregado en miles de millones de pesos	Participación en el valor agregado de Antioquia	Aporte al total de la actividad a nivel nacional	Posición a nivel nacional
Actividades financieras, inmobiliarias, empresariales y comunicaciones	\$57.312	24,9%	16,5%	2°
Comercio; reparación, transporte y alojamiento	\$47.862	20,8%	14,8%	2°
Administración pública, Educación y salud; actividades artísticas y de entretenimiento, actividades de los hogares individuales	\$39.011	16,9%	12,1%	2°
Electricidad, gas y agua	\$14.893	6,5%	20,1%	1°
Industrias manufactureras	\$31.293	13,6%	18,2%	1°
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	\$20.811	9,0%	13,1%	1°
Construcción	\$10.558	4,6%	14,8%	2°
Explotación de minas y canteras	\$8.784	3,8%	11,6%	3°

(pr) dato preliminar

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas nacionales del DANE (2025)



Estas capacidades económicas evidencian que el potencial de Antioquia no se limita a los servicios, sino que abarca también la transformación de materias primas y la producción de bienes primarios. Aunque algunas actividades tengan un peso relativo menor dentro del valor agregado departamental, como por ejemplo las actividades agropecuarias (9%) o la explotación de minas y canteras (3,8%), su contribución al total nacional resulta importante para el desarrollo de dichas actividades a nivel nacional. Por ello, es fundamental analizar el conjunto de las actividades económicas y su papel estratégico, más allá de su aporte al valor agregado en el departamento.

Comprender la dinámica económica de Antioquia requiere una lectura precisa de lo que se mide. Al analizar el PIB y el valor agregado por actividades, es importante reconocer que estos indicadores están influenciados por la inflación, lo que implica que no siempre reflejan únicamente crecimiento en la producción, sino una combinación de variaciones de precios y de volúmenes de producción. Por esta razón, se utiliza el valor agregado a precios constantes, lo que permite aislar el efecto de los precios y evaluar con mayor precisión la evolución real de la economía². Incluso bajo esta medición, Antioquia creció 0,4 p.p. por encima del promedio nacional y 0,1 p.p. más que Bogotá. Este desempeño, sin embargo, depende de la dinámica de cada rama de actividad económica.

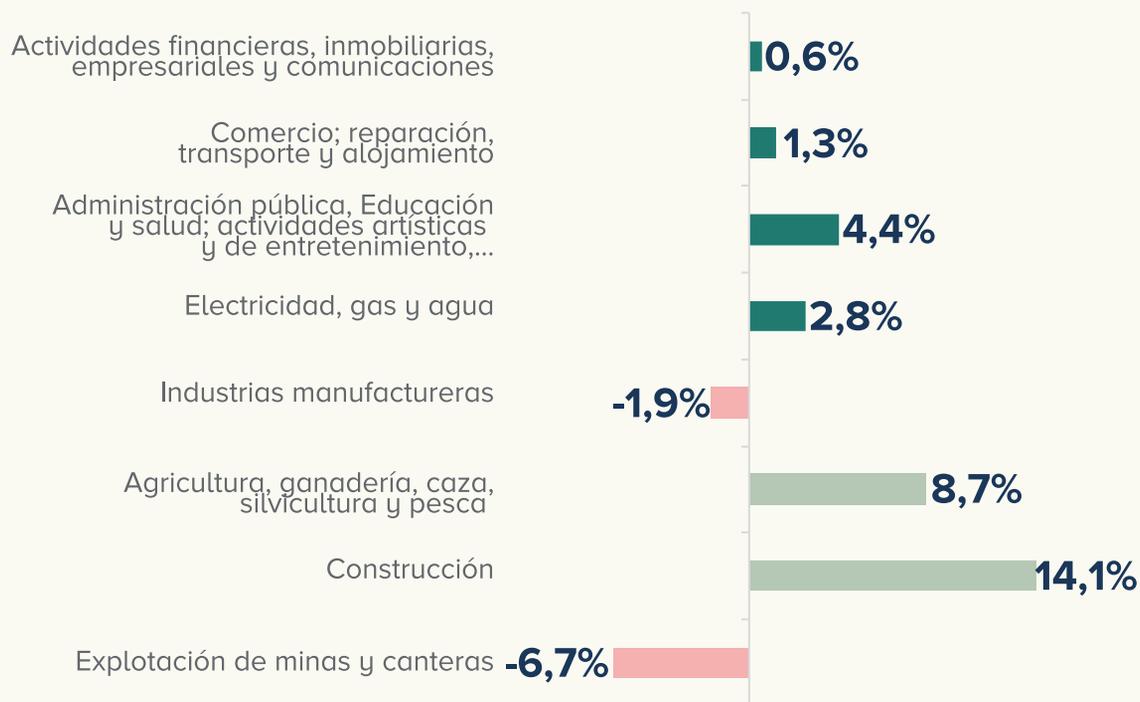
La Gráfica .2 presenta la variación entre 2023 y 2024 por ramas de actividad económica. El decrecimiento del sector de minas y canteras obedece a la reducción en la extracción de minerales, especialmente oro, en municipios del Nordeste y el Bajo Cauca (Unidad de Planeación Minero Energética -UMPE, s.f.). En contraste, productos agropecuarios como aguacate, flores y plátano —cultivados en la mayoría de las subregiones— mostraron aumentos significativos exportaciones: 21,1% en plátano, 14,6% en aguacate y 4,2% en flores (Dirección Impuestos de Aduanas Nacionales -DIAN, s.f.) y en producción: 3,9% en banano, 4,9% en plátano, 34,9% en aguacate (Gobernación de Antioquia, 2025). Asimismo, el repunte del comercio se explica por el mayor consumo interno, favorecido por la reducción de las tasas de interés del Banco de la República, la recuperación de la confianza del consumidor³ (Banco de la República, 2024) y el aumento del 153% entre 2019 y 2024 del número de visitantes extranjeros que ingresaron al departamento (Migración Colombia, s.f.). Por su parte, tras dos años consecutivos de caídas en la producción del sector de la construcción, en 2024 se registró una recuperación, impulsada por obras de infraestructura —especialmente en Medellín— y por edificaciones no residenciales (Banco de la República, 2024). Cada una de estas dinámicas refleja historias particulares en los territorios y, en conjunto, permiten entender cómo el desarrollo económico se manifiesta de manera diferenciada en las regiones.

2. El cálculo se realiza con el PIB de cada territorio, midiendo la variación del indicador a precios fijos del año 2015.

3. Esta medición se toma desde el índice de confianza del consumidor realizado por Fedesarrollo para el año 2024. Se debe tener presente que dicho índice recoge información solo para Medellín.



Gráfico 2.
Antioquia: crecimiento de la producción por rama de la actividad económica, 2024pr



(pr) dato preliminar

Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas nacionales del DANE (2025)

Ahora bien, más allá de la medición objetiva de la producción, resulta clave comprender cómo los actores perciben estas dinámicas y anticipan el futuro económico del territorio.

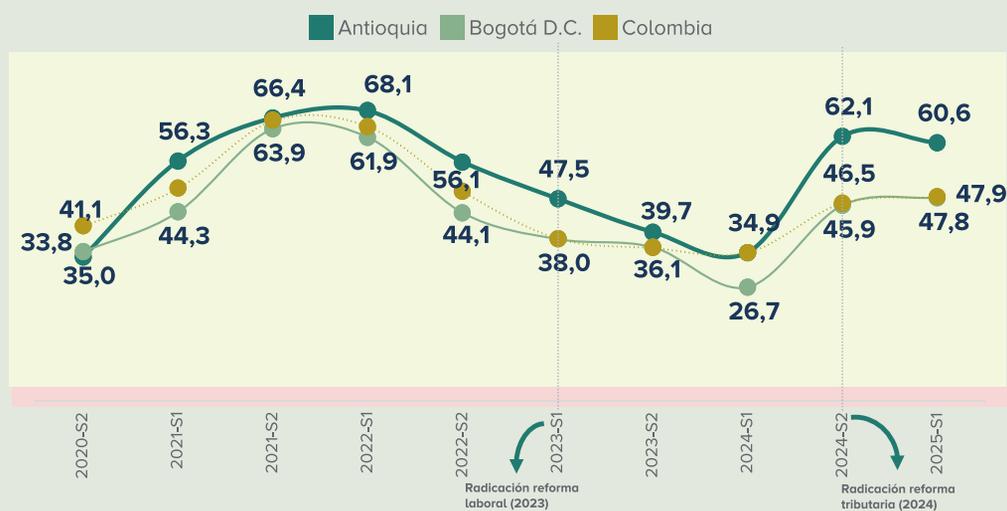


La percepción no es ajena a los temas de crecimiento económico

Las expectativas económicas, entendidas como la percepción de los actores frente a su entorno, funcionan como un termómetro de las condiciones económicas actuales de un territorio y de sus perspectivas futuras. Constituyen, por tanto, una herramienta clave para identificar cómo los agentes económicos interpretan las coyunturas que pueden enfrentar y lo que anticipan en el corto y mediano plazo. A partir de la información del Banco de la República, es posible medir estas expectativas en relación con distintos aspectos de su actividad económica.

La más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de Empresarios⁴ (EMEE), evidenció que, pese a episodios de incertidumbre que han generado variaciones en el nivel de confianza, persisten expectativas positivas frente al aumento de las ventas en el próximo año. Comparado con Bogotá y con el promedio nacional, en junio de 2025 Antioquia registra una mayor proporción de empresarios que prevé incrementos en sus ventas durante los siguientes 12 meses (ver Gráfico 3).

Gráfico 3. Antioquia, Bogotá y Colombia: índice de percepción de los empresarios frente al aumento en ventas para los próximos 12 meses por semestres, 2020-S2 – 2025-S1



Fuente: elaboración propia a partir de las encuesta mensual de expectativas económicas de empresarios (EMEE) - Banco de la República (2025)

4. Esta encuesta mide la percepción empresarial a través de un índice de balance. Para las preguntas particulares usadas en el presente informe, los encuestados pueden responder si prevé que su dinámica sea 'mayor', 'menor' o 'igual'. El índice se calcula como la diferencia entre el porcentaje de respuestas 'mayores' y el porcentaje de respuestas 'menores'. Un valor positivo refleja expectativas favorables, mientras que un valor negativo indica expectativas desfavorables. Para mayor detalle, consulte la documentación técnica del índice (Banco de la República, 2020).

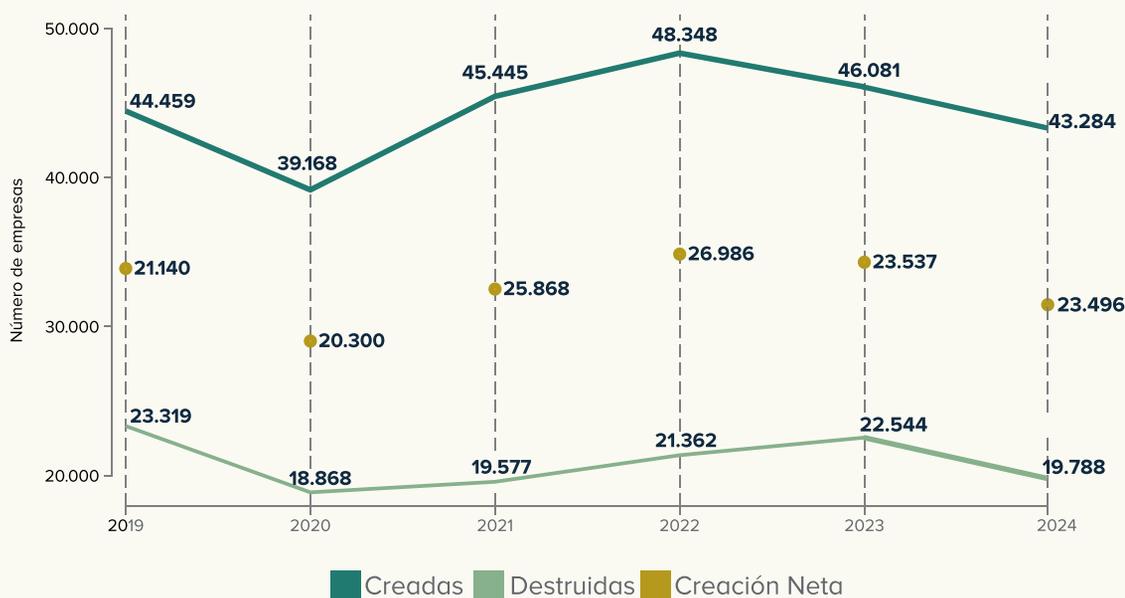


Tejido empresarial

En el marco del crecimiento económico y del papel de Antioquia en la economía nacional, las empresas constituyen uno de los principales motores para impulsar el desarrollo, generar empleo, proveer bienes y servicios y, en consecuencia, contribuir a la calidad de vida de la población (CCMA, 2023). En 2024, según datos de las Cámaras de Comercio de Antioquia, el departamento registró un total de 232.485 empresas, lo que representa un aumento del 1,6% frente a las 228.799 del año anterior.

No obstante, la dinámica de creación de empresas ha mostrado una tendencia decreciente desde 2023. En 2024 se constituyeron 43.284 nuevas empresas, un 6,1% menos que en 2023, siendo esta la cifra más baja del periodo de análisis, con excepción de 2020. En contraste, la cancelación de matrículas mercantiles disminuyó un 12,2% respecto al año anterior. Como resultado, la creación neta de empresas también ha venido reduciéndose desde 2023 (ver Gráfico 4).

Gráfico 4.
Antioquia: empresas creadas y destruidas, 2019 – 2024



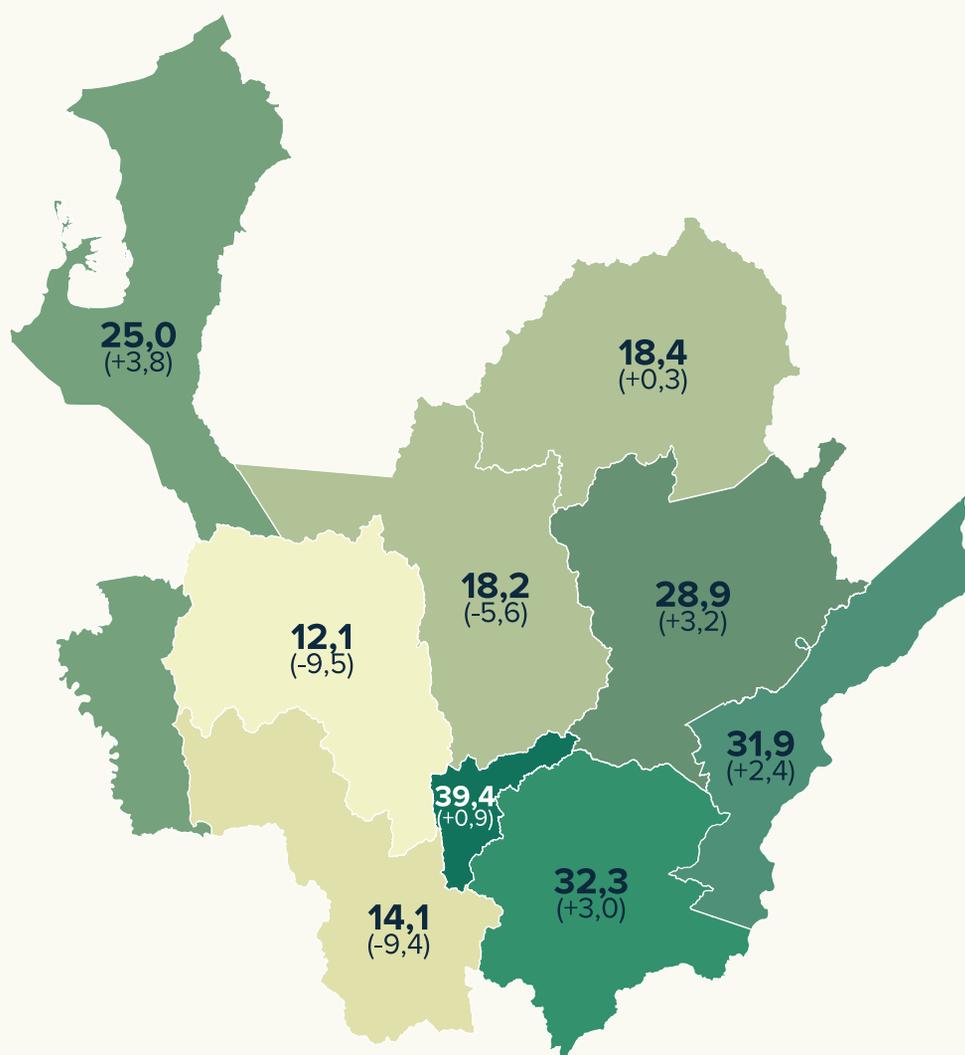
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cámaras de Comercio de Antioquia (2025)

En 2024, Antioquia registró una densidad empresarial de 33,8 empresas por cada 1.000 habitantes. Al desagregar por subregiones (ver Gráfico 5), se observa una marcada heterogeneidad: la mayoría se ubicó entre 18 y 30 empresas por cada 1.000 habitantes, con valores destacados en Magdalena Medio (31,9), Oriente (32,3) y Valle

de Aburrá (39,4). Entre 2023 y 2024, las subregiones de Urabá (+3,8), Oriente (+3,0) y Nordeste (+3,2) presentaron los mayores incrementos en este indicador. Por su parte, Occidente no solo registró la densidad más baja del departamento (12,1), sino también la mayor reducción interanual (-9,5).



Gráfico 5.
Subregiones de Antioquia: densidad empresarial, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de datos de las Cámaras de Comercio de Antioquia (2025) y proyecciones poblacionales del DANE con base en el CNPV 2018 (post COVID) y las actualizaciones de proyecciones poblacionales del 2025.

El dinamismo económico y las expectativas positivas de los actores no se limitan únicamente al crecimiento del PIB. Tal como se mencionó, el mercado laboral constituye otro de los motores del desarrollo, al ser un factor fundamental tanto para el desempeño empresarial como para la mejora de la calidad de vida en las subregiones.

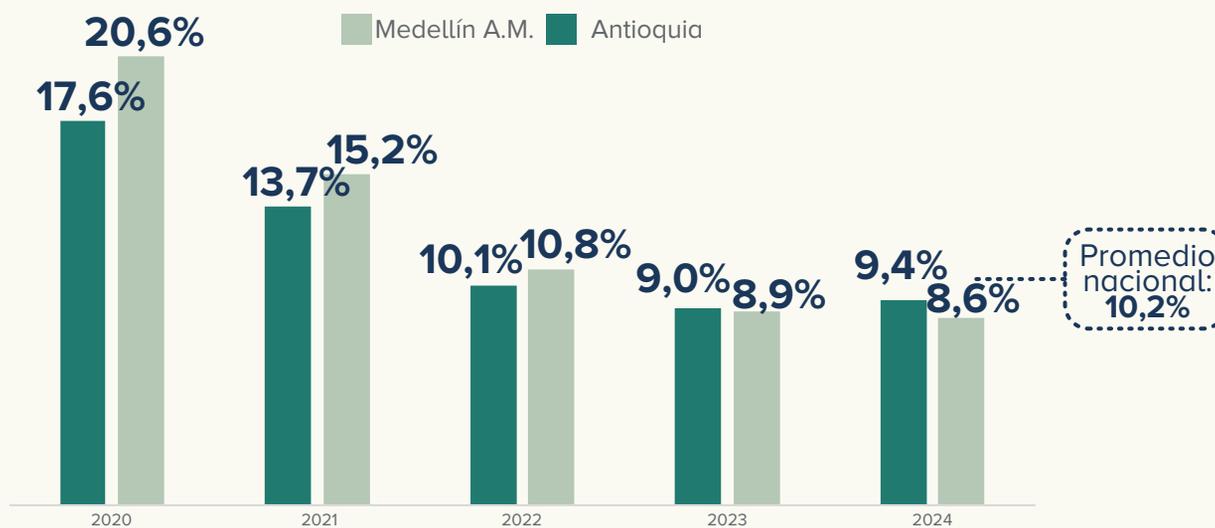


Mercado laboral

El dinamismo económico también se ha reflejado en las cifras de empleo. La tasa de desocupación, principal indicador del mercado laboral, mide la proporción de personas que buscaron empleo de manera activa y no se encontraban ocupadas, en el último mes de referencia. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, entre 2020 y 2023 Antioquia registró una disminución sostenida en este indicador; sin embargo, en 2024 se presentó un aumento, alcanzando 9,4%. Esto equivale a

cerca de 341 mil personas en búsqueda de empleo. Para dimensionar esta cifra, debe tenerse en cuenta que, de los 5,7 millones de personas en edad de trabajar, solo 3,7 millones participan en el mercado laboral, ya sea como ocupados o desocupados. En términos prácticos, en 2024 aproximadamente 1 de cada 10 participantes se encontraba buscando empleo. Aun así, la tasa permaneció en un solo dígito, inferior al promedio nacional (10,2%), aunque superior a la registrada en Medellín A.M. (8,6%) (ver Gráfica 6)

Gráfico 6.
Antioquia: tasa de desocupación, 2020 - 2024



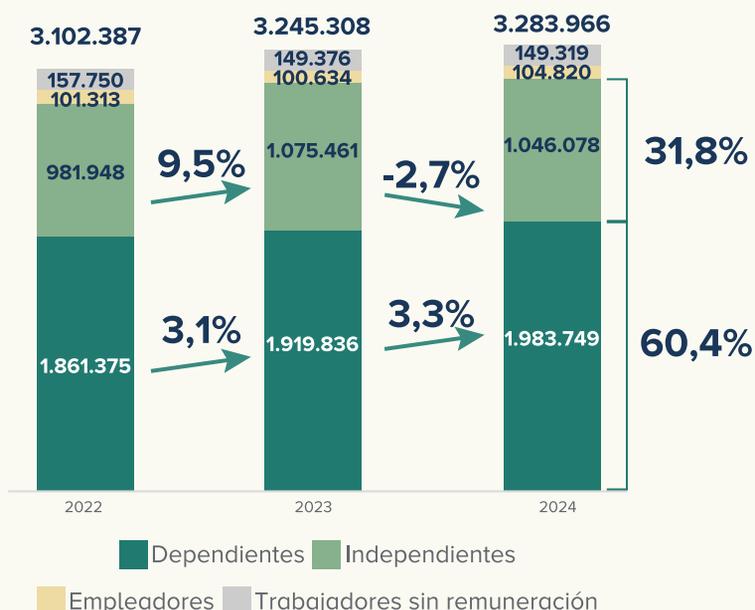
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)

La evolución de la desocupación debe entenderse en conjunto con el comportamiento de la ocupación, que refleja la capacidad real de la economía para absorber trabajadores. Se considera ocupada toda persona que trabajó al menos una hora en la semana de referencia, ya sea de manera remunerada o no, como dependiente o en su propio negocio. Según el más reciente reporte de la Mesa de Empleo de Antioquia (2025),

el departamento registró en 2024 un incremento del 1,2% en el número de ocupados, alcanzando así su máximo histórico con 3,2 millones de personas trabajando. Este resultado obedece principalmente al aumento de 3,3% en el número de trabajadores dependientes, mientras que los independientes presentaron una reducción de 2,7%, frente al 2023 (ver Gráfico 7).



Gráfico 7.
Antioquia: ocupados según posición ocupacional, 2022 - 2024

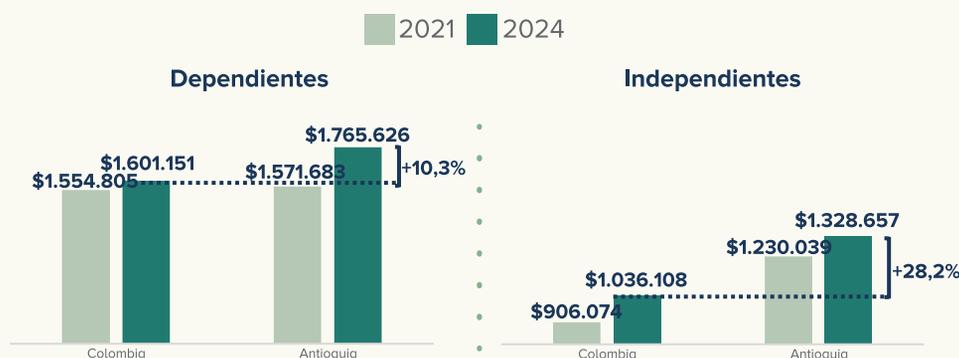


Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)

El aumento de la ocupación estuvo acompañado de mejoras en los ingresos laborales. Según la Mesa de Empleo de Antioquia (2025), tanto los trabajadores dependientes como los independientes percibieron ingresos superiores al promedio nacional. En 2024, el ingreso promedio de los trabajadores dependientes en Antioquia fue 10,3% mayor que el registrado a nivel nacional, mientras que, en el caso de los independien-

tes, aunque sus ingresos fueron menores en términos absolutos, superaron en 28,2% el promedio de Colombia (ver Gráfico 8). Este comportamiento no solo refleja una mayor capacidad adquisitiva de los trabajadores, sino que también contribuye a mejorar su calidad de vida y hace del mercado laboral de Antioquia un entorno atractivo tanto para quienes aún no participan como para personas provenientes de otros territorios.

Gráfico 8.
Antioquia y Colombia: ingreso promedio* de los ocupados según posición ocupacional, 2021 - 2024



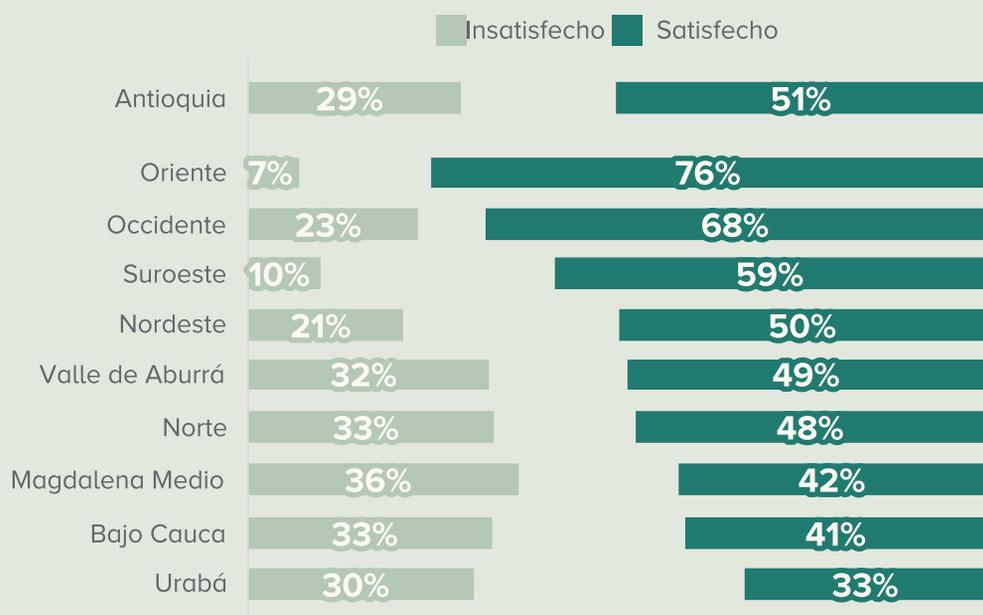
Nota: (*) ingresos laborales a precios constantes de 2024
 Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Mesa del Empleo de Antioquia (2025)



Más ocupación, pero ¿qué perciben los trabajadores?

Como se señaló previamente, aunque los ingresos son un factor central para explicar el atractivo del mercado laboral antioqueño, surge la pregunta por la percepción de los trabajadores frente a la ocupación que desempeñan. El trabajo no solo provee ingresos, sino que hace parte esencial para el desarrollo de las libertades individuales y la dignidad humana (Sen, 1999). La satisfacción laboral constituye un componente esencial de la calidad de vida. Con base en los datos del Índice Multidimensional de Comfama (2023), se indagó a los ocupados sobre su nivel de satisfacción con el trabajo. En promedio, la mitad de los trabajadores en Antioquia manifestó estar satisfecho con su empleo. En subregiones como Oriente (76%), Occidente (68%) y Suroeste (59%), la proporción de ocupados satisfechos superó el 50%. En contraste, Magdalena Medio (42%), Bajo Cauca (41%) y Urabá (33%) registraron los niveles más bajos de satisfacción (ver Gráfica 9).

Gráfico 9.
Antioquia: satisfacción con el trabajo actual, 2023



Fuente: elaboración propia a partir de datos del IMCLAM - Comfama y Universidad de Antioquia (2023)

Otro indicador que permite evidenciar avances en materia de empleo, incluso con cifras actualizadas a 2025, es la afiliación a cajas de compensación familiar. Con base en los registros de Comfama y Comfenalco, se observa que en 2024 la afiliación permaneció estancada, sin superar los niveles alcanza-

dos en 2023. No obstante, en el segundo trimestre de 2025 la cifra logró recuperarse, superando el máximo histórico de 2022, con un promedio cercano a 1,8 millones de afiliados, lo que representó un crecimiento del 3,8% en el primer trimestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior (ver Gráfico 10).



Gráfico 10.
Antioquia: afiliados a cajas de compensación familiar por trimestre, 2023 – 2025



Fuente: elaboración propia a partir de datos de las cajas de compensación familiar Comfenalco Antioquia y Comfama (2025)

Este crecimiento obedece principalmente al repunte de la afiliación en subregiones por fuera del Valle de Aburrá. Al relacionar la cobertura de las cajas con la población en edad de trabajar en cada territorio, se destacan incrementos significativos en Magdalena Medio (+1,6 p.p.), Urabá (+1,1 p.p.), Oriente (+1,0 p.p.) y Occidente (+1,0 p.p.). Dado que la afiliación a cajas de compensación es un requisito para determinados trabajadores formales, estos resultados evidencian no solo un aumento en la ocupación en dichas subregiones, sino también un fortalecimiento de la formalidad laboral.

¿Que se espera del mercado laboral en Antioquia?

Si bien hasta ahora se han analizado las cifras de empleo desde la perspectiva de los trabajadores (oferta laboral), resulta igualmente relevante examinar la visión de las empresas (demanda laboral). A partir de la

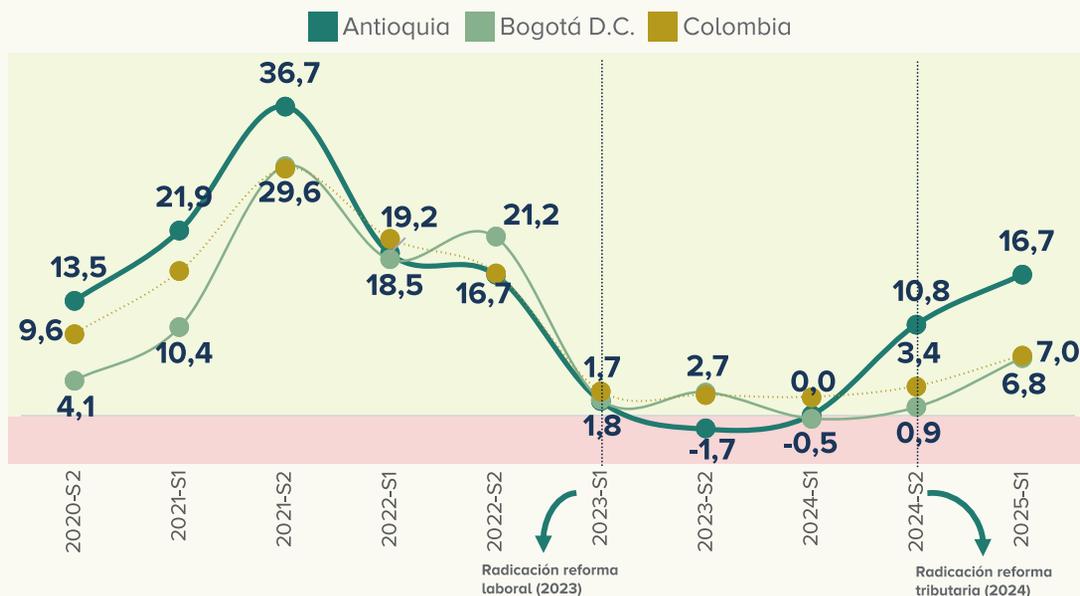
Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de Empresarios (EMEE) del Banco de la República, es posible identificar la percepción de los empleadores respecto al número de trabajadores de tiempo completo que planean contratar en los próximos 12 meses.

La evidencia muestra que, pese a episodios de incertidumbre asociados a la radicación de la reforma laboral en marzo de 2023 (Vargas, 2023) y a la reforma tributaria en septiembre de 2024 (Cigüenza, 2024), para el primer semestre de 2025 las expectativas de contratación en Antioquia se mantienen positivas, superando incluso las de Bogotá y el promedio nacional (ver Gráfico 11). Aunque no se trata de los niveles más altos del periodo de análisis, las señales por el lado de la demanda laboral son favorables y refuerzan las perspectivas de dinamismo del mercado laboral en los próximos meses.



Gráfico 11.

Antioquia, Bogotá y Colombia: índice de percepción sobre el número de trabajadores tiempo completo que piensa emplear los próximos 12 meses, 2020-S2 – 2025-S1



Fuente: elaboración propia a partir de las encuestas mensual de expectativas económicas de empresarios (EMEE) - Banco de la República (2025)

Si bien las cifras recientes reflejan avances en ocupación, ingresos y expectativas empresariales, estos resultados deben analizarse a la luz de un reto persistente: la informalidad. Este fenómeno limita el acceso a la protección social, genera desigualdades territoriales y constituye una de las principales barreras para consolidar un mercado laboral de calidad y un desarrollo económico inclusivo. Se trata de un problema estructural que ha caracterizado al mercado laboral no solo en Antioquia, sino también en el ámbito nacional.

De acuerdo con la definición del DANE, se entiende por trabajadores informales a:

“Los asalariados o empleados domésticos que no cuentan con cotizaciones a salud ni a pensión por concepto de su vínculo laboral con el empleador que los contrató. De igual forma, comprende a los trabajadores por cuenta propia y patronos o empleadores clasificados en el sector informal, todos los traba-

adores familiares sin remuneración y demás personas sobre las que no se dispone de suficiente información sobre su situación en la ocupación para ser clasificados en las categorías anteriores. Se excluyen los obreros y empleados del Gobierno” (DANE, 2025).

Bajo esta definición, Antioquia registró en 2024 una tasa de informalidad del 48,1%, cifra menor que el promedio nacional (55,9%). Sin embargo, lo más relevante son las variaciones dentro del territorio: mientras en Medellín A.M. la tasa se ubicó en 38,4%, en el resto del departamento alcanzó el 65,0%. Estas diferencias son de gran importancia, considerando que la estructura económica de Antioquia no se concentra en una sola subregión, sino que se distribuye de manera heterogénea. Así, mientras el Valle de Aburrá y Oriente concentran gran parte de sus actividades en manufacturas y comercio, en el resto de las subregiones las actividades agropecuarias y mineras tienen un papel predominante (Antioquia Cómo Vamos, 2024).

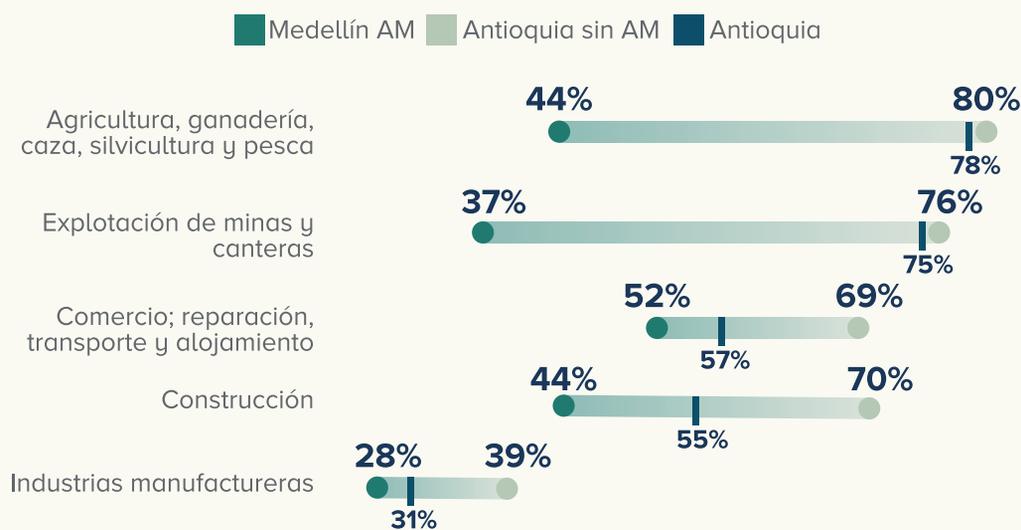


Si bien los datos de la GEIH no permiten una desagregación a nivel subregional, un aproximado para dimensionar la informalidad en Antioquia consiste en analizar las principales actividades económicas del departamento y relacionarlas con las subregiones en las que se desarrollan. Como se observa en la Gráfica 12, las actividades agropecuarias y, de explotación de minas y canteras presentan los niveles más altos de informalidad, con 78% y 75% de trabajadores informales, respectivamente. Tal como se mencionó anteriormente, estas actividades no solo concentran una parte importante del valor agregado por fuera de Medellín A.M., sino también la mayor proporción de trabajadores informales. De hecho, los promedios departamentales en ambos secto-

res son muy cercanos a la tasa registrada en Antioquia sin A.M., lo que confirma que las subregiones periféricas son las que más concentran informalidad.

En el caso del comercio, aunque sus tasas son relativamente menores, siguen representando un nivel considerable y exhiben amplias brechas territoriales: mientras en Medellín A.M. la tasa de informalidad fue del 52%, en el resto del departamento alcanzó 69%. Por su parte, el sector manufacturero registró uno de los niveles más bajos de informalidad, con un 31% de trabajadores en esa condición, aunque también con diferencias entre Medellín A.M. (28%) y las demás subregiones (39%).

Gráfico 12.
Antioquia: tasa de informalidad por ramas de actividad económica principales, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)



¿Qué hay más allá de la cifra de informalidad publicada por el DANE?

En ningún momento se pone en tela de juicio la presión y veracidad de la cifra de informalidad que reporta el DANE. Es más, al seguir la definición formal que propone la Organización Internacional del Trabajo (s.f.-a), el DANE hace un buen ejercicio de capturar la informalidad en los trabajadores a nivel nacional. En el Anexo 1 se presenta un breve esquema que resume como el algoritmo del DANE clasifica a los trabajadores informales según su posición ocupacional. Pero lo que si podemos hacer como ejercicio exploratorio es indagar desde las características precisas de la informalidad laboral, en qué condiciones se encuentran trabajando los ocupados en Antioquia para el año 2024. Para este ejercicio tomaremos los dos criterios que son: falta de afiliación

del ocupado al sistema de seguridad social⁵ o que la actividad económica en donde el ocupado ejerza su actividad sea informal⁶. Ambos criterios se tomaron de la definición técnica del DANE.

Al analizar el criterio de ocupados que no cotizan al sistema de seguridad social, en Antioquia la proporción alcanza el 43,9%. En Medellín A.M. esta cifra es del 32,2%, mientras que en el resto del departamento asciende a 62,4%. En cuanto a los trabajadores vinculados a empresas informales, el promedio departamental es de 38,5%; en Medellín A.M. representa el 30,9% y, al excluir esta subregión, la cifra se eleva a 51,8% (ver Tabla 2).

Tabla 2.
Antioquia: desagregación de mediciones de informalidad, 2024

	Antioquia	Medellín A.M.	Antioquia sin Medellín A.M.
Ocupados sin afiliación a salud ni pensión	43,9%	32,2%	62,4%
Ocupados en actividades económicas informales	38,5%	30,9%	51,8%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)

5. Ocupados que no se encuentran cotizando a salud (régimen contributivo o especial) ni pensión (fondo privado o Colpensiones).

6. Ocupados que ejercen su labor en empresas que no se encuentran registradas ante una cámara de Comercio, con matrícula sin renovar, que no lleven una contabilidad organizada y que su ocupación no comprenda militares, directores, gerentes, profesionales, científicos e intelectuales.



Al desagregar por posición ocupacional, las brechas en informalidad resultan aún más marcadas. Entre los trabajadores dependientes, la informalidad en actividades económicas alcanza el 11,3%, mientras que el 26,1% no cuenta con seguridad social. En contraste, entre los trabajadores independientes la informalidad en actividades económicas asciende al 86,3% y el 96,2% ca-

rece de afiliación a la seguridad social. Esto evidencia que los trabajadores independientes concentran las mayores brechas de informalidad frente a los dependientes (ver Tabla 3). Este resultado adquiere especial relevancia si se considera que el 31,8% del total de ocupados en Antioquia corresponde a trabajadores independientes, es decir, cerca de 1 millón de personas.

Tabla 3.
Antioquia: desagregación de mediciones de informalidad según posición ocupacional, 2024

	Informalidad DANE	Actividades económicas informales	Sin seguridad social
Trabajadores dependientes	26,1%	11,3%	26,1%
Trabajadores independientes	85,7%	86,3%	96,2%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)

El término “ocupado del rebusque” ha adquirido relevancia en distintos análisis del mercado laboral (Cigüenza, 2025; ANIF, 2025). Aunque no existe una definición consensuada, suele hacer referencia a trabajadores independientes que carecen de contrato laboral, no están afiliados al sistema de seguridad social y ejercen actividades de baja especialización⁷. En términos prácticos, se trata de ocupados sin vínculo contractual con un empleador y cuyas actividades económicas, en la mayoría de los casos, no se encuentran registradas ante una cámara de comercio.

Este concepto permite aproximarse a la informalidad laboral desde la posición ocupacional que concentra la mayor proporción de trabajadores informales como son los independientes, y que, por sus características, es especialmente propensa a desarrollarse bajo esquemas no formales de contratación. Para 2024, en Antioquia se estimaron 744.035 ocupados en actividades de rebusque, lo que equivale al 22,7% del total de ocupados del departamento. La magnitud del fenómeno se hace aún más evidente al observar que estos trabajadores representaron el 71,2% del total de independientes. Las diferencias territoriales refuerzan la im-

7. Hace referencia a ocupados que dentro de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (COUC), no tienen como nivel de formación profesional, técnico, gerente o director.



portancia del análisis. Mientras que en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la proporción de ocupados en el rebusque alcanzó el 63,5%, en el resto del departamento ascendió al 83,2%, evidenciando una mayor prevalencia de este tipo de empleo en las subregiones por fuera del Valle de Aburrá.

Los costos de la informalidad son múltiples y tienen un impacto directo en la calidad de vida. La combinación de trabajadores sin protección social y empresas que, por su estructura y forma de operación, no logran ser competitivas, limita la provisión de bienes públicos y restringe el acceso de los trabajadores a mejores condiciones. A su vez, esta situación reduce la capacidad de recaudo y genera una asignación ineficiente de recursos, lo que termina por frenar el desarrollo y el crecimiento del país (Banco de la República, 2025). Además, los trabajadores informales enfrentan una mayor probabilidad de percibir ingresos inferiores respecto a los dependientes, lo que incrementa su vulnerabilidad económica al carecer de la seguridad financiera que ofrecen los empleos formales (OIT, 2024).

Por último, el análisis de participación laboral permite concluir que aún hay posibilidades de crecimiento en el mercado laboral. Más allá de los indicadores clásicos, la participación laboral constituye un reflejo de las oportunidades y desigualdades presentes en una sociedad. Un nivel elevado de participación suele estar asociado con mayores niveles de producción y crecimiento económico, lo que a su vez genera más fuentes de ingreso, reduce la vulnerabilidad económica y contribuye a una mejor calidad

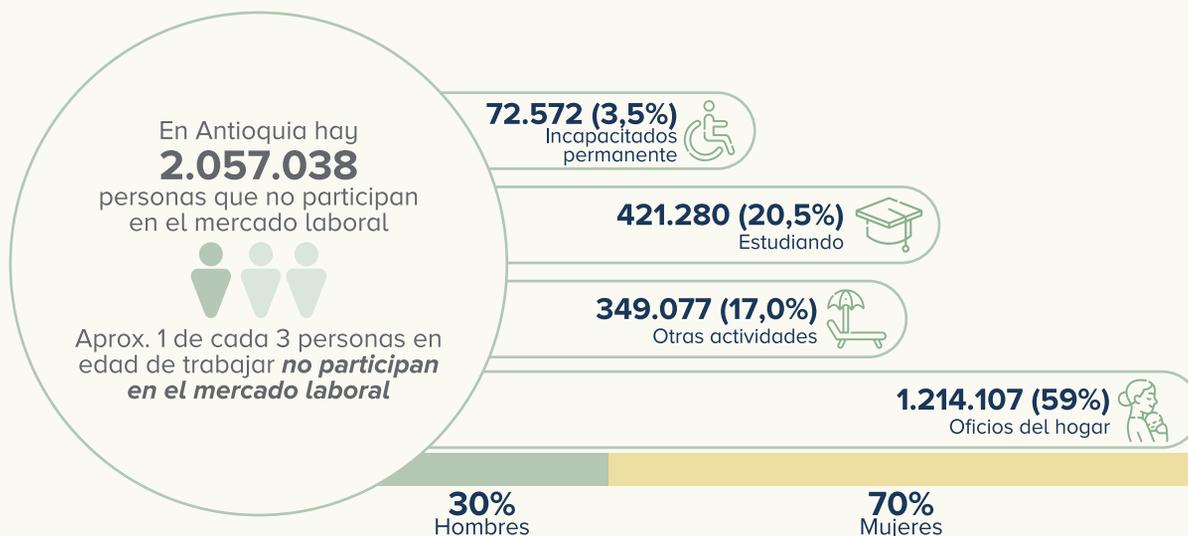
de vida (OIT, s.f.-b).

La participación laboral representa, además, el primer eslabón del mercado de trabajo, al brindar a las personas la posibilidad de acceder a la seguridad social, al bienestar laboral y a un ingreso digno para sí mismas y sus hogares. En términos de producción y actividad económica, la disposición de una persona a integrarse al mercado laboral constituye un valor agregado potencial que la economía puede aprovechar, generando un beneficio mutuo entre trabajadores y empleadores (OIT, s.f.-b).

En el Área Metropolitana y Antioquia nos encontramos que la participación fue de 66,1% y 63,8%, respectivamente. Al descontar Área Metropolitana, la tasa en el resto de Antioquia se reduce al 60,2%. Puede llamar la atención que 3 de cada 8 personas en condición de trabajar se encuentren inactivas en Antioquia (un poco más 2 millones de personas), pero es acá donde se encuentra el potencial de crecimiento. Entonces, ¿a qué se dedican las personas que no participan en el mercado laboral? Como se puede apreciar en la Gráfica x.13, un 3,5% de las personas estaban en situación de discapacidad permanente para trabajar, el 20,5% se encontraba estudiando, el 17% realizando otras actividades y el 59% fueron personas que se dedicaron a oficios del hogar; de estas personas dedicadas a los oficios del hogar, el 70% fueron mujeres.



Gráfico 13.
Antioquia: actividad principal de las personas inactivas, 2024



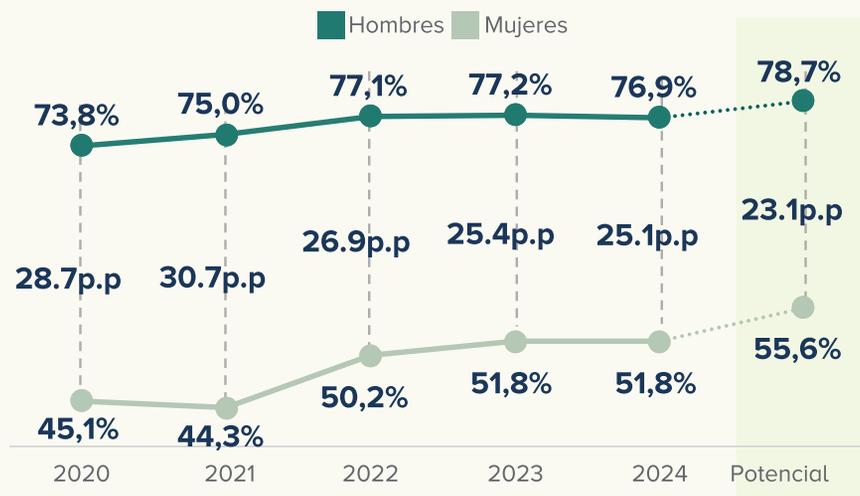
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)

Dentro de estas personas que se encuentran inactivas laboralmente, existen personas que efectivamente quieren participar en el mercado laboral, pero por alguna razón o motivo no lo pudieron hacer. Es acá donde aparece el potencial de crecimiento. Para 2024, 159.170 personas inactivas laboralmente reportaron estar dispuestas a traba-

jar, de ellas el 71% fueron mujeres y el 29% fueron hombres. De estas personas, el 67% se dedica a oficios del hogar. Si estas personas logran ingresar al mercado laboral, la participación laboral tanto de los hombres como de las mujeres aumentaría y la brecha se cerraría 2 p.p más de lo que registró en 2024 (ver Gráfico 14).

Antioquia: tasa global de participación, 2020-2024

Gráfico 14.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)



¿Por qué la gente no participa en el mercado laboral?

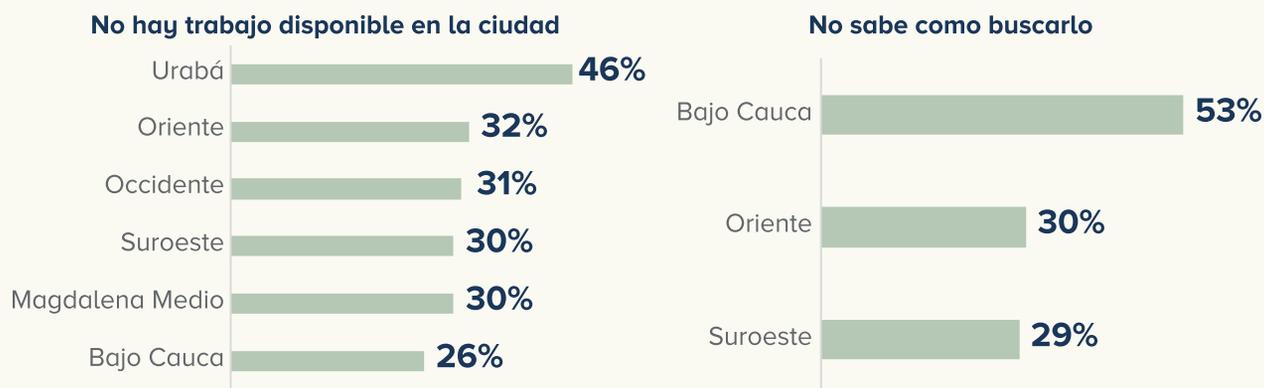
La participación en el mercado laboral no constituye una obligación, pero sí representa el primer paso para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, existen múltiples razones por las cuales, aun deseando trabajar, algunas personas no realizaron búsqueda de empleo en el último mes o no se encontraban ocupadas en la semana de referencia. Con base en el Índice Multidimensional de Comfama, se identifican factores como: haber conseguido empleo previamente, ausencia de vacantes disponibles en la ciudad, estar a la espera de una respuesta de empleadores, desconocimiento sobre cómo buscar, cansancio tras intentos fallidos, ausencia de oportunidades en el oficio o profesión, percepción de discriminación por edad (muy joven o muy mayor), responsabilidades familiares, embara-

zo, problemas de salud, estudios, prestación del servicio militar o policial, viajes, labores del hogar, situaciones de violencia, espera de temporada alta, falta de experiencia, o carencia de recursos para emprender.

Si bien estas razones reflejan distintas dimensiones que inciden en la no participación laboral, los resultados de la encuesta muestran patrones comunes. En Antioquia, para 2023, las principales causas fueron la falta de disponibilidad de empleo y el desconocimiento sobre cómo buscarlo (ver Gráfico 15). En regiones como Bajo Cauca, Oriente y Suroeste, estas dos razones no son excluyentes; su análisis conjunto evidencia una desconexión entre la oferta y la demanda de trabajo.

Gráfico 15.

Antioquia: principales razones de la no participación en el mercado laboral de las personas que desean trabajar, 2023



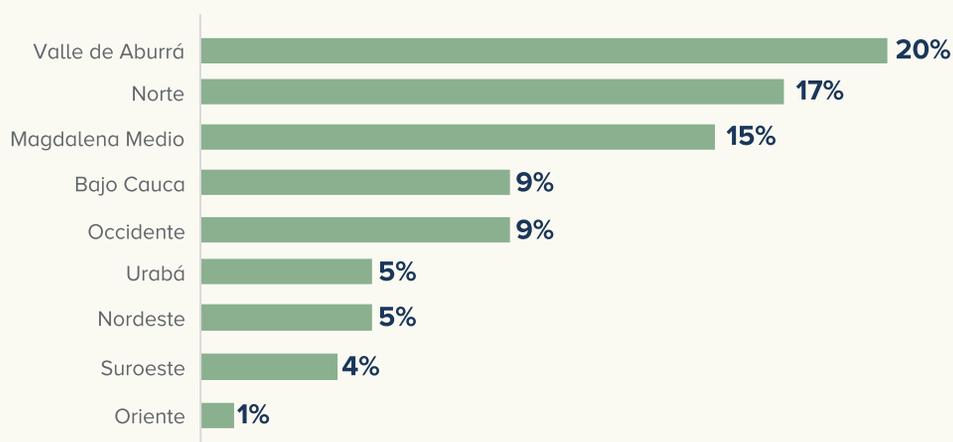
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IMCLAM - Comfama y Universidad de Antioquia (2023)



No obstante, estas no fueron las únicas razones identificadas en las subregiones. Cada territorio mostró particularidades en los motivos de no participación laboral: en Magdalena Medio, el 15% manifestó estar cansado de buscar; en el Nordeste, el 28% señaló estar a la espera de un llamado; en el Norte, el 16% se dedicaba a las labores del hogar; en Occidente, el 36% indicó estar a la espera de la temporada alta; en Urabá, el 23% reportó no contar con recursos para instalar un negocio; y en el Valle de Aburrá, el 11% señaló ocuparse en labores del hogar.

Las labores de cuidado no remuneradas, en su conjunto, continúan representando una oportunidad para promover la autonomía económica e incentivar la participación laboral. Según los datos del IMCLAM, en Antioquia son 41.621 personas dedicadas a oficios del cuidado o del hogar que desean trabajar. Las subregiones con mayor proporción de personas que se dedican a labores del cuidado u oficios del hogar son Valle de Aburrá (20%), Norte (17%) y Magdalena Medio (15%) (ver Gráfico 16).

Gráfico 16.
Antioquia: porcentaje de personas que desean trabajar y se dedican a labores del cuidado y/o del hogar, 2023



Fuente: elaboración propia a partir de datos del IMCLAM - Comfama y Universidad de Antioquia (2023)

Finalmente, a medida que mejora la calidad de vida, la expectativa de vida también aumenta, lo que ha llevado a un crecimiento en la participación laboral de la población mayor. también, como se menciona en el capítulo de demografía del presente informe, el cambio demográfico es una realidad gracias a las disminuciones de la tasa de natalidad y fecundidad en el departamento; Antioquia está envejeciendo más rápido. En los últimos años el número de adultos mayores de 60 años ha aumentado un 16,2% y se proyecta que la tendencia se mantenga a futuro.

En Antioquia, entre 2021 y 2024, la tasa de participación laboral de las personas mayores de 60 años pasó del 24,7% al 30,2%. Este aumento responde tanto al deseo de mantenerse activos laboralmente como a la necesidad de generar ingresos ante la falta de una pensión.

Uno de cada cuatro adultos mayores que se encuentra participando en el mercado laboral, no recibe ingresos por pensión o jubilación. Dado que los adultos mayores enfrentan mayores barreras para acceder a empleos dignos, es fundamental desarrollar estrategias que garanticen su inclusión en el mercado laboral. (OECD, s.f.)



Conclusiones:

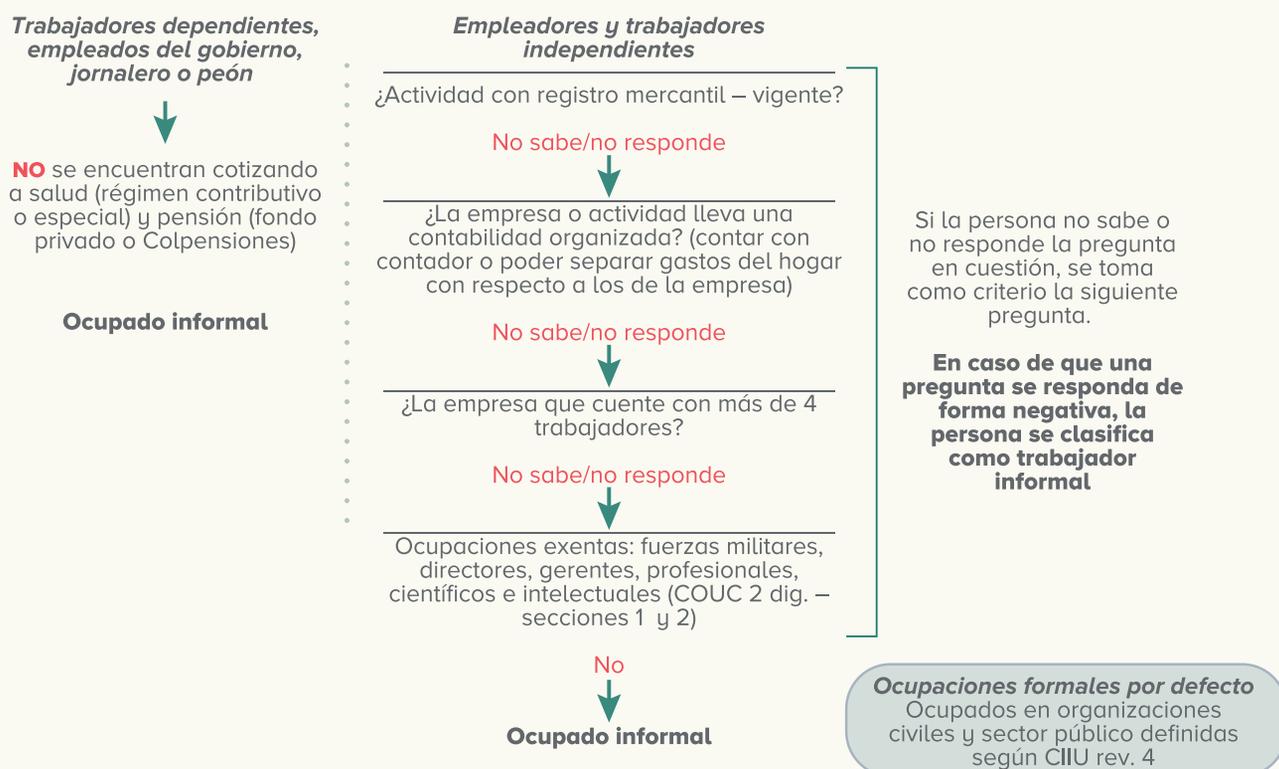
- **Antioquia como referente productivo:** el departamento fue el segundo mayor aportante tanto en términos agregados como en la mayoría de las ramas de actividad económica. Además, superó a Bogotá y al promedio nacional en el crecimiento del PIB y de la producción.
- **Expansión del tejido empresarial:** aunque la creación de empresas ha mostrado una desaceleración en los últimos años, el tejido empresarial creció un 1,6% frente a 2023. Subregiones como Nordeste, Magdalena Medio, Oriente y Urabá registraron incrementos significativos en su densidad empresarial respecto al año anterior.
- **Mejoras en el mercado laboral y expectativas positivas:** la ocupación alcanzó en 2024 su máximo histórico, acompañada de ingresos promedio superiores al nivel nacional tanto para trabajadores dependientes como independientes. Pese a episodios de incertidumbre, los empresarios mantienen expectativas favorables en ventas y contratación para el segundo semestre de 2025.
- **Persistencia de problemas estructurales:** Antioquia conserva una tasa de informalidad relativamente alta, con marcadas brechas entre Medellín A.M. y el resto de las subregiones. Las actividades agropecuarias y mineras concentran los mayores niveles de informalidad, en especial entre trabajadores independientes frente a dependientes.
- **Potencial de incorporación laboral de la población inactiva:** cerca de 159 mil personas inactivas en 2024 manifestaron disposición a participar en el mercado laboral, la mayoría mujeres dedicadas a oficios del hogar. Su inclusión podría reducir la brecha de participación laboral en 2 puntos porcentuales adicionales frente a lo registrado en 2024.
- **El desafío de Antioquia, en consecuencia, no es únicamente sostener el crecimiento:** parte de mantener el liderazgo y un mayor dinamismo en comparación al nivel nacional, es asegurar que estos procesos sigan mejorando la calidad de vida, amplíen las libertades de las personas y se fortalezca el desarrollo humano.



Anexos

Anexo 1. Algoritmo de medición de informalidad del DANE.

Para la medición de la informalidad, el DANE dispone de códigos en formato STATA y SPSS en sus anexos estadísticos⁸ que permiten identificar a los trabajadores informales conforme a la definición previamente establecida. A continuación, se presenta un esquema con las aclaraciones sobre el funcionamiento del algoritmo y la forma en que clasifica a los ocupados informales según su posición ocupacional.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la GEIH - DANE (2025)

8. Para consultar el último anexo disponible puede acceder al siguiente link: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-informal-y-seguridad-social>



Referencias

ANIF. (2025). Informalidad: la otra cara del rebusque. <https://www.anif.com.co/medios/informalidad-la-otra-cara-del-rebusque/>

Antioquia Cómo Vamos (2024). Informe de Calidad de Vida 2023. https://www.antioquiacomovamos.org/wp-content/uploads/2025/08/20240821_ICV-ANTIOQUIA.pdf.

Banco de la República. (2020). Metodología: Encuesta Mensual de Expectativas Económicas. <https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/guia-metodologica-encuesta-mensual-emeee.pdf>.

Banco de la República. (2024). Boletín Económico Regional: Noroccidente, IV trimestre de 2024. <https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/boletin-economico-regional/noroccidente-4-trimestre-2024>.

Banco de la República. (2025). Nueva evidencia sobre la informalidad laboral y empresarial en Colombia. <https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/6db78584-da96-4f8b-a0c9-fb5a306cdffc/content>

Cigüenza, N. (2024, 10 de septiembre). Gobierno Petro radicó nueva reforma tributaria con la que busca 12 billones de pesos: ¿qué cambios busca implementar?. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/gobierno-de-gustavo-petro-radico-nueva-reforma-tributaria-que-busca-12-billones-de-pesos-3379727>

Cigüenza, N. (2025, 15 de agosto). Sobrevivir en el ‘rebusque’. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/sobrevivir-en-el-rebusque-3481575>

CCMA. (2023, marzo). Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo – RAED (Edición No. 28). <https://www.camaramedellin.com.co/biblioteca/raed-vigesima-octava-edicion-1>.

DANE. (2025). Boletín técnico Ocupación informal – Mayo -Julio 2025. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHEISS-may-jul2025.pdf>

DIAN. (s.f.). Tablero De Estadísticas De Comercio Exterior. <https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/Tablero-de-estadisticas-de-comercio-exterior.aspx>.

Gobernación de Antioquia. (2025). Anuario Estadístico Del Sector Agropecuario En El Departamento De Antioquia Año 2024. <https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Agricultura/2025/anuario-estadistico-agropecuario-del-ano-2024-2.pdf>

Mesa de Empleo de Antioquia. (2025). Informe de la Mesa del empleo de Antioquia 2025 – 1. <https://universidadeafit.widen.net/view/pdf/2uzqnembnl/informe-mesa-de-mepleo-antioquia-2025-1v2.pdf?u=mn1cjs>



Migración Colombia. (s.f.). Flujos Migratorios – 2019 a 2024. <https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/FlujosMigratorios-2025/Inicio> .

OECD. (s.f.). Ageing and employment. <https://www.oecd.org/en/topics/ageing-and-employment.html#:~:text=People%20are%20working%20longer%20but,and%20active%20throughout%20their%20lives>

Organización Internacional del Trabajo. (s.f.-a). What is informal employment?. <https://www.ilo.org/media/5481/download#:~:text=ILO%20brief,paid%20annual%20or%20sick%20leave>.

Organización Internacional del Trabajo. (s.f.-b). Estadísticas sobre la población y la mano de obra. <https://ilostat.ilo.org/es/topics/population-and-labour-force/>
Sen, A (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.

Unidad de Planeación Minero Energética. (s.f.). Balance Minero Colombiano. <https://www.upme.gov.co/simec/mineria/balance-minero-colombiano/>.

Vargas, R. (2023, 16 de Marzo). Atención: Gobierno radicó la reforma laboral en el Congreso, esto buscará. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/negocios/reforma-laboral-2023-colombia-petro-se-radico-en-el-congreso-IM20799320>



6.

Educación

Introducción

La educación es uno de los principales impulsores de la movilidad social y puede aportar a la reducción de brechas sociales y económicas existentes. En el departamento de Antioquia se han observado mejoras en términos de eficiencia educativa como la recuperación en la aprobación académica, acompañada de una reducción en la reprobación y deserción escolar. A pesar de esto, se presenta una afectación en la cobertura escolar; el número de estudiantes matriculados se ha reducido entre 2019 y 2024. Además, el departamento enfrenta un reto crítico relacionado con el logro académico, especialmente en las competencias básicas de lectura crítica. Este rezago impacta el desarrollo académico de los estudiantes, su transición a la educación superior e inserción al mercado laboral.

En este contexto, es importante fortalecer la formación en capacidades y habilidades de aprendizaje en educación básica y media, potencializar e incentivar la formación técnica y tecnológica, y consolidar más proyectos educativos como los programas “Aprendamos Todos a Leer” y “Jóvenes Pa’ Lante” que buscan asegurar el acceso, permanencia y buen desempeño educativo en Antioquia.

En este capítulo se describe la situación actual de la educación en Antioquia a partir de cuatro enfoques: (i) cobertura, (ii) eficiencia, (iii) calidad educativa y logro académico y (iv) educación superior. Para este análisis se hizo uso de las fuentes de información como: Ministerio de Educación Nacional (MEN), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), Lupa para la Educación de Antioquia (LEA) de Proantioquia y la Encuesta de Opinión en Educación para jóvenes de la Fundación Empresarios por la educación.



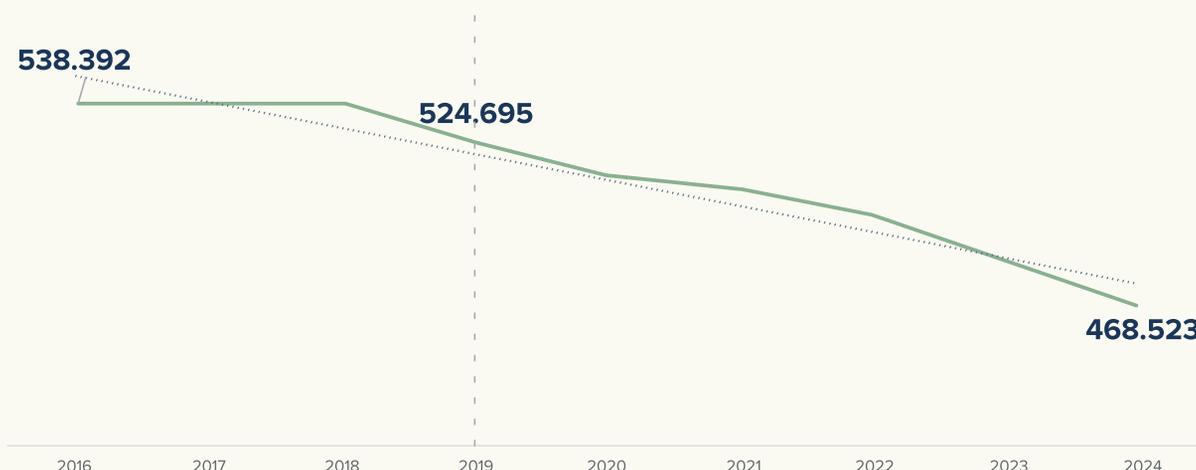
Cobertura

La cobertura escolar en Antioquia refleja una tendencia alarmante que se ha profundizado en los últimos años. En el último Informe de Calidad de Vida presentado por Antioquia Cómo Vamos (2024) ya se había realizado una advertencia sobre la disminución en el número total de estudiantes matriculados en educación básica (primaria y secundaria). Sin embargo, esta tendencia se mantuvo para el 2024. Al realizar la comparación con 2019, el número de matriculados

pasó de 524.695 a 468.523¹, representando una reducción de 56.172 alumnos, equivalente a una reducción del 10.7%. Si bien esto podría explicarse por la disminución en la población estudiantil a la que se enfrenta Antioquia, esta caída en la matrícula avanza a un ritmo más acelerado. Es por esta razón que resulta importante continuar con el fortalecimiento en estrategias que garanticen el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Gráfica 1.

Antioquia: número total de estudiantes matriculados por nivel académico en las Entidades Territoriales Certificadas en Antioquia, 2016 a 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de LEA.

Además de esto, se presentan los resultados para la tasa de cobertura bruta escolar para el 2024, un indicador que muestra la capacidad que tiene el sistema educativo para atender la demanda escolar, sin tener en cuenta la edad de los estudiantes matriculados. En este año, la cobertura fue de 99.99%, representando una disminución de 7.58 puntos porcentuales con respecto a

la del 2019, cuando alcanzaba un valor de 107.57%. Esta reducción representa un nuevo reto para Antioquia ya que, como señala el Ministerio de Educación Nacional (2017), un alto nivel de cobertura escolar asegura la equidad en el acceso a oportunidades de aprendizaje y permite garantizar el cumplimiento al derecho de la educación.

¹ Los datos documentados representan el número de matrículas totales registradas en las Entidades Territoriales Certificadas en el departamento de Antioquia reportadas por LEA de 2014 a 2025. Se tuvo en cuenta la sumatoria del número de matrículas según nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria, media y educación en adultos)

² Ante la ausencia de información consolidada para el 2024, se hizo la comparación utilizando datos para 2019 del MEN y para el 2024 de la Lupa para la Educación de Antioquia (LEA).



Eficiencia

En el departamento de Antioquia, a pesar de evidenciar una reducción en la cobertura educativa, se han presentado mejoras en los principales indicadores de eficiencia. Específicamente, en la tasa de aprobación, que mide el porcentaje de alumnos promovidos exitosamente al grado escolar siguiente al finalizar el año académico. Esta tasa mostró en 2024 un incremento de 0.57 puntos porcentuales en comparación con el 2019, pasando de 88.38% a 88.95 %. Si bien en el reporte de calidad de vida de Antioquia del 2023 presentado por Antioquia Cómo Vamos se había registrado una reducción respecto al 2019, alcanzando un 86.69%, para el 2024 esta cifra logró recuperarse.

Teniendo en cuenta el aumento en la tasa de aprobación escolar, podemos interpretar que se están generando pequeñas mejoras en las trayectorias educativas del departamento. La situación se refleja también en la reducción de la tasa de reprobación y deserción, otros dos factores que pueden incidir en la permanencia en el sistema educativo. La tasa de reprobación muestra el porcentaje de estudiantes que, aunque al inicio del año lectivo se matriculan en un grado o nivel escolar, no logran adquirir las competencias básicas ni cumplir con los requisitos mínimos

exigidos por el curso, razón por la cual no lo aprueban. En Antioquia, para 2023 se registró un aumento de 0,88 puntos porcentuales en la tasa de reprobación frente a 2019 (7,59%). No obstante, en 2024 se presentó una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2023 (8,47%), situándose en 7,27 %. Al comparar el resultado de 2024 con el de 2019, la tasa de reprobación pasó de 7,59% a 7,27%, lo que representa una disminución de 0,32 puntos porcentuales.

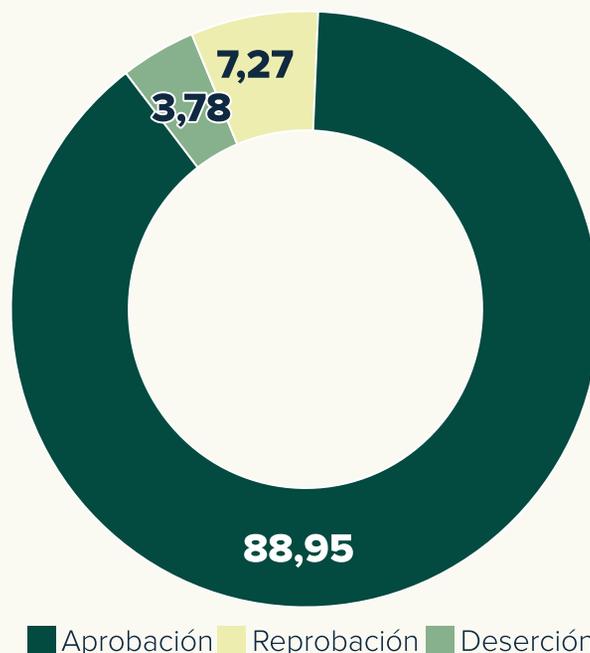
De otro lado, la tasa de deserción³ intraanual, la cual mide en porcentaje cuántos estudiantes abandonan su formación académica en un mismo año escolar, muestra avances positivos en Antioquia. En el año 2019, este indicador se ubicó en 4.02%, sin embargo, para el 2023, según el informe de Calidad de Vida de Antioquia cómo vamos (2024), aumentó hasta alcanzar un valor de 4.83%, reflejando un retroceso en la permanencia estudiantil. A pesar de esto, en el 2024 la tasa de deserción intraanual se redujo notoriamente, posicionándose en 3.78 %. Esto no solo representa una recuperación frente al año anterior, sino que además se ubica 0.24 puntos porcentuales por debajo del valor registrado en el 2019. Ver gráfica⁴ 2.

3 Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la deserción puede ser permanente o transitoria. La tasa intraanual cuantifica los estudiantes que abandonan la escuela en el año escolar. La tasa interanual cuantifica los estudiantes que no regresan al colegio en el siguiente año electivo.

4 Los datos registrados de la tasa de aprobación, reprobación y deserción solo consideran el sector educativo oficial. Además, ante la ausencia de información consolidada para el 2024, se hizo la comparación utilizando datos para 2019 del MEN y para 2024 de la Lupa para la Educación de Antioquia (LEA).



Gráfica 2.
Antioquia: tasa de aprobación, reprobación y deserción del sector oficial, 2024.



Fuente: gráfica obtenida de LEA para el año de 2024.

Calidad educativa y logro académico

Dentro del sistema educativo, la calidad del aprendizaje es un pilar fundamental para garantizar que las personas logren obtener competencias y habilidades necesarias no solo para la participación en el mundo laboral, sino también para continuar en su proceso formativo. Asimismo, un ambiente escolar que ofrezca buenas condiciones para el aprendizaje habilita e incentiva a más jóvenes a acceder a la educación superior, pues un mayor desempeño académico suele ser un requisito para la admisión en las distintas instituciones.

En Antioquia, según la última encuesta de Opinión en Educación para Jóvenes de la Fundación Empresarios por la educación (2024), el 53% de los jóvenes en el departamento consideran que la calidad en la educación es mejor en comparación con la obtenida en años anteriores tal como lo muestra la gráfica 3. Además, consideran que contar con mejores maestros y ambientes de aprendizaje son los elementos principales que contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa. Esto refleja que la mayoría de los jóvenes del departamento son optimistas frente a la mejora en la calidad educativa, sin embargo, aún hay una alta proporción (44%) que considera que sigue igual o peor que antes.



Gráfica 3.

Antioquia: proporción de jóvenes que consideran que la calidad de la educación en este momento es mejor/igual/peor en comparación con años anteriores, 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de la Encuesta de Opinión en Educación para jóvenes de la Fundación Empresarios por la Educación.

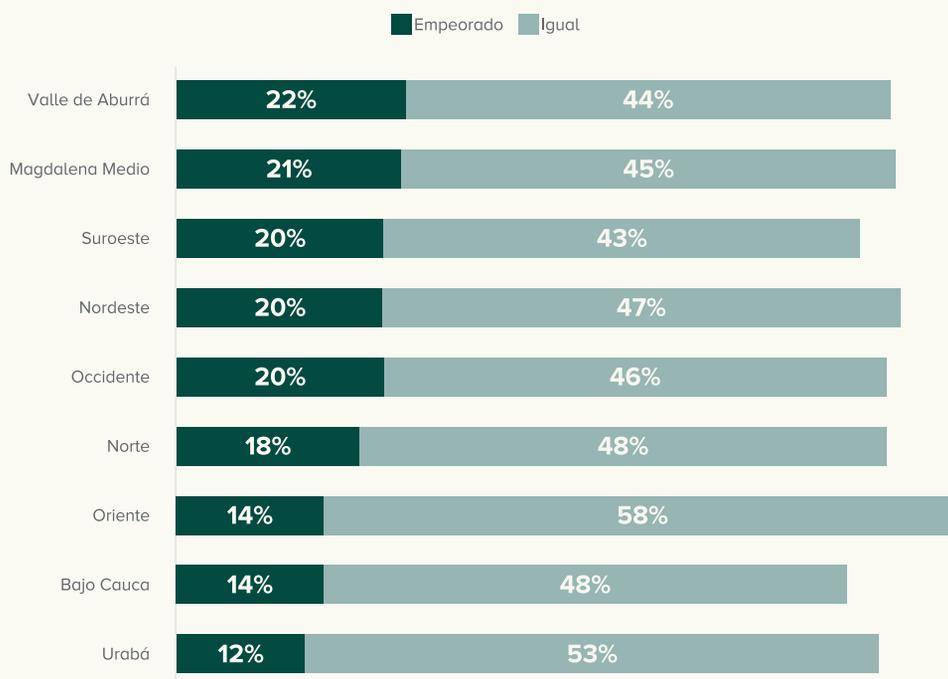
Contrario a las perspectivas de la población juvenil, los hogares antioqueños tienen una percepción diferente frente a la calidad educativa departamental. En los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida realizada por la Gobernación de Antioquia para el año 2023 se muestra que el 66% de los hogares⁵ encuestados no percibe una mejora de la educación brindada en los colegios y escuelas antioqueños. Ampliando este análisis de percepción, la gráfica 4 muestra que, en todas las subregiones, más de la mitad de los hogares encuestados consideran que la educación brindada en los colegios de su área sigue siendo igual o ha empeorado, siendo la región de Oriente la que presenta un mayor porcentaje (72%), seguida de Nordeste (67%).

⁵ Los hogares encuestados dentro de la Encuesta de Calidad de Vida hacen referencia al jefe de hogar o informantes calificados que tienen una opinión sobre la educación. Se toma en cuenta 28.491 encuestados(as) que representan a 1.764.733 hogares del departamento (alrededor del 72% del total de hogares).



Gráfica 4.

Antioquia; proporción de los hogares a que consideran que la educación brindada en los colegios de su área sigue igual o ha empeorado según la subregión, 2023.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de la ECV departamental – Gobernación de Antioquia, 2023.

Más allá de la percepción ciudadana que se tiene en general sobre la calidad educativa, el panorama real resulta ser más desfavorable. En el departamento se atraviesa un nuevo desafío relacionado al logro académico y es que se evidencia falencias en las capacidades de análisis, dentro de ellas, el desempeño en lectura crítica. Esta situación resulta especialmente preocupante ya que la comprensión lectora es una competencia fundamental para mejorar el pensamiento crítico, resolución de problemas y aplicación de estrategias (Saldarriaga, Martín y Ocampo, 2019).

Contar con buenas competencias en lectura crítica les permite a las personas desempeñarse de mejor forma en su proceso académico, incluso puede reducir las probabilidades de repitencia o abandono escolar. Además, para los estudiantes que se encuentran en sus últimos años de colegio, contar con un buen nivel de comprensión lectora y tener seguridad en esta, puede contribuir con el tránsito inmediato a la educación superior, mejorar el rendimiento académico en la universidad y su formación en habilidades necesarias para la vida laboral (Vélez, Cedeño y Vélez, 2019).

6 El ICFES clasifica a los estudiantes en cuatro niveles de desempeño, donde 4 es el de mejor desempeño y 1 el más bajo; el nivel 3 es el mínimo que debe alcanzar un estudiante para demostrar que tiene dominio aceptable de las competencias básicas de lectura esperadas para un bachiller.

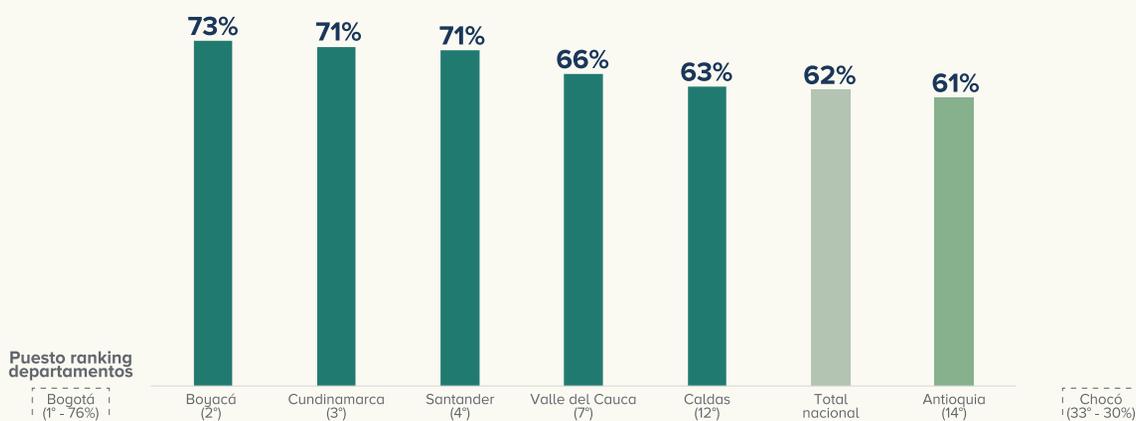


En la gráfica 5 se muestra la proporción de estudiantes que alcanzan un nivel de competencias mínimas⁶ de lectura en Antioquia según los resultados en las pruebas ICFES del 2024. Haciendo la comparación con algunos departamentos similares se muestra que Antioquia tiene la menor proporción de estudiantes que alcanzan las habilidades

básicas de lectura esperadas para un bachiller. Gracias a esto, el departamento se posiciona en el puesto número 14, por debajo de departamentos como Caldas, inclusive, un punto porcentual por debajo del total nacional. Estos resultados indican que, aproximadamente 2 de cada 5 bachilleres en Antioquia se graduó sin alcanzar el nivel básico de alfabetización lectora.

Gráfica 5.

Departamentos principales: Proporción de estudiantes ubicados en los niveles de desempeño 3 y 4 de la prueba de lectura crítica del examen Saber 11 según departamento, 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de los ICFES.

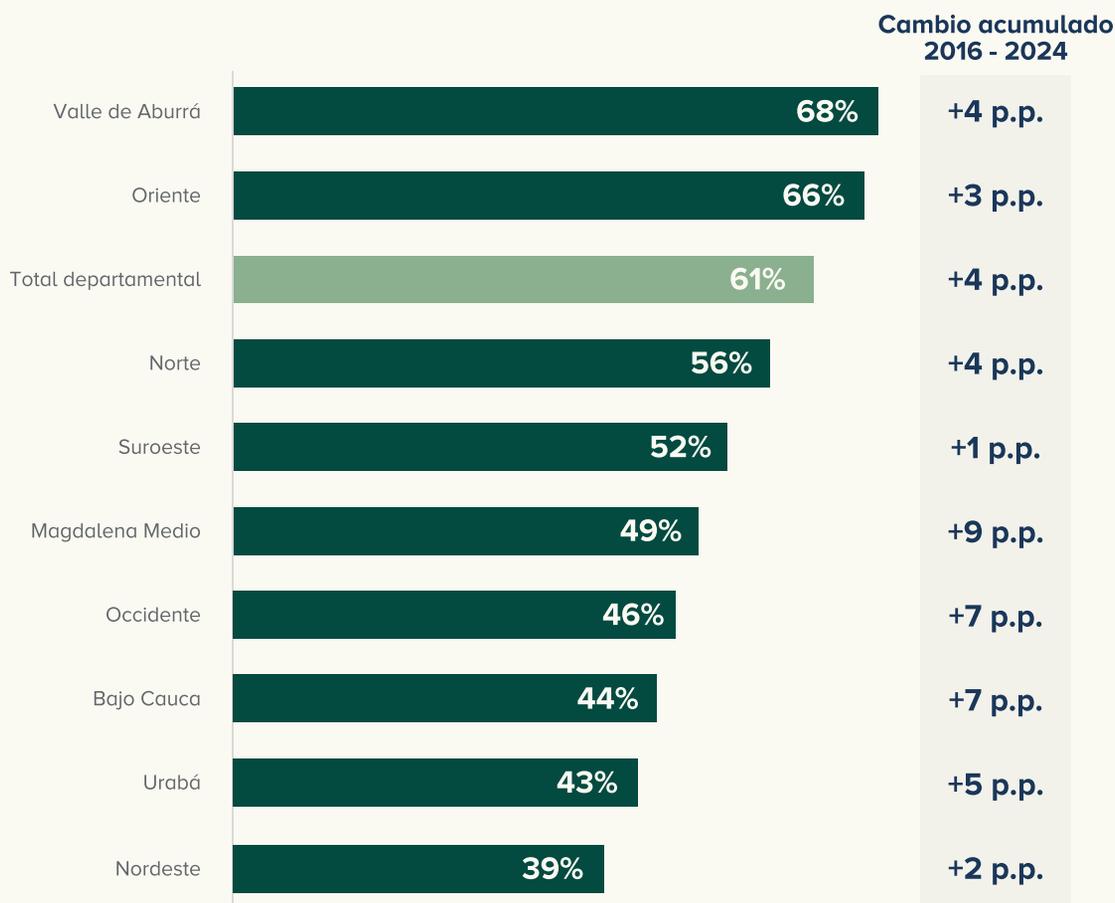
En continuidad con la anterior, según los resultados de los ICFES, entre 2016 y 2024 solo se tuvo una mejora de 4 puntos porcentuales en la lectura crítica en Antioquia, una mejora mínima considerando el aumento de otros departamentos como Boyacá (10 p.p.) Cundinamarca (9 p.p.), Santander (8 p.p.), Caldas (8 p.p.) y Valle del Cauca (8 p.p.).

Visto desde las diferentes subregiones antioqueñas, la gráfica 6 muestra la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel de competencias mínimas según la subregión y cuanto ha sido su cambio acumulado entre 2016 y 2024. Aunque no se evidencia grandes diferencias entre estas, todas presentan retos en la calidad. Ni siquiera la subregión con más alto desempeño (Valle de Aburrá) equipara el de los departamentos comparables con mejor desempeño. Además, solo las subregiones de Magdalena Medio, Occidente y Bajo Cauca han tenido un cambio acumulado similar al de los departamentos ya mencionados.



Gráfica 6.

Antioquia: Proporción de estudiantes que alcanzan las competencias mínimas de lectura según la subregión, 2024 y su cambio acumulado entre 2016 y 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos del ICFES.

Habiendo mencionado la problemática en lectura crítica a nivel departamental, es necesario analizar las posibles causas, con el fin de contribuir al diseño e implementación de políticas efectivas que permitan alcanzar un mejor nivel de desempeño. Inicialmente, se puede plantear que el departamento tiene condiciones particulares sobre las cuales se puede justificar este bajo rendimiento.

Tal como lo explica Gómez, Gutiérrez & Hassan (2011), las características del colegio al cual los asisten los alumnos pueden afectar el rendimiento no solo en la lectura crítica sino también en matemáticas. Sin embargo, como lo muestra la tabla 1, en términos de la proporción de estudiantes matriculados según el sector, área y nivel socioeconómico del colegio no hay diferencias representativas con respecto a los demás departamentos. Incluso, Antioquia tiene una de las poblaciones estudiantiles más grandes de todo el país y cuenta con el mayor número de Entidades Territoriales Certificadas (ETCs) para atender a la población estudiantil.



Tabla 1.
Porción de estudiantes matriculados según sector, área y nivel socioeconómico (NSE) del colegio por departamento, 2024.

Departamento	% Público	% Rural	% NSE bajo (1 y 2)
Caldas	86%	30%	60%
Antioquia	81%	26%	51%
Boyacá	80%	28%	67%
Total Nacional	78%	29%	65%
Santander	77%	24%	61%
Cundinamarca	66%	28%	46%
Valle del Cauca	65%	21%	63%

Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICFES.

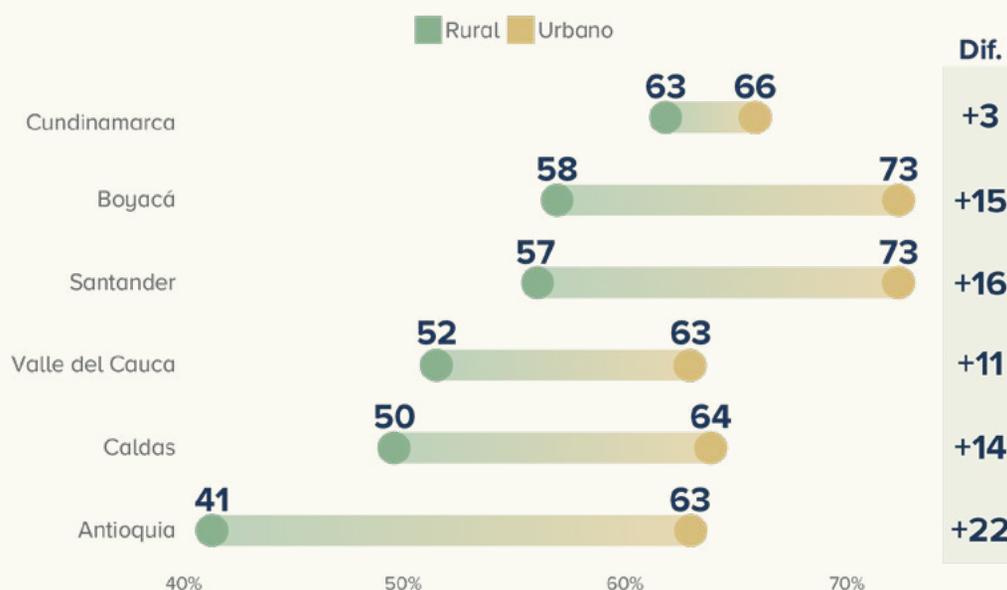
Dejando de lado el planteamiento anterior, se consideran otras hipótesis a las cuales se les puedan atribuir el bajo desempeño en lectura crítica en el departamento. La primera de ellas está relacionada con la educación en áreas rurales. Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana (2024), la educación rural en diferentes departamentos del país aún enfrenta limitaciones. Entre ellos se destaca los bajos resultados en las pruebas Saber 11, falta de docentes capacitados, barreras presupuestales y condiciones inadecuadas en la infraestructura educativa. En este sentido, Antioquia no es la excepción, por ejemplo, para el año 2023, de 100 estudiantes en áreas de ruralidad dispersa, solo 20 de ellos alcanzan a culminar el grado 11 (Alianza ERA, 2023).

En lo concerniente a la lectura crítica, la gráfica 7 muestra que en zonas rurales del departamento se tiene la más baja proporción de estudiantes que alcanzan las competencias mínimas de lectura entre los departamentos comparables. La gráfica resalta que, mientras el desempeño del área urbana en Antioquia es similar al de los demás departamentos comparables, el del sector rural se encuentra notoriamente por debajo de los demás, dejando como resultado una brecha de desempeño de 22 puntos porcentuales, la más grande entre todos los departamentos comparables.



Gráfica 7.

Proporción de estudiantes que alcanzan las competencias mínimas de lectura según departamento y área del colegio, 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de datos del ICFES.

Por otro lado, los bajos resultados obtenidos en lectura crítica también pueden verse perjudicados por las disparidades de desempeño académico en los diferentes colegios departamentales. Entre las instituciones educativas existen diferencias en infraestructura, cuerpo docente, metodología educativa, zona en la que se encuentran ubicados, etc. Profundizando un poco más, mostramos que el desempeño en los colegios de nivel socioeconómico más bajo es inferior en Antioquia que en los demás departamentos comparables.

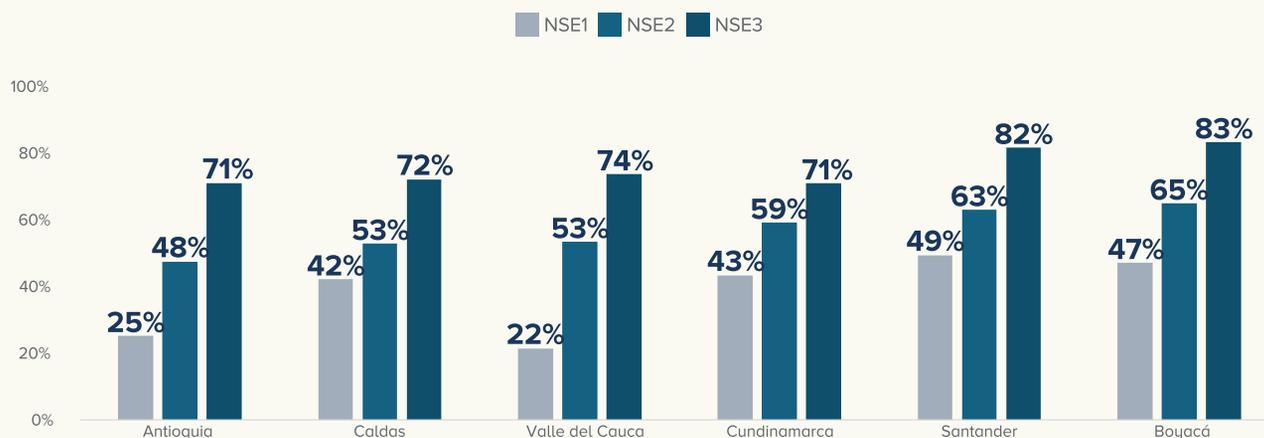
Al observar la gráfica 8 se muestra que los colegios⁷ de Antioquia de nivel socioeconómico alto (NSE 3) tienen un desempeño similar al resto de los departamentos, pues el 71% sus estudiantes alcanzan las competencias mínimas en lectura, una proporción equivalente a la de Cundinamarca y Caldas. Sin embargo, los colegios en los niveles socioeconómicos más bajos (NSE 1 y 2) presentan un desempeño notablemente inferior. En el caso del NSE 2, solo el 48% de los individuos alcanza las competencias mínimas, esta cifra está 15 p.p.⁸ por debajo de Santander y 17 p.p. por debajo de Boyacá. Para el NSE 1, la brecha es más notoria, pues solo el 25% de los estudiantes de Antioquia alcanzan las competencias mínimas, mientras que en Santander esta proporción alcanza el 49%.

7 En los cálculos presentados, solo se incluyen estudiantes del sector oficial (público)

8 Puntos porcentuales.



Gráfica 8.
Proporción de estudiantes que alcanzan las competencias mínimas de lectura según NSE y departamento, 2024



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de datos del ICFES.

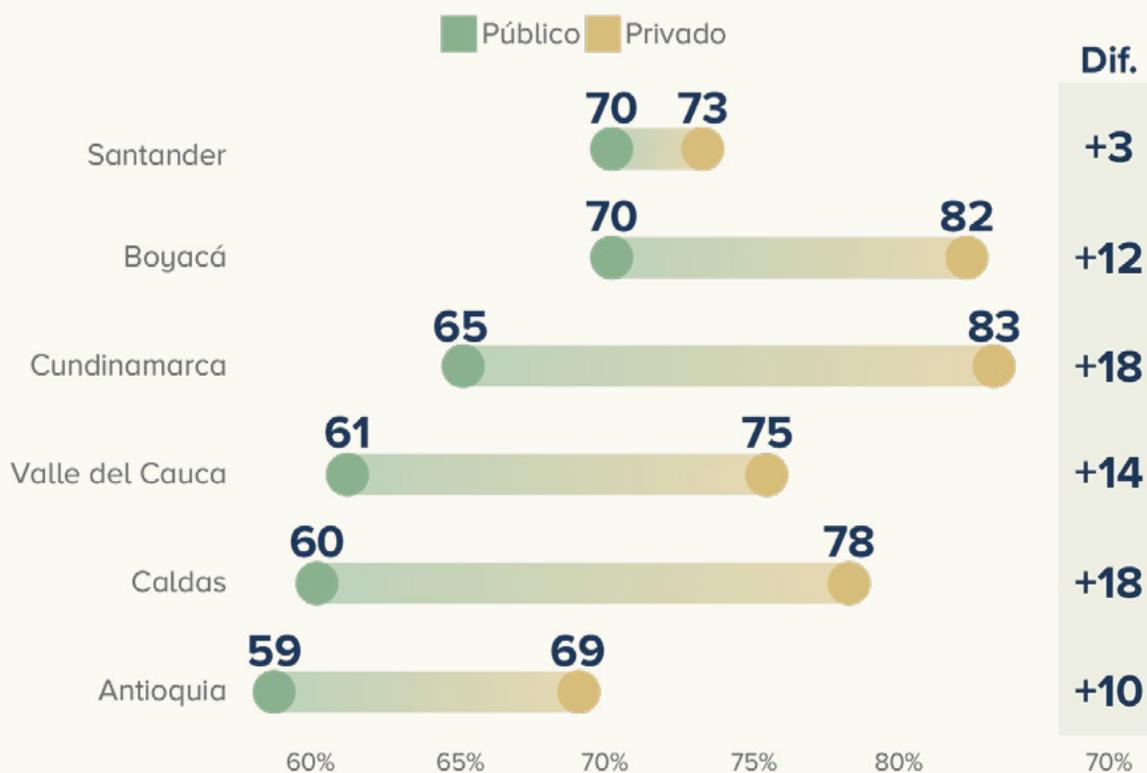
Finalmente, los bajos resultados también pueden darse porque el sector privado educativo en Antioquia no contribuye con el aumento en el desempeño tanto como en otros departamentos. Para argumentar esta idea se muestra en la gráfica 9 que, mientras que en departamentos como Boyacá o Cundinamarca los colegios privados logran que el 80% de los estudiantes alcancen los niveles mínimos en lectura crítica, en Antioquia esta proporción alcanza solo el 59%, ubicando al departamento por debajo de sus pares comparables.

Lo anterior, a pesar de que la brecha de desempeño entre el sector público y privado del departamento no es tan grande como por ejemplo la de Caldas (18 puntos porcentuales) o la de Valle del Cauca (12 puntos porcentuales). Si bien es importante reducir

la brecha existente entre el desempeño de colegios oficiales y no oficiales, los colegios privados en el departamento también tienen un amplio margen de mejora para aumentar la calidad y desempeño educativo de sus estudiantes.



Gráfica 9.
Porción de estudiantes que alcanzan las competencias mínimas de lectura según departamento y sector del colegio, 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de datos del ICFES.

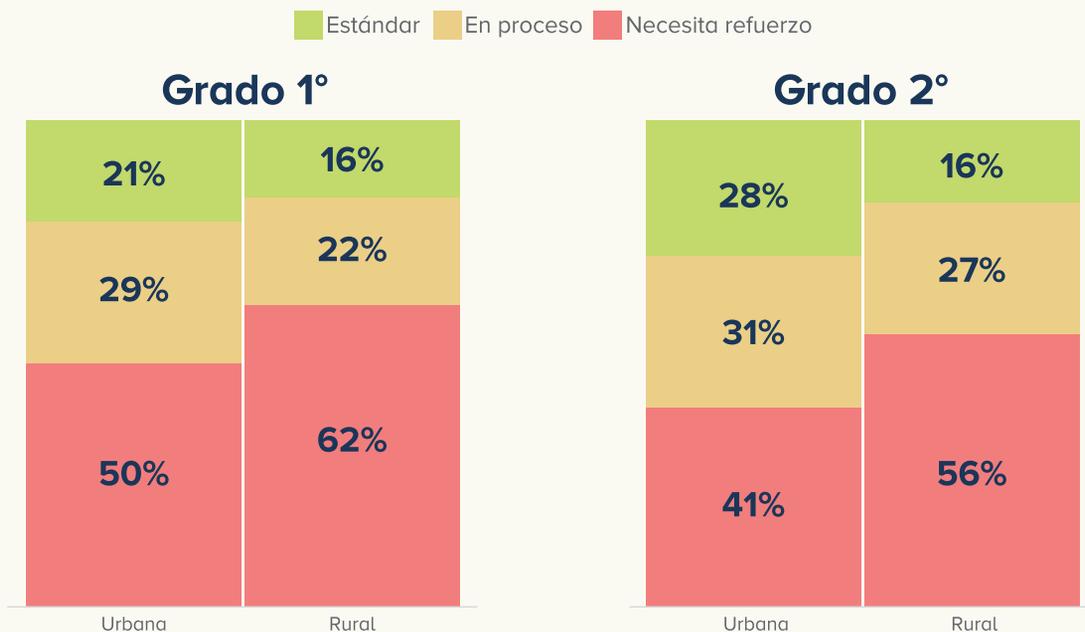
Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia ha implementado distintas estrategias para mejorar el diagnóstico de los niveles de aprendizaje y abordar los rezagos existentes. Una de estas estrategias ha sido su participación directa como entidad pública aportante en el programa Aprendamos Todos a Leer (ATAL), el cual es ejecutado por una alianza de organizaciones que integran al sector público, privado y social (Gobernación de Antioquia, 2025), y busca fortalecer desde los primeros años escolares las competencias de lectura y escritura, a través de la formación docente y acompañamiento pedagógico.

En el marco de esta estrategia, se realizó un diagnóstico inicial, en el que se identificó que los rezagos y limitantes en el aprendizaje comienzan tan pronto como los estudiantes inician su trayectoria en el sistema educativo. La gráfica 10 muestra los resultados del índice de fluidez lectora⁹ para el 2024, en los que se evidencia que más del 40% de los niños de 1° y 2° en áreas urbanas de Antioquia necesitan refuerzo de sus competencias lectoras, inclusive, en las áreas rurales, esta proporción es mucho mayor, superando el 50%.

9 Tener en cuenta que las cifras presentadas del índice de fluidez lectora son preliminares.



Gráfica 10.
Antioquia: Resultados del índice de fluidez lectora, 2024.



Fuente: Early Grade Assessment (EGRA)-Banco Mundial y Gobernación de Antioquia.

Además, la Gobernación de Antioquia ha realizado otros esfuerzos para fortalecer otras competencias educativas que presentaban retrocesos en los resultados al cierre del 2024, en especial en zonas rurales. Por ejemplo, según indicadores del Plan de desarrollo departamental, Para finales del 2024 se logró beneficiar a 29.163 estudiantes con el programa de educación rural, incluso cuando la meta establecida era de 28.430 alumnos. Este avance cobra mayor relevancia porque, como se mencionó, la brecha en la calidad educativa entre zonas rurales y urbanas hace que dicho programa sea uno de los más urgentes en el departamento.

No obstante, hay otras iniciativas realizadas por la Gobernación que mostraron un desarrollo deficiente y que deben ser abarcadas para continuar con el buen avance en la formación escolar. En concreto, para el 2024 se tenía previsto beneficiar a 3.000

estudiantes con procesos de formación en inglés como lengua extranjera, a pesar de esto solo se logró beneficiar a 548. Aún más grave, para este mismo año se esperaba apoyar a 2,000 niños, niñas y adolescentes de establecimientos educativos oficiales en sus aptitudes y vocaciones científicas, sin embargo, no se reportó ningún logro. Cabe resaltar que, a pesar de las limitaciones, durante el 2024, el 16.3% de los establecimientos educativos oficiales lograron mejorar su categoría en las pruebas Saber 11, 2,1 p.p. por encima de la meta anual establecida en el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) para ese indicador (14,2%). Esto, a pesar de mostrar una mejora en los establecimientos educativos oficiales, no asegura un avance absoluto en la situación educativa del departamento. Es por esto que se debe seguir impulsando nuevas iniciativas y proyectos para la mejora general en el rendimiento educativo.



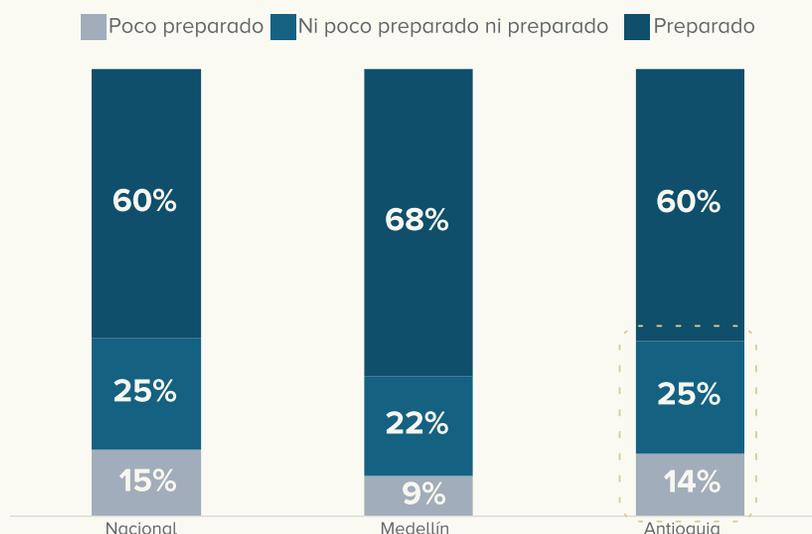
Educación superior

Dentro del sistema educativo, la calidad del Las falencias en el desarrollo de competencias se pueden convertir en barreras para el acceso a la educación superior. En Antioquia, al menos 2 de cada 5 jóvenes expresan no sentirse preparados para iniciar su formación en educación superior. La gráfica 11 muestra que, aunque el departamento registra un 39% entre los jóvenes que no se sienten prepara-

dos o se sienten poco preparados, promedio similar al nacional, si se excluyera a Medellín, la diferencia se vuelve más evidente. Esta situación refuerza la urgencia de fortalecer la formación en competencias lecto escritoras y analíticas durante la educación básica y media, de tal forma que los estudiantes puedan realizar el tránsito a la educación superior.

Gráfica 11.

Colombia: percepción de los jóvenes sobre qué tan preparados están para ingresar a la educación superior, 2024.



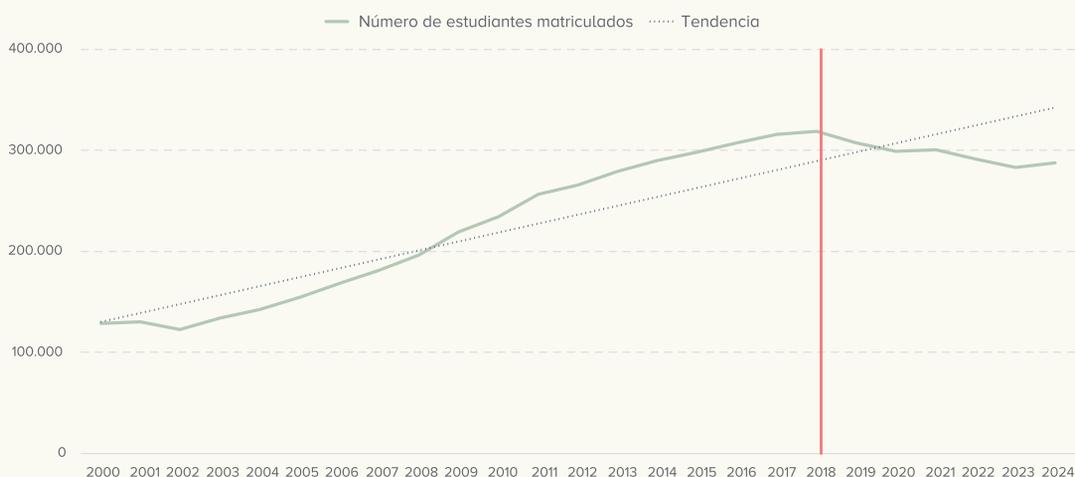
Fuente: tomado de la Encuesta de Opinión en educación para jóvenes de la Fundación Empresarios por la Educación.

Ahora bien, más allá de la preparación de los bachilleres, se presenta otra situación con respecto a las matrículas en educación universitaria, técnica y tecnológica. Por un lado, se presenta que entre 2002 y 2017 se tiene un aumento sostenido en el número de estudiantes matriculados en programas de pregrado. Sin embargo, esta tendencia se revirtió a partir de 2018, de tal forma que el número de matrículas se redujo, ver gráfica 12. Solo en el 2024 la tendencia negativa de estos últimos seis años logró mostrar un leve aumento del 2% con respecto al 2023 en las matrículas universitarias¹⁰.

¹⁰ El leve aumento mencionado se puede comprobar en la gráfica 13 que muestra el cambio de la matrícula en educación superior entre 2019 y 2024 según el nivel de formación.



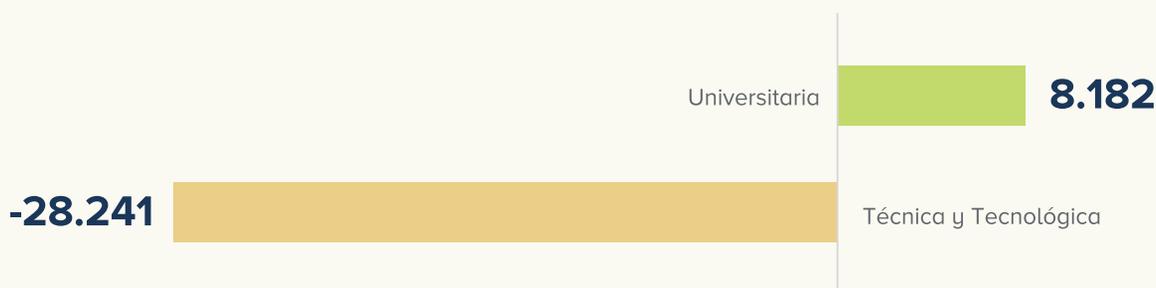
Gráfica 12.
Antioquia: número de estudiantes matriculados en programas de pregrado en el departamento, 2000 - 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de SNIES.

En este caso, es necesario comprender que la motivación de los estudiantes es importante para comenzar su formación universitaria. No obstante, este impulso se ha visto perjudicado por barreras financieras como la reducción de financiación en programas universitarios por parte del ICETEX desde mediados del 2024. Además, quienes no cuentan con las posibilidades suficientes para ingresar a la universidad pueden optar por programas de formación técnica o tecnológica; no obstante, en el ámbito social, este tipo de educación no recibe el mismo reconocimiento que la universitaria. Desde 2019, la matrícula en este nivel educativo ha disminuido sustancialmente, ver gráfica 13.

Gráfica 13.
Antioquia: cambio de la matrícula en educación superior según nivel de formación, 2019 -2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de SNIES.



Al mismo tiempo, resulta fundamental mejorar la pertinencia de los programas que se ofrecen en estos niveles educativos, puesto que en los últimos años se ha detectado una mayor percepción de desconexión entre el estudio y el trabajo por parte de los jóvenes. Según el reporte de educación superior de Medellín y Antioquia cómo vamos con Corporación Universitaria Remington, para el 2024, alrededor del 70% de los jóvenes en Antioquia perciben que no hay relación entre su educación y su trabajo.

Esto se ve reflejado en que un número cada vez menor de jóvenes del departamento prefiere acceder a una formación en educación. La gráfica 14 muestra que el número de personas entre 17 y 21 años que dedican la mayor parte de su tiempo a estudiar disminuyeron un 16,2% entre 2019 y 2024. La gráfica también muestra que los individuos que están trabajando o se encuentran buscando trabajo también se redujo un 6.5%, sin embargo, esta esta disminución es mucho más grande para quienes estudian. Además, según los datos de la Encuesta de Opinión en Educación para jóvenes de la Fundación Empresarios por la Educación, al menos 2 de cada 5 jóvenes en Antioquia no están de acuerdo con que obtener un título universitario garantiza un empleo bien remunerado.

Gráfica 14.

Antioquia: actividades en las que las personas entre 17 y 21 años dedican la mayor parte de su tiempo, 2019 - 2024.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE.

Respecto a la situación presentada, es necesario aclarar que tener acceso a una formación académica en educación superior es un factor determinante que puede contribuir con la mejor calidad de vida de las personas. Gracias a esta, los individuos pueden aspirar a recibir salarios más altos, mejores puestos laborales, contar con mayores beneficios para ellos y sus familias, además de facilitar el acceso a los mercados financieros (Martínez, Ramirez & Duarte, 2020). En general, los retornos de la educación superior pueden potencializar la movilidad social.

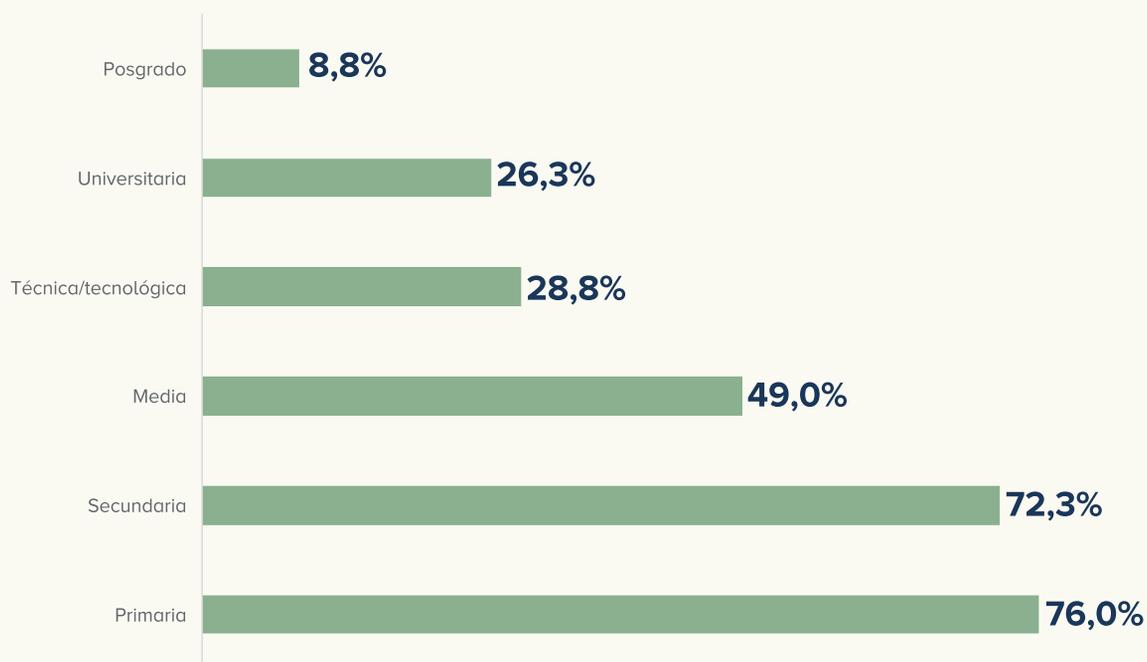


Para el caso de Antioquia, en 2023, mientras que alrededor del 70% de las personas que solo cursaron primaria o secundaria se encontraban trabajando en empleos informales, menos del 30% de los individuos que alcanzaron algún nivel de educación superior hacen parte del mercado laboral informal. La diferencia es aún más marcada en niveles superiores de educación, ya que la informalidad se reduce al 26% en educación universitaria. Estos datos refuerzan el papel de la educación superior como motor de movilidad social en el departamento, y refuerzan la necesidad de que se promueva enfáticamente por los diferentes organismos regionales.

Pese a ello, la tasa de informalidad entre las personas que alcanzaron una educación universitaria es muy similar a la registrada

en educación técnica y tecnológica (gráfica 15). Dado lo anterior, resulta fundamental continuar fortaleciendo la formación técnica y tecnológica como una alternativa de calidad y con mayor reconocimiento social. En el departamento, no solo se requiere promover la excelencia en la educación universitaria, sino también en este tipo de programas, ya que representan una oportunidad para adquirir conocimientos y herramientas específicas que pueden aportar de manera significativa a la movilidad social y a la mejora de la calidad de vida. En este contexto, toma una gran relevancia el lanzamiento del programa “Jovenes Pa’Lante, Antioquia” en el 2025, que busca entregar 5.700 becas para cursar programas técnicos laborales y contribuir con la reducción en las brechas ya evidenciadas.

Gráfica 15.
Antioquia: tasa de informalidad según nivel educativo, 2023.



Fuente: elaboración de Antioquia cómo vamos a partir de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)-DANE.



De manera subsecuente, en el departamento se presentan dificultades en algunos indicadores clave para fortalecer el ecosistema departamental de educación superior. Aunque en el indicador de acceso a programas de articulación y media técnica el departamento logró superar la meta en el 2024, beneficiando a 8.471 estudiantes frente a 7.500 que se tenían previstos, en el indicador de becas o créditos condonables para programas postsecundarios y terciarios no se registró ningún avance frente a la meta establecida de 8.500 beneficiarios. Asimismo, la estrategia implementada de Universidad en el Campo alcanzó solo 150 estudiantes, por debajo de los 664 proyectados. No obstante, la tasa de cobertura bruta en educación superior fue del 57.4% en el 2024, superando de forma significativa la meta presentada en el Plan de Desarrollo Distrital la cual era del 25%.



Conclusiones

- En el 2024 se presentaron mejoras en los indicadores de eficiencia educativa, a pesar de la reducción en la cobertura escolar. Un mayor número de estudiantes alcanzaron los logros educativos necesarios para aprobar un año escolar, en comparación con el 2019. Esto también muestra mejores resultados frente al 2023 presentados en el reporte de calidad de vida de Antioquia. Como es de esperarse, la tasa de reprobación disminuyó, además, la proporción de estudiantes que desertan del proceso educativo también se redujo. Dicho progreso, contribuye al fortalecimiento de la formación de los estudiantes en habilidades para su mejor desempeño social y en la vida laboral.
- En el departamento de Antioquia continúa la tendencia en la reducción en cobertura que ya había sido informada en el informe para el año anterior mostrado por Antioquia Cómo Vamos. Durante el 2024, el número de personas matriculadas en las entidades educativas fue menor, con respecto al 2019. La disminución hace evidente la existencia de algunos retos que deben ser socializados y abordados para garantizar que más personas tengan acceso y se mantengan en el sistema educativo.
- La calidad del aprendizaje y el buen logro académico es un desafío en Antioquia. Muchos de los individuos que se encuentran estudiando no alcanzan a desarrollar las competencias básicas en lectura crítica, limitando sus oportunidades de aprendizaje y en un futuro, su participación en el mercado laboral.
- Al comparar con otros departamentos similares, se evidencia que la educación rural en Antioquia tiene mayores deficiencias. Además, el sector educativo no oficial no contribuye a mejorar la calidad educativa como suele suceder en otros departamentos, tal como se muestra en el informe y se presentan carencias en la formación de docentes.
- En términos de percepción ciudadana, mientras que la población juvenil reconoce que la calidad educativa, muchos hogares sienten que la educación no ha presentado mejoras, especialmente en regiones como Oriente y el Nordeste. Cabe resaltar que, muy relacionado con los retos en la adquisición de competencias analíticas, hay jóvenes que expresan no sentirse preparados o sentirse poco preparados para hacer el paso a la educación superior.
- En 2024 se presentó una reducción en el número de personas entre 17 y 21 que dedicaban la mayor parte de su tiempo a estudiar. Así mismo, también disminuyó, aunque en menor medida, el los que trabajaban o buscaban empleo. Aunque esta disminución conjunta podría atribuirse a una reducción en la población total del departamento, según el DANE, para este rango de edad la disminución solo fue del 1%, por lo que deben considerarse otros factores externos. Además, la disminución general en la matrícula en educación superior evidencia la necesidad de estudiar con mayor detalle las causas que afectan las trayectorias educativas y laborales, específicamente de la población juvenil.



Referencias

Alianza ERA. (2023, 30 de julio). ¡Tenemos política pública de educación rural en Antioquia! [Entrada de blog]. Alianza ERA.

Antioquia Cómo Vamos. (2024). Informe de calidad de vida de Antioquia 2023. Antioquia Cómo Vamos. Recuperado de <https://www.antioquiacomovamos.org/download/informe-de-calidad-de-vida-de-antioquia-2023/>

Fundación Empresarios por la Educación. (2024). Encuesta de opinión en educación para jóvenes. Fundación Empresarios por la Educación.

Gómez, S., Gutiérrez, D., & Hassan, A. (2011). Determinantes Del Rendimiento Académico En Colombia: Pruebas ICFES Saber 11, 2009 (Academic Performance Determinants in Colombia: ICFES Saber 11, 2009 Exam). Labor: Human Capital eJournal.

Gobernación de Antioquia. (2025, mayo). Inicia formación a docentes del programa “Aprendamos Todos a Leer”. Antioquia Cuenta – Gobernación de Antioquia.

Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana. (2024, 9 de julio). Informe No. 98: Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer. Pontificia Universidad Javeriana.

Martínez, L., Ramírez, E., & Duarte, H. (2020). Economic realities and perceptions of undergraduates as background of social mobility in Colombia. *Educação e Pesquisa: Revista da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo*, 46(1), 57.

Ministerio de Educación Nacional. (2017, 7 de febrero). Política de ampliación de cobertura. Recuperado el 6 de septiembre de 2025, de Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (s. f.). Deserción escolar. En *Glosario de términos*. Ministerio de Educación Nacional. Recuperado el 3 de septiembre de 2025, de Ministerio de Educación Nacional.

Saldarriaga, C., Martín, L., & Ocampo, A. (2019). Habilidades de pensamiento crítico y estrategias de lectura crítica en docentes y estudiantes del colegio Menorah. estudio de caso.

Vélez, M., Cedeño, L., & Vélez, N. (2019). Técnicas de la lectura crítica y su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes universitarios. *Revista Cognosis*. ISSN 2588-0578.



7.

Seguridad y convivencia ciudadana

Introducción

Hablar de seguridad y convivencia en Antioquia implica reconocer un panorama de contrastes marcados. A primera vista, el departamento se distingue por mantener una percepción de seguridad más favorable que el promedio nacional y por haber alcanzado en 2024 la tasa de homicidios más baja en más de cinco décadas. Sin embargo, esta aparente mejoría convive con realidades territoriales marcadas por la expansión de estructuras criminales, la persistencia de violencias en los hogares y la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones. Los contrastes entre regiones urbanas y rurales, las brechas de género en la experiencia de la inseguridad, el peso de economías ilícitas como el oro y la coca, y las dinámicas de intolerancia cotidiana revelan que la seguridad en Antioquia no puede medirse únicamente en cifras de homicidios o promedios departamentales. La vida cotidiana de cientos de miles de personas sigue atravesada por el miedo, vulneraciones y formas de control que trascienden lo visible en las estadísticas oficiales.



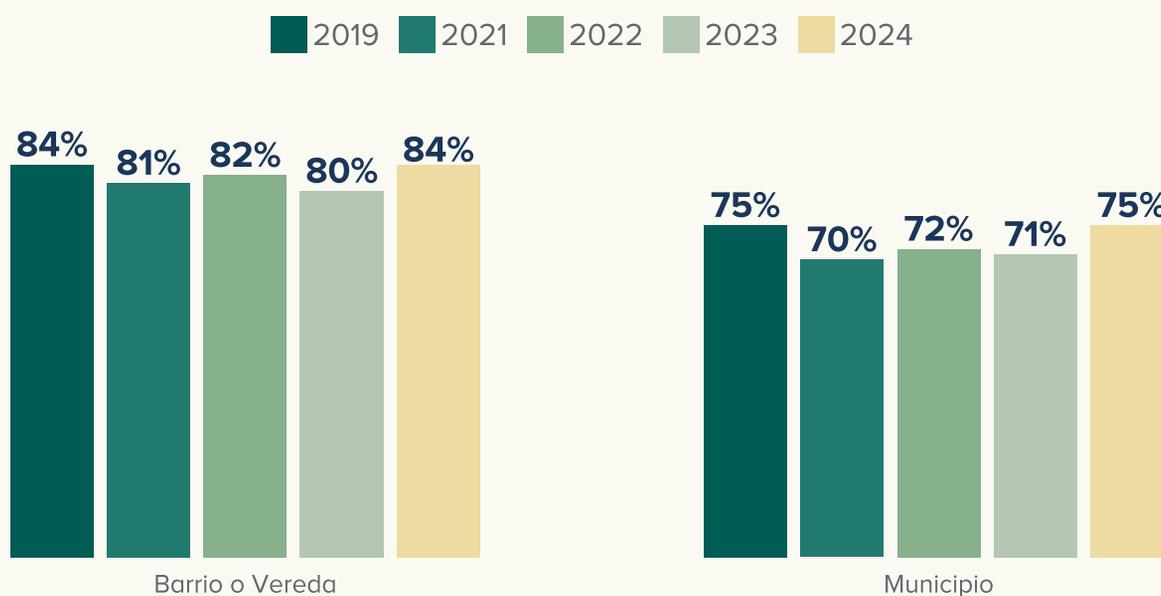
A continuación, este capítulo desarrolla esas complejidades en cuatro secciones. En primer lugar, analiza la percepción ciudadana sobre la seguridad y su contraste con las experiencias de victimización. Posteriormente, se detiene en la violencia en los hogares y contra las mujeres, haciendo énfasis en la confianza institucional. En tercer lugar, examina la intolerancia y la violencia interpersonal como expresión de la conflictividad cotidiana. Finalmente, aborda la incidencia de las estructuras criminales y de las economías ilícitas, y sus profundas repercusiones sobre la seguridad y la vida cotidiana de la sociedad civil.

Percepción ciudadana

Antioquia se percibe, a los ojos de sus habitantes, como un departamento relativamente seguro. En un país donde apenas la mitad de la población dice sentirse seguro o muy seguro en su municipio, en Antioquia tres de cada cuatro personas (75%) lo afirman. Y cuando la mirada se reduce al espacio más cercano esta percepción crece todavía más: ocho de cada diez antioqueños (84%) se sienten seguros o muy seguros en su barrio o vereda (véase el Gráfico 1).

Gráfico 1.

Antioquia: percepción de seguridad según territorio, 2019-2024



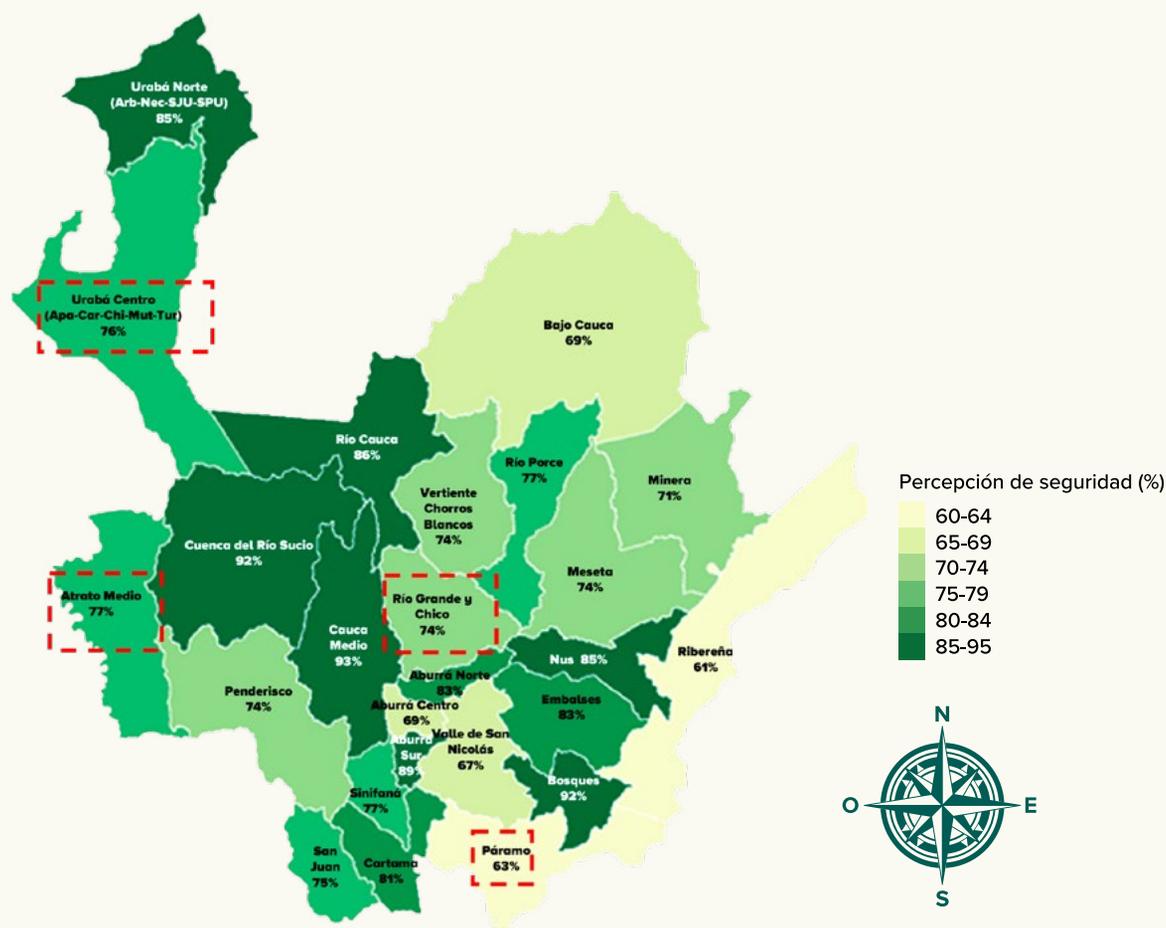
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia



Sin embargo, esta sensación no es homogénea: varía entre subregiones, y en algunos territorios incluso cambió de forma significativa entre 2023 y 2024. Esto evidencia que Antioquia, por su tamaño, diversidad y dinámicas territoriales, requiere ser analizada desde la especificidad local. De lo contrario, los promedios terminan proyectando la visión dominante del Valle de Aburrá y de otros centros urbanos que concentran la mayoría de la población, pero opacan la complejidad y los contrastes que atraviesan al resto del departamento.

La mirada territorial revela contrastes notables (véase el Mapa 1). Zonas como Cuenca del Río Sucio (92%), Cauca Medio (93%), Bosques (92%), Río Cauca (86%) y el Nus (85%) concentran las percepciones más altas de seguridad en el departamento. Por otro lado, regiones como la Ribereña (61%), el Páramo (63%), el Bajo Cauca (67%), el Valle de San Nicolás (67%) y el Aburrá Centro (69%) registran los niveles más bajos, aunque aún por encima del promedio nacional. Estos territorios combinan una percepción media-alta de seguridad con contextos atravesados por delitos de alto impacto —hurto, extorsión, homicidios— y por la influencia de estructuras armadas ilegales, factores que explican la fragilidad de la confianza ciudadana en estos espacios.

Mapa 1.
Antioquia: percepción de seguridad en los municipios según zonas, 2024

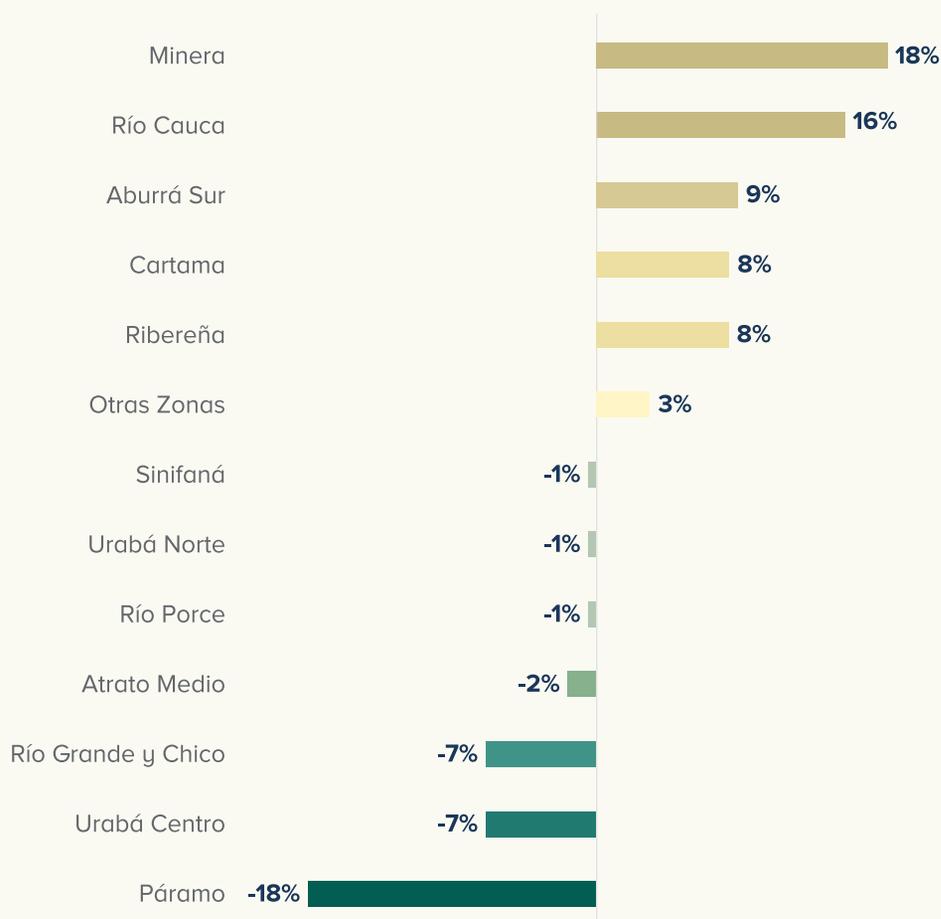


Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia



El análisis del cambio en la percepción entre 2023 y 2024 añade matices clave. La zona Minera, que partía de una de las percepciones más bajas y se ha visto históricamente afectada por la disputa de grupos armados por rentas del oro, microtráfico y extorsión, registró un aumento de 18 puntos porcentuales, mientras que Río Cauca mejoró en 16 puntos. Estos incrementos sugieren avances en territorios críticos. En contraste, el Páramo perdió 18 puntos, y tanto Río Grande y Chico como Urabá Centro retrocedieron en 7 puntos (véase el Gráfico 2). Como se verá más adelante, estas regiones enfrentan presiones relacionadas con presencia de actores armados.

Gráfico 2.
Antioquia: cambio en la percepción de seguridad en los municipios según zonas (p.p.), 2023 - 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

En paralelo con estas percepciones, aunque en 2024 el índice de victimización en Antioquia se mantuvo alto (18%), está muy por debajo del promedio nacional (32%) (ver Gráfico 3). Entre los hechos más mencionados aparecen los hurtos a personas, las amenazas y las riñas o golpes, cada uno con un 5% de autorreporte, seguidos por el hurto de automotores (4%) y la extorsión (3%). Otros eventos como el desplazamiento forzado, el hurto a residencias, los secuestros o el hurto a establecimientos tienen menor frecuencia, pero aportan a la sensación de vulnerabilidad (ver Gráfico 4).



Gráfico 3.
Antioquia: índice de victimización, 2013-2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

Gráfico 4.
Antioquia: índice de victimización según delito, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

El panorama de victimización también confirma la heterogeneidad del departamento. En 2024, las zonas con mayores registros fueron Atrato Medio (24%), Medellín (23%), Ribereña (23%) y Penderisco (21%), todas por encima del promedio departamental. En contraste, territorios como Cuenca del Río Sucio (7%), Cauca Medio (8%) y Bajo Cauca (8%) mostraron menores niveles de victimización, al menos en los delitos medidos por el índice (ver Mapa 2).



Mapa 2.
Antioquia: índice de victimización según zonas, 2024



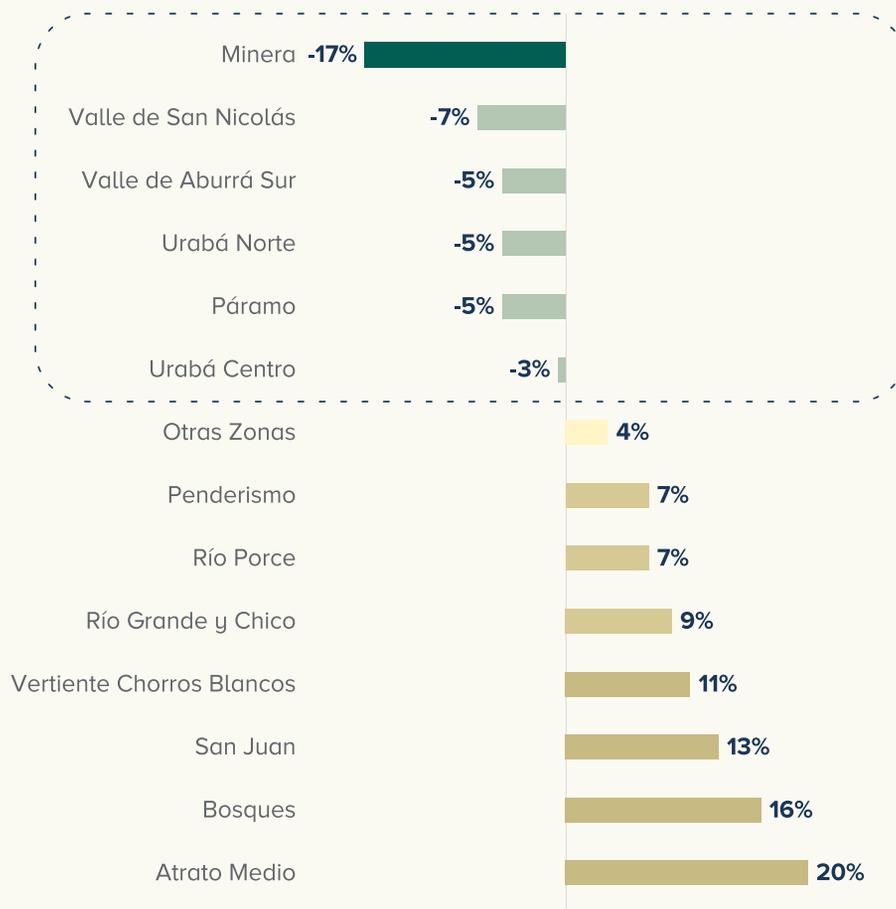
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

El análisis temporal muestra una paradoja interesante: aunque en la mayoría de las zonas aumentó el índice de victimización, en buena parte del departamento la percepción de seguridad mejoró. Este desacople podría reflejar que la percepción de seguridad depende de una gama más amplia de factores que los medidos por el índice.

Dentro de este panorama general destacan dos casos opuestos. Por un lado, la subregión Minera–Nordeste registró la mayor reducción de victimización del departamento, con una caída de 17 puntos porcentuales, acompañada además por un aumento en la percepción de seguridad (ver Gráfico 5). Por otro lado, en el Páramo ocurrió lo contrario: la victimización descendió levemente, pero la percepción de seguridad se desplomó en 18 puntos.



Gráfico 5.
Antioquia: Zonas con mayor cambio en el índice de victimización, 2023 - 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

Al contrastar los dos mapas —de victimización y de percepción de seguridad— se observa que territorios como Ribereña y Medellín combinan altos niveles de victimización con bajas percepciones de seguridad, mientras que zonas como Cuenca del Río Sucio y Cauca Medio presentan la situación opuesta: bajos índices de victimización y percepciones de seguridad muy altas. Otra forma de verlo es como lo muestra el Gráfico 6: las zonas de Antioquia pueden agruparse según la combinación de percepción de seguridad y nivel de victimización.



Gráfico 6.
Antioquia: índice de victimización y percepción de seguridad según zona, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

En el Cuadrante 1 se ubican zonas con altos índices de victimización y percepciones de seguridad solo medias o medio-altas. Allí aparecen Ribereña y Medellín (Valle de Aburrá), acompañadas de subregiones como Penderisco y San Juan, que muestran cómo la intensidad del delito termina erosionando la confianza ciudadana, aun cuando no la reduce por completo.

El Cuadrante 2 agrupa territorios con altos niveles de victimización pero percepciones de seguridad sorprendentemente altas. Este es el caso de Atrato Medio y Bosques, donde, pese a la exposición a hurtos, riñas y extorsiones, una parte importante de la ciudadanía conserva la sensación de sentirse segura. También se encuentran aquí zonas como Nus y Magdalena Medio, donde el contraste entre hechos y percepción refleja dinámicas comunitarias de resiliencia.

En el Cuadrante 3 aparecen regiones con bajos índices de victimización pero percepciones de seguridad más bajas de lo esperado. Allí destacan el Páramo y el Valle de San Nicolás. En estos casos, aun cuando la victimización es menor, la percepción de inseguridad parece alimentarse de hechos simbólicamente fuertes, de la visibilidad de problemas como el microtráfico o de condiciones del entorno urbano y rural que generan sensación de vulnerabilidad.

Finalmente, el Cuadrante 4 corresponde al grupo más favorable: territorios con baja victimización y percepciones de seguridad muy altas. Entre ellos están Cauca Medio, Cuenca del Río Sucio, Río Cauca, Embalses y sectores del Sur del Valle de Aburrá.

Aunque en comparación con el resto del país Antioquia mantiene una percepción de seguridad relativamente alta, no deja de ser sig-

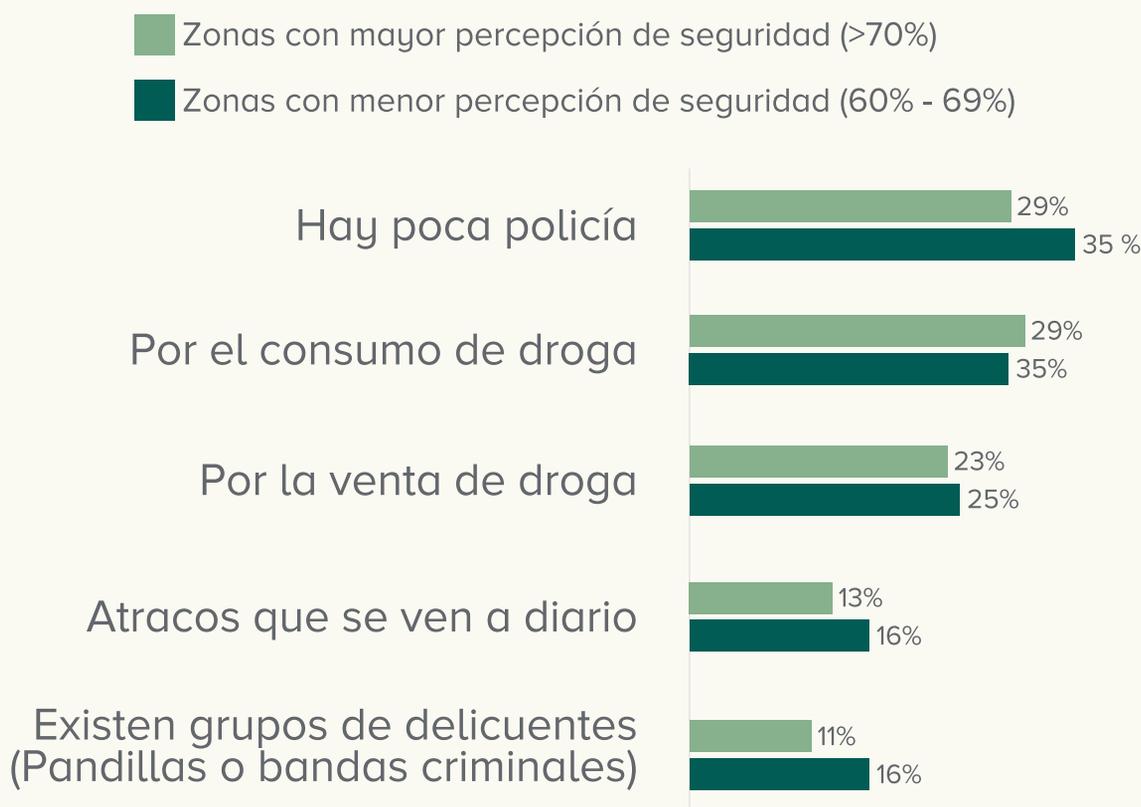


nificativo que uno de cada cuatro habitantes declare no sentirse seguro en su municipio. Esta cifra representa a cientos de miles de personas cuya vida cotidiana se ve condicionada por la inseguridad sentida, incluso si los promedios generales parecen favorables.

La voz de quienes no se sienten seguros señala cinco factores principales: la poca presencia policial (32%), el consumo de drogas (29%), la

venta de drogas (24%), los atracos frecuentes (15%) y la presencia de pandillas o bandas criminales (14%). Como lo muestra el Gráfico 7, estos problemas no solo afectan a las zonas con menor percepción de seguridad, sino que también están presentes en territorios donde la sensación de seguridad es alta, revelando que se trata de factores estructurales presentes en todo el departamento.

Gráfico 7.
Antioquia: TOP 5 problemáticas por las que las personas no se sienten seguras en sus municipios según tipo de zona, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia



Más allá de estos cinco factores predominantes, la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia evidencia una constelación más amplia de problemáticas que deterioran la percepción de seguridad. La Ilustración 1 permite organizarlas en cuatro grandes categorías: violencia intrafamiliar y de género, violencia interpersonal, criminalidad organizada y delitos de alto impacto, y factores del entorno y control institucional. Esta clasificación evidencia que el malestar ciudadano no proviene únicamente de los

delitos de alto impacto, sino también de la inseguridad íntima en el hogar, los conflictos cotidianos entre vecinos y la precariedad de los entornos urbanos y rurales.

A partir de esta categorización, el análisis se adentrará en las primeras tres dimensiones: en primer lugar, las violencias en los hogares y contra las mujeres; en segundo lugar, la intolerancia y la violencia interpersonal; y finalmente, la criminalidad organizada, las rentas ilícitas y sus impactos sobre la población civil.

Ilustración 1.

Antioquia: problemáticas que deterioran la percepción de seguridad, 2024

Violencia intrafamiliar y de género

- Violencia intrafamiliar (4%)
- Violencias contra la mujer en todos los ámbitos (físico, psicológico, económico, sexual) (5%)
- Violencia sexual (5%)
- Explotación sexual infantil (4%)

Violencia interpersonal

- Riñas (8%)
- Problemas de convivencia entre vecinos (5%)
- La gente es muy agresiva (6%)

Criminalidad organizada y delitos de alto impacto

- Existen disputas entre grupos delincuenciales (5%)
- Existen grupos de delincuentes (pandillas o bandas criminales) (14%)
- Por la venta de droga (24%)
- Pago de extorsión o “vacuna” (8%)
- Homicidios (9%)
- Atracos que se ven a diario (15%)

Factores del entorno y control institucional

- Debe transitar por sitios abandonados o deteriorados (6%)
- Espacios públicos en mal estado o con usos indebidos (8%)
- Presencia de habitantes en situación de calle (13%)
- Por el consumo de droga (29%)
- Hay poca policía (32%)
- Hay poco Ejército (12%)

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia



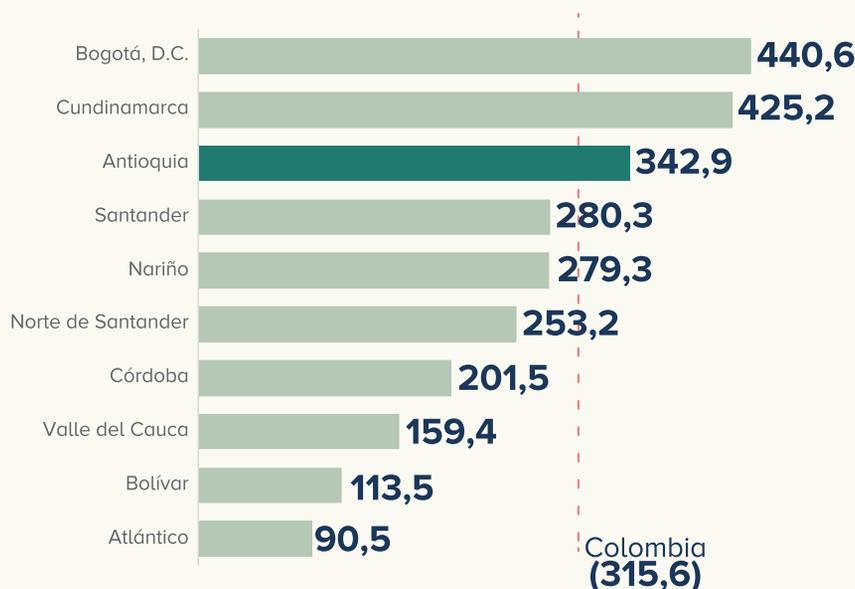
Violencia en los hogares y contra la mujer

Los datos muestran con contundencia que, para muchas mujeres en Antioquia, el hogar no es un lugar seguro. En 2024 el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) registró 23.673 notificaciones por presunta violencia de género¹, un incremento del 6,5% frente a 2023 y el tercer año conse-

cutivo de aumento desde la pandemia (ver Gráfico 9). Con estas cifras, Antioquia ocupa la tercera tasa más alta de notificaciones entre los departamentos más poblados del país (Gráfico 8), lo que confirma que la violencia contra las mujeres constituye un fenómeno estructural y persistente.

Gráfico 8.

Colombia: tasa de notificación de casos de violencia de género por cada 100 mil habitantes según departamento, 2024



Fuente: elaboración propia a partir del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes

El detalle de las notificaciones evidencia la magnitud y diversidad de estas violencias: en 2024 se reportaron 10.906 casos de violencia física, 6.162 de violencia sexual, 5.647 de violencia psicológica y 958 de negligencia o abandono. Detrás de cada número hay una trayectoria vital afectada y un entorno familiar que, en lugar de brindar protección, se convierte en un espacio de riesgo.

¹ “La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas.” — Naciones Unidas (ONU, 2023)



Gráfico 9.
Antioquia: notificaciones de violencia de género al SIVIGILA, 2019-2024



Gráfico 10.
Antioquia: tasa de notificaciones de violencia de género al SIVIGILA según subregión, 2024



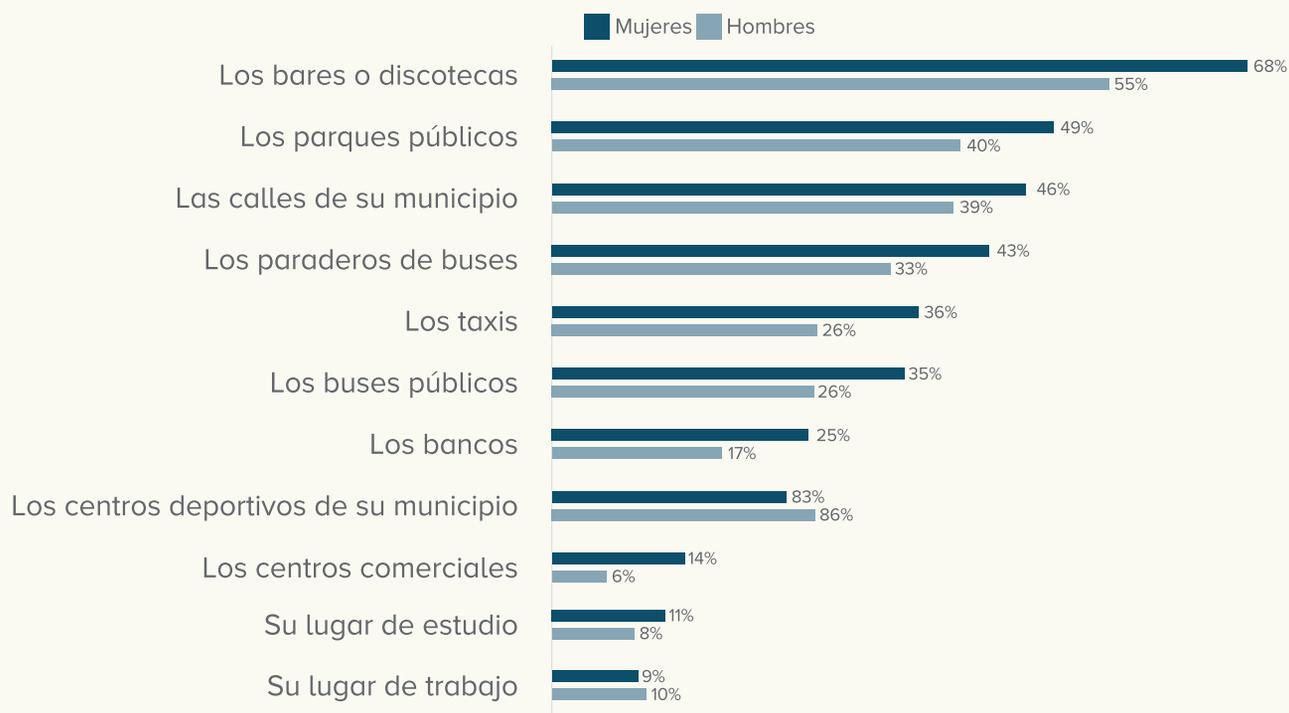
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes

Esta realidad explica por qué las mujeres se sienten más inseguras que los hombres incluso en los espacios públicos (Gráfico 11). No es casualidad: la inseguridad que ellas perciben en calles, parques, bares o en el transporte público es el reflejo directo de una experiencia previa de violencia en sus propios hogares y comunidades. La frontera entre lo privado y lo público se difumina, trasladando al espacio colectivo los miedos y amenazas que ya viven en la intimidad del hogar.



Gráfico 11.

Antioquia: personas que se sienten inseguras en los siguientes lugares según sexo, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia

A pesar de que en 2020 y 2021 se reportó una disminución en los casos de violencia de género notificados al SIVIGILA, este descenso debe leerse con cautela. El contexto de la pandemia de COVID-19 limitó el acceso a los centros de salud —muchos fueron evitados por temor al contagio— y redujo las posibilidades de denunciar, pues el confinamiento obligó a miles de mujeres a convivir permanentemente con sus agresores. Para quienes además dependían económicamente de ellos o compartían un mismo hogar, la denuncia no solo representaba un riesgo inmediato de retaliación, sino también la amenaza de perder sustento, vivienda y redes de apoyo (INMLCF, 2021).

Con el levantamiento de las restricciones sanitarias, las notificaciones al SIVIGILA repuntaron y mantuvieron una tendencia creciente. En 2024 se registraron 23.673 casos

de presunta violencia de género, un promedio de 65 casos diarios, superando los niveles de 2019 y confirmando que la violencia contra las mujeres y en el ámbito intrafamiliar no solo regresó a la visibilidad tras la pandemia, sino que se consolidó como un problema en ascenso.

El perfil de las víctimas y de los victimarios profundiza la gravedad del fenómeno. El 82% de los casos tuvo como víctima a una mujer, y en uno de cada tres la vulneración recayó sobre un niño, niña o adolescente. Además, en el 39% de los casos la víctima convivía con el agresor, lo que incrementa el riesgo y dificulta la denuncia. Entre los responsables predominan las parejas (23%) y exparejas (21%), aunque también aparecen familiares cercanos como la madre (5%) o el padre (4%). Estos datos muestran que la violencia de género en Antioquia se da principalmente en entor-



nos de confianza y cuidado, lo que refuerza la idea de que para muchas mujeres y niños el hogar no constituye un espacio seguro.

El análisis territorial añade una capa de comprensión. Como se observa en el Gráfico 10, las mayores tasas de violencia intrafamiliar y de género en 2024 se concentraron en el Valle de Aburrá (388,5 por cada 100 mil habitantes), el Oriente (347,8) y Urabá (298,9). Sin embargo, estas mismas subregiones son las que registran percepciones más positivas sobre el acceso a los servicios de salud en la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia. Esto sugiere que, además de una mayor prevalencia real, cuentan con canales de atención más accesibles y sistemas de registro más robustos, lo que facilita la notificación de casos y podría explicar parte del mayor volumen de reportes (Gobernación de Antioquia, 2024).

Más allá de las cifras reportadas oficialmente, la realidad es que miles de mujeres en Antioquia viven violencias que nunca llegan a las estadísticas: la mayoría permanece oculta, sin denuncia y sin acceso a justicia. El caso del Bajo Cauca es ilustrativo: aunque figura como la subregión con la menor tasa de casos detectados por el sistema de salud, la Encuesta de Prevalencia de Violencias Basadas en Género (Casa de la Mujer, 2024) mostró que entre 2017 y 2023 una de cada cuatro mujeres y niñas en municipios como Zaragoza, Nechí y El Bagre fue víctima de algún tipo de violencia de género. Este contraste evidencia el alto nivel de subregistro que caracteriza a estos hechos.

El SIVIGILA registra en promedio 65 casos diarios de violencia de género en Antioquia, pero estos reportes reflejan solo una parte

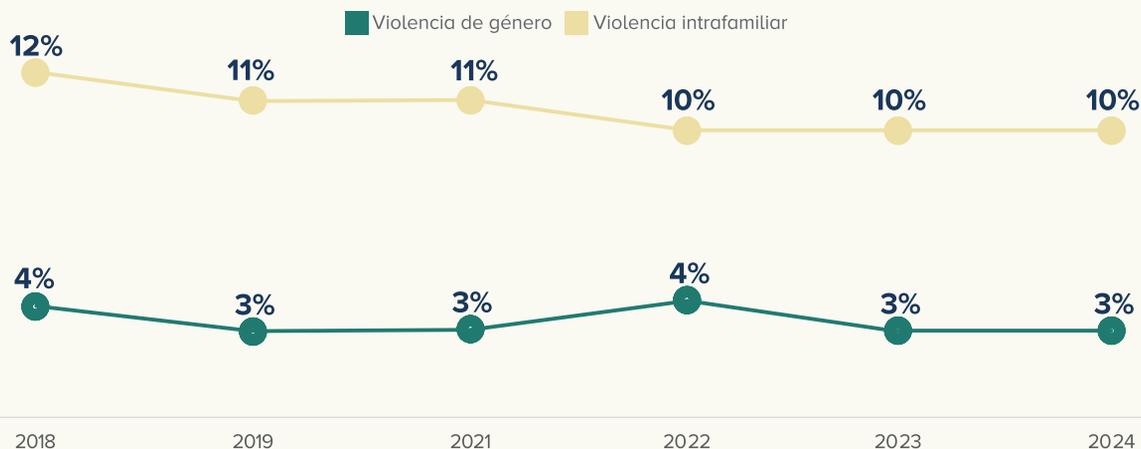
del problema. La Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad y Convivencia de Antioquia señala que 1 de cada 10 personas identifica la violencia intrafamiliar como un problema en su barrio o vereda, y el 3% menciona directamente las violencias basadas en género (Gráfico 14).

Las estimaciones de prevalencia ofrecen una magnitud aún mayor: en 2024, el 3,8% de las mujeres mayores de 15 años manifestó haber sido víctima de violencia de género en los últimos 12 meses, lo que equivaldría a más de 110 mil mujeres violentadas en un solo año en Antioquia. En contraste, apenas el 0,5% de los hombres reportó haber sido víctima de este tipo de violencia en el mismo periodo. Es decir, mientras el SIVIGILA detectó cerca de 24 mil casos en 2023, la encuesta sugiere que en realidad podrían ser más de 110 mil. Esto implica que, por cada caso identificado por el sistema de salud, al menos tres más permanecen invisibles.

Además, debe considerarse que incluso en las encuestas existe subdeclaración: muchas mujeres no responden por miedo a la revictimización, por el estigma social que aún recae sobre las víctimas o, simplemente, porque conviven con su agresor y temen que la revelación ponga en riesgo su seguridad inmediata.

Gráfico 12.

Antioquia: ¿Cuáles de las siguientes problemáticas se han presentado en su barrio o vereda en los últimos 12 meses?, 2018-2024

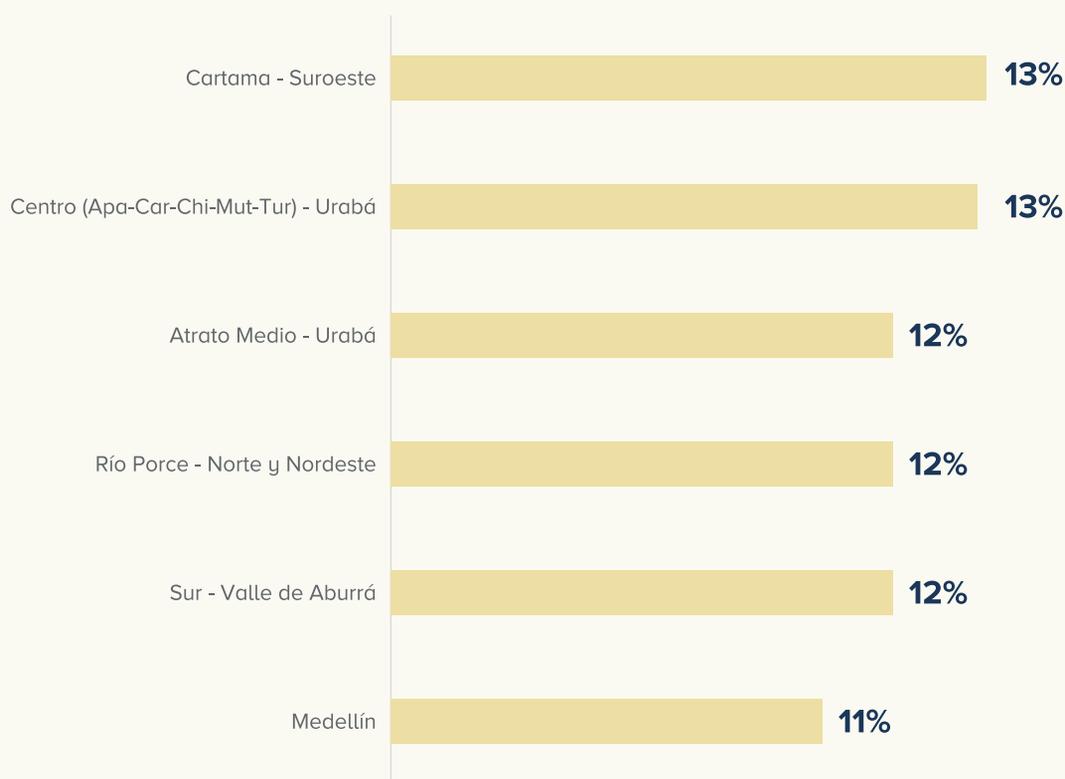


Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de victimización y Percepción de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia

En 2024, las proporciones más altas de personas que identifican la violencia intrafamiliar como un problema que se presenta en su comunidad se registraron en Cartama–Suroeste (13%) y en el Centro de Urabá (13%), seguidas por el Atrato Medio–Urabá (12%), el Río Porce–Norte y Nordeste (12%) y el Sur del Valle de Aburrá (12%). Incluso en Medellín, con un 11%, la violencia intrafamiliar se mantiene como una preocupación relevante para más de una de cada diez personas (ver Gráfico 13). De esta manera, es claro que la violencia intrafamiliar no distingue entre zonas urbanas y rurales: se presenta tanto en cabeceras metropolitanas como Medellín y el Sur del Valle de Aburrá, como en territorios periféricos y rurales como Urabá o el Nordeste.



Gráfico 13.
Antioquia: zonas donde más se reporta presencia de violencia intrafamiliar, 2024



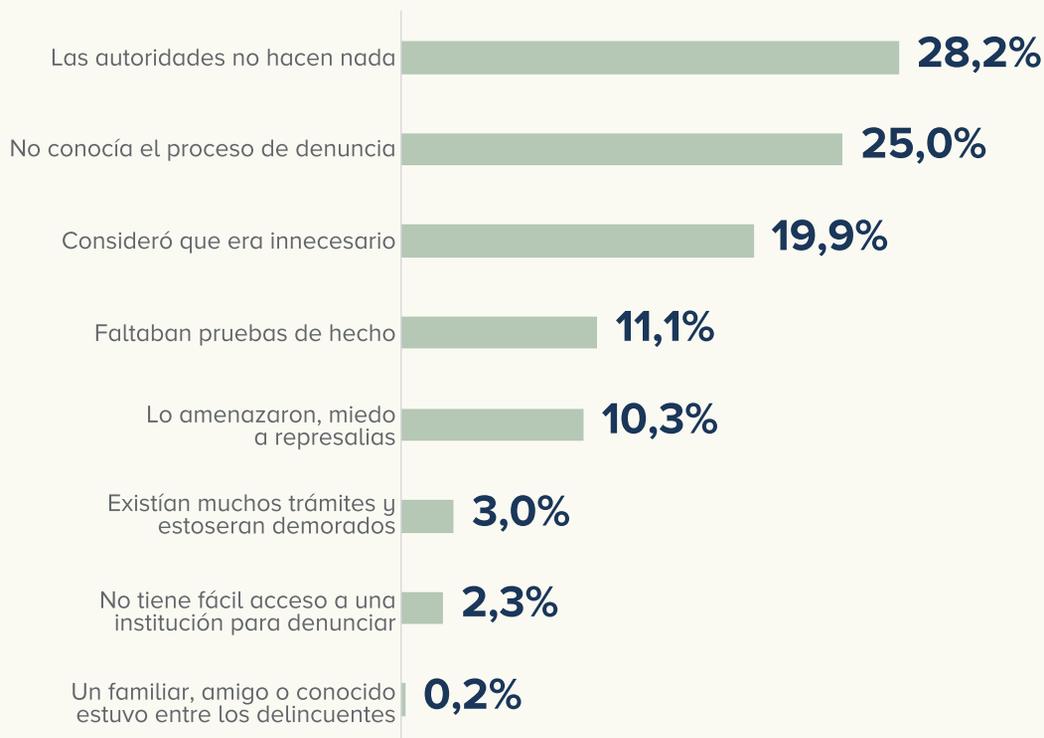
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de victimización y Percepción de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia

El subregistro de la violencia de género en Antioquia se explica, en buena medida, por la baja confianza en las instituciones de justicia. En 2024, el 64% de las víctimas indicó que no acudió a las autoridades, siendo las principales razones el no esperar que las autoridades hagan algo, el desconocimiento del proceso de denuncia y el temor a represalias por parte del agresor (Gráfico 14). Llama la atención que una de cada cuatro víctimas (25%) dijo no conocer el procedimiento de denuncia. Este dato coincide con otra pregunta de la encuesta, donde el 90% de los encuestados respondió no conocer la oferta institucional en seguridad, justicia y convivencia. La brecha evidencia la urgencia de mayor educación y socialización de los mecanismos de atención, pues el desconocimiento limita la capacidad de las víctimas para buscar ayuda y perpetúa el ciclo de violencia.



Gráfica 14.

Antioquia: motivaciones para no denunciar entre quienes no denunciaron, 2024



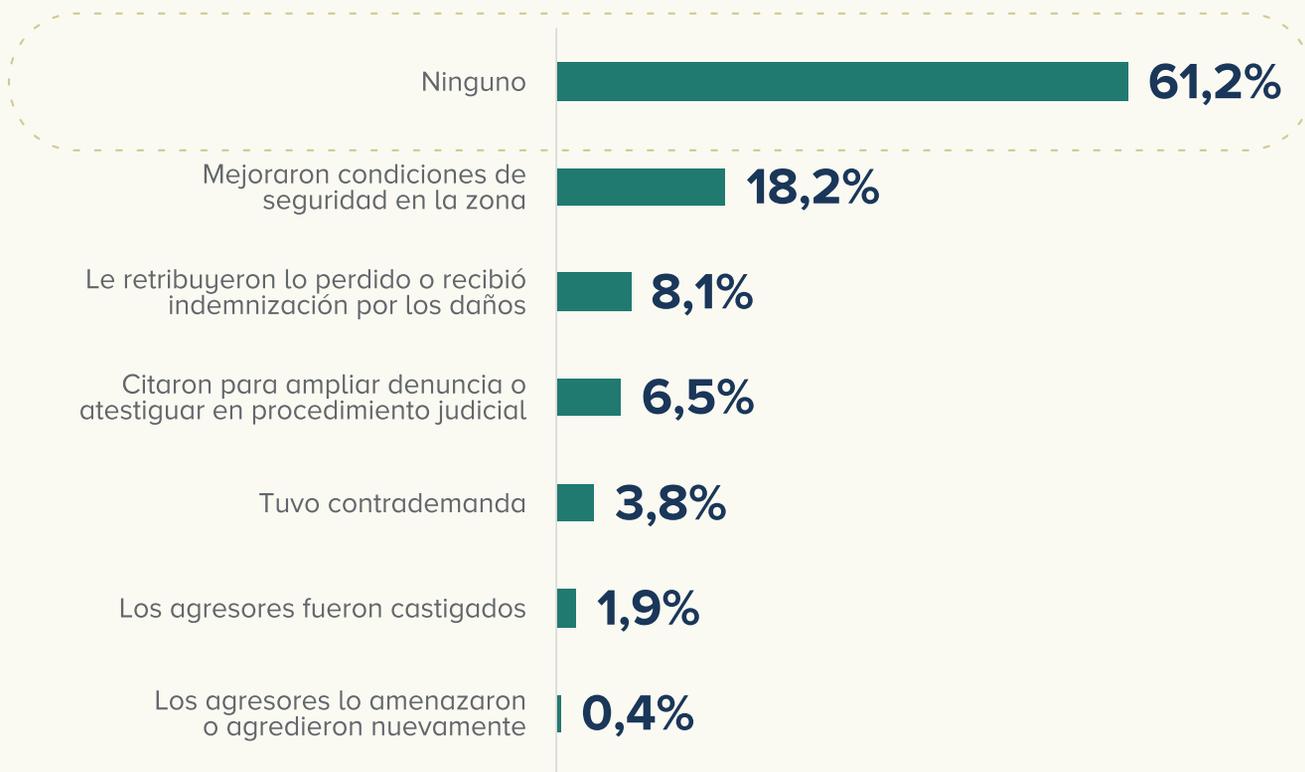
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de victimización y Percepción de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia

Pero incluso cuando se denuncia, las barreras de acceso y la falta de resultados efectivos desalientan a las víctimas y debilitan la confianza ciudadana. Más de la mitad de quienes interpusieron una denuncia afirmaron que su caso no tuvo ningún efecto, lo que refuerza la percepción de impunidad (Gráfico 15). Esta situación se refleja en la valoración que los ciudadanos hacen de las instituciones encargadas de atender estos hechos. De acuerdo con la encuesta, un 43% calificó de regular o mala la labor de las Inspecciones de Policía, y un porcentaje similar (44%) considera que estas raramente o nunca intervienen en casos de violencia de pareja.



Gráfico 15.

**Antioquia: entre quienes denuncian
¿Qué efectos tuvo la denuncia?, 2024**



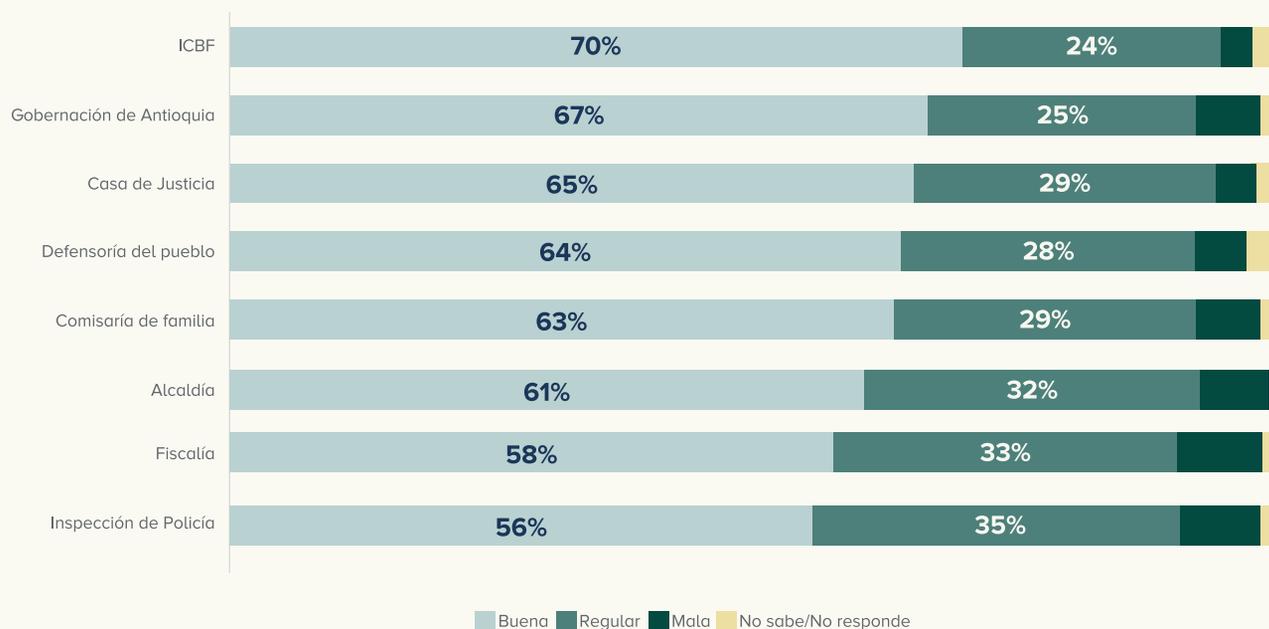
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de victimización y Percepción de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia

En contraste, instituciones como el ICBF (70% de calificaciones positivas), la Gobernación de Antioquia (67%) y las Casas de Justicia (65%) reciben valoraciones más favorables, lo que sugiere que la confianza ciudadana se concentra en aquellos servicios que ofrecen acompañamiento integral y cercanía territorial

(ver Gráfico 16). No obstante, los bajos niveles de confianza hacia Fiscalía (58%) e Inspecciones de Policía (56%) revelan un eslabón débil en la cadena de atención y justicia, que limita la efectividad de las rutas de protección frente a la violencia de género.



Gráfico 16.
Antioquia: ¿Cómo califica la labor de las siguientes instituciones?, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de victimización y Percepción de Seguridad y Convivencia de la Gobernación de Antioquia

La percepción de que “no pasa nada” cuando se denuncia encuentra sustento en las cifras judiciales. En 2024 se interpusieron en Antioquia 22.623 denuncias por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía General de la Nación (Gráfico 17), un 12,9% más que en 2023 y el registro más alto desde que se tienen datos. Sin embargo, más de la mitad de estas denuncias terminan sin avances: entre 2018 y 2022, el 51% fueron archivadas, confirmando la idea de que el esfuerzo de denunciar rara vez se traduce en justicia efectiva.



Gráfico 17.
**Antioquia: denuncias por violencia
intrafamiliar, 2018 - 2024**



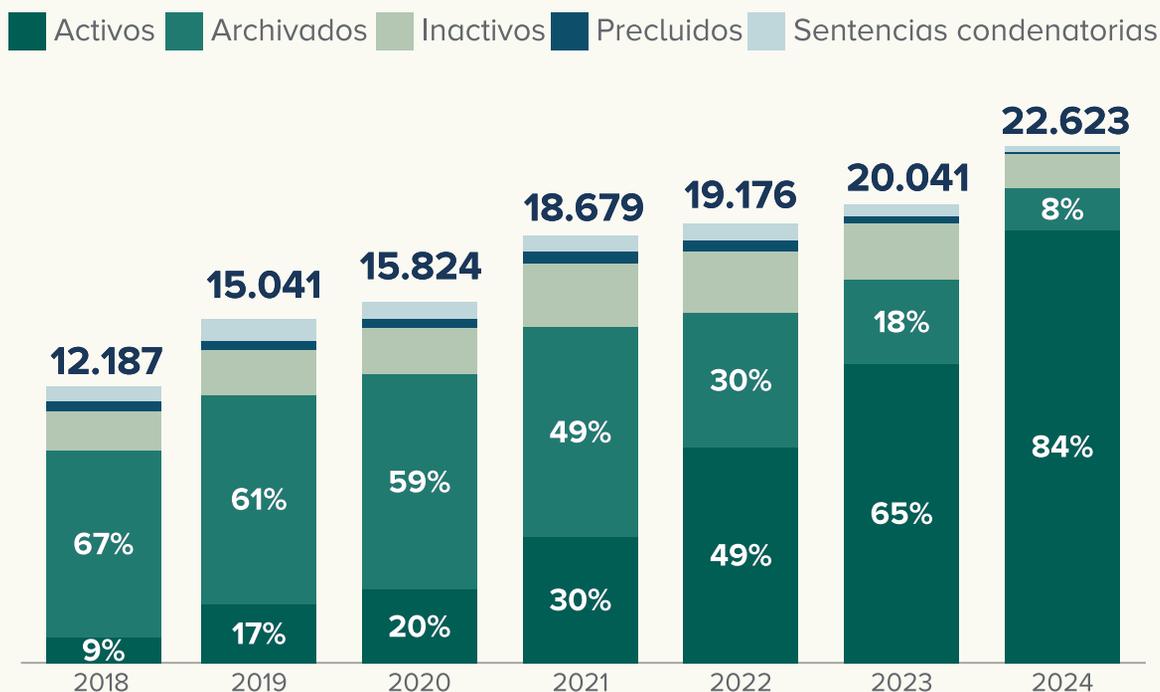
Fuente: elaboración propia con información del SPOA - Fiscalía General de la Nación. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.

La evolución de los procesos evidencia un problema estructural. El número de denuncias aumentó de manera sostenida —de 12.187 en 2018 a 22.623 en 2024—, pero el desenlace de estos procesos muestra un patrón preocupante: con el paso de los años, la mayoría de los casos terminan archivados y muy pocos alcanzan una sanción penal efectiva (ver Gráfico 18 y Tabla 1). Así se explica que en los registros más recientes (2023

y 2024) predominen las categorías de “activos” (65% y 84%, respectivamente): no es que los procesos avancen hacia una resolución distinta, sino que todavía están en etapa de indagación o investigación preliminar. La experiencia de los años anteriores sugiere que muchos de ellos, con el tiempo, también acabarán archivados. Mientras tanto, las sentencias condenatorias se han mantenido en niveles mínimos.



Gráfico 18.
Antioquia: denuncias por violencia intrafamiliar según estado, 2018 - 2024



Fuente: elaboración propia con información del SPOA - Fiscalía General de la Nación

Tabla 1.
Antioquia: denuncias por violencia intrafamiliar (VIF) según estado, 2018 - 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Denuncias por VIF	12.187	15.041	15.824	18.679	19.176	20.041	22.623
Activos	9%	17%	20%	30%	49%	65%	84%
Archivados	67%	61%	59%	49%	30%	18%	8%
Inactivos	14%	13%	13%	15%	14%	12%	6%
Precluidos	4%	3%	2%	3%	3%	2%	1%
Sentencias condenatorias	5%	6%	5%	4%	3%	2%	1%

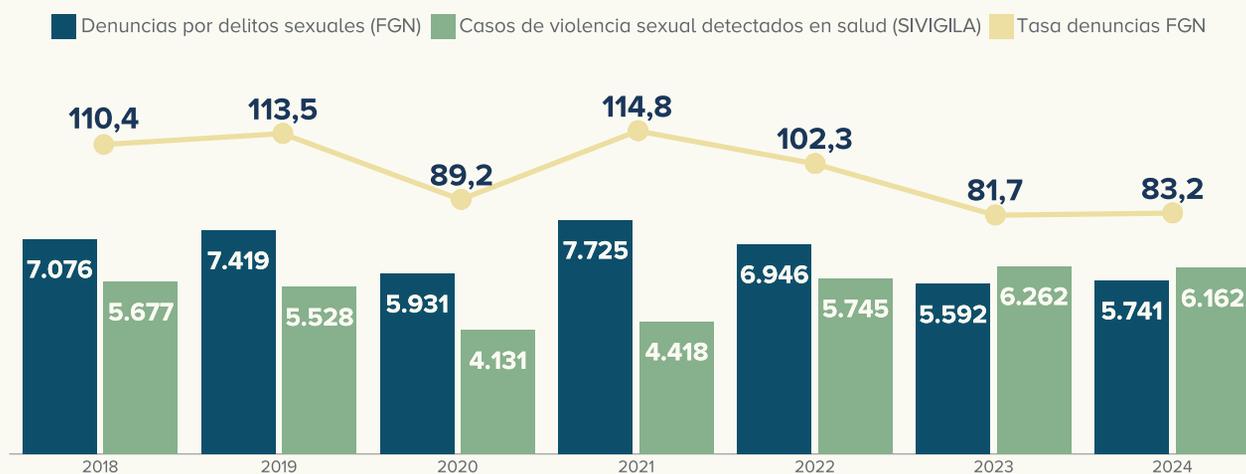
Fuente: elaboración propia con información del SPOA - Fiscalía General de la Nación



El perfil de las víctimas refuerza la gravedad del panorama: el 75,2% de los casos denunciados entre 2018 y 2024 tuvo como víctima a mujeres, y en uno de cada diez casos la víctima fue un niño, niña o adolescente. Además, las denuncias no se distribuyen homogéneamente en el territorio: durante 2024, las mayores tasas se concentraron en el Valle de Aburrá (426,8 por cada 100 mil habitantes), seguido por el Oriente (216,8) y el Magdalena Medio (201,4), lo que sugiere que en estas subregiones hay tanto una mayor incidencia como una mayor capacidad de denuncia.

En conjunto, las cifras muestran que aunque cada vez más víctimas acuden a la justicia, el déficit en resultados judiciales alimenta la percepción de impunidad, debilitando la confianza en las instituciones y desincentivando a otras mujeres y familias a dar el paso de denunciar.

Gráfico 19.
Antioquia: casos de violencia sexual notificados al SIVIGILA y denuncias por delitos sexuales, 2019-2023



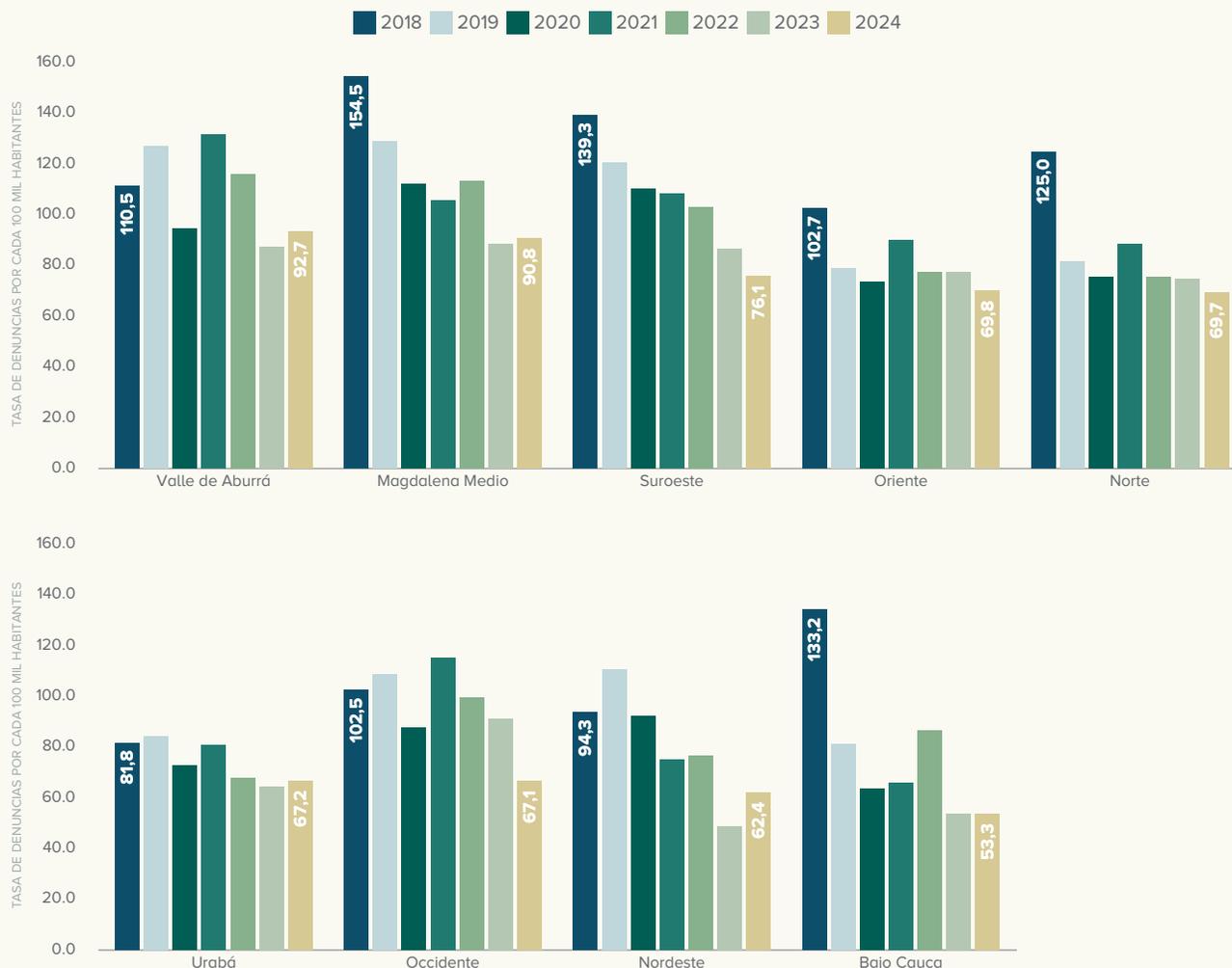
Fuente: elaboración propia a partir del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA y Fiscalía General de la Nación - FGN. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.

En 2024 la Fiscalía General de la Nación recibió 5.741 denuncias por delitos sexuales en Antioquia, un 2,7% más que en 2023. El perfil de las víctimas es claro: el 83,4% corresponde a mujeres, principalmente niñas menores de 13 años (34,6%) y adolescentes entre 14 y 17 años (14,2%). Estos datos confirman que la violencia sexual en el departamento golpea de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes, consolidándose como una de las expresiones más graves de las violencias basadas en género.



Gráfico 20.

Antioquia: tasa de denuncias por delitos sexuales por cada 100 mil habitantes según subregión, 2018-2024



Fuente: elaboración propia con información del SPOA - Fiscalía General de la Nación. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.

El análisis territorial muestra que las mayores tasas de denuncias por delitos sexuales en 2024 se concentraron en el Valle de Aburrá (92,7 por cada 100 mil habitantes), seguido por el Magdalena Medio (90,8) y el Suroeste (76,1) (ver Gráfico 9). No obstante, la evolución temporal indica que algunas subregiones han registrado una reducción sostenida en sus tasas de denuncia desde 2018, entre ellas Urabá, Nordeste y Bajo Cauca, donde la disminución puede explicarse más por factores de subregistro y silenciamiento que por una real reducción de la violencia sexual.

El desenlace judicial de estos procesos refuerza la percepción de impunidad. Aunque el número de denuncias varía de un año a otro —con picos en 2019 y 2021 y caídas posteriores—, el patrón de resultados es consistente: al menos 1 de cada 4 denuncias por delitos sexuales en Antioquia termina archivada con el paso de los años, y apenas el 5% llega a una sentencia condenatoria (ver Gráfico 21 y Tabla 2).



Gráfico 21.

Antioquia: denuncias por delitos sexuales según estado, 2018 - 2024



Fuente: elaboración propia con información del SPOA - Fiscalía General de la Nación

Tabla 2.

Antioquia: denuncias por delitos sexuales según estado, 2018 - 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Denuncias por delitos sexuales	7.076	7.419	5.931	7.725	6.946	5.592	5.741
Activos	57%	60%	51%	53%	46%	55%	80%
Archivados	26%	24%	34%	32%	40%	32%	14%
Inactivos	7%	8%	9%	8%	7%	9%	5%
Precluidos	1%	2%	2%	1%	2%	1%	0%
Sentencias condenatorias	8%	7%	5%	5%	5%	3%	1%

Fuente: elaboración propia con información del SPOA - Fiscalía General de la Nación

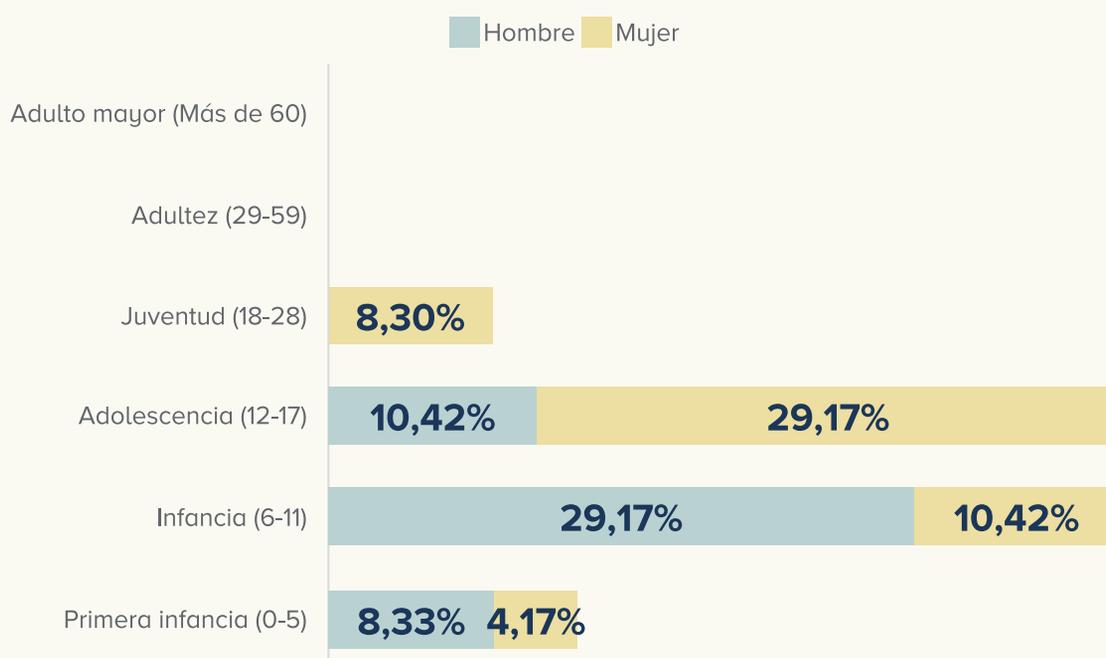
El sistema de salud también permite dimensionar la magnitud y las particularidades de la violencia sexual en Antioquia. En 2024, los tipos de violencia sexual más reportados al SIVIGILA fueron el acceso carnal (39%), los actos sexuales (28%) y el acoso sexual (16%). Aunque en menor número, preocupa el crecimiento de modalidades especialmente graves: los casos de explotación sexual pasaron de 37 a 64 entre 2023 y 2024, con un 75% de víctimas niños, niñas y adolescentes (NNA), y se mantiene la persistencia de mutilaciones genitales, con tres reportes en 2023 y tres en 2024.



Un aspecto especialmente delicado es la relación de las víctimas con los agresores. En el 18% de los casos de violencia sexual reportados en Antioquia, la víctima convivía con el agresor. Aún más alarmante resulta que las instituciones educativas se consolidaron como el tercer lugar más frecuente de detección de estas violencias, con 376 casos reportados en 2024, es decir, alrededor de un caso diario.

Gráfico 22.

Antioquia: edad y sexo de las víctimas de acceso carnal reportadas al SIVIGILA en instituciones educativas, 2024



Fuente: elaboración propia a partir del Sistema integrado de información de violencias de género-SIVIGE, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes

El análisis de estos reportes dentro de instituciones educativas revela dinámicas específicas: los hechos más frecuentes corresponden a actos sexuales (43%), acoso sexual (29%) y acceso carnal (13%). El 61% de las víctimas fueron mujeres, pero prácticamente todos los casos (97%) correspondieron a niños, niñas o adolescentes. En la mayoría de los episodios, los agresores no tenían parentesco con la víctima (95%) y no convivían con ella (92%), lo que indica que en gran parte se trata de agresiones perpetradas por terceros.



Tabla 3.

Antioquia: caracterización víctimas de violencia sexual en instituciones educativas reportadas al SIVIGILA según tipo de violencia sexual, 2024

	Víctimas de acceso carnal en Instituciones educativas	Víctimas de otro tipo de violencia sexual en instituciones educativas
Tiene parentesco con el agresor	19%	4%
Convive con el agresor	15%	7%
Víctimas de sexo femenino	52%	63%
Niños, niñas y adolescentes	92%	98%

Fuente: elaboración propia a partir del Sistema integrado de información de violencias de género-SIVIGE, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA.

Sin embargo, los casos de acceso carnal violento detectados en instituciones educativas presentan un patrón distinto. En estos hechos hay una mayor proporción de vínculos familiares y de convivencia con el agresor: el 19% de las víctimas tenía parentesco con el agresor y el 15% convivía con él, frente al 4% y 7% respectivamente en otros tipos de violencia sexual ocurridos en instituciones educativas. Además, este tipo de casos incluye una proporción más alta de víctimas de sexo masculino, especialmente en la primera infancia y la infancia, mientras que en la adolescencia la mayoría de las víctimas son mujeres.

En síntesis, la caracterización de la violencia sexual detectada en instituciones educativas indica que, en la mayoría de los casos, se trata de agresiones cometidas por personas ajenas al hogar, pero una fracción de los reportes —particularmente los de acceso carnal violento— corresponden a hechos que habrían ocurrido en el entorno familiar y fueron posteriormente visibilizados en el ámbito escolar. Este hallazgo confirma el rol crucial de las instituciones educativas como espacios de detección temprana y subraya la necesidad de fortalecer allí los mecanismos de protección, prevención y denuncia.

Las violencias de género dejan cicatrices profundas que acompañan a las víctimas a lo largo de su vida: trastornos de salud mental como ansiedad, depresión o estrés postraumático; embarazos no deseados y



complicaciones ginecológicas; abandono escolar y pérdida de autonomía económica; y la perpetuación de ciclos de revictimización, exclusión y riesgo de feminicidio (UNICEF, 2022; UNWOMEN & UNODC, 2022; Zamora-Moncayo et al., 2021). Estas consecuencias muestran que no basta con que las rutas de atención funcionen: la prevención es vital para cortar la cadena de daños antes de que alcancen su desenlace más trágico.

La respuesta institucional oportuna y cercana frente a alertas y denuncias es crucial, no solo para proteger la dignidad y la integridad de las mujeres, sino para salvaguardar sus vidas. Sin embargo, en Antioquia persiste una brecha de confianza: cerca del 40% de la población no confía en las instituciones de seguridad, justicia y convivencia.

Esta desconfianza en el sistema de justicia y en las rutas de atención alejan a las vícti-

mas de los mecanismos de protección disponibles en el departamento. Solo en 2024 la Línea 123 Mujer Antioquia atendió a 3.978 mujeres en riesgo de feminicidio y 360 mujeres y familiares fueron acogidas en Hogares de Protección dada su situación de riesgo de feminicidio.

Los feminicidios no son hechos aislados, sino el desenlace extremo de cadenas de violencia no detectadas ni interrumpidas a tiempo. Aunque los homicidios de mujeres en Antioquia han disminuido, en 2024 se registraron 105 casos, de los cuales casi uno de cada cuatro (23%) fue judicializado como feminicidio (Gráfico 23). En términos estructurales, entre 2018 y 2024 el 21% de los homicidios de mujeres en el departamento fueron presuntos feminicidios, lo que muestra que una de cada cinco mujeres asesinadas fue víctima de violencia letal asociada a su condición de género (Gráfico 24).

Gráfico 23.
Antioquia: homicidios de mujeres y presuntos feminicidios, 2018-2024



Fuente: elaboración propia con datos del SPOA - Fiscalía General de la Nación y del SIEDCO - Policía Nacional



Gráfico 24.

Antioquia: homicidios de mujeres que fueron presuntos feminicidios consumados, 2018-2024



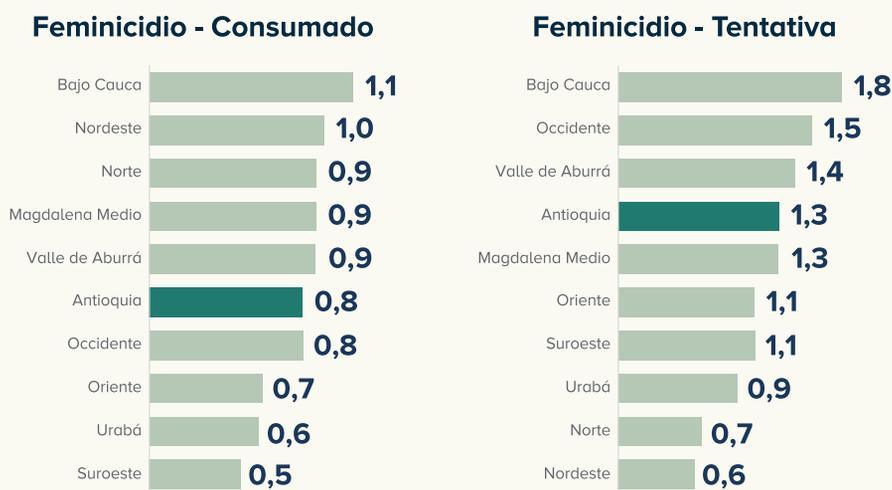
Fuente: elaboración propia con datos del SPOA - Fiscalía General de la Nación y del SIEDCO - Policía Nacional

El análisis territorial muestra que el feminicidio no golpea por igual a todas las subregiones de Antioquia. Entre 2019 y 2024, las tasas más altas de feminicidios consumados se registraron en el Bajo Cauca (1,1 por cada 100 mil mujeres), el Nordeste (1,0) y el Norte y Magdalena Medio (0,9), cifras superiores al promedio departamental (0,8) (ver Gráfico 28). En contraste, las tasas más bajas se observan en el Suroeste (0,5) y en Urabá (0,6), aunque esto no necesariamente refleja menor riesgo, sino también diferencias en la denuncia y judicialización.

Al observar las tentativas, la situación se complejiza: el Bajo Cauca (1,8), el Occidente (1,5) y el Valle de Aburrá (1,4) encabezan la lista de las subregiones con más intentos de feminicidio, lo que confirma que se trata de una violencia generalizada que combina consumación con intentos fallidos (ver Gráfico 25).

Gráfico 25.

Antioquia: tasa promedio de presuntos feminicidios consumados por cada 100 mil mujeres según subregión, 2019-2024



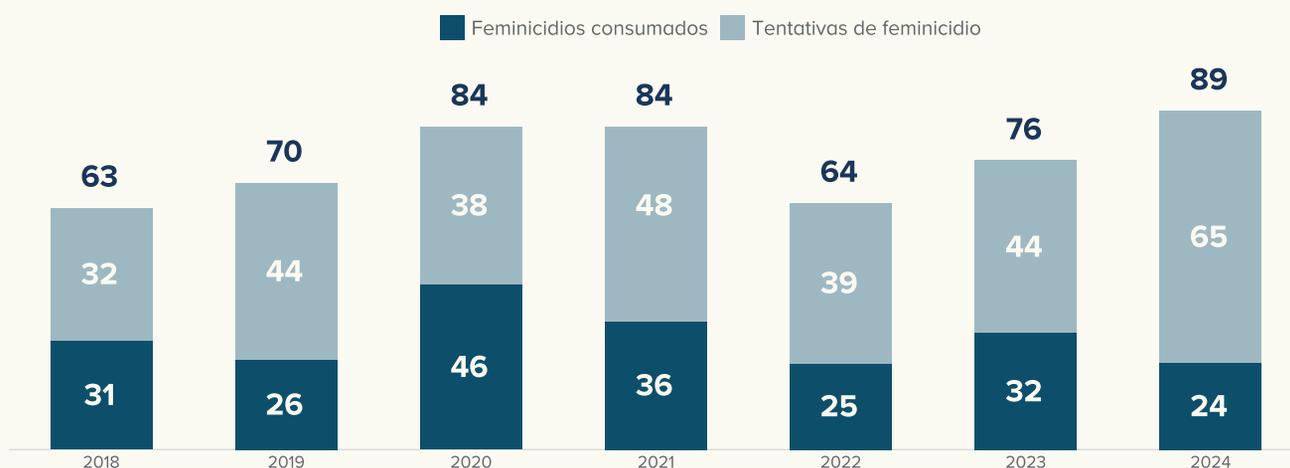
Fuente: elaboración propia con datos del SPOA - Fiscalía General de la Nación y del SIEDCO - Policía Nacional. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 mujeres



La serie histórica revela además una dinámica preocupante. Entre 2018 y 2024, se registraron en Antioquia 220 feminicidios consumados judicializados por la Fiscalía y un número aún mayor de intentos: en varios años las tentativas superaron a los casos consumados (ver Gráfico 26). En 2024, por ejemplo, mientras se reportaron 24 feminicidios consumados, hubo 65 tentativas. Esto significa que, por cada feminicidio, hubo casi tres intentos más que pudieron haber terminado en la muerte de la víctima. De haberse consumado estos hechos, el número de mujeres asesinadas habría sido casi tres veces mayor.

Gráfico 26.

Antioquia: presuntos feminicidios consumados y en grado de tentativa, 2018 - 2024



Fuente: elaboración propia con datos del SPOA - Fiscalía General de la Nación y del SIEDCO - Policía Nacional

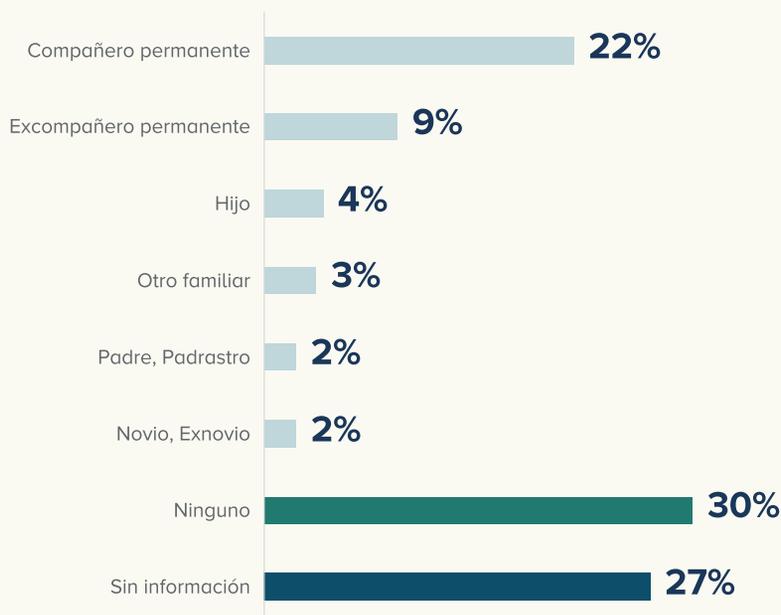
El panorama se agrava si se amplía la mirada a otras fuentes. El Observatorio Colombiano de Feminicidios reporta que entre 2018 y 2024 habrían sido asesinadas 722 mujeres en Antioquia en hechos de feminicidio, es decir, 3,3 veces más casos que los judicializados por la Fiscalía (220). La caracterización de los victimarios muestra que en el 30,2% de los casos no existía parentesco con la víctima, mientras

que en el 21,7% eran compañeros sentimentales, en el 9,3% exparejas y en el 4,3% hijos (véase el Gráfico 27). Estos datos sugieren que, aunque la pareja y expareja siguen siendo actores centrales en la violencia letal contra las mujeres, también es significativo el peso de agresores externos al círculo íntimo.



Gráfico 27.

Antioquia: parentesco o relación de los feminicidas con la víctima, 2018 - 2024



Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio Colombiano de Femicidios

Este panorama obliga a insistir en que no basta con tener rutas de atención: deben funcionar. Y aun funcionando, la prioridad sigue siendo prevenir. Denunciar sigue siendo difícil para las mujeres debido a barreras de acceso, trámites revictimizantes, estigmatización social y medidas de protección que no siempre se ejecutan. Las rutas de protección deben ser claras, conocidas, con respuesta inmediata, seguimiento y confidencialidad, evitando que las víctimas enfrenten solas el riesgo.

La prevención debe situarse en el centro: trabajo con hombres y masculinidades, educación para la igualdad, alertas tempranas, apoyo psicosocial y autonomía económica para las mujeres en riesgo. Y debe estar acompañada de la corresponsabilidad de toda la sociedad: ciudadanía que acompañe y denuncie, instituciones públicas y privadas que actúen de manera coordinada, medios y liderazgos que comuniquen sin revictimizar, y un sistema judicial que garantice respuestas oportunas y sanciones efectivas.

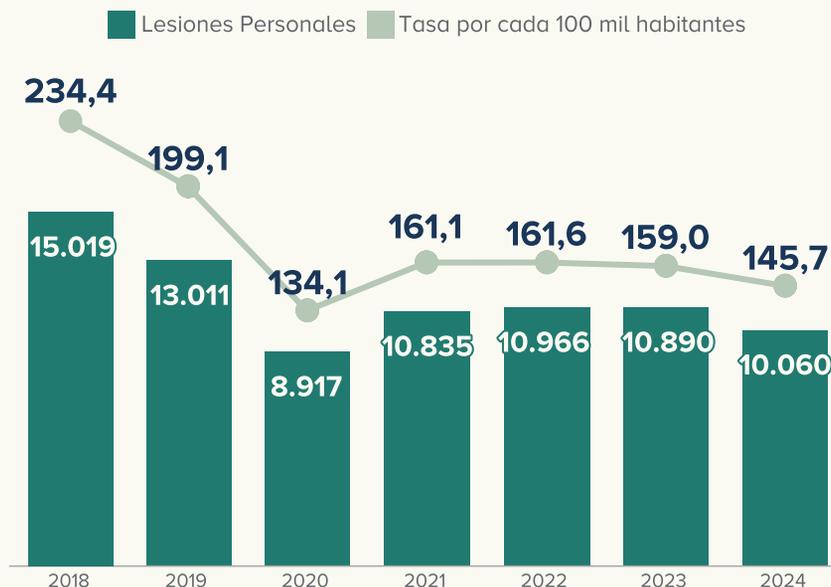
Violencia Interpersonal

La violencia interpersonal constituye una de las expresiones más frecuentes de la conflictividad cotidiana en Antioquia. Cada año se registran más de 10 mil denuncias por lesiones personales (Gráfico 28), con tasas particularmente elevadas en subregiones como el Magdalena Medio (239,1), el Valle de Aburrá (164,5), el Oriente (151,3) y el Suroeste (148,0), todas por encima del promedio departamental (145,7). Estos hechos, que abarcan desde agresiones físicas en contextos privados hasta riñas en espacios públicos, son el reflejo de una convivencia marcada por la intolerancia y la fragilidad de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos.



Gráfico 28.

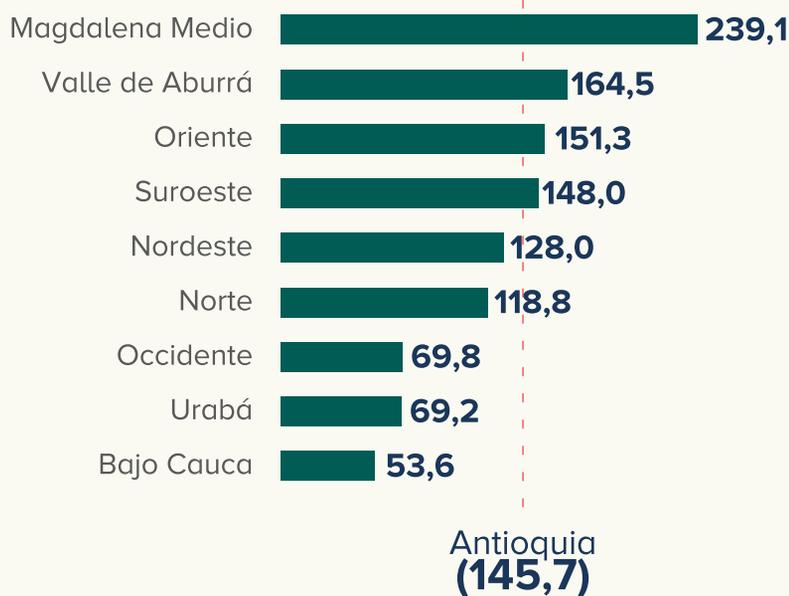
Antioquia: denuncias por lesiones personales y tasa por cada 100 mil habitantes, 2018 - 2024



Fuente: elaboración propia con datos del SIEDCO – Policía Nacional. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes

Gráfico 29.

Antioquia: tasa de denuncias por lesiones personales por cada 100 mil habitantes según subregión, 2024



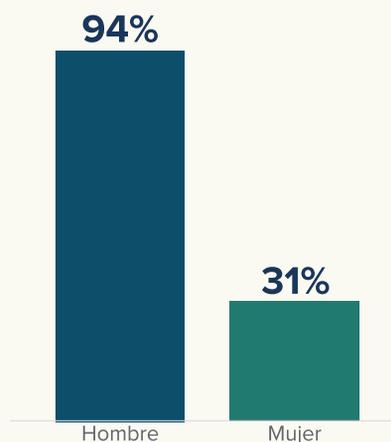
Fuente: elaboración propia con datos del SIEDCO – Policía Nacional. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes



El perfil de los involucrados revela una marcada dimensión de género. Los hombres concentran el 59% de las víctimas en denuncias por lesiones personales y están presentes en el 94% de las riñas reportadas. Esto evidencia que los hombres no solo son las principales víctimas, sino también los principales protagonistas de la violencia interpersonal, reproduciendo patrones de masculinidades violentas que siguen siendo dominantes en buena parte de la cultura ciudadana.

Gráfico 30.

Antioquia: sexo de las personas involucradas en la riña, 2024



Base: Encuestados que han tenido una riña en el último año (99)

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia.

Los registros de la Policía, sistematizados por Valor Público (2025), apuntan en la misma dirección. Entre las conductas más sancionadas en Antioquia se encuentran el desacato a la autoridad (29%), el porte de armas (16%) y las riñas (9%) (véase el Gráfico 31). Un dato crítico es que los jóvenes adultos entre 18 y 29 años concentran el 55% de las contravenciones, a pesar de representar solo el 19% de la población departamental. Este desfase confirma que los jóvenes son un grupo especialmente expuesto y vinculado a escenarios de intolerancia y violencia, tanto como víctimas como victimarios.



Gráfico 31.

Antioquia: numerales del Código Nacional de Policía y Convivencia con mayor sanción, ene-2017 a jun-2023



Fuente: elaboración propia a partir del Centro de Estudios e Incidencia Valor Público (2025) y datos de la Policía Nacional

La Encuesta de Percepción de Victimización y Seguridad de la Gobernación de Antioquia permite identificar los principales espacios donde ocurren las riñas: las calles (53%), los hogares (18%), los lugares de trabajo (11%) y los establecimientos públicos (10%). La violencia interpersonal no solo responde a hechos puntuales, sino que se alimenta de un contexto de débil cultura ciudadana y falta de tolerancia. Prueba de ello es que el 47% de las personas reporta fiestas o música a volumen excesivo con frecuencia en sus barrios, y un 15% menciona conflictos entre vecinos por ruido o basuras. Estos desencuentros cotidianos, aparentemente menores, son caldo de cultivo para que las tensiones escalen a agresiones físicas.

El riesgo de letalidad en estas dinámicas no es menor. Una de cada tres riñas en Antioquia involucra armas u objetos contundentes (32%), aumentando significativamente las probabilidades de desenlaces fatales. De

hecho, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2024 el 12% de los homicidios en el departamento estuvieron asociados a problemas de intolerancia. Esto significa que, en promedio, cada dos días una persona es asesinada en Antioquia como consecuencia de un conflicto interpersonal que escaló hasta convertirse en un homicidio.

En suma, la violencia interpersonal en Antioquia no puede entenderse solo como choques aislados: es el resultado de una estructura social donde la intolerancia, la presencia de armas y la precariedad de la cultura ciudadana se combinan para transformar conflictos menores en hechos de alta gravedad, incluso letales.

Frente a esta realidad, resulta indispensable apostar por la prevención y no solo por la reacción punitiva. Ello implica fortalecer programas de trabajo con hombres y mas-



culinidades, que cuestionen los patrones de resolución violenta de los conflictos y promuevan relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad. De igual manera, es necesario intensificar el control efectivo del porte y uso de armas, pues su presencia convierte las riñas en eventos con alto riesgo de muerte. A nivel comunitario, urge invertir en estrategias de cultura ciudadana y mediación de conflictos, orientadas a transformar la intolerancia cotidiana —expresada en disputas por ruido, basuras o convivencia vecinal— en oportunidades de diálogo y cohesión. Finalmente, el rol de la academia, los gobiernos locales y los liderazgos comunitarios es clave para construir habilidades socioemocionales y redes de apoyo que prevengan que un conflicto menor termine engrosando las cifras de homicidios en el departamento.

Estructuras criminales, rentas ilícitas y afectaciones sobre la sociedad civil

En 2024, Antioquia alcanzó la tasa de homicidios más baja desde 1969 y, por segundo año consecutivo, una tasa menor que la na-

cional. Esta reducción histórica de la violencia homicida refleja un distanciamiento de los periodos más turbulentos que hicieron de Antioquia el departamento con la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado en Colombia, más no significa el cese de las vulneraciones de derechos humanos en el departamento.

A pesar de los avances, la presencia, expansión y consolidación del poder criminal de diversas estructuras armadas ilegales a lo largo del territorio nacional representa uno de los mayores retos no solo en materia de seguridad, sino también para la democracia, la conservación ambiental y la salud pública. Tras la desmovilización de las FARC-EP en 2016, inició un nuevo ciclo de violencia en Colombia relacionado con la expansión de múltiples Grupos Armados Organizados (GAOs) en búsqueda del control de los territorios desocupados por la extinta guerrilla y que no fueron ocupados de manera integral y oportuna por el Estado. La Tabla 4 resume la expansión que tuvieron a nivel nacional los tres GAOs con mayor injerencia en Antioquia entre 2016 y 2024.

Tabla 4.
Colombia: expansión territorial y del pie de fuerza de grupos armados organizados, 2016-2024

	Clan del Golfo <small>Autodefensas Galanistas de Colombia (AGC) Ejército Galanista de Colombia (EGC)</small>			ELN			EMC Disidencias		
	2016	2024	Δ%	2016	2024	Δ%	2018	2024	Δ%
Municipios	248	316	+27%	96	231	+141%	59	209	+254%
Integrantes y colaboradores	5.960	Entre 9.000 y 14.000	+93%	Entre 1.400 y 2.000	Más de 6.000	+280%	Aprox. 400	3.480	+770%

Fuente: Elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de PARES (2024b, 2024c), FIP (2024a), InSightCrime (2020, 2024), Indepaz (2024a, 2024b), CORE (CORE, 2024), Caracol Radio (2024) y La Silla Vacía (2024a).



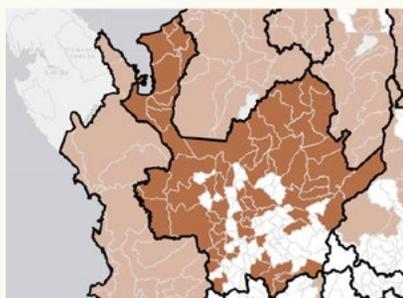
El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)², ha sido el grupo que más ha consolidado su presencia territorial y pie de fuerza en Colombia durante los últimos años, alcanzando 316 municipios en 24 departamentos. Para el año 2024 se estima que este grupo armado cuenta con entre 9.000 y 14.000 integrantes armados y colaboradores.

Entre 2016 y 2024 el Clan del Golfo ha incrementado su presencia territorial a nivel municipal en un 27% y según las estimaciones de su pie de fuerza habría casi que duplicado su número de integrantes y red de apoyo en este periodo (PARES, 2024b). En Antioquia, el Clan del Golfo es el grupo armado con mayor presencia territorial, haciendo presencia en 66 de los 125 municipios del departamento (ver Mapa 3).

Mapa 3.

Antioquia: municipios en los que hace presencia el Clan del Golfo, 2024

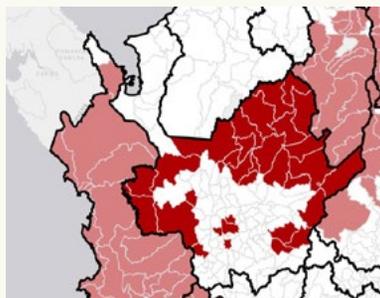
Clan del Golfo
(53% municipios de Antioquia)



Mapa 4.

Antioquia: municipios en los que hace presencia el ELN, 2024

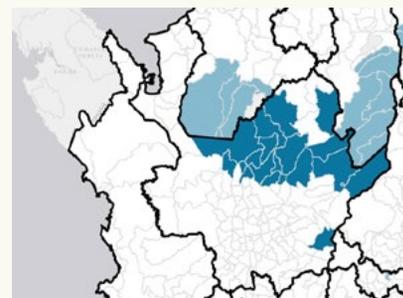
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
(26% municipios de Antioquia)



Mapa 5.

Antioquia: municipios en los que hace presencia el EMC, 2024

Disidencias – Ala Calarcá
(15% municipios de Antioquia)



Fuente: Elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de PARES (2024c)

Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace presencia en 231 municipios a nivel nacional en 2024, distribuidos en 20 departamentos y con un pie de fuerza estimado de 6.000 integrantes. En Antioquia, la guerrilla activa más antigua del país tiene injerencia en 33 municipios, la mayoría ubicados en las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Norte (ver Mapa 4).

Otros grupos armados ilegales que crecieron rápidamente durante los últimos años fueron los Grupos Armados Organizados

Residuales (GAOr) o Post FARC-EP (GAPF), también conocidos como disidencias de las FARC-EP. Estos grupos armados fueron conformados por integrantes de las extintas FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz, así como por firmantes del acuerdo que disidieron del proceso.

Estas estructuras se agruparon inicialmente en dos facciones disidentes que hoy se encuentran divididas: el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia (SM). Mientras que la Segunda Marquetalia tuvo una

² Antes conocidos como Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC, y ahora autodenominados Ejército Gaitanista de Colombia - EGC para mostrarse como un grupo con ideología política (FIP, 2024a).



expansión limitada territorialmente y en su pie de fuerza, el EMC erigió como la facción disidente de mayor crecimiento en ambos aspectos (CORE, 2024).

A nivel nacional, este último grupo armado pasó de tener presencia en 59 municipios en 2016 a tenerla en 209 en 2024. Una expansión territorial que se dio de la mano de un incremento en su pie de fuerza, pasando de tener cerca de 400 integrantes en 2016, a contar con alrededor de 3.480 para el año 2024 entre integrantes armados y colaboradores (InSightCrime, 2024; PARES, 2024b). En 2024, el EMC se fragmentó en al menos dos grandes facciones: una encabezada por Iván Mordisco y otra por alias Calarcá.

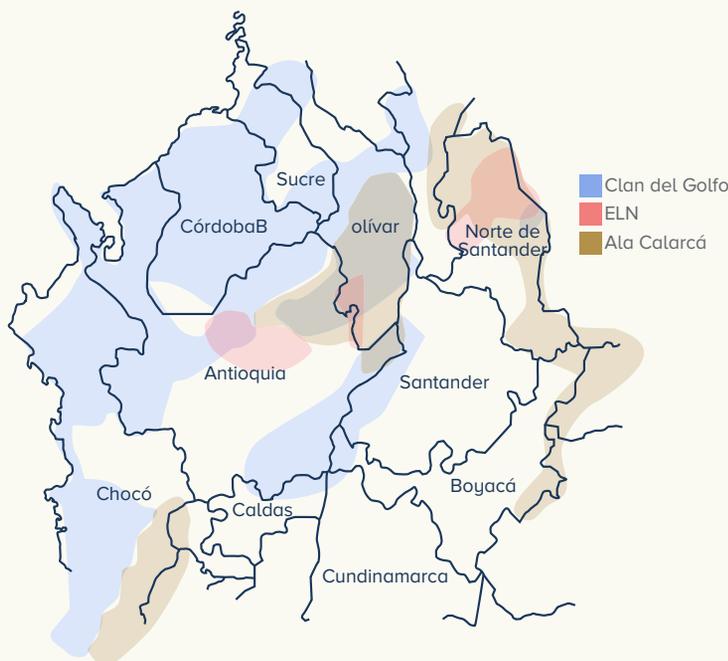
El Ala Calarcá es la única disidencia de las FARC-EP con presencia territorial en Antioquia, alcanzado 19 municipios en el Nordeste, Norte, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño (ver Mapa 5) con fecha de corte a junio de 2024.

No obstante, aunque el ELN y las disidencias hacen presencia en una proporción considerable del territorio antioqueño, el Clan del Golfo no solo ha conseguido incrementar su presencia territorial y su pie de fuerza, sino que también ha logrado consolidar un control territorial absoluto en las zonas que ha disputado en el pasado con otros actores armados en el departamento.

Como se ilustra en el Mapa 6, actualmente este grupo tiene una amplia zona de influencia consolidada en el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato chochoano y el sur de Córdoba, desde donde ha descendido con fuerza al Bajo Cauca Antioqueño. En esta subregión, domina una amplia proporción del territorio, así como en el Norte y Nordeste, donde intenta arrebatarse zonas de influencia histórica al ELN y a las disidencias (FIP, 2024b).

Mapa 6.

Antioquia: zonas de influencia de grupos armados según la Fundación Ideas para la Paz - FIP, 2024



Fuente: adaptación propia a partir de la Fundación Ideas para la Paz - FIP

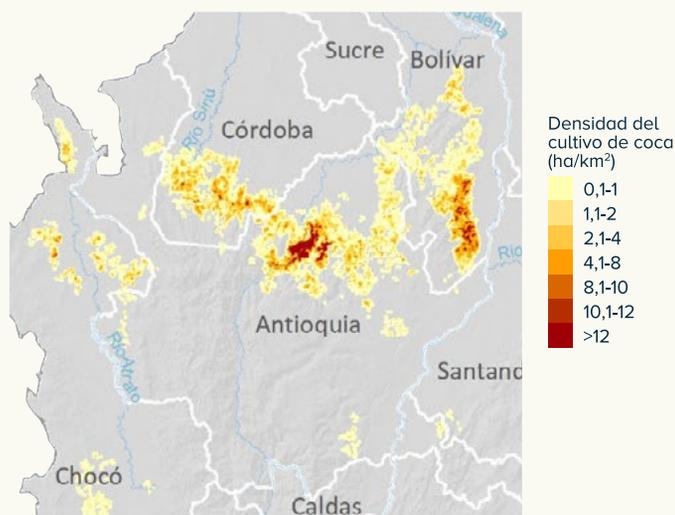


En el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en el sur de Bolívar, las disidencias en alianza con el ELN se enfrentan al Clan del Golfo en un intento por frenar la expansión de este grupo armado, convirtiendo esta zona en uno de los focos de enfrentamientos de mayor intensidad en el país en 2023 y 2024.

Estas subregiones, así como el Urabá y Occidente antioqueño, son territorios valiosos

para estos grupos armados debido a que son corredores geográficos con topografías muy complejas, que cuentan con complejos montañosos como la Serranía de San Lucas y el Nudo de Paramillo, selvas como el Tapón del Darién y complejos hídricos conformados por los ríos Cauca, Nechí y Atrato, y deltas fluviales como La Mojana, que conectan el departamento con otros departamentos, con la salida al mar Caribe y Panamá (PARES, 2024b, p. 246).

Mapa 7.
Antioquia: densidad del cultivo de coca, 2022



Fuente: tomado de Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023)

Además de su valor geoestratégico, varias subregiones de Antioquia concentran cultivos de coca y actividades mineras ilegales que alimentan economías ilícitas y sostienen la presencia de estructuras criminales. Entre 2015 y 2023, los cultivos de coca en el departamento se multiplicaron por siete, alcanzando la mayor extensión registrada en su historia (Gráfico 32). Según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023),

en Colombia se identificaron 15 enclaves productivos de coca en 2022; entre ellos, el enclave Valdivia–Tarazá–Cáceres, ubicado en el Norte y Bajo Cauca antioqueño, es el sexto más grande del país, con 5.908 hectáreas sembradas. Este enclave hace parte de un corredor cocalero que conecta con el sur de Córdoba y el sur de Bolívar, atravesando municipios del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño como El Bagre, Zaragoza y Segovia (ver Mapa 7).



Gráfico 32.

Antioquia: hectáreas de cultivo de coca, 1999-2023



Fuente: elaboración propia con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Este fenómeno responde a una dinámica de alcance nacional. Colombia sigue siendo el principal productor global de cocaína, con más áreas sembradas y mayor productividad que nunca (Gráfico 33). Entre 2021 y 2023, los cultivos de coca crecieron un 24%, pero la producción potencial de cocaína aumentó 90%, un salto explicado por la intensificación tecnológica: semillas mejoradas, técnicas de cultivo más productivas y procesos de transformación más eficientes. Como lo explica Ana María Rueda, coordinadora de la línea de política de drogas de la Fundación Ideas para la Paz, “en ausencia de la aspersión aérea, el arbusto de coca llega a sus máximos niveles de productividad. Es decir, una misma planta de coca produce más clorhidrato de cocaína y no se producen tres cosechas al año sino hasta seis” (BBC, 2024).



Gráfico 33.
Colombia: hectáreas de coca y producción potencial de cocaína, 2009-2023



Fuente: elaboración propia con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Las rentas que deja esta cadena son inmensas. Aunque la mayor parte de las ganancias no se queda en Colombia —pues la distribución y venta final están controladas por carteles mexicanos, ecuatorianos y redes criminales transnacionales—, hace algunos años las estimaciones muestran que el valor agregado de la producción exportable de cocaína equivale al 2% del PIB nacional (Banco de la República, 2023; DANE, 2022; DNP, 2016; Montenegro et al., 2019). A 2025, expertos advierten que los ingresos del narcotráfico podrían representar hasta el 4% del PIB, el nivel más alto en décadas (Portafolio, 2024).

En este escenario, Antioquia no solo es un territorio de tránsito y cultivo, sino también un espacio donde confluyen las disputas por el control de rentas ilícitas, que van más allá de la cocaína e incluyen la minería ilegal, la extorsión y el microtráfico.

Gráfico 34.
Colombia: reservas de oro en millones de onzas según departamento, 2024



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)



El aumento sostenido del precio internacional del oro, sumado a la riqueza aurífera de departamentos como Chocó y Antioquia, ha convertido a estos territorios en los más atractivos para el desarrollo de la actividad extractiva, tanto por parte de actores formales y no formalizados como por criminales (véase el Gráfico 34 y Gráfico 35). La cotización del mineral ha escalado de manera acelerada: mientras en 2023 el precio rondaba los 1.900 USD por onza, en 2025 supera ya los 3.000 USD por onza, alcanzando un récord histórico que multiplica el valor de las rentas derivadas de su explotación y, en consecuencia, la disputa por su control.

Gráfico 35.
Precio internacional del oro: USD por Onza, 2015 - 2025

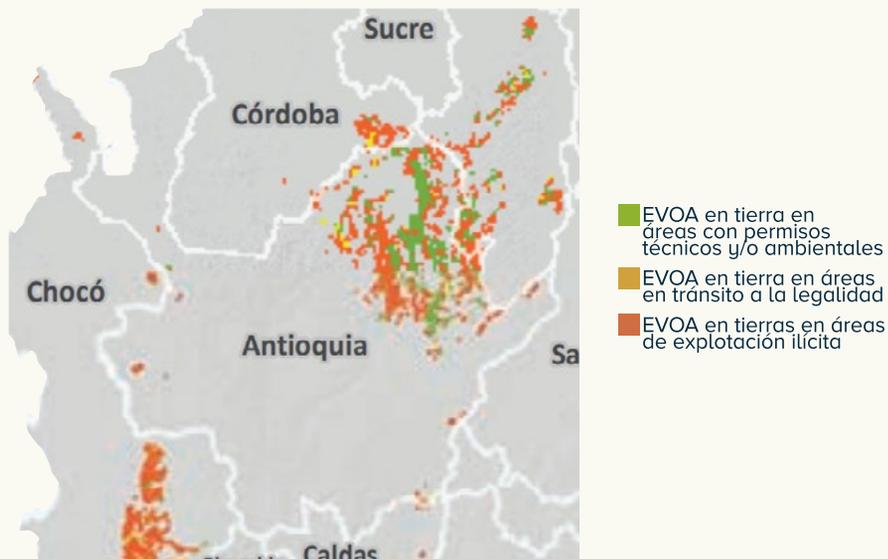


Fuente: elaboración propia a partir de datos de INVESTING

En 2024, Antioquia se consolidó como líder de la producción legal de oro en Colombia, pasando de aportar el 54% en 2019 al 72% del total nacional (UPME, 2025). En ese mismo periodo, las regalías generadas por explotación aurífera en el departamento se multiplicaron por cinco, impulsadas tanto por el aumento de la producción como por los precios récord del mineral.

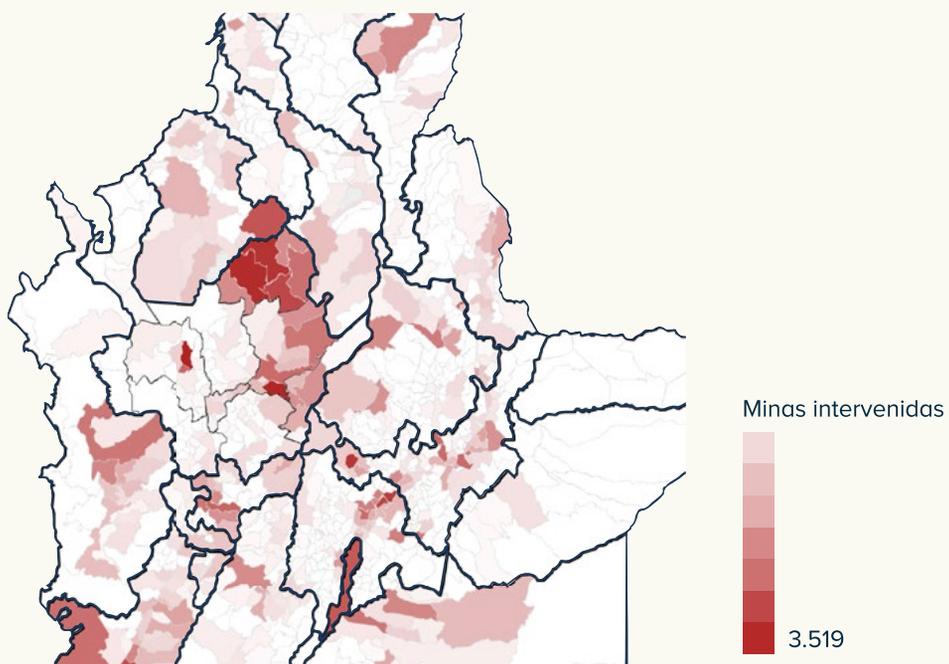
Sin embargo, junto a la producción legal convive una economía ilegal de gran magnitud. Chocó y Antioquia concentran los mayores niveles de explotación ilícita de oro de aluvión (EVOA) en el país (Mapa 8), siendo Antioquia el departamento con más minas intervenidas por la Fuerza Pública: más de 11 mil entre 2015 y 2024, equivalentes al 33% del total nacional en este periodo (Mapa 9). Solo el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño reúnen la segunda mayor área de EVOA en Colombia: de las 17.276 hectáreas detectadas en Antioquia, casi la totalidad se ubican en estas dos subregiones, y el 46% se desarrolla en áreas ilícitas sin permisos ambientales ni técnicos (Ministerio de Minas y Energía & UNODC, 2022).

Mapa 8.
Antioquia: Explotación de Oro de Aluvión - EVOA, 2022



Fuente: Tomado de Ministerio de Minas y Energía & UNODC (2022)

Mapa 9.
Colombia: minas intervenidas por explotación ilícita de yacimientos mineros, 2015 - 2024



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Defensa



Los grupos armados organizados se lucran de la cadena del oro en todas sus fases. En la extracción, imponen rentas mediante cobros por el ingreso de insumos y maquinaria, exigen entre el 5% y el 10% del oro extraído como gramaje, establecen tarifas de entre 5 y 10 millones de pesos por operar dragas y cobran mensualidades de 1 a 3 millones para mantener el control de zonas específicas. Incluso los barequeros deben pagar entre 50 y 100 mil pesos a los dueños de maquinaria para trabajar con los residuos de operaciones ilegales de gran escala que utilizan dragas y maquinaria amarilla. En muchos casos, los propios grupos armados son propietarios directos —o a través de terceros— de operaciones mineras. A ello se suma el financiamiento de insumos a tasas de interés abusivas, que llegan a superar al 20% mensual (Banco de la República, 2019; Bonilla Calle, 2022; GDIAM, 2021; IPC, 2023b; Maldonado Sarmiento & Roza Gutiérrez, 2014).

La producción legal de oro no está restringida a grandes empresas con título minero. En 2023, los mineros de subsistencia representaron el 54% de la explotación autorizada registrada (Agencia Nacional de Minería, 2025). Aunque tienen derecho a ejercer su actividad sin título, siempre que cumplan requisitos mínimos, el principal desafío es la falta de trazabilidad. Una proporción significativa del oro que ingresa al mercado bajo esta categoría en realidad proviene de operaciones ilícitas.

En la comercialización, el mecanismo más extendido de legalización del oro ilegal es el uso fraudulento del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)³. Aunque el sistema establece límites de extracción y comercialización, la falta de controles efectivos facilita que se suplanten

identidades y que se registren volúmenes inexistentes (GDIAM, 2021). Estructuras criminales pagan a barequeros para inflar su producción, inscriben masivamente a personas y comunidades a cambio de pagos o incluso las registran sin su autorización. Un caso documentado por el Instituto Popular de Capacitación (2022) es el de “Lucrecia”, campesina desplazada que apareció como vendedora de 120 millones en oro en seis meses, sin haber participado nunca en esa actividad. Este tipo de maniobras convierte al oro ilícito en un recurso fácilmente “blanqueado” para los mercados internacionales.

La participación de las estructuras criminales se extiende a todos los niveles de la comercialización: cobran extorsiones a lo largo de la cadena, controlan la compra directa y participan en operaciones de exportación. En el mercado interno, intermediarios adquieren el oro a pequeños mineros sin papeles hasta un 20% por debajo del precio real y lo legalizan a través de comercializadoras (GDIAM, 2021). A nivel internacional, estudios de Global Financial Integrity (2021) identificaron un vacío de USD 5.600 millones entre lo que Colombia reportó como exportado y lo declarado por sus socios comerciales, lo que evidencia exportaciones ocultas, subvaloradas o utilizadas para lavado de activos. Según estimaciones de la *Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Universidad del Rosario, la Agencia Nacional de Minería y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)*, entre el 80% y el 87% del oro exportado por Colombia tendría origen ilegal, y alrededor del 70% de este estaría vinculado a grupos criminales (Contraloría General de la República de Colombia, 2022; Defensoría del Pueblo, 2023; El Tiempo, 2025; OEA, 2022; País Minero, 2023; Procuraduría General de la Nación, 2024b).

³ El Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) es una herramienta de control y vigilancia soportada en una plataforma tecnológica, en la cual los diferentes agentes relacionados con la explotación y comercialización de minerales se certifican ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).



También estiman que el valor estimado de la economía de la minería ilegal alcanza los 12 billones de pesos anuales, lo que indicaría que podría haber una pérdida de al menos 480 mil millones de pesos anuales en regalías por oro extraído ilegalmente, monto mayor al presupuesto nacional destinado a ciencia, tecnología e innovación en 2024. Diversas estimaciones sugieren que, en zonas mineras, los ingresos que estas organizaciones obtienen del oro podrían superar incluso a los del narcotráfico, con una relación de hasta 3 a 1 (Banco de la República, 2019; Fact Coalition, 2025)

Un ejemplo ilustrativo se encuentra en el Bajo Cauca antioqueño, donde la minería ilegal opera a gran escala. Allí la Gobernación de Antioquia ha identificado al menos 306 unidades productivas ilegales (El Colombiano, 2025a), cuya operación podría ser cuatro o cinco veces mayor que la principal empresa con título en la zona (Mineros Aluvial S.A.S. BIC), según indicó la misma multinacional en una entrevista (Caracol Televisión, 2025). El contraste es aún más evidente en el río Nechí, donde en 2024 operaban cerca de 100 dragas ilegales. Estas embarcaciones, que usan mercurio sin control alguno, no solo extraen oro: también envenenan el agua, afectan la salud de las comunidades y alteran de manera irreversible el cauce del río.

El negocio es tan rentable como destructivo. Cada draga requiere inversiones de entre 700 millones y 4.000 millones de pesos, pero puede producir alrededor de tres kilos de oro al mes. Sumadas, estas operaciones

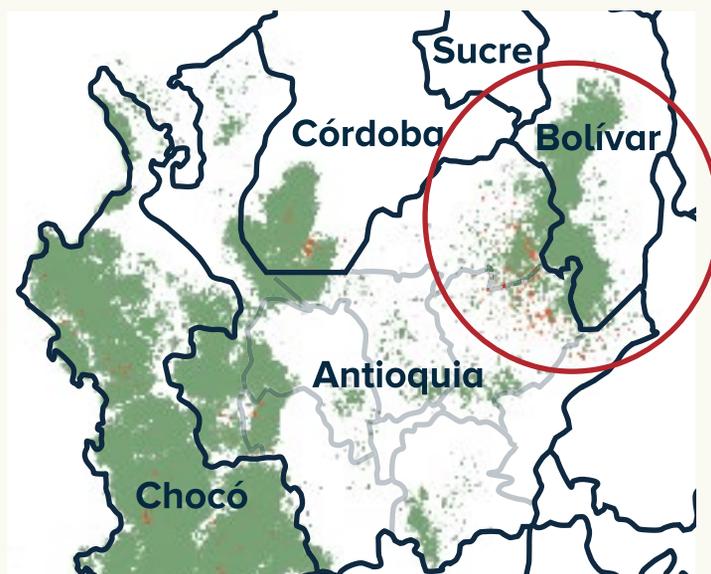
extraen unas 3,5 toneladas al año, generando ingresos cercanos a 1,3 mil millones de pesos por draga. En total, solo en el Nechí, los ingresos rondaron el billón de pesos en 2024 y podrían escalar a 1,5 billones en 2025 con el alza de los precios internacionales del oro. Mientras tanto, el Estado deja de percibir al menos 50.000 millones de pesos en regalías cada año, sin contar otros impuestos y aportes sociales que las empresas formales sí deben cumplir.

La Serranía de San Lucas es una Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena (ZR-FRM) (Ley 2da de 1959) ubicada en el Sur de Bolívar y 5 municipios de Antioquia⁴. Si bien es uno de los ecosistemas de mayor importancia biológica en el norte del país (WCS, 2014), también ha sido uno de los más golpeados por la deforestación, especialmente en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño (ver Mapa 10).

De acuerdo con el último reporte oficial sobre el cambio en la superficie de bosque en Colombia, la deforestación en el país se redujo un 36% y en Antioquia un 21% en 2023. No obstante, el sur de la Serranía de San Lucas fue uno de los 5 focos de mayor aceleración de la deforestación en Colombia durante 2023. El informe señala la extracción ilícita de minerales y las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva como las principales causas directas de la deforestación en esta Zona de Reserva Forestal de Ley Segunda (IDEAM - MADS, 2024).

⁴ En el caso del departamento de Antioquia, la Serranía de San Lucas alcanza los municipios de Nechí, El Bagre, Remedios, Segovia y Zaragoza (IDEAM, 2015).

Mapa 10.
Antioquia: deforestación, 2023



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con base en el Idea - MADS (2024)

Además de incrementar la deforestación, la minería ilegal también está deteriorando la salud de los habitantes del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, así como de otros municipios de vocación minera del departamento.

En marzo de 2024 la Procuraduría General de la Nación emitió un boletín en el que se indica que Antioquia se encuentra entre los diez departamentos que están en alerta por uso de mercurio en minería ilegal (Procuraduría General de la Nación, 2024c). De acuerdo con el ente de vigilancia, son preocupantes los altos niveles de mercurio y plomo que se encuentran en ríos como el Cauca y Nechí, afectando a las comunidades concentradas en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño (Procuraduría General de la Nación, 2024d).

En estas subregiones se han detectado altas concentraciones de mercurio en el pescado (200 veces mayor al valor permitido) y el huevo (10 veces mayor al valor permitido), así como en el cerdo, el pollo, la yuca, el plátano y el ñame. La presencia de este mi-

neral en los alimentos ocasiona problemas de salud y amenaza el acceso a alimentos inocuos de sus pobladores (Cabrera Jaramillo et al., 2022; IPC, 2023a).

En municipios de vocación minera como Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Nechí, Tarazá, Segovia, Remedios, Buriticá, Anorí, Anzá, entre otros, se han reportado problemas de salud estrechamente relacionados con la exposición a mercurio. Entre los más frecuentes se encuentran: problemas cognitivos, lingüísticos y de coordinación, pérdida de memoria, cefaleas, temblores en las manos, párpados y lengua; colesterol alto, hipertensión arterial, estados de ánimo irascibles, menor fuerza muscular y pérdida de la potencia sexual (Asociación Colombiana de Minería, 2015; Páez Pira et al., 2023; Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, 2017).

Estos estudios también encontraron que los niños y jóvenes de algunos de estos municipios presentan daños cognitivos que no solo pueden relacionarse con su exposición al mercurio y metilmercurio, sino también



con la probabilidad de que hayan sido expuestos durante el embarazo o la lactancia, como ocurre en El Bagre, Segovia, Remedios y Zaragoza (Asociación Colombiana de Minería, 2015; Cabrera Jaramillo et al., 2022; IPC, 2023a; Molina et al., 2017).

Otro caso que sirve para ilustrar bien la injerencia del crimen organizado en la minería ilegal es el de Buriticá (Occidente antioqueño). Allí, la mina más grande del país es operada por la multinacional Zijin–Continental Gold, con más de 90 kilómetros de túneles subterráneos (nueve veces más que el túnel del Toyo), más de 6.000 empleos directos e indirectos, y una producción que supera las ocho toneladas de oro al año (Zijin–Continental Gold, 2025). Entre 2021 y 2023, la compañía aportó más de 720.000 millones de pesos en impuestos y regalías, convirtiéndose en uno de los proyectos mineros más importantes de Colombia.

Desde 2020, sin embargo, la mina fue invadida por minería ilegal a sangre y fuego bajo el control del Clan del Golfo. Se estima que en 2024 el 60% de los túneles estaba invadido, con alrededor de 380 bocaminas abiertas desde viviendas, solares y negocios cercanos y unos 2.000 mineros ilegales bajo control del grupo armado (El Colombiano, 2025b; La Silla Vacía, 2024b). Un cálculo conservador permite estimar que estas operaciones ilegales producen 3,2 toneladas de oro al año, generando ingresos de 1 billón de pesos en 2024 y hasta 1,3 billones en 2025 por efecto del aumento en el precio internacional del oro. Solo en regalías, el Estado deja de recibir al menos 45.000 millones de pesos al año, sin contar impuestos ni programas de responsabilidad social empresarial.

El control criminal es total: el Clan del Golfo cobra por cada etapa de la operación —desde un porcentaje del oro extraído hasta el

ingreso de alimentos, víveres, electricidad y explosivos—, mientras financia insumos a tasas abusivas. Esta “guerra subterránea” ha dejado un saldo alarmante: entre 2023 y 2024, la multinacional, la Fuerza Pública y la prensa, registraron alrededor de 14.000 detonaciones para fracturar la montaña, más de 3.000 disparos y 2.700 explosiones de artefactos irregulares. La violencia no ha sido menor en vidas humanas: desde 2017, más de 100 trabajadores de Zijin han resultado heridos y 12 asesinados en ataques armados, mientras que entre los mineros ilegales se reportan al menos 94 heridos y 18 muertos por derrumbes, gases tóxicos o electrocuciones en túneles precarios, aunque las cifras reales podrían ser mayores por el subregistro.

El impacto ha trascendido el ámbito minero. Miles de personas —incluidas mujeres y menores de edad— han llegado al municipio atraídas por la explotación ilegal, quedando expuestas a trabajo forzado, consumo de drogas y prostitución. La presión sobre los servicios públicos ha generado interrupciones en el acueducto, y el encarecimiento de bienes básicos responde al flujo de dinero ilícito en la zona. La montaña misma enfrenta riesgos de inestabilidad geológica, y las fuentes hídricas sufren la contaminación por mercurio (Procuraduría General de la Nación, 2023).

Ante esta situación, en 2024 Zijin–Continental Gold demandó al Estado colombiano ante el CIADI, reclamando USD 430 millones por incumplir su deber de garantizar seguridad en Buriticá (International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2024). Mientras tanto, el Clan del Golfo mantiene un férreo control social, económico y territorial.

En suma, Buriticá ilustra cómo el oro se ha convertido en una renta ilícita estratégica:



enriquece a las estructuras armadas, financia armas e insumos, fortalece el control territorial y alimenta redes internacionales de lavado de activos. Para las comunidades, en cambio, deja rentas residuales, economías distorsionadas, deterioro ambiental, violencia y despojo. A ello se suma la salida de programas internacionales de cooperación como USAID, que dejó inconclusas decenas de proyectos rurales estratégicos en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste, aumentando el riesgo de que la coca y la minería no formalizada se consoliden como las principales fuentes de sustento para miles de familias más en Antioquia.

Aunque las rentas provenientes de los cultivos ilícitos y la explotación minera representan uno de los principales renglones en las finanzas de estas organizaciones criminales, estos no son los únicos mercados y actividades en los que participan.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, el repertorio de actividades criminales del Clan del Golfo en Antioquia incluye:

i) extorsiones a comerciantes, mineros, madereros, ganaderos y contratistas de obras públicas; ii) control de corredores de movilidad para zonas montañosas, áreas de cultivos ilícitos, zonas mineras, marítimas y fronterizas; iii) homicidios selectivos, amenazas y desplazamientos de comunidades; iv) desarrollo de la cadena de narcotráfico; v) testaferrato y lavado de activos; vi) control de rutas terrestres, fluviales, marítimas y aéreas de tráfico de estupefacientes con destinos a rutas internacionales; vii) minería ilegal; viii) control de microtráfico, apropiación y explotación ilícita de predios (especialmente de reclamantes de tierras, narcotraficantes y cabecillas de las desmovilizadas AUC y los botines de guerra); ix) oficina de cobros; x) control y adoctrinamiento de la población civil; y xi) actividades políticas y sociales con asociaciones campesinas, comités, Juntas de Acción Comunal y líderes sociales. Luego se descubrió que el Clan del Golfo también tomaría ventaja del tránsito de migrantes en el Darién (FIP, 2024a, p. 33).⁵

Esta amplia gama de fuentes de ingresos no solo es apetecida por Grupos Armados Organizados (GAOs), sino que también ha motivado la expansión de Grupos Delic-

tivos Organizados (GDOs)⁶ del Valle de Aburrá a otros municipios del departamento, e incluso, del país.

⁵ El Clan del Golfo estaría recibiendo cerca de 125 dólares por cada migrante que atraviesa el Darién, dejándoles una ganancia estimada de 57 millones de dólares al año (InSightCrime, 2023)

⁶ La principal diferencia entre los GAO y los GDO radica en su capacidad militar y el alcance de sus operaciones. Mientras que los GAO suelen ser más grandes, estructurados y con mayor capacidad de violencia, los GDO suelen tener un alcance más limitado y enfoque más local en sus actividades criminales. Se sugiere revisar la Ley 1908 de 2018 para comprender de manera más detallada las diferencias entre ambos grupos (Congreso de la República de Colombia, 2018).



Tabla 5.
Valle de Aburrá: Grupos Delictivos Organizados (GDO), 2024

Zona	Municipio	GDO
Sur	La Estrella	La Unión
	Itagüí	Trianon
	Envigado	Trianon
Centro	Medellín	Caicedo La Terraza Robledo Sierra Los Triana
Norte	Bello	Los Triana El Mesa Los Pachelly Los Chata
	Copacabana	Los Chata
	Girardota	Los Chata
	Barbosa	Los Chata y El Machete

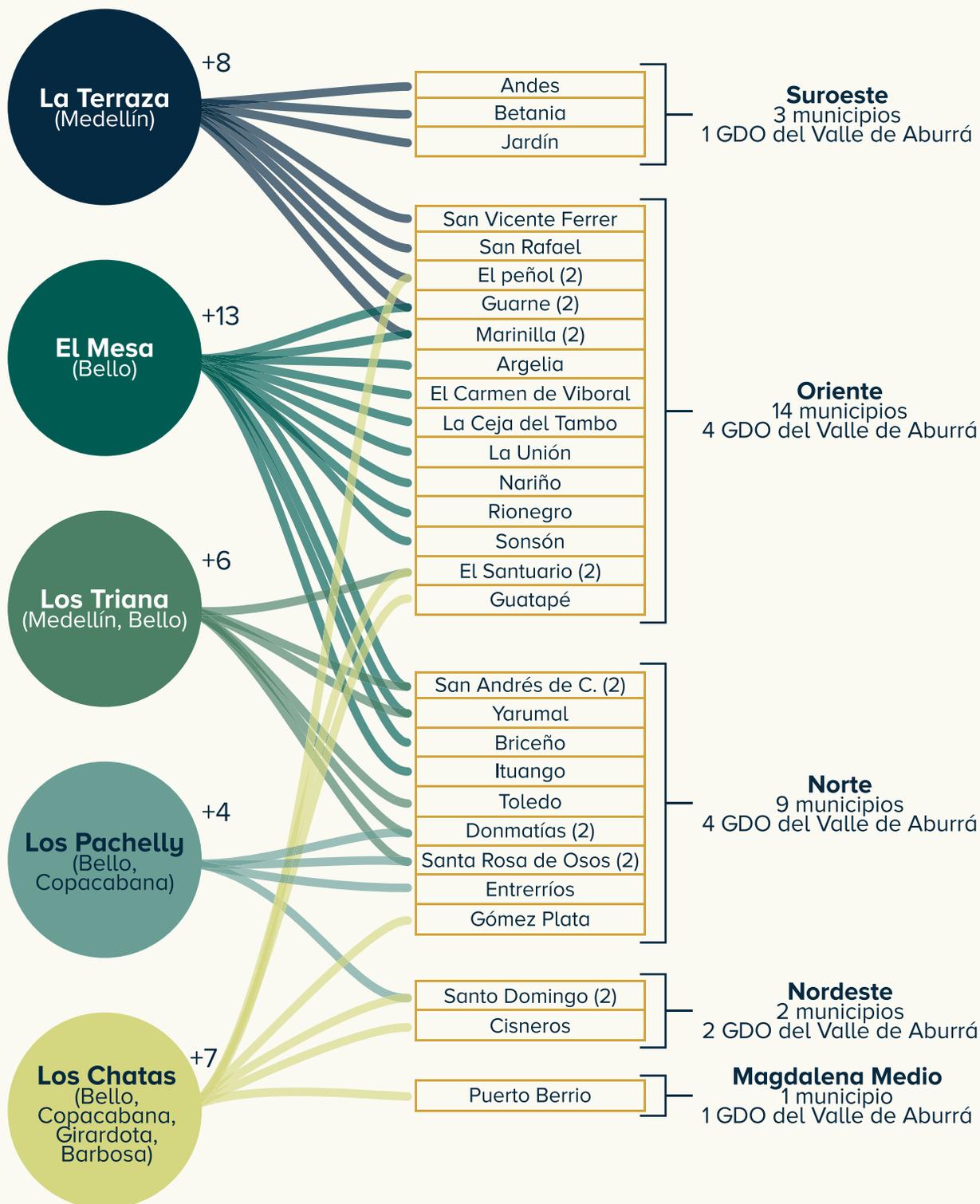
Fuente: Elaboración de Antioquia Cómo Vamos con información del CASCDH (2024b).

De acuerdo con el del Centro de Análítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH) de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia (2024b), en el Valle de Aburrá hay 11 GDO ubicados en 8 de los 10 municipios de la subregión (ver Tabla 5). Estos grupos estarían conformados por al menos 14.000 integrantes (FIP, 2023) y habrían expandido su alcance delictivo a por lo menos otros 29 municipios en Antioquia por fuera del Valle de Aburrá (ver Ilustración 2).



Ilustración 2.

Antioquia: expansión de GDO del Valle de Aburrá a otros municipios del departamento, 2024



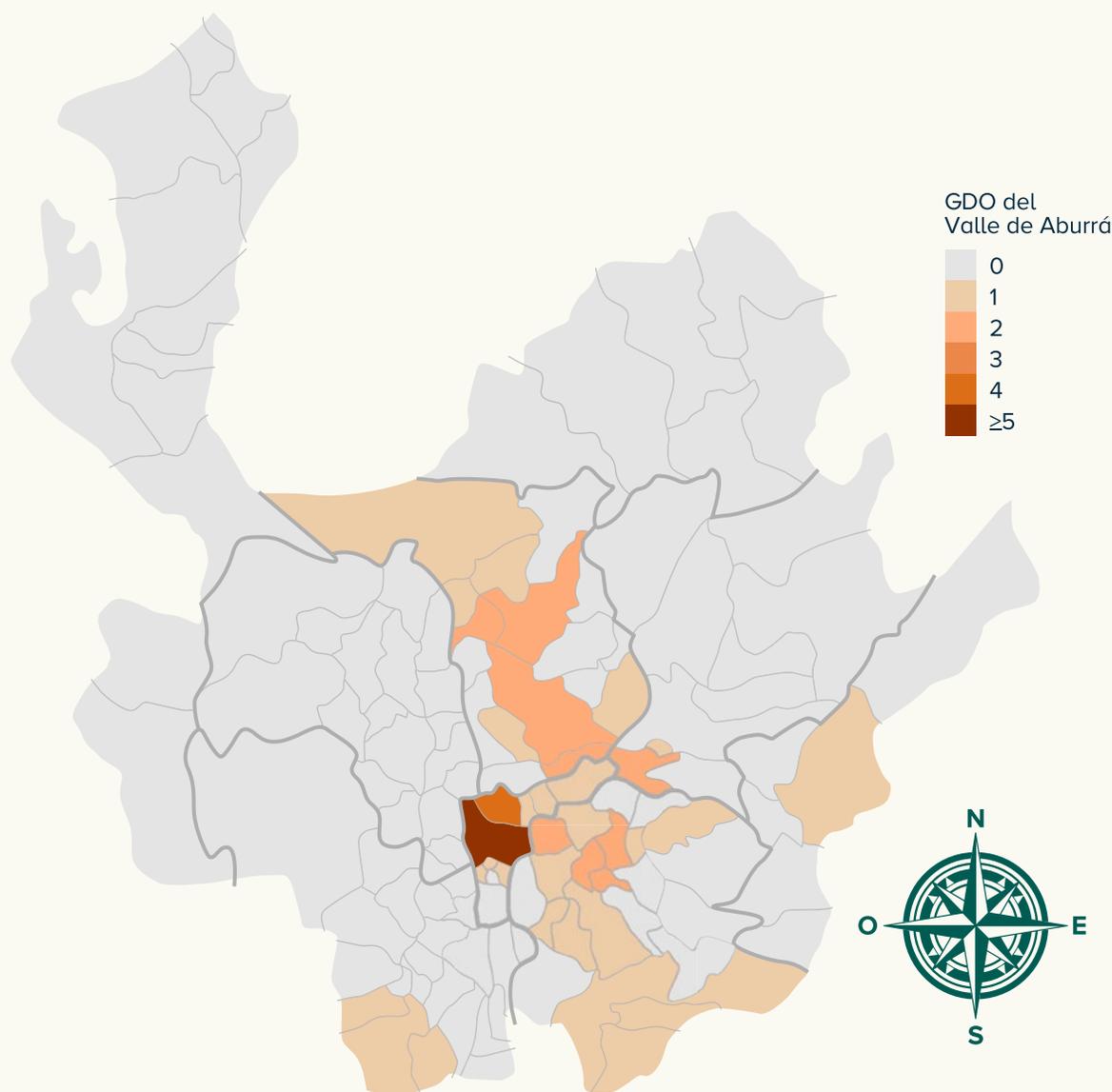
Fuente: Elaboración de Antioquia Cómo Vamos con información del CASCDH (2024b).



De los 11 GDO ubicados en el Valle de Aburrá, 5 han expandido su presencia territorial a otras subregiones del departamento: 3 de ellos originarios de Bello (El Mesa, Los Pachelly y Los Chata) y 2 de Medellín (La Terraza y los Triana). Las subregiones con más municipios alcanzados por el accionar delictivo de estos grupos son Oriente (14), Norte (9), Suroeste (3), Nordeste (2) y Magdalena Medio (1).

Mapa 11.

Antioquia: expansión de GDO del Valle de Aburrá a otros municipios del departamento, 2024



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir del CASCDH (2024b).



La llegada de grupos delincuenciales al oriente antioqueño ha provocado disputas con bandas locales y con el Clan del Golfo por el control de los mercados criminales como el microtráfico y la extorsión, lo que ha resultado en un aumento de los homicidios en una de las subregiones con las tasas más bajas del departamento. Entre 2018 y 2019, la tasa de homicidios en el Oriente era inferior a 18 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2020 subió a 21,1, en 2021 a 25,9, en 2022 a 29,1, en 2023 rondó los 27,9 y en 2024 alcanzó los 28,8 (SIEDCO, 2024).

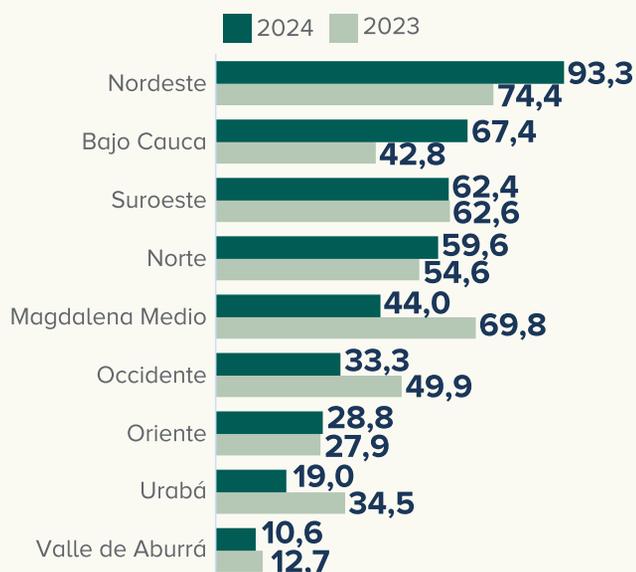
La tasa de homicidios en el Oriente antioqueño pasó de ser la segunda más baja del departamento en 2023 a la tercera en 2024 (ver Gráfico 37). Entre 2019 y 2024, esta subregión registró un aumento del 63% en su tasa de homicidios, el mayor incremento en todo el departamento. Esta tendencia, sumada a las elevadas tasas que persisten en el Suroeste por las rentas criminales, constituye una alerta que las autoridades no pueden pasar por alto, más aún si se tiene en cuenta la relevancia productiva y turística de estas subregiones.

Gráfico 36.
Antioquia: homicidios y tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, 2019-2023



Fuente: elaboración propia a partir de las Estadísticas Vitales del DANE (Agresiones [homicidios] y secuelas). Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.

Gráfico 37.
Antioquia: tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes según subregión, 2023-2024



Fuente: elaboración propia a partir del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.



En 2024 Antioquia registró la tasa de homicidios más baja desde 1969: 25,4 casos por cada 100 mil habitantes, alcanzando por primera vez una tasa menor que la nacional (26,6)⁷. Esta disminución histórica de la violencia homicida, además de responder a la capacidad de disuasión y reacción de la fuerza pública, probablemente está relacionada con las dinámicas de expansión y consolidación de control territorial de los actores armados ilegales que tienen injerencia en el territorio.

Al desagregar la tasa de homicidios de Antioquia por subregiones, se observa que las únicas subregiones que registraron tasas relativamente bajas en 2023 fueron el Valle de Aburrá, Urabá y Oriente (ver Gráfico 37). Estas cifras deben interpretarse con cuidado, ya que una baja tasa de homicidios no necesariamente implica una menor capacidad del crimen organizado. Por el contrario, podría indicar una mayor consolidación de su control territorial.

El Urabá antioqueño y el Valle de Aburrá se caracterizan por ser zonas con un dominio estable de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo y Grupos Delincuenciales Organizados (GDOs) afiliados a la estructura conocida como la Oficina de Envidado, así como de los Pachelly y El Mesa. En estas subregiones, las organizaciones criminales han consolidado un poder capaz de disminuir los niveles de violencia, lo que no solo favorece sus actividades criminales, sino que también les ayuda a ganar legitimidad social y a mantener a la fuerza pública lo más alejada posible (Blattman et al., 2020, 2021; CORPADES, 2019; FIP, 2024a; PARES, 2023, 2024b).

Gráfico 38.
Antioquia: enfrentamientos armados entre ilegales, 2018-2024



Fuente: elaboración propia con datos del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz - JEP

⁷ Numerador: Estadísticas Vitales del DANE (Agresiones [homicidios] y secuelas). Denominador: proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV- 2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.

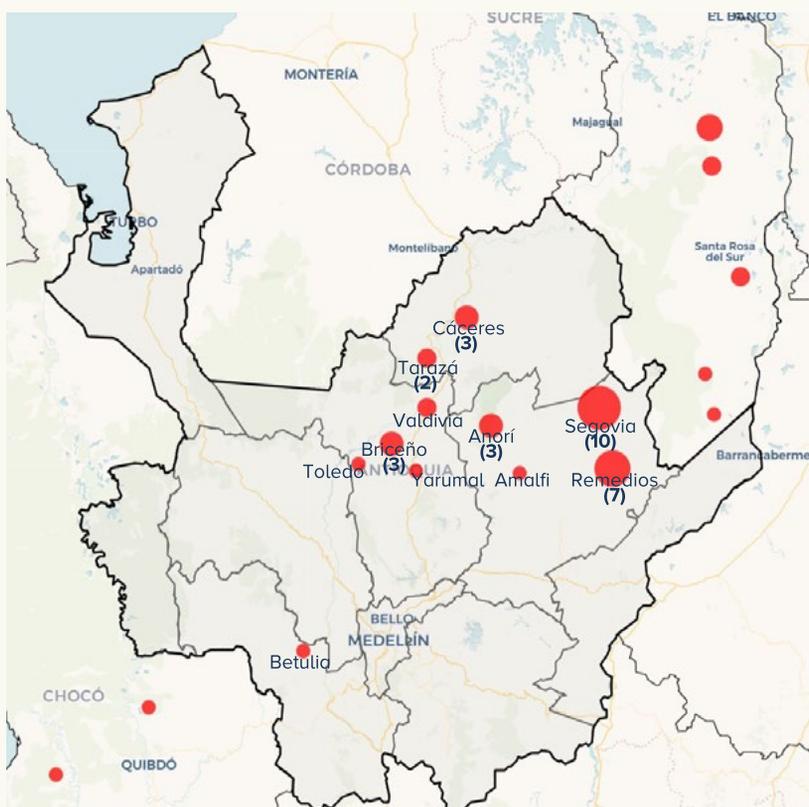


No obstante, en varias zonas del departamento la expansión de las estructuras criminales se traduce en expresiones de violencia con fuerte impacto humanitario. En 2024, Antioquia registró un 55% más de enfrentamientos armados entre grupos ilegales, con especial concentración en el Nordeste, el Norte y el Bajo Cauca, subregiones donde la disputa territorial se mantiene activa.

Este panorama contrasta con la reducción histórica de homicidios alcanzada en 2024. La aparente mejoría no alcanza a las zonas más golpeadas por el control criminal: allí las tasas de homicidio son entre dos y tres veces superiores al promedio departamental. El contraste urbano-rural es aún más marcado: mientras en las áreas urbanas la tasa de homicidios fue de 14,7 por cada 100

mil habitantes, en las zonas rurales ascendió a 58,7, es decir, casi cuatro veces más alta. El peso de la ruralidad en esta violencia es determinante. Aunque los centros poblados y las veredas concentran apenas el 21% de la población de Antioquia, allí se registró el 51% de los homicidios del departamento en 2024 (INMLCF, 2024). Esta desproporción revela que la violencia letal se ensaña en los territorios más apartados, donde confluyen economías ilícitas, débil presencia institucional y mayor control de los grupos armados. Según la Gobernación de Antioquia, el 85% de los homicidios estaría directamente vinculado a grupos armados organizados (70%) y bandas criminales (15%), teniendo al microtráfico y la extorsión como los principales dinamizadores de la violencia homicida (El Colombiano, 2025a).

Mapa 12.
Antioquia: enfrentamientos armados entre ilegales, 2024



Fuente: elaboración propia con datos del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz - JEP



Con la consolidación cada vez mayor del Clan del Golfo como grupo dominante en el Bajo Cauca (ver Mapa 4), las disputas y la violencia homicida se han desplazado cada vez más hacia el Nordeste del departamento, donde este grupo armado intenta arrebatárle la influencia histórica que ha tenido sobre esta zona minera el ELN y las disidencias de las FARC (PARES, 2024b). Así, mientras que en 2018 la disputa por el Bajo Cauca entre el Clan del Golfo y los Caparros impulsó una tasa de homicidios en esta subregión de 160,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la posterior consolidación del Clan del Golfo en la subregión trajo consigo una disminución de esta tasa hasta alcanzar los 42,8 en 2023, pero nuevas confrontaciones entre criminales la subieron nuevamente a 67,4 en 2024.

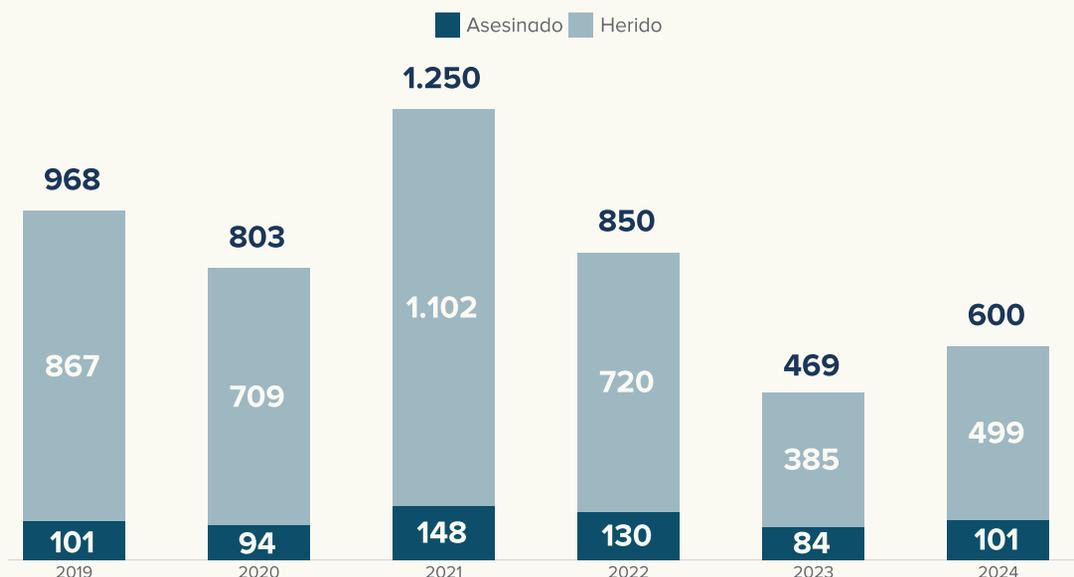
Por otro lado, la tasa de homicidios del Nordeste antioqueño pasó de 83,6 en 2018, a alcanzar los 117,7 en 2022, dando cuenta del desplazamiento de la violencia hacia esta subregión. Si bien en 2023 se redujo la tasa de homicidios en el Nordeste y en el Bajo Cauca, en 2024 la violencia se ha recrudecido nuevamente en estas subregiones: en 2024 las tasas de homicidios del Nordeste y Bajo Cauca incrementaron un 25% y 58%, respectivamente, frente al año anterior (CASCDH, 2024a). Esta situación deja ver el poco interés que tienen las estructuras criminales en ceder el control de las rentas mineras y cocaleras ubicadas en esta zona (ver Mapa 5 y Mapa 6).

No obstante, en 2024 no solo aumentaron los enfrentamientos entre grupos ilegales, sino que también volvió a crecer la violencia contra la Fuerza Pública. A nivel nacional, las afectaciones contra militares y policías aumentaron un 32%, alcanzando 600 casos, de los cuales 101 fueron asesinatos y 499 heridos (véase el Gráfico 39). Aunque las negociaciones de la política de Paz Total redujeron en un inicio la exposición de la Fuerza Pública a ataques, hostigamientos y combates directos, su fracaso ha repercutido en un repunte de las agresiones, no solo contra uniformados, sino también en otros hechos victimizantes en el país.

El balance del primer semestre de 2025 confirma esta tendencia al deterioro. Entre junio de 2024 y junio de 2025, las afectaciones contra la Fuerza Pública casi se duplicaron (92%), con un incremento del 136% en los asesinatos (de 39 a 92), un 85% en los heridos (de 213 a 393) y un 105% en los hostigamientos (de 58 a 119) (véase la Tabla 6). Estos datos muestran que la desescalada lograda en 2022 y 2023 fue efímera, y que las dinámicas de confrontación regresaron con fuerza, dejando a la Fuerza Pública nuevamente en el centro del conflicto armado y del control territorial disputado por estructuras ilegales.



Gráfico 39.
Colombia: afectaciones a la Fuerza Pública, 2019-2024



Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa

Tabla 6.
Colombia: afectaciones a la Fuerza Pública, jun-2024 vs jun-2025

	Jun-2024	Jun-2025	Δ%
Afectaciones a la Fuerza Pública	252	458	92%
Asesinados	39	92	136%
Heridos	213	393	85%
Hostigamientos	58	119	105%

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa y del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz - JEP

Antioquia no ha sido ajena al incremento de la violencia contra la Fuerza Pública. En 2024 fue el departamento con más uniformados asesinados (22) y el tercero con mayor número de heridos (70). En 2025 la situación se recrudeció: el Plan Pistola del Clan del Golfo dejó 11 miembros de la Fuerza Pública asesinados en

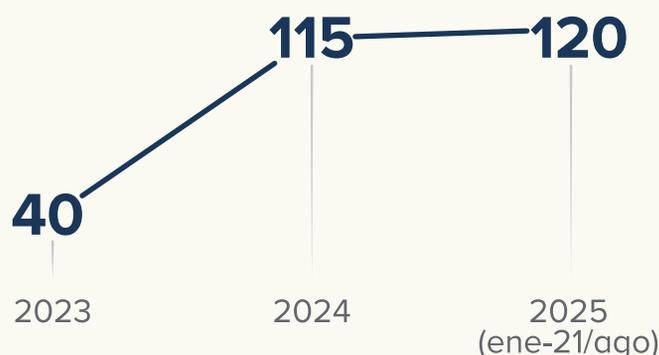
solo dos semanas en el departamento. Al mismo tiempo, en el resto del país se intensificaron los ataques con drones perpetrados por estructuras criminales, una modalidad que ha dejado víctimas no solo entre los uniformados, sino también entre la población civil. Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025 se regis-



traron al menos 235 ataques con drones, con un saldo de 13 personas asesinadas (10 uniformados y 5 civiles) y 83 heridos (45 uniformados y 38 civiles). Entre las víctimas civiles se

cuentan dos niños de 10 y 12 años, un adulto mayor de 73 años, una mujer pobladora y un contratista de una empresa de energía (véase el Gráfico 40).

Gráfico 40.
Colombia: ataques con drones,
enero/2023 - 21/ago/2025



Fuente: estimaciones propias a partir de información del Ministerio de Defensa y de prensa nacional

Toda esta arremetida contra la Fuerza Pública —potenciada por el fortalecimiento financiero y tecnológico de las estructuras criminales— se produce en un momento en que el país enfrenta un debilitamiento progresivo de las capacidades estatales para contener la violencia y proteger a la población (FIP, 2025b). A pesar de que el presupuesto del Ministerio de Defensa creció 5,5% entre 2022 y 2025, alcanzando cerca de 60 billones de pesos en 2025 (4,1% del PIB), el más alto de la década, el 79% de ese gasto se concentra en personal: salarios, pensiones, retiros y programas como “Matrícula Cero” para jóvenes en servicio militar obligatorio, entre otros beneficios orientados a hacer más atractiva y dignificar la incorporación.

El margen restante para invertir en modernización tecnológica, mantenimiento, inteligencia y operatividad es limitado. Además, el pie de fuerza se ha reducido: según la Procuraduría, el Ejército perdió alrededor de 70.000 efectivos entre 2021 y 2025, mien-

tras que el Ministerio de Defensa sostiene que la disminución es menor y responde a retiros programados. Lo cierto es que, entre la presión presupuestal y los retrasos en desembolsos que afectan dotaciones, horas de vuelo y sostenimiento operativo, las Fuerzas Armadas ven disminuida su capacidad de respuesta en los territorios, justo cuando las estructuras criminales exhiben mayor poder de fuego y recursos.

La violencia homicida también se expresó en masacres: en 2024 se registraron 9 en Antioquia, un 25% menos que en 2023 (JEP, 2024) Sin embargo, ese mismo año aumentaron los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, al pasar de 22 casos en 2023 a 26 en 2024. Con esta cifra, Antioquia se ubicó como el segundo departamento con más homicidios de líderes y defensores en el país, después del Cauca (29 casos) (Indepaz, 2024d).



Adicionalmente, en 2024 no se registraron homicidios de firmantes de paz en el departamento, no obstante, se suman 44 entre 2017 y 2023 en Antioquia (Indepaz, 2024c). Aunque la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia destacó a Antioquia como un ejemplo en la implementación de los Acuerdos de Paz, reconociendo los avances en la reincorporación social y económica de los firmantes, también hace un llamado al Estado para intensificar los esfuerzos en establecer las condiciones necesarias para la implementación del Acuerdo en el departamento. Como lo señala la misión de verificación, “garantizar la seguridad de las personas en proceso de reincorporación, los líderes y lideresas sociales y las comuni-

dades continúa siendo uno de los grandes desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz” (Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, 2024, p. 1).

La Tabla 7 presenta algunos de los hechos victimizantes que más personas afectaron en Antioquia durante 2024: los desplazamientos forzados, las amenazas, los confinamientos, los homicidios y la pérdida de bienes muebles o inmuebles fueron los 5 hechos con la mayor cantidad de víctimas. Nótese nuevamente como la mayoría de los casos, independientemente del hecho victimizante, se concentra en aquellas subregiones con mayor influencia de las estructuras criminales (ver Mapa 6).

Tabla 7.
Antioquia: víctimas por hecho victimizante según subregión, 2024

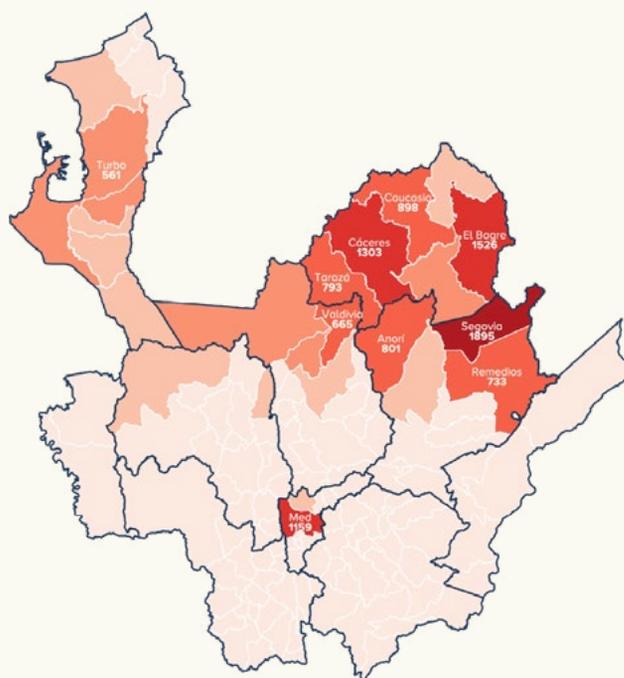
	Desplazamiento forzado	Amenaza	Confinamiento	Homicidio	Perdida de bienes muebles o inmuebles	Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado	Otros hechos victimizantes ⁸	Total
Antioquia	16.662	5.997	4.290	624	323	102	179	28.177
Bajo Cauca	4.701	1.186	2.491	71	74	17	46	8.586
Norte	3.756	897	1.799	166	73	16	35	6.742
Urabá	2.153	1.217	0	35	39	43	17	3.504
Nordeste	2.255	1.017	0	99	64	12	35	3.482
Occidente	1.456	309	0	22	4	4	2	1.797
Suroeste	880	536	0	51	49	3	10	1.529
Valle de Aburrá	671	411	0	94	10	4	12	1.202
Oriente	532	284	0	63	7	2	18	906
Magdalena Medio	258	140	0	23	3	1	4	429

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Defensa y del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz - JEP

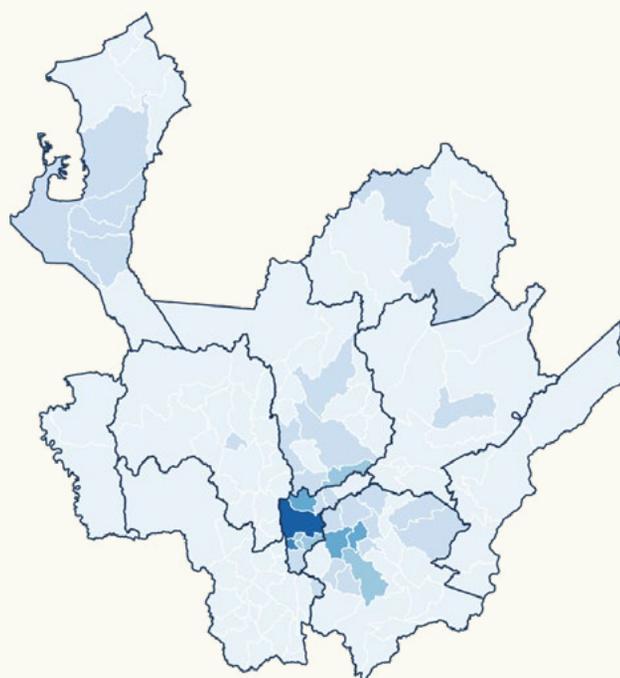
8 Acto terrorista / atentados / combates / enfrentamientos / hostigamientos; Lesiones Personales Físicas; Lesiones Personales Psicológicas; Secuestro; Desaparición forzada; Homicidios, Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados; Tortura; Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo Improvisado.

En Antioquia, el desplazamiento forzado sigue siendo una de las expresiones más críticas de la violencia armada. En 2024, al menos 16.662 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en el departamento, lo que representa una disminución del 42% frente a 2023. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cerca del 40% de las víctimas no reporta los hechos en el mismo año en que ocurren (ICRC, 2025), por lo que es probable que la cifra de 2024 aumente en la medida en que más personas se acerquen a registrar su situación. Por lo pronto, los registros permiten detectar a Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá como regiones más afectadas por este hecho victimizante durante 2024, mientras que Valle de Aburrá y Oriente recibieron la mayoría de las víctimas que llegaron al departamento (ver Mapa 13 y Mapa 14).

Mapa 13.
Antioquia: víctimas de desplazamiento forzado según municipio de ocurrencia, 2024



Mapa 14.
Antioquia: víctimas de desplazamiento forzado según municipio de llegada, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la UARIV. Fecha de corte: julio de 2025



En promedio, cada año alrededor de 26 mil personas son víctimas de este fenómeno. La mayoría corresponde a casos individuales, aunque también persisten los desplazamientos masivos (que involucran a 10 o más familias). Solo en 2024, 2.889 personas fueron desplazadas de manera masiva, lo que representa una reducción del 11% en comparación con 2023 (ICRC, 2025).

De acuerdo con el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz, en 2024 se registraron 16 eventos de desplazamiento masivo, frente a 5 ocurridos en 2023. La distribución de estos hechos revela la concentración territorial de la crisis: cinco eventos en Anorí (Nordeste), cuatro en Segovia (Nordeste), cuatro en El Bagre (Bajo Cauca), dos en Cáceres (Bajo Cauca) y uno en Remedios (Nordeste) (JEP, 2024).

El confinamiento forzado también muestra un deterioro alarmante de la seguridad en las zonas disputadas por estructuras criminales. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 2023 y 2024 el número de personas afectadas por confinamientos en Antioquia se incrementó en un 237%, pasando de 1.271 en 2023 a 4.281 en 2024. Las subregiones de Bajo Cauca y Nordeste fueron las más golpeadas por esta práctica, asociada principalmente a enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.

Sin embargo, los registros oficiales podrían estar subestimando la magnitud del fenómeno. El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó 1.224 personas confinadas en 2023 y 8.043 en 2024, lo que equivale a un incremento del 557% (ICRC, 2024, 2025). A esto se suma que, a diferencia de los datos del RUV, el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos identificó también tres eventos de confinamiento en la subregión Norte, específicamente en los municipios de Valdivia (1) y Briceño (2) (JEP, 2024).

En suma, las dinámicas de desplazamiento y confinamiento en Antioquia no solo persisten, sino que muestran signos de agravamiento, con un impacto territorial diferenciado y un subregistro que invisibiliza parte de la magnitud del daño humanitario.

Entre los hechos con mayor número de víctimas y mayor subregistro se encuentra la violencia sexual en el marco del conflicto armado. El recrudecimiento de la confrontación en los últimos años ha traído consigo una nueva ola de reportes de violencia sexual atribuida a actores armados en Antioquia. Entre 2020 y 2023 los casos registrados en el Registro Único de Víctimas (RUV) se incrementaron en un 256%, pasando de 61 en 2020, a 90 en 2021, 146 en 2022 y 217 en 2023 (véase el Gráfico 41). Esta tendencia al alza refleja el recrudecimiento del conflicto y otros hechos victimizantes, pero también evidencia que estas cifras corresponden apenas a una minoría de mujeres que han tenido la posibilidad y la valentía de denunciar.

Aunque en 2024 se observa una disminución del 53% respecto al año anterior, este descenso debe leerse con cautela: muchas de estas violencias se denuncian solo después de varios años, si es que llegan a ser reportadas. La evolución de los registros lo confirma: en junio de 2024, el RUV daba cuenta de 185 casos para 2023, pero en julio de 2025 ya se habían incorporado 32 casos adicionales, alcanzando el pico de 217 y con la posibilidad de que siga aumentando en los próximos años. Una dinámica similar podría darse con los 102 casos reportados a la fecha para 2024, que seguramente crecerán conforme más víctimas se acerquen a denunciar.

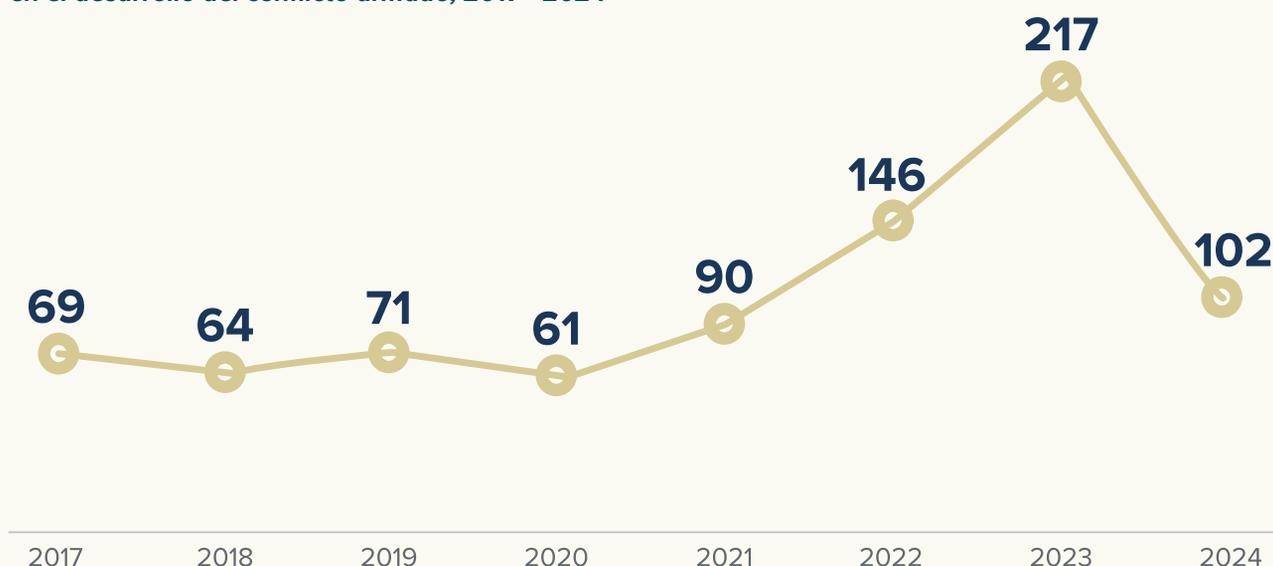
En 2024, la mayoría de estos hechos repudiables se concentraron en subregiones directamente afectadas por el conflicto armado, como el Bajo Cauca (52 casos), el Norte (39) y el Nordeste (22). Sin embargo, también



se registraron en territorios donde, aunque no hay enfrentamientos constantes, sí existe un dominio territorial de estructuras criminales. Tal es el caso de Urabá (63 casos), una

zona bajo la influencia del Clan del Golfo, donde el control armado sobre la vida comunitaria favorece el silenciamiento, el miedo y la persistencia de estas violencias.

Gráfico 41.
Antioquia: Delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado, 2017 - 2024



Fuente: elaboración propia con datos del Registro Único de Víctimas. Corte: Mayo de 2025

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), entre 1975 y el 1 de abril 2023, al menos 1.143 niños, niñas y adolescentes han nacido en Colombia como consecuencia de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dado que muchas madres prefieren no informar estos hechos para proteger su identidad y la de sus hijos e hijas, es probable que el número real de víctimas sea mayor (JARIV, 2023).

Otro delito cuyo subregistro podría ser significativo, debido al temor a represalias, es la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades de grupos armados organizados al margen de la ley. Según el Registro Único de Víctimas, en 2024 se do-

cumentaron al menos 14 casos en Antioquia, cifra que representa una reducción del 33 % frente a 2023. Sin embargo, el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz identificó en el mismo año al menos 24 casos en el departamento, principalmente en el Bajo Cauca (9), Oriente (5) y Suroeste (4). Entre 2017 y 2024, tras la firma del Acuerdo de Paz, en casi la mitad de los casos reportados se señala como presunto responsable al Clan del Golfo (41,1 %), seguido por las disidencias de las FARC-EP (15,2 %), el ELN (11,6 %) y otros grupos de delincuencia organizada (4,5 %). En el 21,4 % de los casos no se logró establecer el actor responsable.

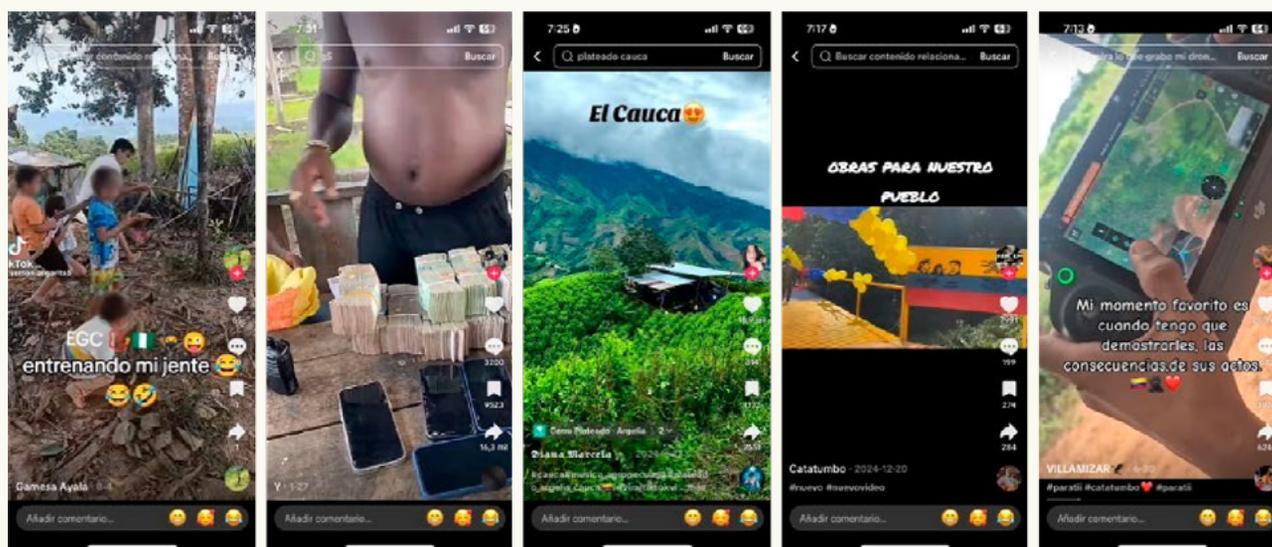


Respecto a la vinculación y estrategias de reclutamiento, cabe señalar la creciente preocupación por El uso de TikTok y otras redes sociales en el reclutamiento y vinculación de NNA actividades asociadas a grupos ilegales. Según la (ONU, 2025), más de 500 mil usuarios consumen a diario contenido de reclutamiento en redes sociales, especial-

mente en TikTok. Los grupos ilegales difunden mensajes con promesas de dinero fácil, poder y estatus social a través de contenido que usualmente incluye cultivos de coca, corridos mexicanos, armas, guerra, dinero, propaganda insurgente y la normalización de la violencia y los actores armados, tal y como se puede observar en la Ilustración 3.

Ilustración 3.

Colombia: screenshots de cuentas de TikTok que comparten contenido relacionado con grupos al margen de la ley, 2025



Fuente: Elaboración propia con imágenes extraídas de TikTok

En el marco del conflicto armado y la violencia perpetrada por grupos armados al margen de la ley, la desaparición forzada se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los familiares cercanos de las personas desaparecidas, sino que afecta también a las comunidades y a la sociedad en su conjunto (Amnistía Internacional, n.d.). Durante 2024, el Registro Único de Víctimas reportó 30 casos más (entre víctimas directas e indirectas), lo que representa una reducción del 40 % frente al año anterior. Sin embargo, como ocurre con todos los registros del RUV, esta cifra podría aumentar con la incorporación de casos reportados de manera extemporánea. Con estos nuevos registros, ya son 49.465 las víctimas de desaparición forzada en Antioquia desde 1985, lo que ratifica la magnitud y persistencia de esta grave violación a los derechos humanos en el departamento.

Otro delito que sigue golpeando con fuerza la libertad, la dignidad y la integridad de las víctimas y sus familias en Antioquia es el secuestro, una práctica que, lejos de ser un vestigio del pasado, continúa siendo una grave amenaza. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa Nacional (2025), en 2023 el departamento alcanzó el nivel más alto de secuestros



de los últimos 17 años, con 54 casos, lo que significó un incremento del 74,2 % frente a 2022. Aunque en 2024 se registró una reducción del 13,5%, con 39 casos, la tendencia creciente del secuestro extorsivo refleja la consolidación de esta modalidad como un mecanismo de presión y financiación de las estructuras criminales en el departamento. Mientras en 2020 se registraron 11 casos, la cifra se duplicó en 2021 (23) y mantuvo una tendencia ascendente: 24 en 2022, 37 en 2023 y 32 más en 2024 (ver Gráfico 42)

Gráfico 42.
Antioquia: cantidad de secuestros según modalidad, 2017-2024



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de datos del Ministerio de Defensa (2024).

La información suministrada por el Ministerio de Defensa indica que entre 2021 y 2024 los secuestros extorsivos se presentaron principalmente en centros urbanos del departamento. De los 116 secuestros extorsivos reportados en este periodo de tiempo en Antioquia, la mayoría se concentraron en las subregiones del Valle de Aburrá (62,1%) y Oriente (14,7%). Específicamente, Medellín (38), Bello (12), Copacabana (7), La Estrella (5), Rionegro (5) y Guarne (4) concentraron la mayor cantidad de casos.



Tabla 8.

Antioquia: tasa de denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes según subregión, 2019 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antioquia	21,1	20,6	19,5	24,2	28,0	29,6
Valle de Aburrá	22,9	23,4	21,8	29,1	36,6	34,9
Norte	26,9	21,7	25,4	38,2	26,5	30,6
Magdalena Medio	26,6	20,5	15,7	16,5	22,7	27,9
Nordeste	33,1	26,6	25,4	19,4	22,6	27,1
Bajo Cauca	17,1	18,0	18,0	22,9	15,5	24,6
Oriente	16,2	14,4	13,4	9,6	10,0	24,3
Suroeste	15,2	17,3	20,4	12,8	12,5	23,7
Occidente	28,2	21,3	14,5	13,6	16,9	14,2
Urabá	7,0	4,8	3,2	5,1	6,5	10,3

Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos con información del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO y las Estadísticas Vitales del DANE (Agresiones [homicidios] y secuelas). Tasas calculadas con las proyecciones de población con la actualización post COVID-19 calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV-2018. Incidencia por cada 100.000 habitantes.

Además del secuestro extorsivo, la extorsión se mantuvo en 2024 como uno de los delitos más críticos en Antioquia. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO, 2025), en el departamento se registraron 2.045 denuncias, un 5,8% más que en 2023. Por primera vez desde que se tienen registros oficiales, se superaron las 2.000 denuncias en un solo año.

Esta cifra refleja dos caras de la misma realidad: por un lado, evidencia la persistencia y expansión de la extorsión como mecanismo de control social y económico de los grupos criminales; por otro, muestra un avance en la disposición de las víctimas a denunciar un delito históricamente marcado por el subregistro debido al miedo y las represalias. No obstante, el aumento de denuncias no reduce la gravedad del fenómeno: más bien confirma que la extorsión sigue siendo una amenaza estructural que limita la seguridad

ciudadana y el desarrollo económico del departamento. De acuerdo con la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia, el 10% de los habitantes del departamento indican que en su barrio o vereda se paga extorsión o vacuna y, entre quienes no se sienten seguros en sus municipios, aproximadamente 1 de cada 10 indica que esto también se debe al cobro de la extorsión o vacuna.

Excepto por Valle de Aburrá y Bajo Cauca, en Antioquia se registró un incremento de las denuncias por extorsión en la mayoría de las subregiones en 2024, no obstante, Valle de Aburrá continúa registraron la tasa más alta de denuncias por este delito (ver Tabla 8). En más de la mitad de los casos denunciados en Antioquia durante 2024, se indicó que la extorsión se realizó mediante llamadas telefónicas (34%) y redes sociales (20%). Aunque las denuncias de los ciudadanos afectados



indican que las extorsiones son perpetradas por grupos ilegales organizados y bandas criminales, desde el sistema penitenciario y carcelario también se lleva a cabo este delito, ya que los internos realizan extorsiones a través de celulares (Defensoría del Pueblo, 2024).

La Procuraduría General de la Nación (2024a) alerta que la extorsión representa el 41% de los delitos cometidos desde las cárceles en Colombia y que tan solo 2 de los 22 equipos bloqueadores de señal ubicados en los establecimientos penitenciarios del país se encuentran funcionando. Como señala la Fundación Paz y Reconciliación–PARES

Esto, parece evidenciar que, lejos de ser instituciones que aporten a la solución de la problemática ligada a la extorsión, las cárceles se están convirtiendo en centros dinamizadores del delito, propiciado por los altos índices de hacinamiento, corrupción y las dificultades existentes para el mantenimiento del control y las regulaciones en su interior (PARES, 2024a, para. 2).

La extorsión, junto con el tráfico de drogas, la explotación sexual de menores, la trata de personas, el despojo de propiedades y el lavado de activos, constituye una de las principales fuentes de financiación del crimen organizado en Colombia. Aunque existen sistemas de información relativamente sólidos para hechos como homicidios, desplazamientos forzados, secuestros o asesinatos de líderes sociales, persiste un vacío en la medición de fenómenos cotidianos como amenazas, intimidaciones, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, economías ilícitas o la captura de mercados legales, lo que genera un alto subregistro.

En varias subregiones de Antioquia, los grupos armados no solo controlan actividades económicas, sino que también imponen normas sociales, restringen la movilidad y ejercen violencia basada en género, consolidando formas de gobernanza criminal. Estas dinámicas incluyen la extorsión, la cooptación de liderazgos sociales y la coacción electoral, limitando la participación política y el voto libre.

Estos grupos no solo se dedican al tráfico de estupefacientes y a la extorsión, sino que también imponen un esquema de gobernanza criminal, regulando el orden social bajo sus propias reglas y normas de conducta (FIP, 2024a). En los territorios bajo su control, ejercen una política del miedo mediante la imposición de sanciones que van desde multas monetarias hasta desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas y ejecuciones (IPC, 2021). No se debe olvidar que la población civil siempre es la más afectada en medio de las confrontaciones armadas, de las más de 273 mil personas asesinadas en Colombia en el marco del conflicto armado, el 82.9% eran civiles y el 17.1% combatientes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2024).

En este contexto, la presencia e influencia de los actores armados en los territorios es innegable, pero no se traduce en legitimidad ni en confianza ciudadana. El 33 % de los habitantes indica que las organizaciones al margen de la ley prestan seguridad en su barrio o vereda, pero solo el 5 % acudiría a ellos ante un problema. De hecho, el 55 % considera que la mejor manera de mejorar la seguridad es con más presencia y vigilancia de la Fuerza Pública, y menciona además Empleo (8 %), Reducir delincuencia (7 %), Educación (5 %), Cámaras (5 %) y Otras opciones (20 %).



entre las cuales ningún encuestado señala a los actores ilegales como alternativa (Gobernación de Antioquia, 2024b). La gente no quiere ilegales; quiere Estado.

En Antioquia “los muchachos del barrio” intervienen frecuentemente en problemas y situaciones cotidianas, especialmente en hur-

tos, riñas y problemas entre vecinos (véase el Gráfico 43). No obstante, La ciudadanía percibe que la Policía interviene más frecuentemente en la mayoría de las situaciones, especialmente cuando se trata de ruido excesivo y consumo de marihuana. Solo cuando se trata de pago de deudas se observa una percepción de intervención significativamente mayor de “los muchachos del barrio”.

Gráfico 43.
Antioquia: porcentaje de personas que indican que la Policía y los “muchachos del barrio” intervienen frecuentemente en problemas cotidianos, 2024



Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia de la Gobernación de Antioquia.

Aunque casi la mitad de la ciudadanía (45 %) percibe que contribuyen a la seguridad del sector y más de la mitad (58 %) cree que su entorno estaría peor sin su intervención, la valoración positiva se desvanece frente a los indicadores de legitimidad. Mientras el 59 % considera que la Policía actúa de manera justa o muy justa, solo el 38 % opina lo mismo de “los muchachos del barrio”. En confianza, la brecha es similar: 56 % hacia la Policía frente a 33 % hacia estos grupos



Los hallazgos del Pulso de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2025a) permiten contextualizar estas percepciones. Si bien los grupos criminales ejercen influencia sobre la vida cotidiana —en especial en el control de horarios y desplazamientos (57 %)—, no son el actor más influyente en los territorios. Son las organizaciones comunitarias quienes concentran la mayor incidencia en asuntos clave como la solución de conflictos (63 %), la gestión de recursos ambientales (72 %) y las actividades económicas locales (61 %). También son el actor que goza de mayor confianza, junto con las iglesias, muy por encima de la Fuerza Pública y el sistema de justicia, cuya desconfianza ronda el 75 %.

Este panorama indica que, a pesar del control que ejercen los grupos criminales, no impera una gobernanza criminal plena. Existen contrapesos comunitarios y capacidades organizativas que sostienen la cohesión social y ofrecen un punto de partida para fortalecer la legitimidad institucional.



Conclusiones

- La fotografía de la seguridad en Antioquia durante 2024 muestra un departamento en transición. La caída histórica de los homicidios revela que los peores momentos de la violencia del departamento han quedado atrás, pero al mirar con mayor detalle se evidencia que la violencia no ha desaparecido: se ha transformado. Mientras en los centros urbanos se consolida cierta estabilidad, en las zonas rurales y en las subregiones disputadas por estructuras criminales la vida cotidiana sigue marcada por el miedo, el despojo y la confrontación. Allí, donde habita apenas una quinta parte de la población, ocurre más de la mitad de los homicidios.
- Las violencias en los hogares y contra las mujeres reflejan otra cara de esta realidad. Los aumentos sostenidos en los reportes al sistema de salud, la persistencia del subregistro y la impunidad en la justicia muestran que la seguridad no se mide únicamente en las calles o en los índices de homicidios, sino también en la intimidad de los hogares, en las relaciones de pareja y en las trayectorias vitales de niñas y adolescentes. El riesgo de femicidio, como desenlace extremo de estas violencias, recuerda que la protección de la vida de las mujeres es uno de los desafíos más urgentes del departamento.
- En paralelo, la violencia interpersonal y la intolerancia en los espacios públicos exponen la fragilidad de la convivencia. Los conflictos entre vecinos, las riñas y el uso indiscriminado de armas demuestran que no toda la violencia proviene de estructuras organizadas: también surge de prácticas sociales normalizadas que escalan con facilidad y convierten un desacuerdo en tragedia.
- La economía criminal, por su parte, continúa siendo el eje que ordena y explica buena parte de la violencia. Antioquia concentra tanto la producción legal como ilegal de oro, y en territorios como el Bajo Cauca o Buriticá esta riqueza se convierte en una maldición: financia al Clan del Golfo y a otros grupos armados, multiplica la destrucción ambiental y distorsiona la economía local. En varias subregiones, los ingresos del oro ilegal superan incluso a los del narcotráfico, mostrando que la minería ilícita ya no es un problema secundario, sino un motor central de la violencia.



- Finalmente, la violencia contra la Fuerza Pública y la población civil —incluyendo nuevas modalidades como los ataques con drones— revela un escenario donde las organizaciones criminales se fortalecen, mientras que el Estado enfrenta dificultades para sostener su capacidad operativa. Los recortes en pie de fuerza, la concentración del gasto en personal y los retrasos en modernización e inteligencia limitan la posibilidad de recuperar el control territorial en un momento crítico.
- Antioquia vive una seguridad desigual y frágil. Los avances son innegables, pero no alcanzan a todos por igual ni son sostenibles en el tiempo sin transformaciones más profundas. Si no se logra reducir el poder financiero de las estructuras criminales, garantizar justicia efectiva frente a las violencias basadas en género, prevenir la intolerancia que alimenta la violencia cotidiana y reconstruir la legitimidad del Estado en las zonas más afectadas, los logros departamentales seguirán siendo parciales y reversibles. El verdadero reto es que la seguridad no sea un privilegio de unos territorios, sino un derecho garantizado para todas las comunidades de Antioquia.
- El reto que enfrenta Antioquia es doble. Por un lado, es imprescindible desarticular las finanzas y la capacidad operativa del crimen organizado, atacando las rentas ilícitas que sostienen su poder. Por otro, se requiere abrir caminos de desarrollo sostenible para las comunidades más vulnerables, de modo que la economía legal compita con la ilegal y le devuelva opciones dignas a la población. A esto se suma la necesidad de cerrar la brecha de confianza entre ciudadanía e instituciones, fortaleciendo el rol de las organizaciones comunitarias y garantizando el acceso efectivo a la justicia. Solo así será posible reducir la influencia de actores ilegales y avanzar hacia un horizonte de seguridad democrática y sostenible, donde la protección y la convivencia sean un derecho real en todos los rincones de Antioquia.



Referencias

Agencia Nacional de Minería. (2025). Boletín Estadístico informativo 'Minería en cifras'. <https://mineriaencolombia.anm.gov.co/contenido/boletin-mineria-en-cifras>

Amnistía Internacional. (n.d.). Desapariciones forzadas. Retrieved August 16, 2024, from <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/disappearances/>

Asociación Colombiana de Minería. (2015). Mercurio, un monstruo dormido en Antioquia. <https://acmineria.com.co/blog/2015/01/16/mercurio-un-monstruo-dormido-en-antioquia/>

Banco de la República. (2019). Participación del Banco de la República en la comercialización de oro en Colombia.

BBC. (2024). Por qué hay un exceso de oferta de hoja de coca y cocaína en América Latina (y qué repercusiones está teniendo esto en la región y el mundo). <https://www.bbc.com/mundo/articles/c51n3gj1qgxo>

Blattman, C., Duncan, G., Lessing, B., & Tobón, S. (2021). Gang rule: Understanding and Countering Criminal Governance. <https://doi.org/10.3386/w28458>

Blattman, C., Duncan, G., Lessing, B., Tobón, S., & Mesa-Mejía, J. P. (2020). Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo. Nota de Política CIEF N° 01. <https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiaayfinanzas/cief/Documents/gobierno-criminal-medellin.pdf>

Bonilla Calle, D. (2022). Gobernanza criminal de la minería del oro en la región del Bajo Cauca y en el municipio de Buriticá, Antioquia. *Estudios Políticos (Universidad de Antioquia)*, 65, 241–270. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.n65a09>

Cabrera Jaramillo, A., Vélez Isaza, M., Cadavid Muñoz, N., González-Álvarez, D., & Arango Ruiz, Á. (2022). Capítulo 6. Acercamiento sociodemográfico y evaluación piloto de dificultades cognitivas en niños y jóvenes de colegios públicos en un municipio minero del Bajo Cauca antioqueño. In *Minería, mercurio y salud. Aportes de la comunidad académica (1a ed.)*. Editorial Lasallista. https://www.researchgate.net/publication/366230509_Libro_Mineria_mercurio_y_salud_-_Aportes_de_la_comunidad_academica_ISBN_978-958-5149-29-8



Caracol Radio. (2024, March 18). Estado Mayor Central estaría presente en el 62% del país con unos 4.000 miembros. <https://caracol.com.co/2024/03/18/estado-mayor-central-estaria-presente-en-el-62-del-pais-con-unos-4000-miembros/>

Caracol Televisión. (2025). Crudas imágenes del desastre ambiental causado por la extracción ilegal de oro. Los Informantes - Caracol Televisión [Broadcast].

Casa de la Mujer. (2024). Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres en la familia en los municipios de Zaragoza, el Bagre y Nechí . 2019 - 2023.

CASCDH. (2024a). Informe diario de homicidios. Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos - CASCDH.

CASCDH. (2024b, August 7). Estructuras criminales en Antioquia. Geoportal CASCDH. Centro de Analítica de Seguridad, Convivencia y Derechos Humanos (CASCDH), Secretaría de Seguridad y Justicia, Gobernación de Antioquia. <https://geoportal-casch-gobantioquia.hub.arcgis.com/apps/23ba-f3f4651a4403ae57ab3306ffb004/explore>

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2024). Los orígenes de la violencia y el conflicto armado en cifras. <https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/portal-de-datos/el-conflicto-en-cifras/>

Congreso de la República de Colombia. (2018). Ley 1908 de 2018. Por medio de la cual se dictan normas para la investigación y judicialización de los grupos delictivos organizados y los grupos armados organizados, se crea el fondo para la reparación integral a las víctimas y se dictan otras disposiciones. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87301>

Contraloría General de la República de Colombia. (2022). Un 85% del oro que exporta Colombia es producto de la minería ilegal, alerta la @CGR_Colombia al rendir cuentas del control fiscal sobre medio ambiente. https://x.com/CGR_Colombia/status/1552777580444524544?lang=ar-x-fm

CORE. (2024). Las disidencias de las FARC-EP. Dos caminos de una guerra en construcción.

CORPADES. (2019). Bandas criminales de Medellín habrían acordado un nuevo pacto del fusil. Análisis Urbano. Corporación Para La Paz y El Desarrollo Social, Corpades. <https:// analisisurbano.org/el-pacto-del-fusil-sigue-vigente-en-medellin-y-el-valle-de-aburra-no-hay-nuevos-pactos/36938/>



Defensoría del Pueblo. (2023). Informe situación de los derechos humanos de la población minera colombiana: visibilizando la cara de la economía minera ilegal. <https://repositorio.defensoria.gov.co/server/api/core/bitstreams/3b7c0b72-c706-4ad4-b0ad-b5b041adc4c6/content>

Defensoría del Pueblo. (2024). Comunicado de presan. Extorsión en Colombia preocupa a la Defensoría del Pueblo. <https://www.defensoria.gov.co/-/extorsi%C3%B3n-en-colombia-preocupa-a-la-defensor%C3%ADa-del-pueblo-pues-creci%C3%B3-el-20-5-en-los-%C3%BAltimos-cuatro-a-%C3%B1os#:~:text=%C3%BAltimos%20cuatro%20a%C3%B1os-,Extorsi%C3%B3n%20en%20Colombia%20preocupa%20a%20la%20Defensor%C3%ADa%20del%20Pueblo%2C%20pues,en%20los%20%C3%BAltimos%20cuatro%20a%C3%B1os&text=Mientras%20en%202020%20fueron%20reportados,delictiva%20de%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional>

El Colombiano. (2022). Disputa de bandas de Bello por controlar el Oriente antioqueño disparó las cifras de homicidios. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/aumento-en-homicidios-en-el-oriente-por-culpa-de-bandas-de-bello-HE19590711>

El Colombiano. (2025a). 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/7-de-cada-10-homicidios-en-antioquia-son-por-clan-del-golfo-disidencias-eln-KM28609210>

El Colombiano. (2025b). Gobernador pide a la fuerza pública mayor contundencia contra 306 unidades de minería ilegal en el Bajo Cauca.

El Colombiano. (2025c). Guerra subterránea en mina de Buriticá se recrudece: mineros piden a gobierno Petro que grupos armados no sigan a sus anchas. <https://www.elcolombiano.com/antioquia/atentado-en-mina-de-buritica-mineros-piden-soluciones-al-gobierno-de-gustavo-petro-NO26395484>

El Tiempo. (2025). Negocio del oro ilegal en varias regiones ya pesa más en rentas criminales que la coca: informe especial. <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/oro-ilegal-en-varias-regiones-ya-pesa-mas-en-rentas-criminales-que-la-coca-3455013>

Fact Coalition. (2025). Addressing Illegal Gold Mining in the Western Hemisphere. New Approaches for U.S. Policy. Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition. <https://thefactcoalition.org/wp-content/uploads/2025/08/Gold-Mining-Policy-Report-FACT-ENG-V3.pdf>

FIP. (2023). Medellín: negociar la paz cuando no hay guerra. Fundación Ideas Para La Paz. <https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2023-06/medellin-negociar-la-paz-cuando-no-hay-guerra>



FIP. (2024a). La última negociación del Clan. Antecedentes, contexto y lecciones de la negociación del gobierno colombiano con el Clan del Golfo (2015-2018). https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_sn_clandelgolfo.pdf

FIP. (2024b). Paz Total. Los grupos armados ganan con cara y con sello.

FIP. (2025a). ¿Quiénes gobiernan en las regiones de Colombia? <https://ideaspaz.org/publicaciones/especial/2025-06/quienes-gobiernan-en-las-regiones>

FIP. (2025b). Tercer año de Petro: entre la “tormenta perfecta” y el riesgo de una “paz electoral.” <https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2025-08/tercer-ano-de-petro-entre-la-tormenta-perfecta-y-el-riesgo-de-una-paz-electoral>

GDIAM. (2021). Comercialización y trazabilidad del oro en Colombia propuesta para Antioquia. Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM). <https://gdiam.org/wp-content/uploads/2023/07/Publicacion-GDIAM-Territorial-2021-1.pdf>

Global Financial Integrity. (2021). Hacia una minería de oro transparente en Colombia. https://gfintegrity.org/wp-content/uploads/2021/02/Colombia-Gold-SP_2.10.21.pdf

Gobernación de Antioquia. (2024a). Encuesta de Calidad de Vida 2023.

Gobernación de Antioquia. (2024b). Encuesta de Percepción de Victimización y percepción de seguridad y convivencia.

ICRC. (2024). Balance Humanitario 2024. Colombia. Comité Internacional de la Cruz Roja - ICRC. https://www.icrc.org/sites/default/files/document_new/file_list/balance_humanitario_-_version_digital_2024.pdf

ICRC. (2025). RETOS HUMANITARIOS 2025 COLOMBIA. <https://www.icrc.org/sites/default/files/2025-03/Balance%20Humanitario%20versi%C3%B3n%20digital%202025.pdf>

IDEAM. (2015). Zona de Reserva Forestal, Pacífico. Atlas Zonas de Reserva Forestal - Ley 2 de 1959, 70–91. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

IDEAM - MADS. (2024). Monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación en Colombia - 2023 (resumen de resultados).

Indepaz. (2024a). Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la Paz Total. <https://indepaz.org.co/autodefensas-gaitanistas-de-colombia-y-la-paz-total/>



Indepaz. (2024b). Informe el contexto de la Paz Total. Acciones de los grupos, DDHH y DIH. Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz.

Indepaz. (2024c). Visor de asesinato a firmantes del acuerdo de paz en Colombia. <https://indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-firmantes-del-acuerdo-de-paz-en-colombia/>

Indepaz. (2024d). Visor de asesinato a personas líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. <https://indepaz.org.co/visor-de-asesinato-a-personas-lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-en-colombia/>

INMLCF. (2021). Violencia intrafamiliar durante la pandemia por COVID-19. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. Blogs INMLCF. <https://www.medicinalegal.gov.co/blog/-/blogs/violencia-intrafamiliar-durante-la-pandemia-por-covid-19>

INMLCF. (2024). Observatorio de Violencia - Cifras de lesiones de causa externa y desaparecidos en Colombia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

InSightCrime. (2020). ELN muestra poder inédito al paralizar zonas de Colombia. <https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/eln-poder-inedito-colombia/>

InSightCrime. (2023). Gaitanistas concesionan el tráfico de migrantes en el Darién colombiano: informe. <https://insightcrime.org/es/noticias/gaitanistas-concesionan-trafico-migrantes-darien/>

InSightCrime. (2024). Estado Mayor Central – Ex-FARC Mafia. [https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/ex-farc-mafia-estado-mayor-central/#:~:text=El%20Estado%20Mayor%20Central%20\(EMC,y%20el%20gobierno%20de%20Colombia.](https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/ex-farc-mafia-estado-mayor-central/#:~:text=El%20Estado%20Mayor%20Central%20(EMC,y%20el%20gobierno%20de%20Colombia.)

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (2024). Continental Gold Inc. v. Republic of Colombia (ICSID Case No. ARB/24/25).

IPC. (2021). Informe sobre la situación de los derechos humanos en Antioquia 2021. Observatorio de derechos humanos y paz. Instituto de Capacitación Popular (IPC).

IPC. (2022). Suplantando campesinos y mineros están legalizando el oro en Bajo Cauca. <https://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/suplantando-campesinos-y-mineros-estan-legalizando-el-oro-en-bajo-cauca/>



IPC. (2023a). A graves problemas de salud se exponen en el Bajo Cauca por alimentos con mercurio. Instituto de Capacitación Popular. <https://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/a-graves-problemas-de-salud-se-exponen-en-el-bajo-cauca-por-alimentos-con-mercurio/>

IPC. (2023b). Impactos de la minería extractiva aurífera en el río Nechí. Instituto Popular de Capacitación (IPC).

JEP. (2024). Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz. https://www.jep.gov.co/uia/Paginas/mecanismo_monitoreo/index.aspx

La Silla Vacía. (2024a). Cifras secretas del gobierno confirman que todos los grupos armados crecieron. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/cifras-secretas-del-gobierno-confirman-que-todos-los-grupos-armados-crecieron/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20las%20cifras>

La Silla Vacía. (2024b). El Clan del Golfo va ganando la guerra subterránea del oro en Buriticá. 2024. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/el-clan-del-golfo-va-ganando-la-guerra-subterranea-del-oro-en-buritica/>

Maldonado Sarmiento, I. E., & Rozo Gutiérrez, L. M. (2014). Convergencia de los grupos armados organizados al margen de la ley en la minería aurífera aluvial en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. *Revista Criminalidad*, 56(3), 119–138. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082014000300009

Ministerio de Defensa Nacional. (2024). Datos y Cifras del Sector Defensa. Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional. <https://www.mindefensa.gov.co/defensa-y-seguridad/datos-y-cifras>

Ministerio de Minas y Energía & UNODC. (2022). Colombia. Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota 2021. https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf

Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. (2024). Nota de prensa. Redoblar esfuerzos para avanzar en la implementación del acuerdo de paz con beneficios concretos para las comunidades, prioridad en Antioquia.

Molina, C. F., Arango, C. M., & Sepúlveda, H. (2017). Contaminación por mercurio de leche materna de madres lactantes de municipios de Antioquia con explotación minera de oro. *Biomédica*, 38, 19–29. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v38i0.3609>



OEA. (2022). Tras el dinero del oro ilícito: fortalecimiento de la lucha contra las finanzas de la minería ilegal: El caso de Colombia. <https://www.oas.org/es/sms/ddot/docs/Tras-el-dinero-del-oro-ilicito-El-caso-de-Colombia.pdf>

ONU. (2023). La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. <https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/>

ONU. (2025). Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia. <https://www.refworld.org/sites/default/files/2025-07/15191.pdf>

Páez Pira, J. L., Mazuera Polanco, E. M., & Quintero Jimenez, A. C. (2023). Evaluación de la exposición a mercurio y efectos neurológicos en la población expuesta del municipio de Nechí de Colombia [Universidad del Rosario]. <https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/c022fad5-89f8-4c30-9f5b-a2010ade571f/content>

País Minero. (2023). El oro, de nuevo la fiebre que mata. <https://www.paisminero.com/index.php/mineria/mineria-colombiana/27016-el-oro-de-nuevo-la-fiebre-que-mata>

PARES. (2023). Estructuras armadas ilegales de Medellín suspenden hostilidades y apoyan la construcción Paz Total. <https://www.pares.com.co/post/estructuras-armadas-ilegales-de-medell%C3%ADn-suspenden-hostilidades-y-apoyan-la-construcci%C3%B3n-paz-total>

PARES. (2024a). Extorsión carcelaria en Colombia: Un delito entre rejas. Línea convivencia y seguridad ciudadana, Fundación Paz y Reconciliación. <https://www.pares.com.co/post/extorsi%C3%B3n-carcelaria-en-colombia-un-delito-entre-rejas>

PARES. (2024b). ¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de paz total 2022-2024. <https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene>

PARES. (2024c). Presencia EAI en Antioquia 2024. Fundación Paz y Reconciliación. SIPARES. <https://public.tableau.com/app/profile/fundaci.n.paz.y.reconciliaci.n/viz/PresenciaEAIenAntioquia2024/Antioquia>

Portafolio. (2024). Análisis: ¿Cuánto representa el narcotráfico en la economía colombiana en el 2024? <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/cuanto-representa-el-narcotrafico-en-el-pib-de-colombia-analisis-de-ricardo-avila-605945>



Procuraduría General de la Nación. (2023). Guerra en los socavones, crisis social y ambiental por minería ilegal en Buriticá. <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/guerra-socavones-crisis-social-ambiental-mineria-ilegal-buritica.aspx>

Procuraduría General de la Nación. (2024a). Boletín 22. Procuraduría raja al Gobierno por extorsión carcelaria. <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/procuraduria-raja-al-gobierno-por-extorsion-carcelaria.aspx>

Procuraduría General de la Nación. (2024b). Informe Nacional: Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia. Procuraduría General de la Nación. <https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2024/Diciembre%202024/Informe%20Nacional%20Miner%20c3%ada%20Ilegal%20y%20Contaminaci%20c3%b3n%20por%20Mercurio%20en%20Colombia%20%281%29.pdf>

Procuraduría General de la Nación. (2024c, March 5). 10 departamentos en alerta por uso de mercurio en minería ilegal: Procuraduría. Boletín 238 - 2024. <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/departamentos-alerta-uso-mercurio-en-mineria-ilegal-procuraduria.aspx>

Procuraduría General de la Nación. (2024d, March 18). Alerta en Antioquia por minería ilegal: altos niveles de mercurio y plomo en ríos. Procuraduría convoca a mesa territorial. Boletín 291 - 2024. <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/alerta-antioquia-por-mineria-ilegal-altos-niveles-mercurio-y-plomo-en-rios-procuraduria-convoca-mesa-territorial.aspx>

Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia. (2017). Informe de los resultados de tamizaje de intoxicación por mercurio en poblaciones antioqueñas con explotación minera. <https://www.dssa.gov.co/images/programas-y-proyectos/factores-de-riesgo/riesgo-quimico/ANTIOQUIA%20INFORME%20DEPARTAMENTAL%20VEM%202017.pdf>

SIEDCO. (2025). Estadística delictiva. Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional – SIEDCO. <https://www.policia.gov.co/estadistica-delictiva>

UARIV. (2023, May 25). Dimensionar lo innombrable: datos de la violencia sexual en la guerra. Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas - UARIV. https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/Violencia_sexual_2023/datos_violencia_sexual_2023.html

UNICEF. (2022). Deserción escolar, explotación sexual, embarazo y desnutrición en la infancia. <https://legadosolidario.unicef.org.co/conecta-con-unicef/deserci%C3%B3n-escolar-explotacion-sexual-embarazo-desnutricion-infancia>



UNODC. (2023). Colombia. Monitoreo de los territorios con presencia de cultivos de coca 2022. https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/septiembre-9/INFORME_MONITOREO_DE_TERRITORIOS_CON_PRESENCIA_DE_CULTIVOS_DE_COCA_2022.pdf

UNWOMEN, & UNODC. (2022). Gender-related killings of women and girls (femicide/feminicide). <https://knowledge.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Gender-related-killings-of-women-and-girls-improving-data-to-improve-responses-to-femicide-feminicide-en.pdf>

UPME. (2025). Serie histórica producción de Oro en Colombia asociada al pago de regalías. <https://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/Paginas/oro.aspx>

WCS. (2014). Noticias. Equipo de investigadores viaja a la Serranía de San Lucas. Wildlife Conservation Society (WCS). <https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Noticias/articleType/ArticleView/articleId/1441/Equipo-de-investigadores-viaja-a-la-Serrania-de-San-Lucas.aspx>

Zamora-Moncayo, E., Burgess, R. A., Fonseca, L., González-Gort, M., & Kaku, R. (2021). Gender, mental health and resilience in armed conflict: listening to life stories of internally displaced women in Colombia. *BMJ Global Health*, 6(10), e005770. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005770>

Zijin-Continental Gold. (2025). Mina Buriticá. Minería Moderna de Colombia para el mundo. <https://www.continentalgold.com/mina-buritica/>



8.

Ambiente y Entorno

El Capítulo Ambiente y Entorno analiza tres ejes ambientales clave en Antioquia – gestión del riesgo de desastres, residuos sólidos y cambio climático– destacando sus desafíos actuales.

En riesgo de desastres, muestra que los eventos naturales (inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales) se han intensificado en frecuencia y severidad, parcialmente por el cambio climático, superando la capacidad de respuesta en muchos territorios.

En residuos sólidos, revela que el departamento dispuso ~1,62 millones de toneladas en 2024 principalmente en rellenos sanitarios, pero enfrenta una inminente crisis de disposición (muchos rellenos locales con <6 años de vida útil). Se enfatiza la baja tasa de reciclaje y separación en la fuente, insistiendo en la transición hacia una economía circular (reducción, aprovechamiento y valorización de residuos) como solución.

Sobre cambio climático, el documento retoma algunos aspectos de la Tercera y Cuarta Comunicación del IDEAM, señalando que, la doble condición, lluvias más intensas y sequías más prolongadas, serán más recurrentes en los próximos años en Antioquia, agravando riesgos para población, ecosistemas y sectores como agricultura y abastecimiento de agua. Asimismo, señala problemas como la deforestación en zonas críticas (Bajo Cauca, Magdalena Medio) que no solo emiten CO₂ y erosionan la biodiversidad, sino que también elevan la vulnerabilidad territorial.

En suma, la síntesis resalta que Antioquia enfrenta retos ambientales interconectados: el aumento de desastres climáticos, un modelo insostenible de manejo de residuos y las presiones del cambio climático, todo lo cual exige acciones urgentes y coordinadas para encaminarse hacia un desarrollo más resiliente y sostenible.



Gestión del riesgo de desastres

La toma de decisiones públicas depende cada vez más de información veraz y oportuna. Sin embargo, los análisis de riesgo global más recientes – el *Global Risks Report 2024 y 2025* del Foro Económico Mundial– muestran que, en el horizonte 2025-2027, la desinformación y la información errónea se perfilan como el principal riesgo mundial, inmediatamente seguidas por los eventos climáticos extremos. A más largo plazo (hasta 2035) se proyecta que la intensificación del cambio climático dominará el panorama de riesgos, con aumentos sostenidos en la frecuencia y severidad de tormentas, olas de calor y precipitaciones extremas; la pérdida de biodiversidad y la contaminación se consolidan como amenazas sistémicas, mientras que el avance tecnológico introduce riesgos asociados a la inteligencia artificial y profundiza las desigualdades existentes. (World Economic Forum, 2025).

Los nuevos escenarios departamentales de cambio climático (cuarta comunicación) elaborados por el IDEAM (2024) prevén para Antioquia:

- Incremento del promedio y de la intensidad de las lluvias, con mayor probabilidad de inundaciones y movimientos en masa detonados por esta variable.
- Sequías más prolongadas en temporadas secas, lo que eleva el riesgo para el abastecimiento hídrico y la agricultura.

Estos cambios sugieren una mayor incidencia de desastres asociados al clima – desde crecientes repentinas, deslizamientos y tormentas eléctricas, hasta incendios forestales y olas de calor –, lo que plantea retos sociales, económicos, tecnológicos y políticos.

Partiendo de estas evidencias, el capítulo se centra en las condiciones territoriales y sociales que potencian el riesgo de desastres en Antioquia, con el doble propósito de proveer insumos para la discusión pública e informar a la ciudadanía sobre cómo estas dinámicas se relacionan con su calidad de vida y qué acciones de reducción de riesgo y adaptación son prioritarias.

En suma, comprender la interacción entre desinformación, cambio climático y vulnerabilidad territorial es indispensable para anticipar contingencias y avanzar hacia un desarrollo resiliente e inclusivo en el departamento.

Gráfico 1.
Conceptos relacionados con gestión del riesgo de desastres.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos.

¿Qué entendemos por riesgo de desastres?

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento ocurra y produzca consecuencias adversas. En el ámbito de los desastres, esta probabilidad surge cuando un peligro (hidrometeorológico, geofísico, tecnológico o antrópico) se combina con la exposición de la población (ubicación) y la vulnerabilidad de sus medios de vida, infraestructuras y ecosistemas. Ahora, un evento se convierte en desastre cuando excede la capacidad de respuesta de la comunidad o de las instituciones responsables, ocasionando daños materiales, ambientales, sociales y culturales que no pueden medirse únicamente en términos económicos.

La magnitud de las pérdidas depende, por tanto, de los capitales físicos, sociales y emocionales de cada persona y territorio:

dos poblaciones expuestas al mismo fenómeno pueden experimentar impactos muy distintos según su nivel de preparación, sus recursos y su resiliencia.

Aunque existen múltiples tipos de amenazas, este informe se concentra en los eventos hidrometeorológicos —inundaciones, deslizamientos detonados por lluvia, tormentas, sequías, entre otros— porque explican el 88 % de los desastres registrados en Colombia en las últimas décadas (DNP, 2018). En la siguiente serie histórica se muestra un incremento en la frecuencia reportada de estos eventos. Parte de esa tendencia obedece a la intensificación del cambio climático; otra parte refleja la mejora en los sistemas de monitoreo y registro a todas las escalas (Ritchie & Rosado, 2024).



Comprender esta doble dinámica —más eventos extremos y mejor capacidad para documentarlos— es esencial para diseñar políticas de reducción del riesgo que protejan vidas, infraestructuras y medios de subsistencia.

Según el registro de eventos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo-UNGRD, en Colombia se registraba, en promedio, 2 desastres diarios de origen hidrometeorológico entre 1998 y 2007. Esta se triplicó a 7,6 entre 2008 y 2018, y alcanzó 10,7 entre 2019 y 2023. En Antioquia, los eventos anuales pasaron, en promedio, de 51 (1998–2007) a 170 (2008–2018), y luego a 357 (2019–2023) (Ver gráfica 2)

Gráfico 2.
Colombia y Antioquia. Eventos de origen natural¹, 1998-2023.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos reportados por UNGRD entre 1998 y 2023.

La mayoría de estos desastres registrados en Antioquia son de pequeña escala, pero frecuentes (desastres extensivos), mientras que de forma ocasional ocurren desastres de gran magnitud (desastres intensivos). Es decir, comúnmente enfrentamos muchos pequeños desastres recurrentes (que se acumulan en sus efectos) y solo de vez en cuando sucede un gran desastre de alto impacto que causa pérdidas muy concentradas.

En Antioquia, las amenazas de origen natural más relevantes por frecuencia e impacto son:

- Movimientos en masa (deslizamientos): Constituyen la principal causa de daños y pérdidas en la región.
- Flujos torrenciales (crecientes y avenidas torrenciales): Favorecidos por la geografía montañosa, las fuertes pendientes y la inestabilidad de los suelos; son la segunda amenaza más letal.
- Inundaciones: Aunque presentan baja mortalidad, ocurren con alta frecuencia, generando considerables afectaciones económicas y funcionales en el territorio.

1. De manera general, este término se refiere, por un lado, a los fenómenos naturales —como sismos, erupciones volcánicas o inundaciones— y, por otro, a los eventos socio-naturales, que surgen cuando dichos fenómenos interactúan con condiciones sociales.



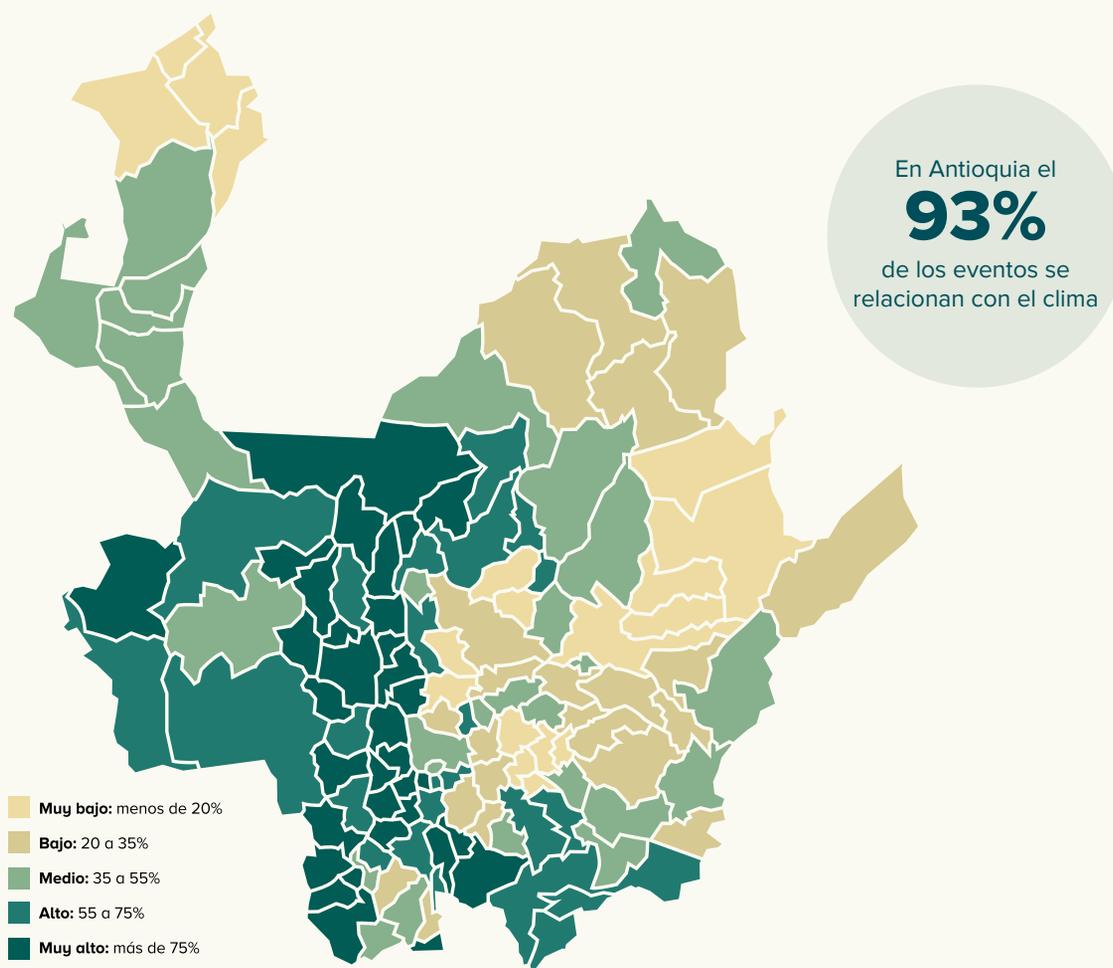
Cabe mencionar que los **incendios de cobertura vegetal** también son eventos representativos; sin embargo, están principalmente asociados a actividades humanas. Por ejemplo, se estima que el 95% de los incendios forestales son causados por acción humana (IDEAM, 2016, 2019).

Basado en lo anterior, en 2018 se construyó el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades y, como línea

base, se elaboró un mapa que identifica las áreas con condiciones de amenaza por movimientos en masa, inundaciones o flujos torrenciales (DNP, 2018). En Antioquia, dicho índice revela que cincuenta y ocho (58) municipios presentan una condición de amenaza alta o muy alta, y veintisiete (27) municipios una amenaza media, concentrándose la mayor complejidad en las subregiones del Suroeste y Occidente. Esta distribución evidencia una significativa exposición territorial al riesgo (ver gráfico 3).

Gráfico 3.

Antioquia: porcentaje de área que se encuentra bajo algún tipo de condición de amenaza (movimientos en masa, inundación o flujo torrencial), 2018.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades, Departamento Nacional de Planeación 2018²

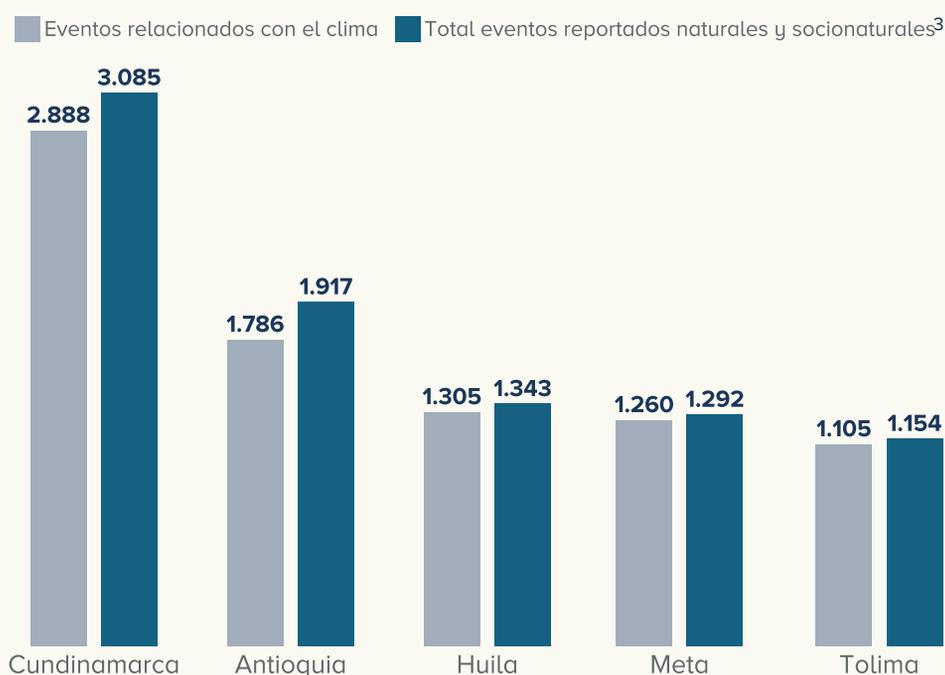
2. Las áreas de amenaza fueron construidas con tres fuentes de información: Mapa nacional de susceptibilidad a movimientos en masa, inundaciones (1:100.000) y mapa de flujos torrenciales (1:1500.000).



Con este panorama, Antioquia es el segundo territorio del país con más emergencias reportadas, solo detrás de Cundinamarca. Entre 2019 y 2023, cada año se presentaron en promedio 384 eventos naturales y socio-naturales; la gran mayoría (357, es decir, 93%) estuvieron relacionados con el clima. La mayor recurrencia se concentra en Medellín (11% de los casos) y Bello (6%).

Medellín y Bello,
11% y 6%
representan el respectivamente de todos los eventos relacionados con el clima en Antioquia.

Gráfico 4.
Cundinamarca, Antioquia, Huila, Meta y Tolima: eventos de desastre reportados por la UNGRD, 2019-2023.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos reportados por UNGRD entre 2019 y 2023.

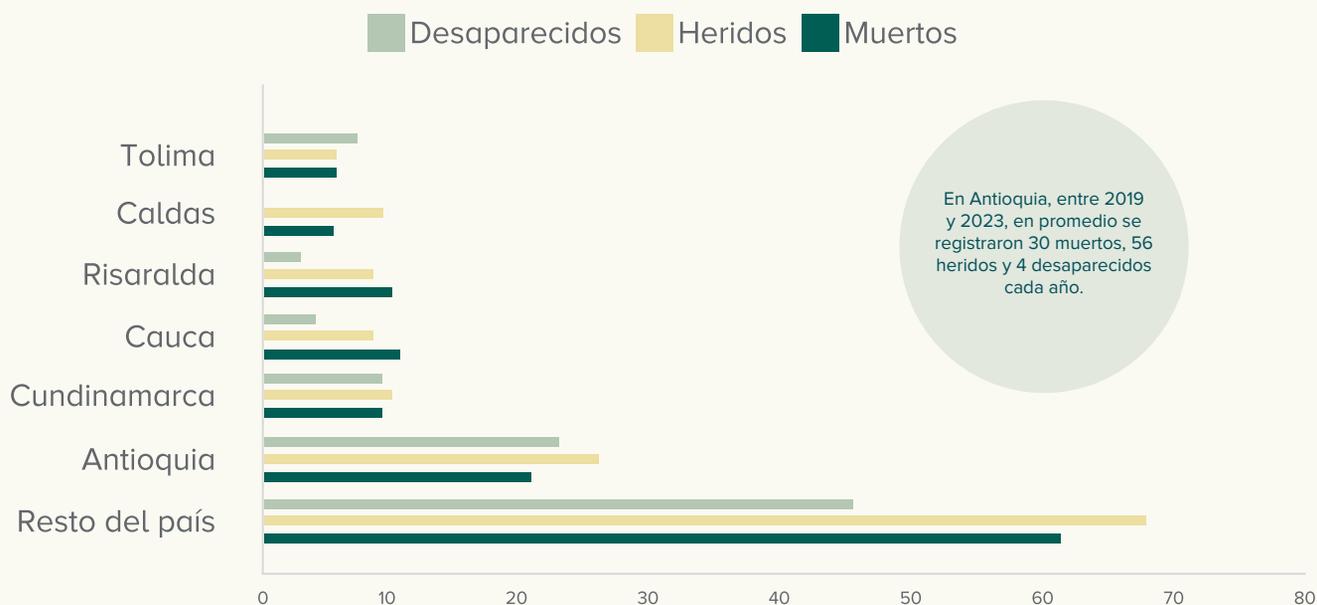
Las condiciones de amenaza no determinan por sí solas la magnitud de los daños y pérdidas: median factores de vulnerabilidad —sociales, económicos, institucionales y políticos— que modulan la exposición, la fragilidad y la capacidad de respuesta. En consecuencia, territorios con amenazas similares pueden registrar impactos muy distintos.

Al desagregar las afectaciones graves a nivel nacional, Antioquia concentra el 22.68% de las personas desaparecidas, el 25.78% de los heridos y el 20.51% de las personas fallecidas asociadas a estos eventos. Cundinamarca ocupa el segundo lugar, pero no supera el 10% en ninguno de estos indicadores (ver gráfico 5). Estos resultados refuerzan que la vulnerabilidad diferencial es un determinante clave del riesgo observado.

3. No se incluyen los eventos de origen tecnológico o biosanitarios.



Gráfico 5.
Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Risaralda,
Caldas y Tolima: afectaciones graves 2019-2023.



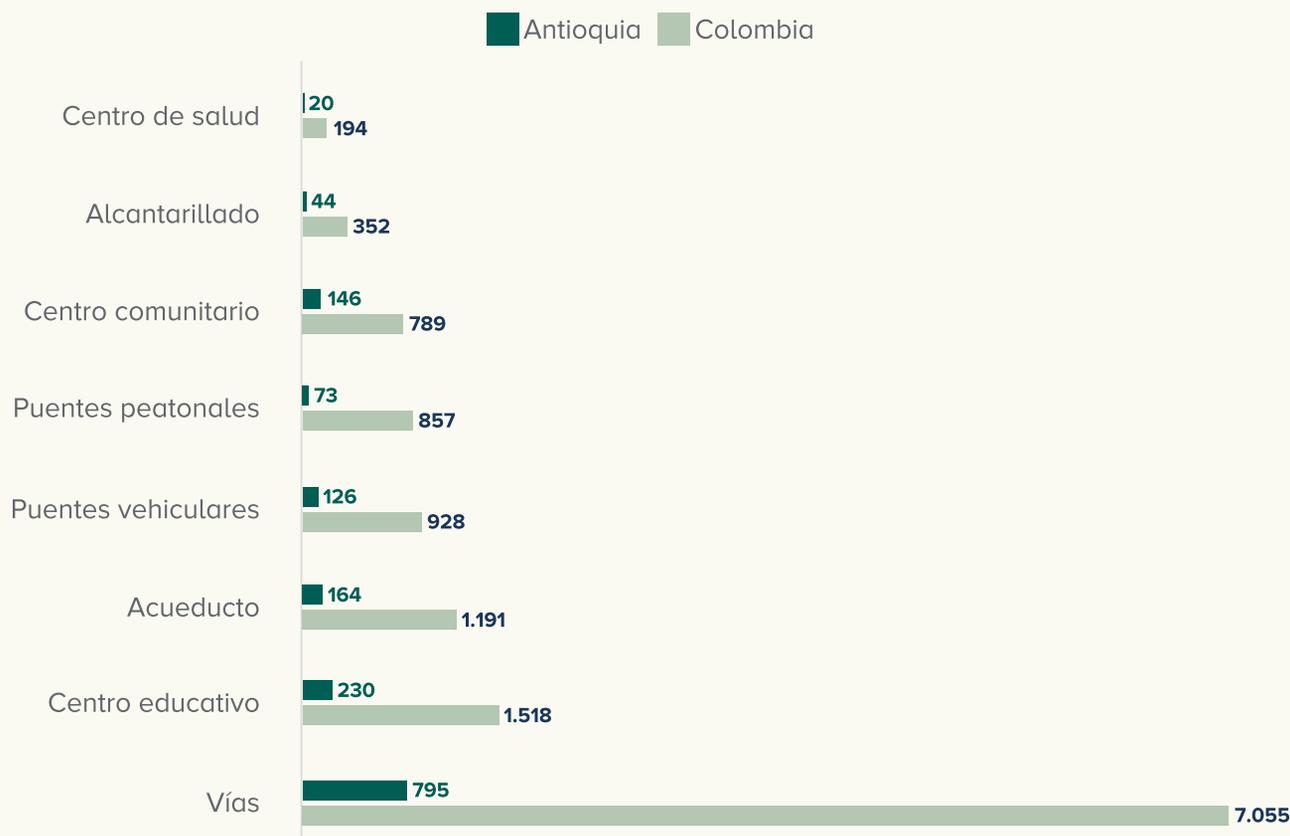
Fuente: elaboración propia a partir de los datos reportados por UNGRD entre 2019 y 2023.

Las infraestructuras viales, en particular la red terciaria, constituyen el activo público con mayor número de afectaciones, generando aislamiento territorial recurrente. Esta vulnerabilidad se agrava con los daños a puentes vehiculares y peatonales, sobre todo en áreas rurales, lo que interrumpe cadenas logísticas y medios de vida (acceso a mercados, servicios y transporte de cosechas).

Entre 2019 y 2023, Cundinamarca y Antioquia concentraron el 36 % de las afectaciones en vías, el 30 % en puentes vehiculares y el 22,8 % en acueductos reportadas a nivel nacional. De ese total, Antioquia aportó el 11,2 % (vías), 13,6 % (puentes vehiculares) y 13,7 % (acueductos). Aunque sus totales de infraestructura dañada son inferiores a los de Cundinamarca, preocupa que Antioquia lidere en afectaciones a equipamientos sociales: 230 sedes educativas, 146 equipamientos comunitarios y 20 establecimientos de salud afectados en el periodo. Este patrón compromete la continuidad de servicios esenciales y profundiza las brechas de vulnerabilidad rural.



Gráfico 6.
tipos de infraestructura y equipamientos
afectados por desastres, 2019-2023.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos reportados por UNGRD entre 2019 y 2023.

En otras palabras, entre 2019 y 2023, de cada 100 afectaciones en el país, 15 ocurrieron en escuelas de Antioquia, 19 en centros comunitarios del departamento y 10 en centros de salud.



Antioquia se ubica como el **segundo departamento**, solo por debajo de Cundinamarca, con **mayores afectaciones a infraestructura y equipamientos por desastres**, con un total de 1.598 entre 2019 y 2023.



Entre los equipamientos afectados se destacan los centros comunitarios, centros educativos que suman 376 y las infraestructuras de acueductos con un total 164 entre 2019 y 2023.



La tendencia confirma una intensificación del impacto climático, con implicaciones críticas para la planificación territorial y la adaptación.



Los desastres no son una consecuencia directa del clima, son una construcción entre condiciones físicas y sociales del territorio, por tal razón para hablar de riesgo se deben tener claro tres componentes: la amenaza, como el peligro latente, la exposición como la localización en la zona de peligro y la vulnerabilidad como las condiciones sociales, económicas, ambientales que terminan por incidir en las condiciones del hábitat y predisponer a sufrir efectos adversos (ver gráfico 7). Incluso, las condiciones sociales inciden en las decisiones cotidianas que toman o se ven forzados a tomar los habitantes y se relacionan con el riesgo; por ejemplo, vivir en un área no apta, autogestionar sus servicios públicos y trabajar de manera informal para habitar la ciudad como única alternativa viable.

Gráfico 7.
Concepto de riesgo de desastres.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos

Pérdida de cobertura boscosa

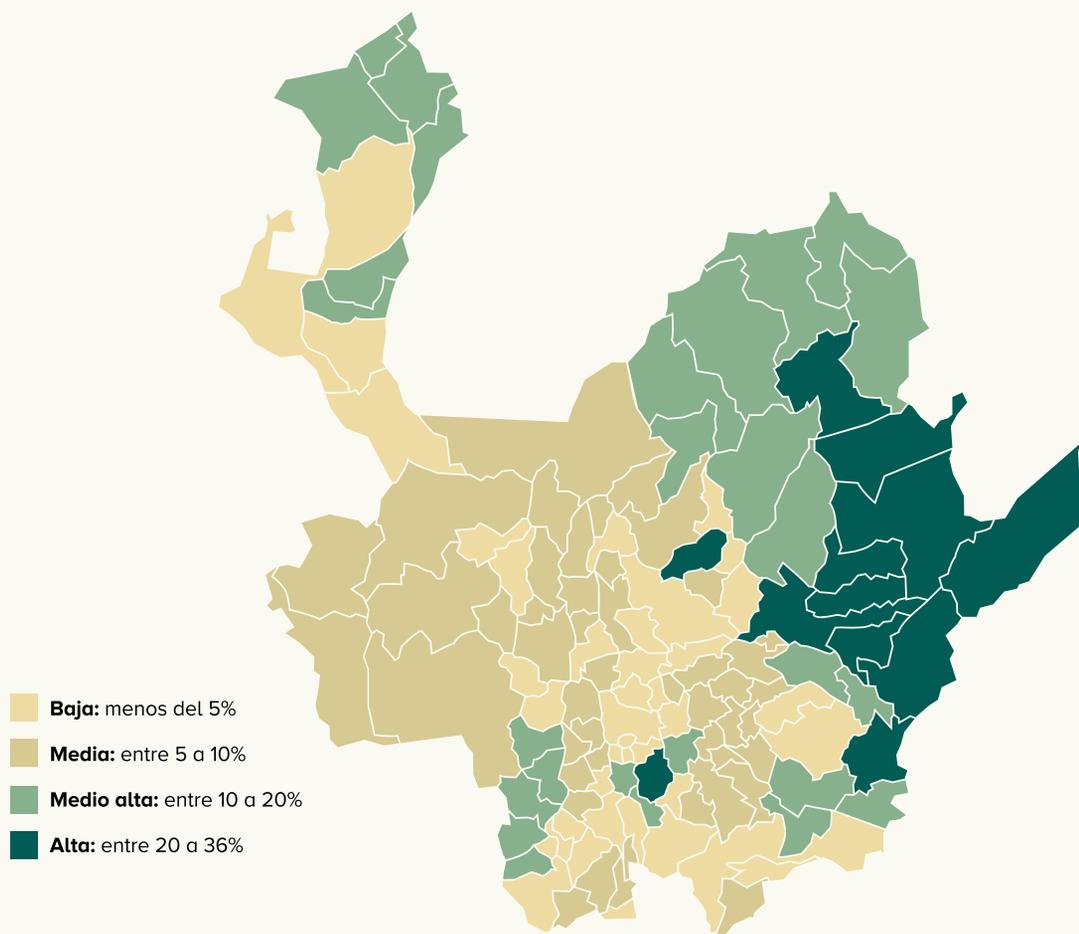
Las condiciones ecosistémicas inciden de forma directa en la dinámica del riesgo. A falta de un estudio integral, la deforestación funciona como indicador multitemporal del estado de los ecosistemas: su degradación amplifica los riesgos climáticos al reducir la capacidad de regulación hídrica, estabilización de suelos y captura de carbono. Con base en Global Forest Watch, en 12 municipios de Antioquia se perdieron acumuladamente 241.841 hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2023 (ver gráfico 8). Las pérdidas se concentran en Magdalena Medio, Bajo Cauca y parte del Nordeste — Remedios, Segovia, Vegachí, Yalí, Yondó, Puerto Berrío, Zaragoza, Maceo, Angostura,

Las pérdidas totales representan **116.240 (ton CO₂e)** de emisiones brutas entre 2001 y 2023.

Puerto Nare y Yolombó— y, en el Oriente, El Retiro destaca por su tasa acumulada (noveno lugar del ranking departamental). Las causas predominantes son la minería ilegal y criminal, la extracción de maderas finas, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería (ver también capítulo de seguridad). En el caso de El Retiro pesa más la presión urbana y la hiperfragmentación predial.



Gráfico 8.
Antioquia: Porcentaje de pérdida de cobertura arbórea, 2001-2023.



Fuente: elaboración de Antioquia Como Vamos a partir de datos de Global Forest Watch.

Como muestra la tabla anexa, los municipios con mayores tasas de pérdida presentan extensiones de rastrojo, pastos y suelos desnudos que superan ampliamente el bosque natural remanente (2023). La disparidad es crítica en El Retiro, donde hay 74 veces más pasto que bosque natural, asociada a dinámicas urbanas y de parcelación; y es preocupante en Puerto Nare, Maceo y Yondó, con relaciones >7 veces entre (rastrojo+pasto+suelo desnudo) y bosque.



Tabla 1.

Antioquia: municipios con mayores tasas de pérdida de bosque y presencia de coberturas de bosque, rastrojo (alto y bajo), pastos y suelo desnudo.

Municipio	Tasa de pérdida (2001-2023)	Bosque natural -BN (Has)	Rastrojo-R (Has)	Pasto-P (Has)	Suelo desnudo-SD (Has)	Relación R, P, SD/BN
Remedios	36.00%	89,175.30	82,326.40	130,400.00	7,213.70	2.5
Segovia	32.00%	84,600.80	31,092.30	41,743.00	1,390.80	0.9
Vegachí	29.00%	11,400.60	32,223.80	21,498.00	950	4.8
Yalí	28.00%	6,142.90	16,883.10	22,460.00	44.2	6.4
Yondó	27.00%	30,221.20	89,943.40	130,951.00	9,192.70	7.6
Puerto Berrío	27.00%	33,255.80	44,685.00	99,660.00	331.7	4.4
Zaragoza	26.00%	31,372.80	43,619.80	10,680.00	11,439.30	2.1
Maceo	22.00%	7,249.00	19,984.40	36,050.00	27.8	7.7
Retiro	22.00%	64.7	-	4,800.00		74.2
Angostura	22.00%	13,174.50	11,755.00	14,222.00	2,415.30	2.2
Puerto Nare	20.00%	12,865.10	30,210.40	69,078.00	468.3	7.8
Yolombó	20.00%	17,914.00	38,320.50	40,140.00	227.8	4.4

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico Agropecuario de 2023 (Gobernación de Antioquia).

Esta transformación de coberturas se vincula en parte con la ganadería: estos 12 municipios concentran 22% del hato departamental; Remedios y Yondó representan 5% y 4%, respectivamente (Gobernación de Antioquia, 2023). En el periodo analizado, la tasa promedio de pérdida de bosque en Antioquia fue 9,3%, pero en los primeros seis municipios superó el 30%.

Los principales ecosistemas afectados son:

- Distritos Regionales de Manejo Integrado-DRMI Bajo Cauca Nechí.
- DRMI (Cacica Noria, Ciénagas El Sapo y Hoyo Grande, Ciénagas Corrales y El Ocho, Ciénaga de Barbacoas y Canon del Rio Alicante).
- DRMI de Urabá (Serranía de Abibe, Ensenada de Rionegro).
- Reserva Forestal de ley segunda.
- DRMI Complejo de Humedales de Ayapel-DRMI.
- Bosque Seco Tropical (Uno de los ecosistemas más degradados, fragmentados y menos conocidos del país).



En contraste, aunque las pérdidas en el centro del departamento son relativamente menores, allí se ubica el 90,3% de las empresas (84,5% Valle de Aburrá, 5,8% Oriente), lo que convierte a estas subregiones en los principales focos de emisiones fijas y móviles de GEI, mientras que Magdalena Medio, Bajo Cauca y parte del Nordeste aportan emisiones indirectas por carbono no capturado debido a la deforestación (FAO y Gobernación de Antioquia, 2018).

Desde la óptica de bonos de carbono, la pérdida de bosque implica daño ambiental y oportunidad económica desaprovechada al disminuir el potencial de captura y los ingresos por servicios ecosistémicos. Instrumentos de política como BanCO2 (Pagos por Servicios Ambientales) pueden mitigar esta tendencia (Gobernación de Antioquia, 2018a). En síntesis, Antioquia es simultáneamente el mayor emisor total de GEI (22,94 Mt CO₂-e) por su base agro-manufacturera y conflictos socioambientales, y el mayor absorbente (9,99 Mt CO₂-e) por sus coberturas naturales; aunque la emisión supera a la absorción, el departamento conserva alto potencial para restauración, PSA y mercados de carbono, claves para reducir riesgo, mejorar resiliencia y cumplir metas climáticas.

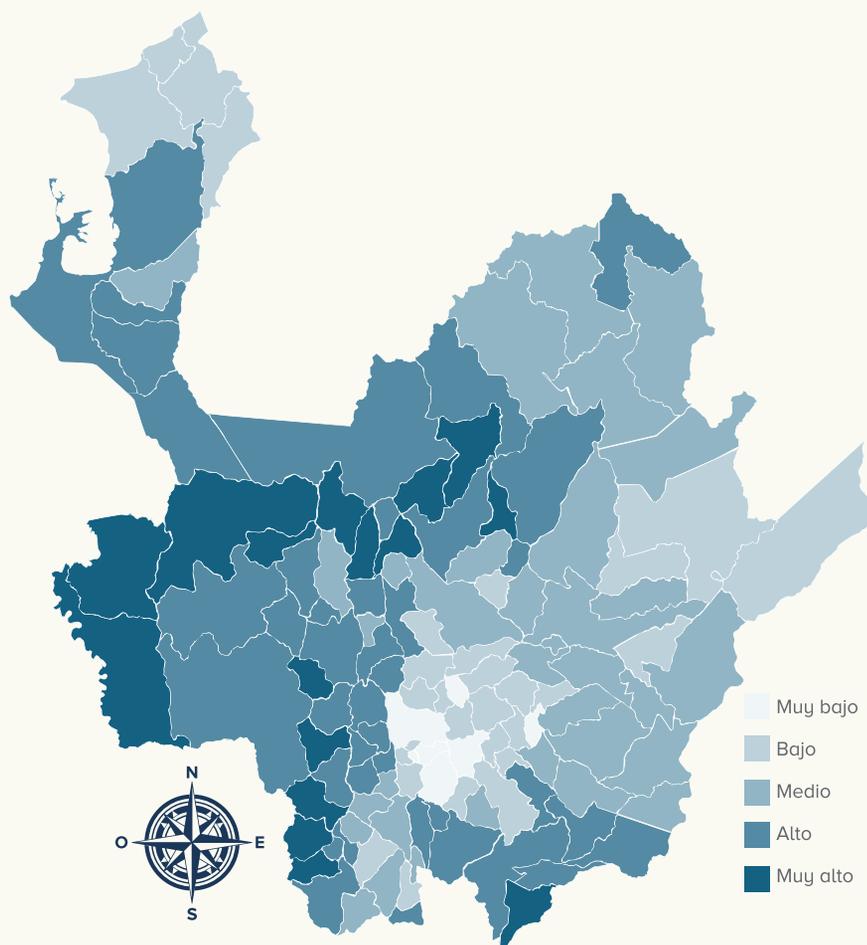
Índice municipal de riesgo a desastres ajustado por capacidades

El DNP. (2018), a partir de distintas capas de información disponible sobre amenazas (ver gráfico 3), vulnerabilidades (índice de Pobreza multidimensional censal 2018) y capacidades de todos los municipios de Colombia, se construyó este índice que permite identificar unos patrones que inciden sobre los desastres. Si bien el riesgo es dinámico y en el tiempo cambia con las transformaciones territoriales, este tipo de índices permite focalizar zonas prioritarias.

Como muestra el gráfico 9, los municipios periféricos, los más alejados de las centralidades regionales, son los que presentan menores capacidades, una relativa exposición a amenazas y, por ende, unas mayores condiciones de riesgo. El Suroeste, Occidente, Norte y el Oriente, principalmente los municipios más alejados del centro de Antioquia presentan menores condiciones para la gestión del riesgo desde sus capacidades y recursos disponibles.



Gráfico 9.
Antioquia: Índice municipal de riesgo a desastres ajustado por capacidades, 2018.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por capacidades, Departamento Nacional de Planeación.

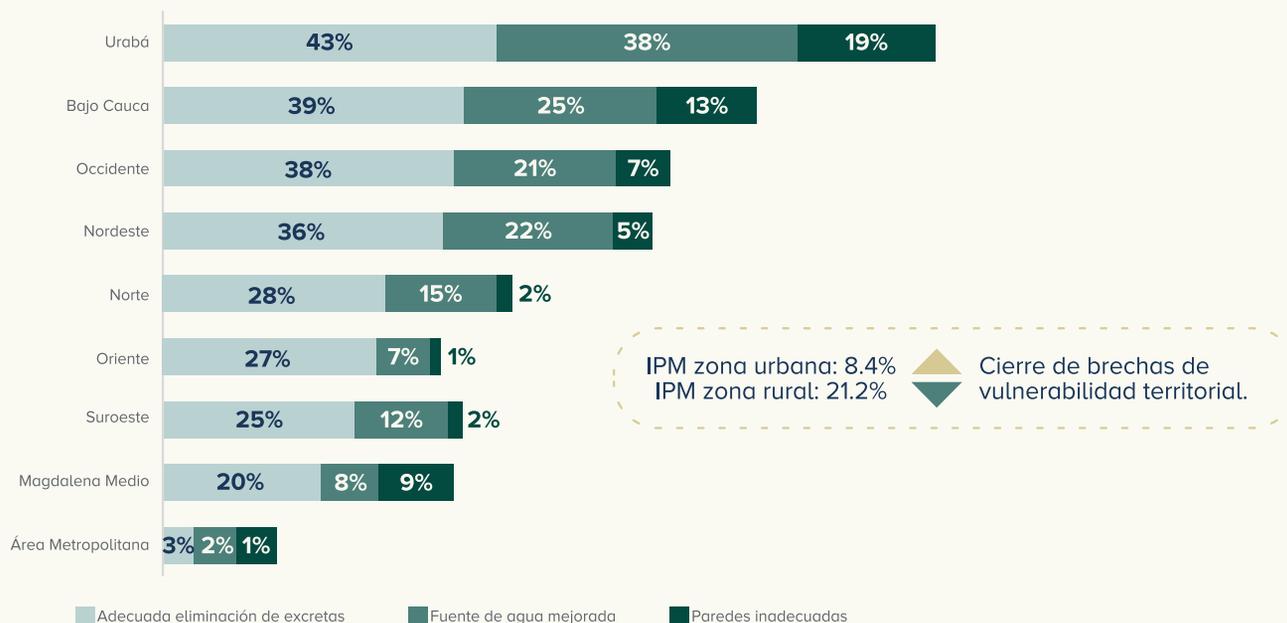
En términos de ranking, Murindó es el municipio a nivel nacional con mayor criticidad. En total, 12 municipios de Antioquia están en el top 100: Salgar, Campamento, Peque, Sabanalarga, Vigía del Fuerte, Nariño, Valdivia, Caicedo, Betulia, Ciudad Bolívar y Betania ocupando los puestos 20, 42, 47, 48, 49, 61, 65, 71, 79, 80 y 88.

Esta distribución también tiene relación con las condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a infraestructura adecuada. Aunque,

como se menciona en el capítulo de pobreza, existe un cierre de brechas de vulnerabilidad territorial, pues la proporción de personas en condición de pobreza se redujo en la zona rural pasando de 24.2 a 21.2 y en la zona urbana aumentó relativamente poco (5.9 a 8.4), persisten poblaciones con privaciones de acceso a servicios y bienes esenciales como agua potable, alcantarillado y condiciones materiales de la vivienda (paredes adecuadas).



Gráfico 10.
Subregiones de Antioquia: porcentaje de personas privadas de acceso a servicios y bienes esenciales, 2023.



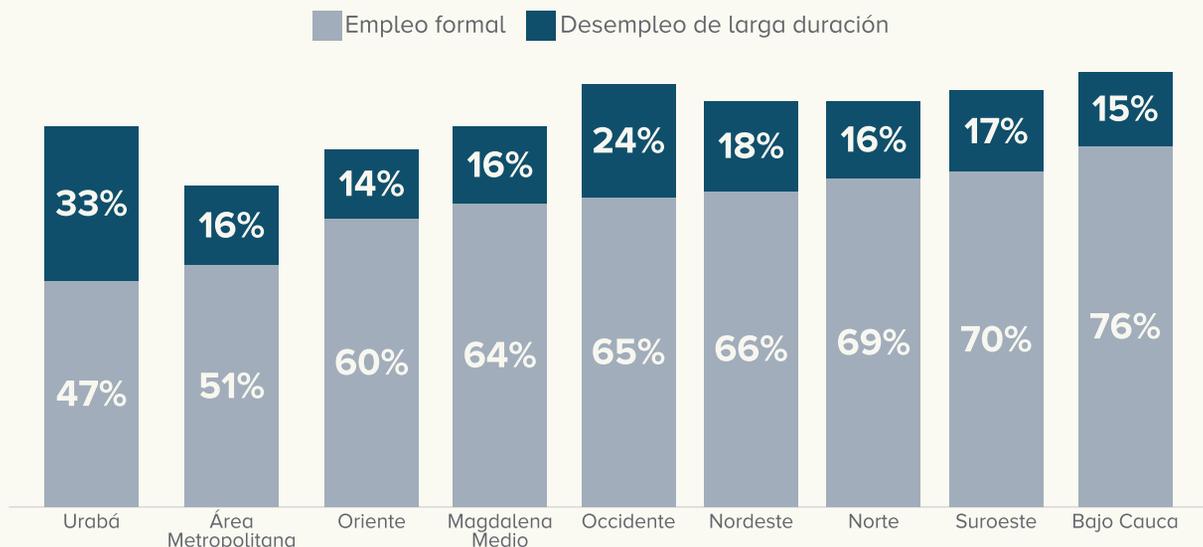
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.

En Urabá y Bajo Cauca, el 38% y 25% de la población no cuentan con acceso a agua potable y el 43% y 39% respectivamente no cuentan con acceso a alcantarillado. En Nordeste y Occidente también se presentan cifras críticas. Si bien, las privaciones se han reducido frente a años anteriores, cuando estas se superponen con otras condiciones como el empleo, la situación toma una mayor complejidad, pues el empleo repercute en los capitales sociales de los habitantes y sus territorios.

Como se muestra en la siguiente gráfica, en Bajo Cauca el 76%, Suroeste el 70% y en Norte, el 69% de las personas están privadas del trabajo formal. En la subregión de Urabá (33%) y Occidente (24%) el desempleo de larga duración es más complejo. Estos altos porcentajes de informalidad laboral se traducen en inseguridad en otros aspectos de la calidad de vida, por ende, las condiciones de vulnerabilidad social, entendidas como la fragilidad socioeconómica y la predisposición a sufrir pérdidas, se intensifican.



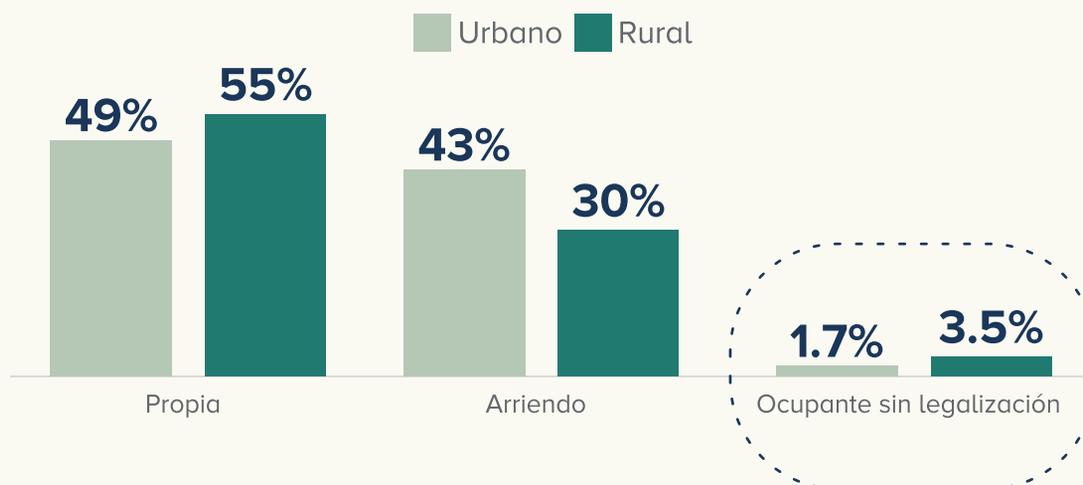
Gráfico 11.
Subregiones de Antioquia: porcentaje de personas privadas por empleo formal y desempleo de larga duración, 2023.



Fuente: elaboración de propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.

La inseguridad en la tenencia de la vivienda también es un aspecto crucial de la calidad de vida. En la zona rural y urbana cerca del 55% y 49% de la población es propietaria y el 30% y 43% vive en arriendo respectivamente, no obstante, el 3.5% y 1.7% es ocupante ilegal.

Gráfico 12.
Antioquia: tipo de tenencia de la vivienda por zona, 2023.



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.



Ahora, la ocupación sin legalización habitando viviendas con materiales de desecho (rancho) evidencia condiciones de vulnerabilidad material mayor (ver gráfica 13), siendo más complejas hacia Urabá (1103 hogares), Bajo Cauca (2020 hogares) y el Valle de Aburrá (641 hogares). Estas cifras presentan un subregistro debido al error natural que tienen las encuestas y a las dinámicas sociales que en ocasiones no se alcanza a dimensionar.

Otro tipo de condición de vulnerabilidad material se asocia a las deficiencias estructurales (viviendas en déficit por material de las paredes exteriores), en Urabá representa el 37%, en Bajo Cauca el 21% y en Magdalena Medio el 18% de todas las viviendas. En otras palabras, una de cada tres viviendas presenta deficiencias en Urabá y Bajo Cauca y Magdalena Medio una de cada cinco, según los resultados ECV (2023).

Gráfico 13.
Subregiones de Antioquia: hogares en ranchos y en ranchos bajo ocupación ilegal, 2023.



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023

Percepción del riesgo

La percepción es un aspecto fundamental en la toma de decisiones y en las conductas de las personas que no está separada del entorno y su cultura (Vargas, 1994). Cuando se indaga por las condiciones de seguridad del entorno de una vivienda, se busca identificar un nivel de percepción del riesgo, ya que su valoración permite una aproximación a las condiciones de inseguridad/seguridad del hábitat.

La ECV indaga por la percepción desde una pregunta relacionada con la experiencia: “afectaciones por algún tipo de evento”. Esta respuesta se complementa con una de mayor especificidad: “su vivienda se ubica en zona de riesgo” (ver gráfico 14).

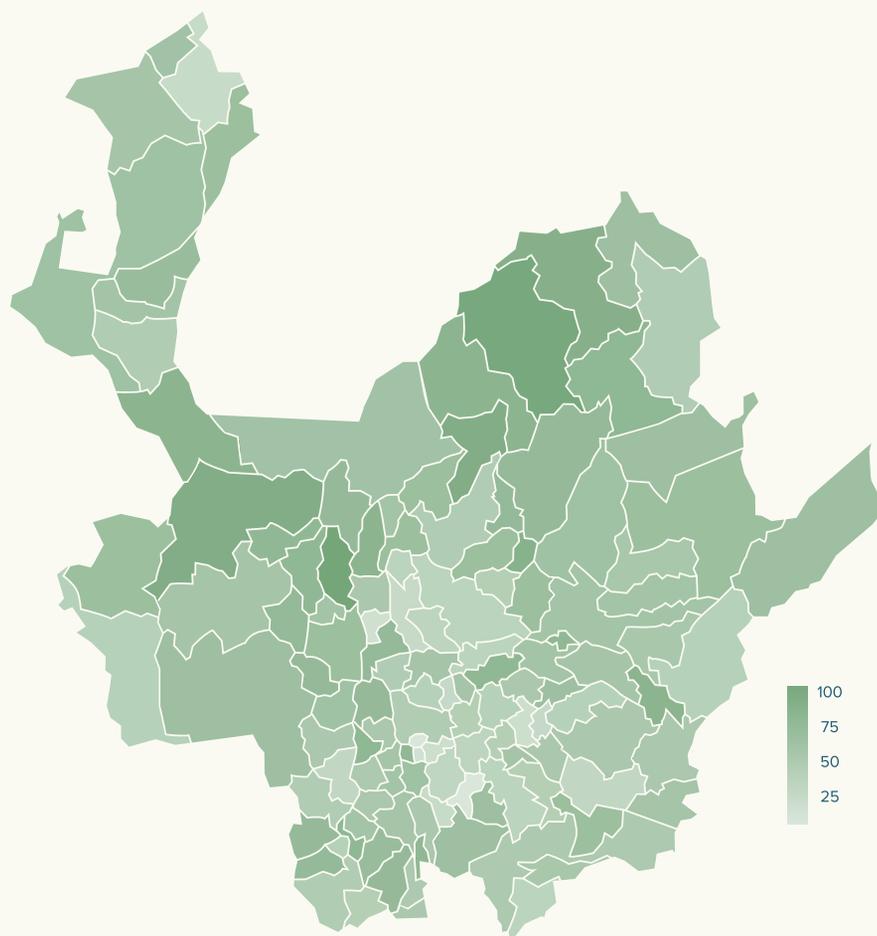


En el Valle de Aburrá —donde se registra una alta concentración de eventos— la percepción del riesgo tiende a ser baja; algo similar ocurre en zonas del Oriente y del Occidente antioqueños. Esto sugiere que, pese a la experiencia con eventos, persiste una sensación de no habitar en áreas de riesgo. En el contexto urbano, develar esta condición puede tener implicaciones legales en la tenencia de la vivienda. En contraste, en municipios más periféricos la percepción es más alta, posiblemente asociada a afectaciones recientes y al reconocimiento de vivir en zonas expuestas.

Es importante aclarar que, del total de hogares, promedio el 85% y el 84% del área urbana y rural respectivamente, afirman no haber sido afectados por desastres. Bajo Cauca es la subregión con mayor percepción del riesgo debido, en parte, a la experiencia recurrente con desastres (eventos de inundación, ver gráfico 15). Según ECV, 27.924 hogares reportaron haber sido afectados por algún tipo de evento de desastre y de estos, 21.282 reconocen estar en zonas de riesgo (condición).

Gráfico 14.

Antioquia: porcentaje de hogares afectados por desastres que reconocen que su vivienda está ubicada en una zona de riesgo, 2023.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.



En 2023, cerca de 227 mil hogares afirmaron que su vivienda se vio afectada por algún tipo de desastre en el último año. De esos hogares, más de la mitad se vieron afectados por inundaciones (ver gráfico 14). La distribución de esta amenaza permite establecer dos tipos de zonas: El territorio urbano en los cuales la lluvia se convierte en el detonante de la inundación y los territorios que, por su geografía de tierras bajas, ondulada a plantas, generan las condiciones para que regularmente este fenómeno se exprese (ver gráfico 15).

Gráfico 15.
Antioquia: porcentaje de tipo de afectaciones de hogares que afirman que su vivienda se vio afectada por algún tipo de desastre en el último año, 2023.



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.

El 20% de Urabá y el 2.3% de Bajo Cauca son áreas de inundación periódicas (DNP, 2018). Incluso, según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2019), en Urabá cerca del 43% del territorio son pantanos y zonas anegadizas y el 50% bosques. En todo caso, según la ECV, la población rural es la que más ha experimentado eventos de inundación.

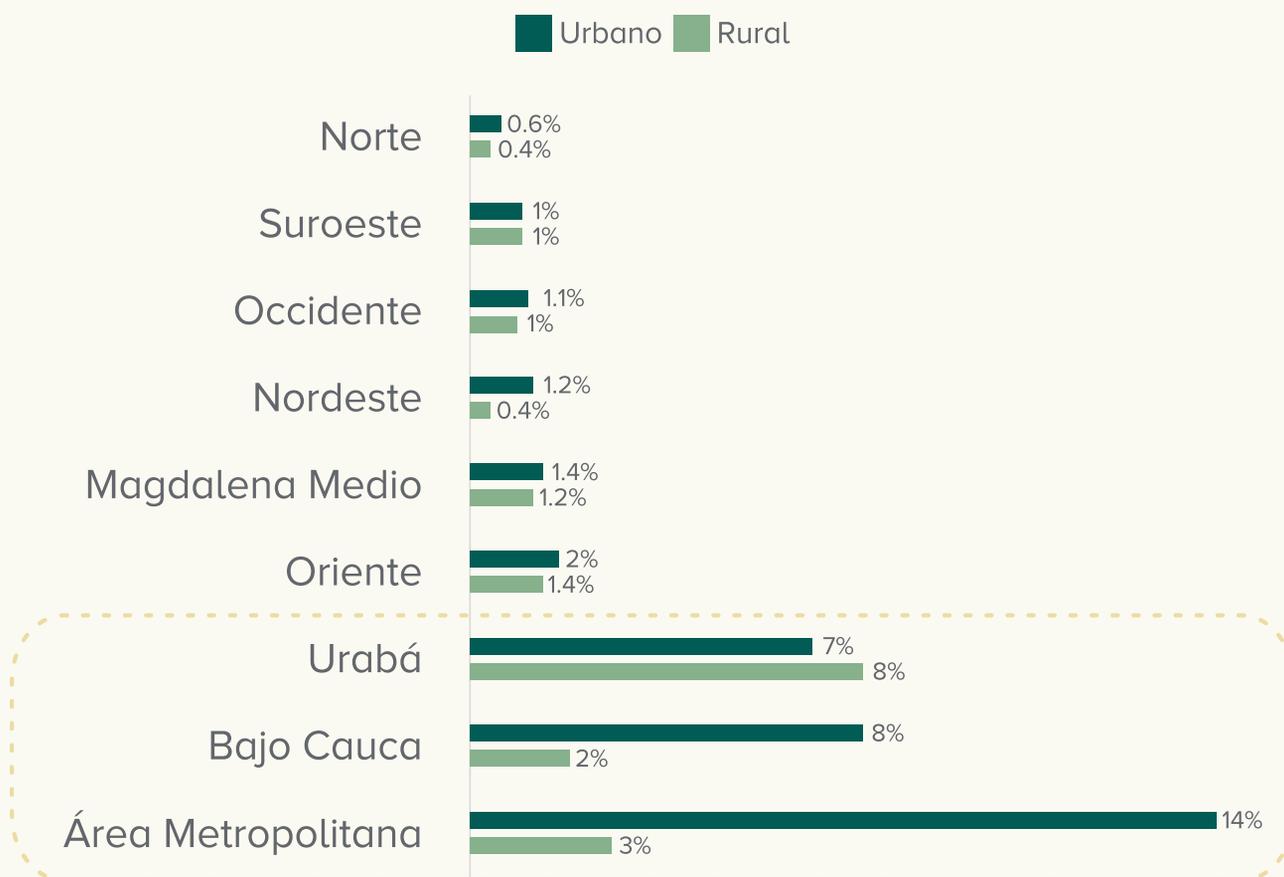
Por otro lado, el Valle de Aburrá que cuenta con el 95.5% de su población viviendo en zonas urbanas, presenta inundaciones directamente vinculadas con las lluvias, puesto que las condiciones urbanas como la impermeabilización de los suelos, reducción de coberturas vegetales, inadecuada disposición de residuos y obstrucción de cauces naturales, se convierte en aspectos que posibilitan este fenómeno.

Estas dos formas de expresión de las inundaciones y su recurrencia, tienen tanto una relación con la percepción ambiental del territorio, sus determinantes ambientales, pero también indica una baja capacidad adaptativa municipal cuando un evento recurrente se convierte en desastre.



Gráfico 16.

Subregiones: Porcentaje de hogares que su vivienda se vio afectada por inundaciones en el último año, 2023.



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.

Las fallas estructurales se ubican como el segundo tipo de afectación más recurrente en Antioquia, afectando aproximadamente 44 mil viviendas. Este fenómeno puede tener múltiples orígenes, sin embargo, se pueden categorizar en dos: afectaciones por el entorno de la vivienda (movimientos en masa, hundimientos, etc.) y patología estructural. Este último tiene relación con las inadecuadas prácticas constructivas, sin perder de vista las condiciones de riesgo persistentes en el departamento (ver gráfica 17).



Gráfico 17.

Antioquia: porcentaje de hogares⁴ que afirman que su vivienda se vio afectada por falla estructural, deslizamiento o avalancha torrencial en el último año, 2023.



Fuente: elaboración de propia partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.

Es importante aclarar que, en el lenguaje popular, las avalanchas pueden hacer alusión a deslizamientos, crecientes súbitas o avenidas torrenciales (técnicamente diferentes), pero casi siempre se asocian a cuerpos de agua, en combinación con materiales sólidos y ocasionalmente fuertes lluvias. Esto se da principalmente en zonas montañosas. En todo caso, aunque este fenómeno tan solo representa el 3%, se considera como unas amenazas de origen hidrometeorológico de gran capacidad destructiva, incluso, según Aristizábal y Gómez (2007), las avenidas torrenciales⁵ representan el 13% de todos los muertos por desastres de origen natural entre 1880 y 2007 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

⁴ Para el porcentaje de hogares afectados por los 3 tipos de eventos mencionados se calcula sobre la totalidad de hogares que afirma su vivienda se vio afectada por algún desastre en el último año.

⁵ Se retoma la siguiente definición: “flujos formados por una mezcla de sedimentos y agua en diferentes proporciones, que se desplaza a grandes velocidades a lo largo de cauces en cuencas de montaña, y que tienen como causas detonantes la presencia de uno o varios de los siguientes eventos: lluvias concentradas intensas o lluvias antecedentes; enjambre de movimientos en masa; sismos; rotura de presas naturales o artificiales; o aporte de grandes volúmenes de agua por deshielo” (Aristizábal, Arango y García, 2020, p. 254).



Panorama general de los residuos sólidos

En Colombia, en el marco del servicio público de aseo, se dispusieron en promedio 11.803.407,29 toneladas de residuos sólidos para el año 2023; siendo el 96,7% llevados a rellenos sanitarios, el 1,9% a botadero a cielo abierto y 1,2% a celda de contingencia (Superservicios, 2024). En términos departamentales, Antioquia representa aproximadamente el 14% del total nacional, siendo el 99% dispuestos en rellenos sanitarios.

Aunque los rellenos sanitarios operan bajo controles ambientales y de salud más estrictos que los botaderos, su sola existencia no garantiza sostenibilidad a largo plazo:

1. Pasivos ambientales acumulados.
2. Pérdida progresiva de vida útil, que exige ampliaciones o la búsqueda de nuevos sitios.

Esto implica transitar hacia esquemas de gestión de la vida útil de las bienes y productos de consumo. En este sentido, Colombia cuenta con la Estrategia Nacional de Economía Circular que se entiende como el uso eficiente de materiales, agua y energía, respetando la capacidad de recuperación de los ecosistemas y extendiendo la vida útil de los productos mediante innovación, alianzas y nuevos modelos de negocio (Gobierno de Colombia, 2019). Esto aplicado a la gestión de residuos, implica minimizar la generación en toda la cadena de valor; maximizar la utilización de los residuos como recursos: recuperación de materiales, compostaje, biogás, energía a partir de residuos, entre otros. Igualmente, es fundamental fomentar la corresponsabilidad entre sector productivo, ciudadanía y Estado para cerrar el ciclo de los materiales.

Los anteriores aspectos requieren de:

- Incentivar la producción y el consumo responsables.
- Desarrollar infraestructura para la valorización de residuos.
- Integrar la economía circular como eje de política pública y de inversión municipal y departamental.

Disposición de residuos sólidos

Durante 2024, el departamento de Antioquia registró la disposición de 1.619.540 toneladas de residuos sólidos. El Valle de Aburrá concentró 72% de este flujo, mientras que el Relleno Sanitario La Pradera recibió 81% del total departamental. Este panorama de infraestructura es necesario debatirlo debido a (ver gráfica 18):

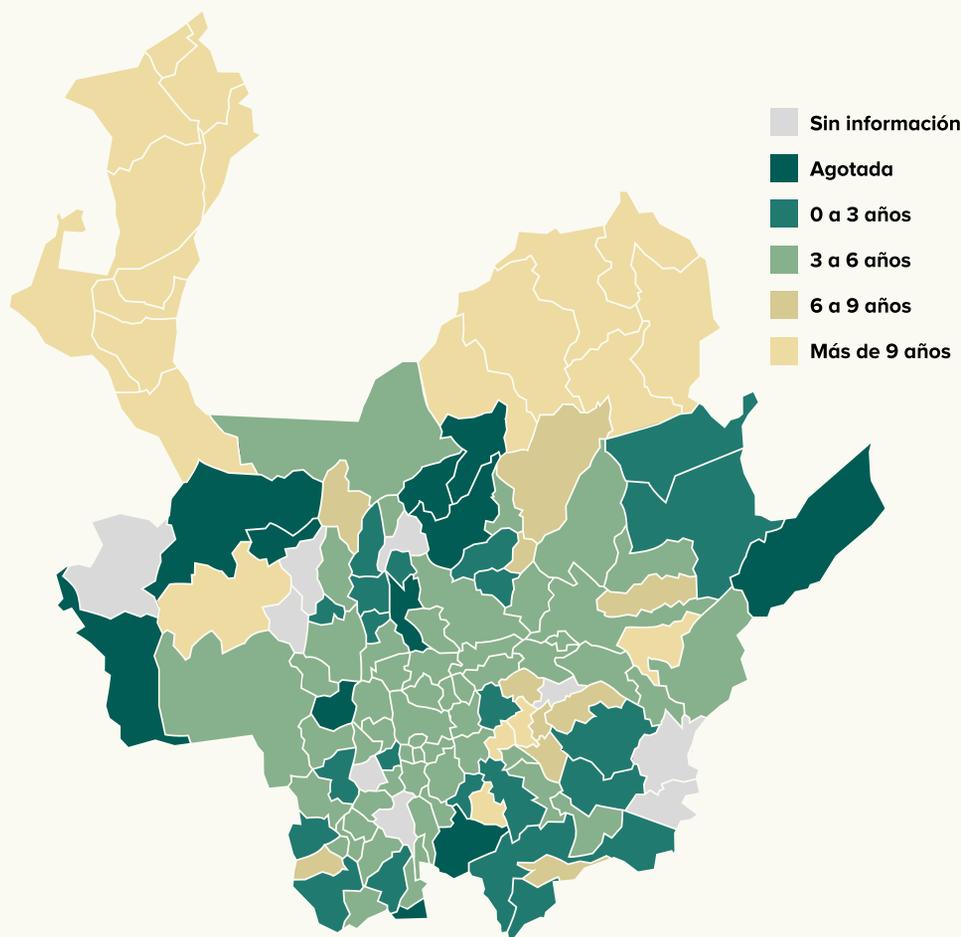
1. Once (11) municipios emplean rellenos o botaderos en fase de cierre técnico por agotamiento de su vida útil.
2. Otros setenta y cinco (75) municipios utilizan sitios con capacidad residual inferior a seis años, abarcando 60% de los residuos dispuestos.
3. La Pradera es la única instalación de nivel regional con horizonte operativo confirmado, estimado hasta 2030.
4. Más del 90% de los municipios de Antioquia tienen como única opción de contingencia al Relleno sanitario La Pradera.

Estos datos subrayan la necesidad de estrategias de valorización y nuevas alternativas de disposición final para garantizar la continuidad del servicio público de aseo en el mediano plazo.



Gráfico 18.

Antioquia: vida útil del sitio de disposición final utilizado por cada municipio, 2024.



Fuente: elaboración de propia a partir de la base de datos del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios-SUI de 2023-2024, CORNARE (Acuerdo 451 de 2024) y CORANTIOQUIA (Resolución 2306 de 2023) (Cálculos de vida útil a diciembre de 2024).

Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de repensar los modelos actuales de tratamiento y gestión de residuos en Antioquia, impulsando la economía circular y el aprovechamiento. Solo el Distrito de Medellín, el cual es responsable del 44% de los residuos dispuestos en Antioquia, cuenta con un potencial de aprovechamiento y/o tratamiento de los residuos generados por el sector residencial del 85,55%, siendo el 56,62% orgánicos y el 28,93% reciclables (Alcaldía de Medellín, 2025).

Según la Alcaldía de Medellín (2025), los residuos orgánicos, que es la categoría de mayor generación por el sector residencial, no cuentan con alternativas de tratamiento en el marco del servicio público de aseo, por lo que, a pesar de su potencial de tratamiento, están siendo dispuestos en el relleno sanitario La Pradera, lo que genera impactos negativos por contaminación del suelo, el agua y el aire. Es por ello por lo que la tasa de aprovechamiento residuos del servicio de aseo diaria es aproximadamente del 13.7% (Superservicios, 2024).

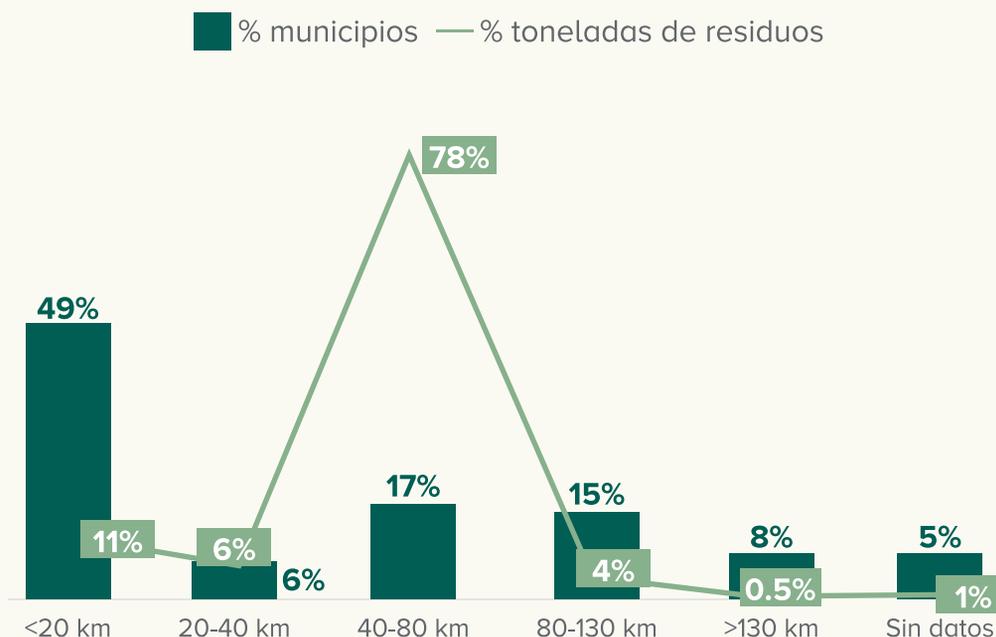


De igual forma, un modelo de gestión que se concentra únicamente en un solo destino para los residuos, ya sean los botaderos a cielo abierto o los rellenos sanitarios, implica altos costos en transporte, no solo económicos, sino también ambientales por la emisión de gases de efecto invernadero que emiten los vehículos. Sesenta y un (61) municipios

de Antioquia cuentan con un sitio de disposición a menos de 20 kilómetros; sin embargo, se observa en la Gráfica 19, que estos solo representan el 11% de los residuos dispuestos en el departamento. Por el contrario, 1.2 millones de toneladas de residuos deben recorrer entre 40 y 80 kilómetros para llegar a su sitio de disposición final.

Gráfico 19.

Antioquia: distribución de municipios según la distancia a su sitio de disposición final y proporción de residuos transportados por cada rango de distancia (km), 2024.



Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios-SUI de 2024 e Informe de Sostenibilidad EMVARIAS, 2024.

La gran cantidad de residuos dispuestos se traduce en una mayor cantidad de viajes. En el caso del Relleno Sanitario La Pradera, el sitio de disposición final donde terminan la mayor cantidad de residuos en Antioquia, realizó 124,486 viajes en el 2024 (EMVARIAS, 2024), lo que representó emisiones directas de aproximadamente 16.1 kt CO₂ equivalente anuales⁴. En este sentido, el problema central radica en que, a pesar de ser pocos los municipios con sitios de disposición final le-

janos a su casco urbano son lo que terminan generando la mayor cantidad de residuos sólidos, lo que termina causando mayores externalidades negativas.

El parque automotor con tecnología a gas y EURO6 representa 5.968 toneladas de CO₂ equivalentes que no fueron emitidas a la atmósfera, aspecto crucial a resaltar en los procesos de acción climática. En este sentido, el Relleno Sanitario La Pradera usa como

⁴ Este resultado supone que el 50% de parque automotor es a gas y el otro 50% a diésel con tecnología EURO VI. El viaje promedio propuesto fue de 60 km solo ida.



estrategia de reducción de CO2 la captura y quema de biogás. Según su informe de sostenibilidad de EMVARIAS del año 2024, se quemaron 608.207m³ de biogás, producto de la descomposición de los residuos sólidos en el lugar de disposición.

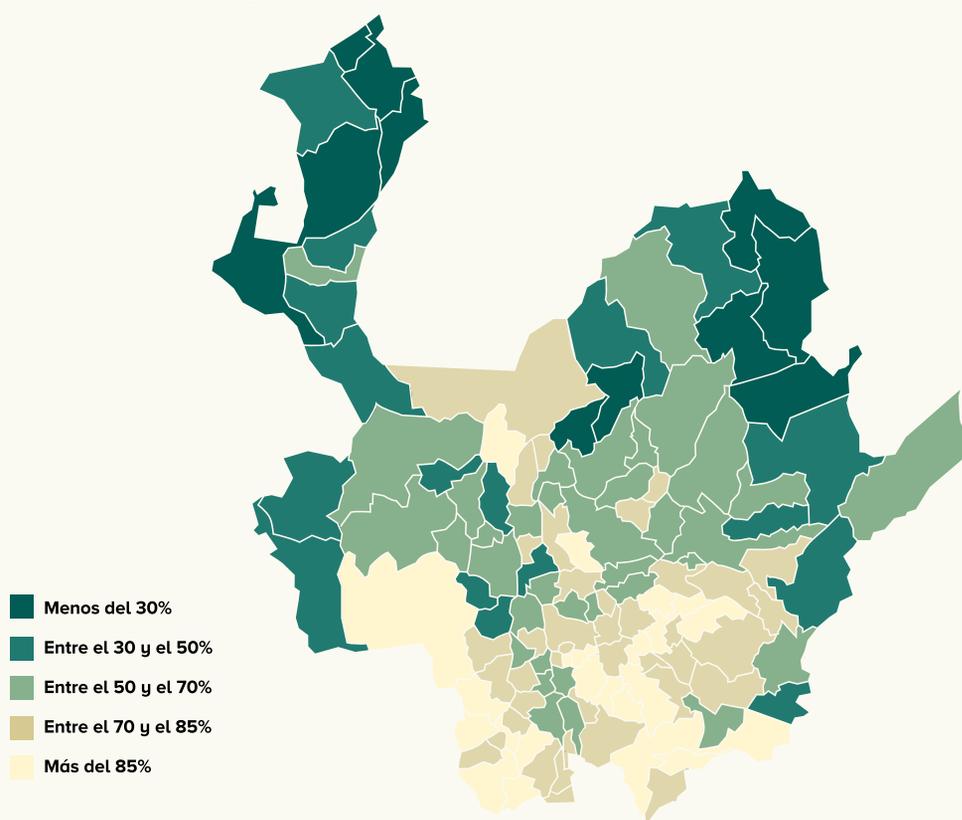
El biogás emitido puede representar un potencial económico para el aprovechamiento energético y la promoción de la economía circular en Antioquia. Por ello, se resalta el proyecto entre EMVARIAS y el Grupo EPM sobre generación de biometano ya que puede capturar hasta 7.000m³ de biogás por hora para generar combustible y energía limpia. Esto podría cubrir el 5,5% de la demanda de gas natural de EPM y atender a 220.000 hogares, representando el 15% del mercado residencial.

Cultura ambiental

La sostenibilidad parte de hábitos culturales sólidos; por ello, la Encuesta de Calidad de Vida incorpora preguntas sobre prácticas ambientales, como la separación de residuos. Según la gráfica 20, veintinueve (29) municipios —principalmente en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio— registran niveles de separación inferiores al 50% de los hogares. Esta baja participación coincide con deficiencias en la cobertura del servicio de recolección, particularmente en Murindó, Turbo y El Bagre, donde la separación doméstica resulta poco efectiva.

Gráfico 20.

Antioquia: porcentaje de hogares que afirman hacer separación de residuos por municipio, 2023.



Fuente: elaboración de Antioquia Cómo Vamos a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023

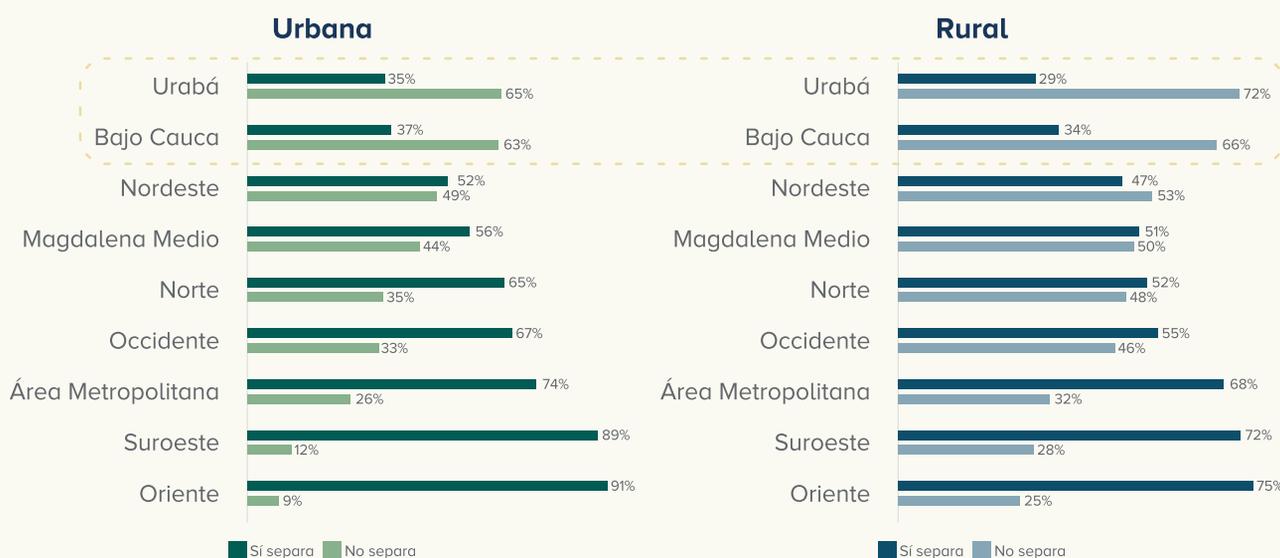


Urabá y Bajo Cauca, aunque cuentan con parques ambientales que gestionan integralmente residuos, aparecen consistentemente como las subregiones con menores niveles de separación en la fuente en todo el departamento, tanto en sus cabeceras como en los corregimientos y veredas adyacentes. Los resultados de la ECV muestran que solo entre 30 % y 40 % de los hogares de estas zonas afirma clasificar sus desechos —casi veinte puntos porcentuales por

debajo del promedio departamental y muy lejos de los valores cercanos al 70 % que registran subregiones como el Valle de Aburrá o el Oriente (ver gráfico 21).

Estas dos subregiones, sin perder de vista Nordeste y Occidente requieren intervenciones en gobernanza y cultura ambiental en conjunto con infraestructuras de separación para cerrar la brecha departamental y avanzar hacia los objetivos de economía circular y reducción de residuos en disposición final.

Gráfico 21.
Antioquia: Porcentaje de hogares en zona urbana y rural que afirma hacer separación de residuos por subregión, 2023.



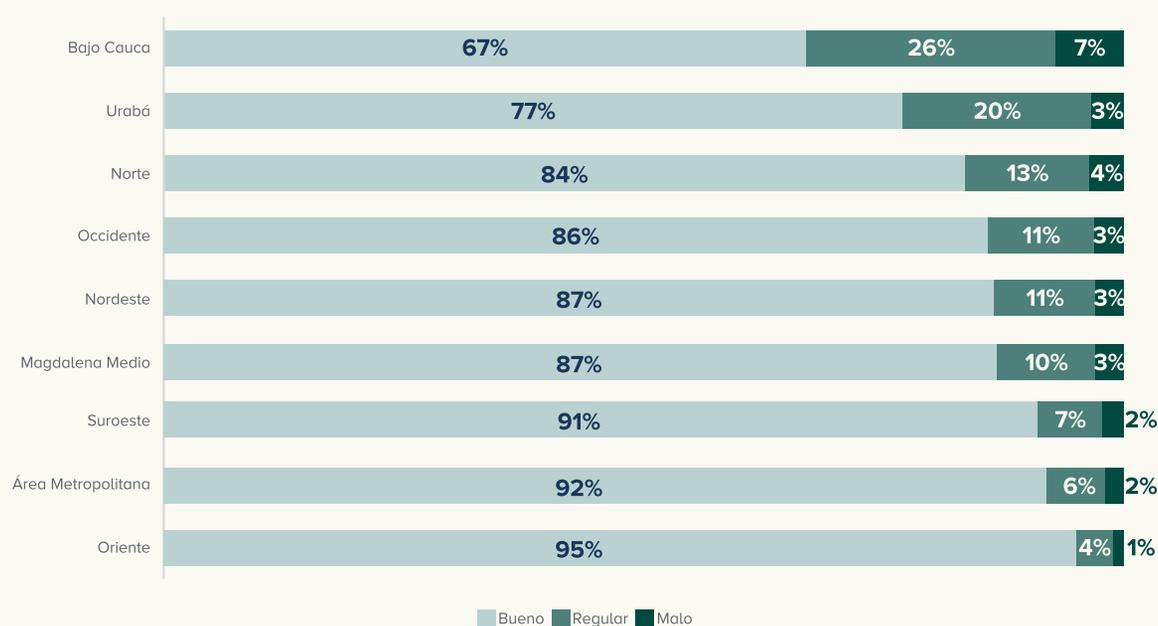
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023



En muchos de los municipios la infraestructura disponible juega un rol fundamental en crear una cultura de la separación. Municipios como Marinilla, en donde el 91% de los hogares urbanos afirman hacer separación de residuos, cuentan con programas de clasificación y reutilización de residuos como compostas y recogidas selectivas del servicio de aseo que ha permitido un mayor aprovechamiento. Por otro lado, municipios como Medellín, que a pesar de que más del 70% de los hogares afirman separar, tiene tasas de aprovechamiento que no han mejorado a través de los años, pues hace falta infraestructura crucial en los diferentes barrios de la ciudad que le permitan a los ciudadanos incorporar en su vida cotidiana una cultura del aprovechamiento.

Finalmente, existe una relación entre la percepción de la calidad del servicio y la importancia que los hogares le dan a una correcta separación y manejo de residuos sólidos. En la Gráfica 22 se observa que las subregiones de Urabá y Bajo Cauca presentan los menores índices de satisfacción con los servicios de aseo; al mismo tiempo, el mapa anterior resalta como los diferentes municipios de ambas subregiones cuentan con el menor número de hogares que afirman hacer una separación de residuos.

Gráfico 22.
Antioquia: satisfacción con los servicios de aseo por subregiones, 2023



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia de 2023.



Los anteriores aspectos requieren aunar esfuerzos que permitan construir una cultura ambiental y para ello es necesario resolver los problemas vinculados al acceso de los servicios públicos y de manera paralela establecer programas y proyectos ambientales que incentiven el consumo consciente, la reducción de residuos, su reutilización y su separación en la fuente. De igual forma, es necesario ampliar las infraestructuras de separación, consolidar un mercado desde la valoración económica de los residuos y mejorar las condiciones de vida de la población que trabaja en este sector.

Aproximación a la sensibilidad de los municipios de Antioquia frente al cambio climático

El cambio climático actúa como amplificador de las amenazas de origen natural, socio-naturales y tecnológicos preexistentes. Para anticipar sus impactos y diseñar estrategias de adaptación, es esencial identificar las condiciones territoriales que hacen a cada municipio más o menos vulnerable. El Índice Departamental de Sensibilidad Climática (IDEAM-TCNCC, 2017) —que, junto con la capacidad adaptativa, conforma el componente de vulnerabilidad— integra seis dimensiones críticas: biodiversidad y servicios ecosistémicos, recurso hídrico, seguridad alimentaria, salud, hábitat humano e infraestructura.

Este informe de calidad de vida presenta una primera aproximación centrada en evidenciar los niveles de sensibilidad de Antioquia, como insumo de discusión sobre la necesidad de fortalecer los procesos de gobernanza adaptativa. De acuerdo con la definición adoptada por la FAO y la Gobernación de Antioquia (2018), la sensibilidad es la “predisposición física de las personas, la

infraestructura y el ambiente a ser afectados por un fenómeno, de tal modo que, una vez impactado, el sistema colapsa o sufre daños mayores debido a la influencia del evento”.

El análisis revela que las subregiones del departamento enfrentan retos tanto diferenciados como comunes:

- Retos diferenciados: tensiones territoriales por el recurso hídrico, la salud pública y el hábitat humano varían según el contexto local.
- Retos comunes: la seguridad alimentaria y la pérdida de biodiversidad se manifiestan de forma generalizada en todas las subregiones (ver tabla 2).

Esta radiografía subraya la urgencia de articular las políticas de desarrollo económico con la adaptación de forma tal que respondan a las particularidades de cada territorio y, al mismo tiempo, fortalezcan los elementos transversales que determinan la sensibilidad climática en Antioquia.



Tabla 2.
Antioquia: dimensiones de la sensibilidad al cambio climático

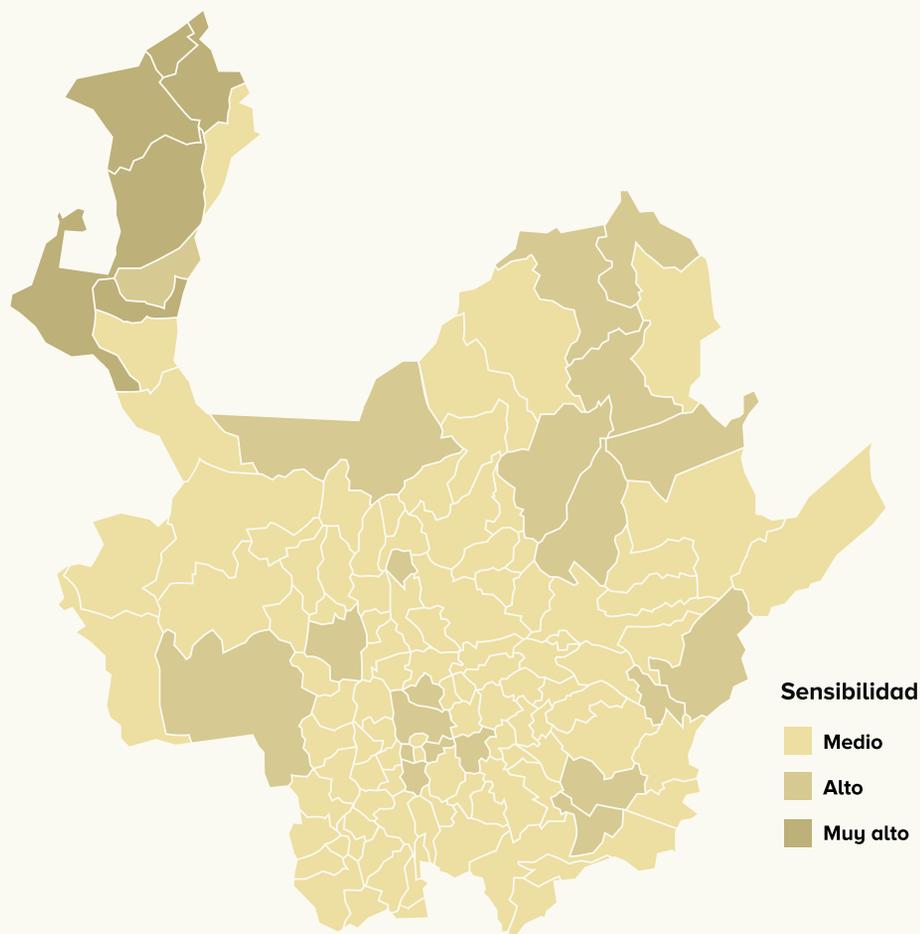
Dimensión	Variables clave	Subregiones más sensibles	Principales hallazgo
Biodiversidad y servicios ecosistémicos	Cobertura de bosques, fragmentación, erosión potencial	Urabá, Suroeste, Oriente	La pérdida de hábitat y la presión sobre corredores biológicos elevan la sensibilidad. El Magdalena Medio, Bajo Cauca y parte del Nordeste también presentan aspectos críticos no evidenciados en este estudio. Ver tabla 1 y gráfico 8.
Recurso hídrico	Presión hídrica, agua no retornada, regulación hídrica, brecha de acueducto, índice de aridez	Urabá y Oriente	Escasez estacional y alta demanda sectorial comprometen la seguridad hídrica.
Seguridad alimentaria	Proporción de área asegurada vs. sembrada, variación del PIB agropecuario	Gran parte del departamento	Bajo aseguramiento de cultivos y volatilidad económica incrementan la exposición.
Salud	Incidencia de dengue, población infantil y de adultos mayores	Bajo Cauca, Urabá	Cohortes vulnerables y enfermedades transmitidas por vectores intensifican el riesgo sanitario.
Hábitat humano	Demanda hídrica per cápita, grado de urbanización	Valle de Aburrá	Alta densidad y consumo de agua elevan la sensibilidad urbana.
Infraestructura	Intensidad de tráfico, vulnerabilidad vial frente a amenazas naturales	Nordeste, Magdalena Medio	Tramos críticos concentran flujos y presentan alta exposición a deslizamientos e inundaciones. El suroeste presenta un tramo crítico no priorizado en este estudio.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IDEAM-TCNCC, 2017.

Según el gráfico 23, la sensibilidad de Antioquia al cambio climático se sitúa mayoritariamente entre los niveles medio y alto. Entre las seis dimensiones analizadas, la subregión de Urabá presenta la mayor criticidad, seguida del Bajo Cauca, lo que la convierte en la zona que demanda intervenciones de adaptación más urgentes desde esta capa.

Gráfico 23.

Antioquia: índice de sensibilidad frente al cambio climático, 2017.



Fuente: IDEAM-TCNCC, 2017.

Las condicionantes territoriales descrita previamente (gráfica 3) y las distintas condiciones que alimentan la vulnerabilidad territorial junto con los ejercicios de capacidad, son los insumos trabajados por IDEAM para la construcción del índice de riesgo al cambio climático a escala de municipio. Dicho trabajo refleja cuatro grandes factores:

1. Presiones sobre los recursos naturales (deforestación, minería, expansión agrícola).
2. Población expuesta a inundaciones, deslizamientos, olas de calor o sequías.
3. Condiciones socioeconómicas (pobreza, servicios básicos, informalidad laboral).
4. Capacidad adaptativa de las instituciones y la comunidad (planeación, financiamiento, educación, salud).

Con base en el índice del IDEAM, los diez municipios antioqueños más comprometidos son:



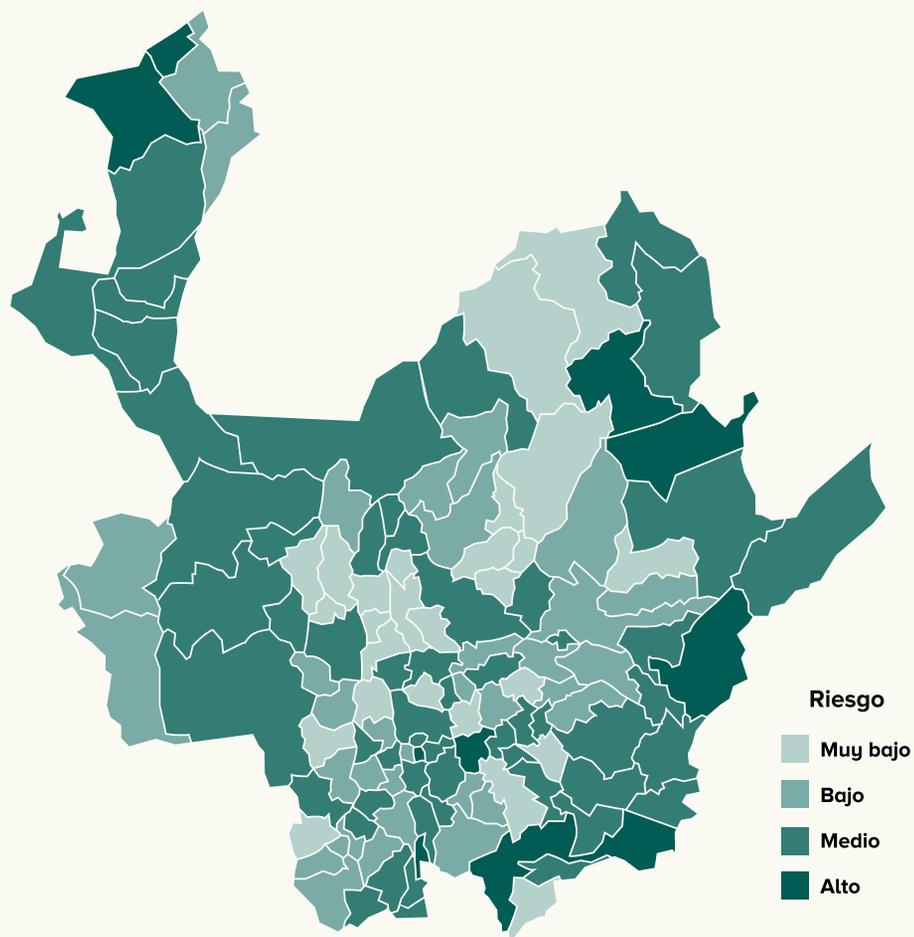
Tabla 3.
Antioquia: ranking municipal de riesgo al cambio climático por municipio, 2017.

Puesto	Municipio	Subregiones más sensibles	Principales hallazgo
1	Necoclí	Urabá	Alta exposición costera (subida del nivel del mar), deforestación de manglares, pobreza rural.
2	Rionegro	Oriente	Crecimiento urbano rápido, presión hídrica, expansión vial y de vivienda en ladera.
3	La Pintada	Suroeste	Inundaciones y avenidas torrenciales del río Cauca, riesgo de movimientos en masa.
4	Segovia	Nordeste	Minería aurífera intensiva, deforestación y contaminación hídrica; limitada infraestructura de salud.
5	Puerto Berrío	Magdalena Medio	Llanura de inundación del Magdalena, calor extremo, servicios básicos rezagados.
6	Sabaneta	Valle de Aburrá	Urbanización densa, alta impermeabilización, escasez de áreas verdes, estrés térmico urbano.
7	San Juan de Urabá	Urabá	Vulnerabilidad costera, dependencia de cultivos sensibles (banano/plátano), cobertura de salud limitada.
8	Sonsón	Oriente	Cultivos de ladera, pérdida de bosque altoandino, amenaza de deslizamientos.
9	Zaragoza	Bajo Cauca	Minería aluvial, sedimentación de ríos, pobreza multidimensional.
10	El Retiro	Oriente	Expansión periurbana, presión sobre fuentes de agua, suelos inestables en pendientes.

*Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IDEAM-TCNCC, 2017. *Síntesis de los principales motores de riesgo identificados en los estudios TCNCC.*

Aunque el Área Metropolitana del Valle de Aburrá—con Medellín a la cabeza—dispone de una de las mayores capacidades adaptativas del departamento, gracias a su plataforma económica, capital humano e infraestructura, el mismo índice de riesgo climático muestra que su vulnerabilidad estructural sigue siendo alta, superada únicamente por la de Urabá. Esta dualidad revela una paradoja clave: contar con recursos y capacidad institucional no garantiza, por sí solo, una reducción del riesgo. La prioridad debe ser la gobernanza adaptativa, capaz de coordinar instituciones, sector privado y ciudadanía para traducir el potencial económico en estrategias integrales de resiliencia frente al cambio climático.

Gráfico 24.
Antioquia: Índice de riesgo al cambio climático por municipio, 2017.



Fuente: IDEAM-TCNCC, 2017



Conclusiones

- Antioquia enfrenta riesgos crecientes por eventos naturales intensificados: La frecuencia de desastres climáticos (inundaciones, deslizamientos, crecidas) ha aumentado significativamente en las últimas décadas en el departamento, en línea con tendencias globales de cambio climático. Las estadísticas muestran un incremento preocupante de eventos hidrometeorológicos – llegando a cientos por año – que sobrepasan la capacidad de respuesta en varios territorios. Esta realidad confirma la urgencia de fortalecer la gestión del riesgo: sistemas de alerta temprana, planes de emergencia municipales y reubicación preventiva de comunidades en zonas de alta amenaza.
- El modelo de los rellenos sanitarios por sí solo no resuelve la problemática de los residuos. Con un volumen anual superior a 1,6 millones de toneladas en Antioquia, los sitios de disposición se saturan y su operación conlleva costos elevados y contaminación (emisiones de camiones, lixiviados, metano de los rellenos). Además, la baja tasa de aprovechamiento (<15%) refleja un desaprovechamiento de recursos valiosos y una carga innecesaria sobre el ambiente. La conclusión es clara: se necesita transitar hacia un enfoque de residuos cero o economía circular, donde se genere menos residuos y la que se genere se recicle/composte en la mayor medida posible. Esto implica mayor inversión en infraestructuras de reciclaje, incentivos económicos y programas educativos continuos para cambiar hábitos de consumo, incentiven la separación en la fuente y la recirculación.
- Existen brechas de gestión entre las subregiones: El análisis evidenció contrastes importantes dentro del departamento. Mientras el Área Metropolitana de Medellín cuenta con mayor capacidad técnica (relleno regional, mayor porcentaje de hogares separando residuos, etc.), otras subregiones como Urabá, Bajo Cauca o Magdalena Medio están rezagadas tanto en servicios esenciales como en sensibilización comunitaria. Igualmente, en reducción del riesgo, algunas zonas rurales pueden estar menos preparadas o recibir menos atención. Es crucial que las políticas departamentales reconozcan estas disparidades y se enfoquen en apoyar a los municipios más vulnerables. Las soluciones deben ser territorialmente diferenciadas: por ejemplo, fortalecer las empresas de aseo y esquemas de reciclaje en municipios pequeños, o llevar programas de reforestación y pago por servicios ambientales a las áreas con mayor pérdida de bosque en el Bajo Cauca.
- Antioquia debe desarrollar simultáneamente su agenda de adaptación (ej. infraestructuras resilientes, agricultura climáticamente inteligente, planes de contingencia por sequías) y su agenda de mitigación (ej. transición a energías renovables, transporte sostenible, economía circular en residuos). Solo combinando ambas estrategias el departamento podrá disminuir su vulnerabilidad y contribuir a frenar el avance del cambio climático.



Referencias

Alianza ERA. (2023, 30 de julio). ¡Tenemos política pública de educación rural en Antioquia! [Entrada de blog]. Alianza ERA.

Alcaldía de Medellín (2025). Informe final de caracterización de los residuos sólidos en el sector residencial de Medellín y en el área urbana y rural de los cinco corregimientos. https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2025/02/INFORME_RESIDENCIAL_VF.pdf

Aristizábal, E; Arango, M y García, I. (2020). Definición y clasificación de las avenidas torrenciales y su impacto en los Andes colombianos. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 29(1), 242-258. <https://doi.org/10.15446/rcdg.v29n1.72612>

Aristizábal, E y Gómez, J. (2007). Inventario de emergencias y desastres en el Valle de Aburrá, originados por fenómenos naturales y antrópicos en el periodo 1880-2007. Gestión y Ambiente, 10(2), 17–30. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/1409>

DNP (2018). Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado por Capacidades. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/indice_municipal_de_riesgo_de_desastres_ajustado_por_capacidades_-_lina_ibata_y_leidy_riveros.pdf

EMVARIAS. (2024). Informe de sostenibilidad 2024. <https://www.emvarias.com.co/emvarias/Portals/0/archivos/Corporativo/Accionistas/Informes%20empresariales/Informe%20de%20sostenibilidad%202024%20P.pdf?ver=vPH-0tYsP9SdZFfJMuaOz3w%3d%3d>

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2019). Perfil socioeconómico de la subregión del Urabá de Antioquia. Informes Estudios Socioeconómicos.

FAO y Gobernación de Antioquia (2018). Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC/PI-GCCT%20Antioquia.pdf>

Gobernación de Antioquia (2018a). Plan Integral Departamental de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial. <https://antioquia.gov.co/images/PDF2/GACETA%2022.365.pdf>

Gobernación de Antioquia (2023). Anuario Estadístico Agropecuario 2023. <https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Agricultura/2024/anuario-estadistico-agropecuario-ano-2023.pdf>



Gobierno de Colombia (2019). Estrategia nacional de economía circular: Cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de negocio. Bogotá D.C., Colombia. Presidencia de la República; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM. (2016). Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables 2016. <https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/Estado-del-ambiente-y-los-recursos-naturales>

IDEAM. (2019). Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables, 2017-2018. <https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/Estado-del-ambiente-y-los-recursos-naturales>

IDEAM (2017). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático- TCNCC. <http://www.cambioclimatico.gov.co/resultados>

IDEAM. (2024). Escenarios de cambio climático de la Cuarta Comunicación de Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, Fundación Natura y Proyecto GEF-CBIT “Transparencia Climática Colombia”. <https://visualizador.ideam.gov.co/portal/apps/storymaps/stories/660ec48de9454157b54adc074b1f38fd>

Ritchie, H., and Rosado, P. (2024) Is the number of natural disasters increasing? <https://ourworldindata.org/disaster-database-limitations>

Superservicios (2024). Informe Nacional de Disposición Final 2023. <https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/Informe-Nacional-de-Disposicion-Final-de-Residuos-Solidos-2023.pdf>

World Economic Forum. (2025). The Global Risks Report 2025. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2025.pdf

Informe de Calidad de Vida de
Antioquia
2024

 @Antioquiacomovamos  www.Antioquiacomovamos.org